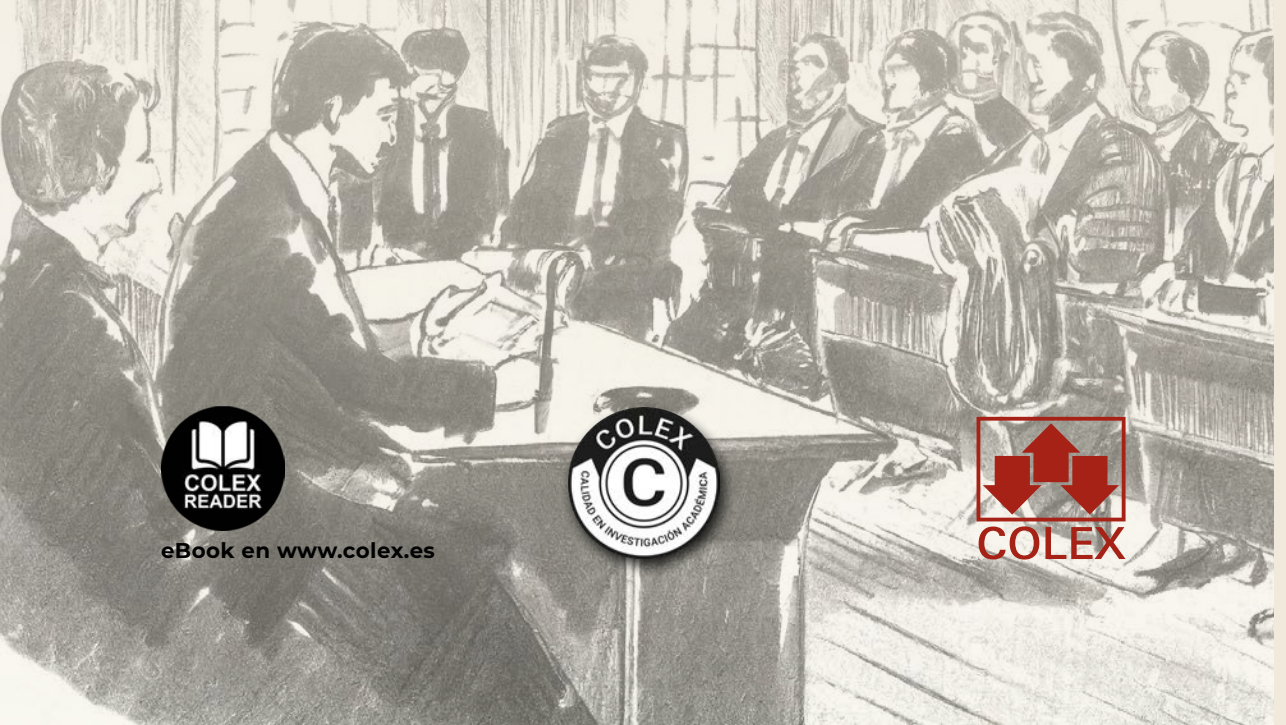
COLECCIÓN
DERECHO PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL

MACROCRIMINALIDAD Y DESASTRES

Obra dirigida por
Pastora García Álvarez
Víctor Manuel Macías Caro

Coordinadora
Carmen Fernández Nicasio



COLEX READER
eBook en www.colex.es

COLEX
CALIDAD EN INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

COLEX

¡Gracias por confiar en nosotros!

La obra que acaba de adquirir incluye de forma gratuita la versión electrónica. Acceda a nuestra página web para aprovechar todas las funcionalidades de las que dispone en nuestro lector.

Funcionalidades eBook

Acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet

Idéntica visualización a la edición de papel

Navegación intuitiva

Tamaño del texto adaptable

Síguenos en:

COLECCIÓN
DERECHO PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL

1

MACROCRIMINALIDAD Y DESASTRES

COLECCIÓN
DERECHO PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL

Directores:

Pastora García Álvarez
Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide.

Víctor Manuel Macías Caro
Profesor contratado doctor de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide.

Coordinadora:

Carmen Fernández Nicasio
Universidad Pablo de Olavide

Consejo editorial:

María Acale Sánchez
Catedrática de Derecho penal. Universidad de Cádiz.

Viviana Caruso Fontán
Catedrática de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide.

Donato Castronuovo
Professore ordinario. Università degli Studi di Ferrara.

Massimo Donini
Professore ordinario. Sapienza Università di Roma.

Juan Carlos Ferré Olivé
Catedrático de Derecho penal. Universidad de Huelva.

Luigi Foffani
Professore ordinario. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Carmen Gómez Rivero
Catedrática de Derecho penal. Universidad de Sevilla.

Luis Greco
Professor (W3). Humboldt-Univesität zu Berlin.

Patricia Laurenzo Copello
Catedrática de Derecho penal. Universidad de Málaga.

Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho penal.

Miguel Ángel Núñez Paz
Catedrático de Derecho penal. Universidad de Huelva.

Ana Isabel Pérez Cepeda
Catedrática de Derecho penal. Universidad de Salamanca.

Ana Pérez Machío
Profesora titular de Derecho penal. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea.

Laura Zúñiga Rodríguez
Catedrática de Derecho penal. Universidad de Salamanca.

COLECCIÓN
DERECHO PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL

1

MACROCRIMINALIDAD Y DESASTRES

Directores:
Pastora García Álvarez
Víctor Manuel Macías Caro

Coordinadora:
Carmen Fernández Nicasio

COLEX 2024

Copyright © 2024

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) garantiza el respeto de los citados derechos.

Editorial Colex S.L. vela por la exactitud de los textos legales publicados. No obstante, advierte que la única normativa oficial se encuentra publicada en el BOE o Boletín Oficial correspondiente, siendo esta la única legalmente válida, y declinando cualquier responsabilidad por daños que puedan causarse debido a inexactitudes e incorrecciones en los mismos.

Editorial Colex S.L. habilitará a través de la web www.colex.es un servicio online para acceder a las eventuales correcciones de erratas de cualquier libro perteneciente a nuestra editorial.

© Donato Castronuovo
© Francesco Contri
© Pastora García Álvarez
© Manuel José García Rodríguez
© Víctor Manuel Macías Caro
© Lorenzo Natali
© Marga Zango-Pascual

© Editorial Colex, S.L.
Calle Costa Rica, número 5, 3.º B (local comercial)
A Coruña, C.P. 15004
info@colex.es
www.colex.es

SUMARIO

LOS ATAQUES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y EL DERECHO PENAL ESPAÑOL. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MODELO DE TIPIFICACIÓN

Pastora García Álvarez

I. INTRODUCCIÓN 11
II. RECURSO A LA TÉCNICA DE LAS NORMAS PENALES EN BLANCO EN LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. 16
III. LA CONFIGURACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE COMO DELITOS DE PELIGRO 26
IV. EL EMPLEO DE CONCEPTOS NORMATIVOS 29
V. AMPLITUD Y FALTA DE PRECISIÓN EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA TÍPICA. LOS CONCEPTOS INDETERMINADOS 32
VI. CONCLUSIONES 34
VII. BIBLIOGRAFÍA. 35

COMENTARIOS AL PROYECTO DE NUEVA DIRECTIVA EUROPEA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DEL DERECHO PENAL DESDE UNA PERSPECTIVA VICTIMOLÓGICA

Manuel José García Rodríguez

I. INTRODUCCIÓN 39
II. EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DEL DERECHO PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA ¿DE DÓNDE PARTIMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS?. 40
III. NUEVOS TÉRMINOS DE VALOR VICTIMOLÓGICO QUE INCLUYE EL PROYECTO DE NUEVA DIRECTIVA. 43
IV. PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR DELITOS MEDIOAMBIENTALES ANTE EL SISTEMA PENAL. 47
V. NUEVAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS PARA LAS PERSONAS DENUNCIANTES DE LOS DELITOS MEDIOAMBIENTALES TIPIFICADOS EN LA FUTURA DIRECTIVA 49

VI. LA JUSTICIA RESTAURATIVA COMO RESPUESTA ALTERNATIVA A LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL ANTE LA CRIMINALIDAD MEDIOAMBIENTAL 53
VI.1. La reparación del daño medioambiental ¿Qué puede ofrecer la justicia restaurativa? 53
VI.2. Posibilidades ofrecidas por el Código Penal español para aplicar la justicia restaurativa ante la criminalidad medioambiental 57
VII. REFLEXIONES FINALES 61
VIII. BIBLIOGRAFÍA 63

NESSO DI RISCHIO E SCOPO DI TUTELA NELL'IMPUTAZIONE DEGLI EVENTI DI DISASTRO. UN'ANALISI CRITICA DEL DIRITTO VIVENTE IN TEMA DI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBLICA

Francesco Contri

I. CENNI INTRODUTTIVI 68
II. LA SOTTOVALUTAZIONE DELLA (NECESSARIA) INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO REALIZZATOSI NELL'EVENTO DISASTROSO 73
III. LA MULTIDIREZIONALITÀ DEI RISCHI E LA (CORRISPONDENTE) PLURIDIREZIONALITÀ DELLE REGOLE CAUTELARI VIOLATE 79
III.1. La discutibile (e discussa) creazione di nuovi garanti alla luce della (necessaria) gestione integrata di rischi diversi 82
IV. IL *LEADING CASE* IN MATERIA: IL DISASTRO FERROVIARIO DI VIAREGGIO... 86
V. (*SEGUE*) ...E LA SUA VALENZA PIÙ GENERALE IN TEMA DI DISASTRI 89
VI. DISASTRO INTERNO, DISASTRO ESTERNO E RISCHIO LAVORATIVO. VI È ANCORA SPAZIO PER I DISASTRI «SUI LUOGHI DI LAVORO»? 92
VI.1. La mancata apposizione di cautele volte a ridurre le emissioni nocive o inquinanti 95
VI.2. La mancata predisposizione di cautele poste a salvaguardia della sicurezza di impianti o servizi 102
VII. SINTESI E CONCLUSIONI 105
VIII. BIBLIOGRAFIA 108

LA MULTIDIRECCIONALIDAD DEL RIESGO EN LOS DELITOS DE DESASTRE MEDIOAMBIENTAL

Donato Castronuovo

I. INTRODUCCIÓN: CRÍTICA A UNA TUTELA INTEGRAL DE BIENES COLECTIVOS E INDIVIDUALES 119
II. EL DERECHO PENAL COMO INSTRUMENTO DE TUTELA FRENTE A ESTA CLASE DE RIESGOS ENTRE EFECTIVIDAD Y GARANTISMO 121
III. EL ÁMBITO DE RIESGO CONSENTIDO Y LA PONDERACIÓN ENTRE DERECHOS NO TIRÁNICOS 123
IV. LA PROBLEMÁTICA PROYECCIÓN DEL ESPECTRO DE TUTELA HACIA EL EXTERIOR DEL CONTEXTO PRODUCTIVO 126
V. CONCLUSIONES 129
VI. BIBLIOGRAFÍA 130

SOLILOQUI ITINERANTI E GREEN CULTURAL CRIMINOLOGY. UN APPROCCIO VISUALE E SENSORIALE ALLE ESPERIENZE DI VITTIMIZZAZIONE AMBIENTALE

Lorenzo Natali

I. INTRODUZIONE. 133
II. GREEN CRIMINOLOGY, GREEN CULTURAL CRIMINOLOGY E METODOLOGIE VISUALI DI RICERCA SUL CAMPO. 135
III. SOLILOQUI ITINERANTI: UNA PROPOSTA METODOLOGICA 139
IV. IL CASO DI HUELVA, SPAGNA. OVVERO: LA SCENA DEL CRIMINE 143
V. IL SOLILOQUIO ITINERANTE DI AURELIO. L'IMMAGINAZIONE STORICA E LA MEMORIA COLLETTIVA DI UN LUOGO. 147
VI. IL SOLILOQUIO ITINERANTE DI MANOLO. LA NOSTALGIA DI UN «PASSATO LUMINOSO» E «LA FOLLIA DELLA POLITICA» 152
VII. IL SOLILOQUIO ITINERANTE DI REBECA. «LE FABBRICHE NEL FONDO DI OGNUNO DI NOI» E I SENTIMENTI CONTRASTANTI. 154
VIII. QUESTIONI APERTE TRA METODO E NARRAZIONE. 157
IX. CONCLUSIONI E STRADE FUTURE 161
X. BIBLIOGRAFÍA. 163

LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS NATURALES COMO UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LOS DESAFÍOS GLOBALES DEL SIGLO XXI

Marga Zango-Pascual

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 172
II. DESASTRES. TIPOS Y CIFRAS DE REFERENCIA 175
II.1. Definición de desastres y tipos. 175
II.2. Cifras y situación de los desastres en el mundo 180
III. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES. 186
III.1. La RRD en el contexto de los Desafíos Globales en el siglo XXI 189
IV. ENFOQUE DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE COMO UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 192
IV.1. Evolución y estado de la cuestión 192
IV.2. El deber de los Estados de proteger a sus ciudadanos ante los desastres. 194
V. ESTUDIO DE CASOS DE DESASTRES EN VARIOS PAÍSES QUE HAN SUPUESTO HITOS. 194
VI. CONCLUSIONES 203
ANEXO I 204
ANEXO II 211

LOS ATAQUES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y EL DERECHO PENAL ESPAÑOL. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MODELO DE TIPIFICACIÓN[1]

Pastora García Álvarez
Universidad Pablo de Olavide

I. INTRODUCCIÓN

Hace pocos meses se cumplieron 50 años desde la celebración del primer Día Mundial del Medioambiente, fecha establecida por las Naciones Unidas para señalar la importancia de cuidar nuestro planeta[2].

A la afectación del medio ambiente contribuyen, por supuesto, desastres naturales de muy diversa envergadura (terremotos, inundaciones, tsunamis, sequías,…), pero los desastres naturales llevan muchas veces también la huella del hombre[3]. Cobra, por tanto, especial importancia determinar qué

1. Trabajo de investigación realizado en el marco del Grupo Interuniversitario e Interdisciplinario de Investigaciones sobre la Criminalidad (SEJ678) y del Proyecto de Investigación PID2020-117403RB-100 sobre «Criminalidad organizada transnacional y empresas multinacionales ante las vulneraciones a los derechos humanos».

2. Las Naciones Unidas designaron el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente para destacar que la protección y la salud del medio ambiente es una cuestión importante, que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico en todo el mundo. *Cfr.* https://es.unesco.org/commemorations/environmentday (última consulta 28 de septiembre de 2023).

3. Entre las peores catástrofes medioambientales que han tenido lugar en nuestro país en los últimos años pueden destacarse las siguientes: En el año 1998, la rotura de la balsa de residuos de la Mina de Aznalcóllar, que provocó que seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y cerca de dos millones de metros cúbicos de aguas ácidas se esparcieran por el entorno del espacio natural protegido del Coto de Doñana. Unos años más tarde, en 2002, se produjo el hundimiento del petrolero Prestige, lo que originó que las setenta y siete mil toneladas de crudo que transportaba se esparcieran, afectando a las playas,

papel le corresponde en la protección del medio ambiente, dentro de nuestro Ordenamiento jurídico, al Derecho penal y cómo se materializa ésta.

En lo que a la protección del medio ambiente por el Ordenamiento jurídico penal español se refiere, considero que han de distinguirse tres momentos que se corresponden con tres hitos importantes desde un punto de vista normativo. El primero, la aprobación e inmediata entrada en vigor de la Constitución española el 29 de diciembre de 1978. El segundo, la reforma introducida en el anterior Código Penal por la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código penal (a partir de ahora LO 8/1983). Y, en tercer lugar, el Código penal de 1995 (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, —a partir de ahora CP—).

Para empezar, sería la Constitución española de 1978 (en adelante CE) la que llevara a cabo en su artículo 45 un triple reconocimiento en relación al medio ambiente. Así, en su apartado primero dispone que todos tenemos «derecho» a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como también, ciertamente, el «deber» de conservarlo. A continuación, en su apartado segundo señala que les corresponde a los poderes públicos velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida, así como defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Y, por último, en su apartado tercero prevé —caso de violación de lo dispuesto en el apartado anterior—, que se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado[4].

De manera que es, por tanto, la propia CE la que ya en 1978 dispuso que los ataques contra el medio ambiente también tendrían que ser penalmente castigados.

Ahora bien, a pesar de este reconocimiento constitucional, la protección que de forma específica le ofrecía nuestro Derecho penal al medio ambiente en el anterior CP hasta su reforma por la LO 8/1983, era prácticamente nula y

rocas y a los animales de estos hábitats tanto en las costas gallegas como francesas y portuguesas. Diez años más tarde, en 2012, tuvo lugar el incendio en el monte Dos Aguas (Valencia), en el que se calcinaron veintinueve mil hectáreas de bosques y zonas verdes, impulsadas por las altas temperaturas y un fuerte viento. Más recientemente, en 2020, el vertedero de residuos de Zaldívar se derrumbó por su sobreexplotación. En este caso, los ochocientos mil metros cúbicos de tierra y basura que se desprendieron no sólo provocaron que llegaran a la atmósfera emisiones de furanos, dioxinas y otros contaminantes persistentes, sino que causaron, además, la muerte de dos trabajadores.

4. Sobre la reparación del daño en los delitos contra el medio ambiente pueden verse, por ejemplo, POZUELO PÉREZ, L., «La reparación del daño al medio ambiente», en *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, n.° 191, 2002, pp. 133 y ss.; y PUENTE ABA, L. M.ª., «La reparación en el marco del Derecho Penal Medioambiental», en *Revista General de Derecho Penal*, n.° 3, 2005, pp. 1 y ss. (si bien esta autora, tras comprobar las dificultades para conseguir una restauración completa, en muchos casos inalcanzable, aboga en este ámbito por la prevención a través de las propias normas penales, *op. cit.*, p. 28).

así se reconocía, de hecho, en la Exposición de Motivos de la misma. En ella, el legislador penal fundamentaría la necesidad urgente de intervención del Derecho penal apelando a lo irreversibles que suelen resultar frecuentemente los daños medio ambientales, reconociendo que cualquier política tendente a introducir rigurosidad en este problema requería del auxilio coercitivo[5] de la Ley penal[6]. Y ello a pesar de que, como reconocía también expresamente, la intervención penal en la materia no conllevará en caso alguno la desaparición de toda industria o actividad nociva para el medio ambiente.

Partiendo de estas bases, en esta reforma nuestro legislador modificó la rúbrica de la sección 2.ª del capítulo II del título V, incluyendo en ella, junto a la salud pública, el medio ambiente. Bajo esta nueva rúbrica incorporó el que sería nuestro primer delito específicamente destinado a proteger el bien jurídico medio ambiente: el artículo 347 bis CP. En este precepto (precedente del vigente artículo 325 CP), se elevaba a delito la provocación o realización de específicamente, «emisiones o vertidos» siempre que tales conductas pusieran en peligro grave la salud de las personas o pudieran perjudicar gravemente las condiciones de la vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles y se realizaran «contraviniendo las Leyes o Reglamentos protectores del medio ambiente». Se trataba, por tanto, de un precepto configurado como delito de peligro y con la estructura, como no podía ser de otra manera como desarrollaré *infra*, de norma penal en blanco. La pena prevista por el legislador para estas conductas era la de arresto mayor (un mes y un día a seis meses de prisión) y multa de cincuenta mil a un millón de las antiguas pesetas. Esta pena habría de aumentarse un grado caso de que concurrieran alguna de las siguientes circunstancias: que la industria funcionara clandestinamente (sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones); que se hubieren desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de la actividad contaminante; se hubiere aportado información falsa sobre los aspectos ambientales de la misma; se hubiere obstaculizado la actividad inspectora de la Administración; o por último, si los actos descritos en el tipo básico hubiesen originado un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. Para todos esos supuestos estaba previsto, además, que pudiera acordarse «la clausura temporal o definitiva del establecimiento», así como que el tribunal pudiera proponer a la Administración «que acordara la intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores».

---

5. Ya que su protección por el Derecho administrativo se había mostrado, por lo demás, insuficiente como lo pone de manifiesto, entre otros muchos, DE LA MATA BARRANCO, N., «Derecho comunitario y Derecho estatal en la tutela penal del ambiente», en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n.º 2, 2000.

6. Con la que se pretende elevar los efectos preventivos generales negativos, así como fomentar la concienciación social sobre la dañosidad de los ataques contra el medio ambiente (para más detalles, *cfr.* MUÑOZ CONDE, F./LÓPEZ PEREGRÍN, C./ GARCÍA ÁLVAREZ, P., *Manual de Derecho penal medioambiental*, 2.ª ed., Tirant lo Blanch, 2015, p. 67).

La protección otorgada al medio ambiente tras esta reforma resultaba, sin embargo, confusa e insuficiente. Lo primero, porque no se reconocía la autonomía del medio ambiente como un bien jurídico merecedor y necesitado de protección por el Derecho penal. Y lo segundo, porque sólo contemplaba parte de las muchas conductas que pueden atentar contra el medio ambiente.

No sería hasta la aprobación del vigente CP cuando el legislador reconociera al medio ambiente como un bien jurídico autónomo, desvinculándolo de la protección de la salud pública[7]. A partir de este momento le da cabida junto a la ordenación del territorio, el urbanismo y el patrimonio histórico, bajo la rúbrica del título XVI, dedicando ya específicamente a su protección dos capítulos completos: el capítulo III, rubricado «De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente» y el capítulo IV, denominado «De los delitos contra la flora y fauna[8]», con lo que se incrementan de forma significativa los preceptos específicamente medioambientales.

Ahora bien, siendo esto así, el tratamiento otorgado por nuestro legislador penal a los delitos contra el medio ambiente tras la entrada en vigor del actual CP tampoco ha estado exento de observaciones críticas, empezando precisamente por esta sistematización de los mismos.

Por un lado, la rúbrica del capítulo III incurre en una evidente redundancia, puesto que la protección medioambiental implica ya conceptualmente la de los recursos que lo integran. Tampoco es fácil de explicar el criterio que ha inspirado la delimitación formal entre el capítulo III y el IV. Si los recursos naturales comprenden también los factores bióticos (flora y fauna), no se entiende que la expresión medio ambiente aparezca exclusivamente en el capítulo III y que, disociado de éste, el capítulo IV contemple la protección de la flora y fauna como algo que no tuviese que ver con aquel[9].

Por otro lado, basta con tener cierto conocimiento de nuestro CP para reconocer que, en realidad, los preceptos reconducibles a ambas sedes sistemáticas no son los únicos en los que se castigan ataques específicos contra el medio ambiente[10].

---

7. Un análisis detallado de la evolución de la protección del medio ambiente en el Código penal español puede verse en SÁNCHEZ PÉREZ, L., «El incremento de la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal», en *Revista Penal*, 2019, pp. 178 y ss.

8. La rúbrica de este capítulo aludía hasta hace unos meses también a los animales domésticos a cuya protección se dedicaban los arts. 337 y 337 bis Cp. Estos han sido derogados por la LO 3/2023, de 28 de marzo, en virtud de la cual se ha creado el título XVI bis dedicado específicamente a los delitos «contra los animales».

9. Tal y como se indica en MUÑOZ CONDE, F./LÓPEZ PEREGRÍN, C./ GARCÍA ÁLVAREZ, P., *Manual..., op. cit.*, p. 241.

10. Con independencia de que en ellos el medio ambiente sea protegido junto a otros bienes jurídicos.

Basta con empezar, por ejemplo, con los incendios forestales, que en cuanto han de prender en «montes o masas forestales» (*cfr.* art. 352 CP) poseen ya *per se* un potencial destructivo importante de ciertos recursos biológicos, pudiendo afectar de forma significativa al medio ambiente y al equilibrio de los sistemas naturales. La afectación de superficies de considerable importancia, la producción de grandes o graves efectos erosivos en los suelos y la alteración significativa de las condiciones de vida animal o vegetal o de algún espacio natural protegido, determinan, de hecho, la apreciación del art. 353 CP (tipo cualificado en el que se prevén, entre otros, como factores de agravación de la pena). Sin embargo, y a pesar de ello, los delitos de incendios forestales, recogidos en los artículos 352 y ss. CP, se ubican en el capítulo II del título XVII como delitos contra la seguridad colectiva. En esta misma sede sistemática se supedita la relevancia penal de los incendios en zona vegetal no forestal a que perjudiquen gravemente el medio natural (art. 356 CP). Y entre los factores que otorgan carácter delictivo a los incendios en bienes propios se encuentra el perjuicio grave para las condiciones de vida silvestre, los bosques o los espacios naturales (art. 357 CP). También el medio ambiente es objeto de protección específica en algunos de los «delitos de riesgo catastrófico» contenidos en el capítulo I de ese mismo título XVII. Es lo que ocurre entre los «delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes» con los artículos 343.1 y 345.1 CP. El art. 343.1 CP castiga la «emisión o la introducción en el aire, el suelo o las aguas de materiales o radiaciones ionizantes», cuando con ello se pone en peligro «la calidad del aire, la calidad del suelo o de las aguas o a animales o plantas». Por su parte, el artículo 345.1 CP castiga a quien sin autorización trafique, utilice, transporte, etc., materiales nucleares o sustancias radiactivas que causen o puedan causar daños sustanciales a, una vez más, «la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas o a animales o plantas». Algo similar ocurre con los artículos 348.1, 349 y 350 CP ubicados también en este título, si bien en la sede de «otros delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes». Preceptos todos ellos en los que se castiga la puesta en peligro efectiva del medio ambiente. En el artículo 348.1 CP, mediante la fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercialización de sustancias peligrosas; en el 349 CP, a través de la manipulación, transporte o tenencia de organismos[11]; y en el 350 CP en el proceso de apertura de pozos, excavaciones, construcciones o demoliciones de edificios, presas o canalizaciones.

La constatación de esta evidencia permite sostener que la primera nota que caracteriza la protección del bien jurídico medio ambiente en nuestro CP

11. Por organismo ha de entenderse cualquier entidad biológica capaz de reproducirse o de transferir material genético, incluyéndose dentro de este concepto a las entidades microbiológicas, sean o no celulares [*cfr.* art. 2.a) de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el Régimen Jurídico de la Utilización Confinada, Liberación Voluntaria y Comercialización de Organismos Modificados Genéticamente.

es la dispersión legislativa[12]. Pero, además, si lleváramos a cabo una lectura de todos los preceptos en los que se protege el bien jurídico medio ambiente (ya sean los ubicados en el título XVI o en el título XVII) comprobaríamos que es frecuente que en la redacción de los mismos concurra alguna, si no todas, de las siguientes notas: empleo de la técnica legislativa de las normas penales en blanco, configuración como delitos de peligro[13], empleo de conceptos normativos y conductas típicas redactadas con excesiva amplitud. Características generales de la tipificación de los delitos contra el medio ambiente a las que voy a dedicar las siguientes páginas para, tras el análisis de las ventajas e inconvenientes que conllevan cada una de ellas, ver las consecuencias prácticas a las que el recurso conjunto a las mismas implica de cara a la operatividad real de estos delitos. Aclarado lo anterior, procedo pues al estudio de cada una de estas notas caracterizadoras de la técnica legislativa en los delitos contra el medio ambiente.

II. RECURSO A LA TÉCNICA DE LAS NORMAS PENALES EN BLANCO EN LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

En una primera aproximación —a expensa de ulteriores precisiones— son normas penales en blanco aquéllas que supeditan la configuración de su puesto de hecho a otra rama del Ordenamiento jurídico[14].

El que los delitos contra el medio ambiente sean configurados como normas penales en blanco resulta, en realidad, como comprobaremos en seguida, inevitable. Veámoslo con algo más de detalle.

---

12. En este mismo sentido se manifiesta, de hecho, SESSANO GOENAGA, quien propone la creación de un título o capítulo bajo el que se ubiquen, entre otros, los delitos de incendios, contra la flora y fauna, así como los relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (SESSANO GOENAGA, J.C., «La protección penal del medio ambiente. Peculiaridades de su tratamiento jurídico», en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n.º 4, 2002, p. 30).

13. Características estas dos primeras que, en consideración de MATELLANES RODRÍGUEZ, han marcado e identificado a los delitos medioambientales desde su incorporación al CP (MATELLANES RODRÍGUEZ, N.P., «Hitos y tendencias en materia de protección penal del medio ambiente», en FERRÉ OLIVÉ, J.C. y OTROS (edits.), *Homenaje al Profesor Ignacio Berdugo Gómez de la Torre. Liber Discipulorum. Schola Iuris Criminalis Salmanticensis*, tomo I, Ediciones Universidad Salamanca, 2022, p. 262).

14. Otras definiciones pueden verse, por ejemplo, en MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho penal. Parte General revisada y puesta al día con la colaboración de Pastora García* Álvarez, 11.ª ed., Tirant lo Blanch, 2022, p. 34; o en SESSANO GOENAGA, J.C., «La protección penal…», *op. cit.*, pp. 8 y 9. Ampliamente sobre las normas penales en blanco *cfr.* GARCÍA ARÁN, M., «Remisiones normativas, leyes penales en blanco y estructura de la norma penal», en *Estudios Penales y Criminológicos*, n.º 16, 1992-1993, pp. 65 y ss.

Tal y como dispone el artículo 45.2 CE, la protección del medio ambiente le corresponde no sólo al Derecho penal, sino también al Derecho administrativo; y, dada la unidad del Ordenamiento jurídico, no deben existir contradicciones en lo que dispongan sobre una misma materia dos sectores normativos del mismo. Esta necesidad de coordinación entre estas dos ramas del Ordenamiento jurídico cobra especial importancia en materia medio ambiental ya que en ella al Derecho administrativo le corresponde no sólo establecer sus propias infracciones y sanciones, sino también y con carácter prioritario, prevenir los ataques contra el medio ambiente a través de la regulación de las conductas que pueden afectarlo[15]. Es más, hay conductas que, aunque atenten o puedan atentar contra el medio ambiente, son necesarias para el desarrollo económico y/o social, por lo que han de poder llevarse a cabo, siendo precisamente el Derecho administrativo el que se ocupe de establecer los límites, requisitos o condiciones para la realización de las mismas en los distintos sectores (emisiones, vertidos, radiaciones, manipulación de explosivos, etc.).

El panorama con el que nos encontramos en materia medioambiental es, pues, el siguiente: tenemos dos ramas del Ordenamiento jurídico que castigan conductas que atentan contra el medio ambiente, pero una de ellas va a regular parte de esas conductas para permitirlas y ello a pesar de su carácter nocivo o potencialmente nocivo para este bien jurídico. Lo anterior nos lleva a dos interrogantes. Uno: ¿cómo es posible que el Derecho administrativo pueda regular y permitir ciertas actividades potencialmente nocivas para el medio ambiente si también le corresponde la protección del mismo? Y dos: ¿cómo evitar que lo que permite el Derecho administrativo no dé lugar a responsabilidad penal a pesar de la afectación del bien jurídico medio ambiente?

Por lo que se refiere al primero de los interrogantes la respuesta la encontramos plasmada, hace ya décadas, en la sentencia n.º 64/1982, de 4 de noviembre, de nuestro Tribunal Constitucional (ECLI:ES:TC:1982:64) por la que se resolvió el recurso de constitucionalidad n.º 114/1982 promovido contra la totalidad de la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, de la Generalidad de Cataluña. Ley en la que se establecían normas adicionales de protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas[16]. El Tribunal Constitucional en esta sentencia (FJ.3) por un lado, rechazó

15. Sobre la coordinación entre ambas ramas del Ordenamiento jurídico, *cfr.* Conde-Pumpido Tourón, C., «Complementariedad de la tutela penal y administrativa sobre el medioambiente. Problemas que suscita desde la perspectiva del Derecho penal», en Pico Lorenzo, C. (dir.), *Cuadernos de Derecho Judicial. Las fronteras del Código penal de 1995 y el Derecho administrativo sancionador*, n.º 11, 1997, pp. 437 y ss.; y Morales Prats, F., «El delito de contaminación ambiental: análisis del artículo 325.1 CP. La relación entre Derecho penal y Derecho administrativo medioambiental», en Quintero Olivares, G. y Morales Prats, F. (coords.), *Estudios de Derecho ambiental: libro homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*, Tirant lo Blanch, 2008, pp. 1050 y ss.

16. En él se cuestionaba, por un lado, la legitimidad competencial para adoptar esta previsión por la Generalidad de Cataluña y por otra, la admisibilidad de esas medidas adicionales

la pretensión del representante del Gobierno de que existiera una prioridad absoluta del fomento de la producción minera frente a la protección del medio ambiente, recordándole que también la «"calidad de la vida" que cita el art. 45 y uno de cuyos elementos es la obtención de un medio ambiente adecuado para promoverla, está proclamada en el preámbulo de la Constitución y recogida en algún otro artículo como el 129.1». Y, por otro, advirtió a las partes «que la Constitución impone asimismo «el deber de atender al desarrollo de todos los sectores económicos» (art. 130.1). Lo que le llevó a concluir la necesidad de conciliar la protección de ambos bienes constitucionales: el medio ambiente y el desarrollo económico.

Por tanto, los recursos naturales no pueden ser explotados al máximo, ni cabe la producción ni el desarrollo económico a toda costa. Al igual que tampoco, en el otro extremo, puede incurrirse en un maximalismo ecológico. La clave reside en armonizar la «utilización racional» de esos recursos con la protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegurar una mejor calidad de la vida, proceso de armonización reconducible a la expresión clave de «desarrollo sostenible»[17].

Resuelto el primero de los interrogantes, el que haya contradicciones entre el Derecho administrativo y el Derecho penal en materia medio ambiental se evita con el recurso a la técnica legislativa de las normas penales en blanco. Normas éstas que pueden redactarse de dos maneras. Una, incorporando como uno de los requisitos del delito la exigencia de la infracción de la normativa administrativa que regule esa misma conducta (sistema de *accesoriedad de Derecho*). Y otra, condicionando la tipicidad de la conducta prohibida (o exigida) a que ésta se lleve a cabo sin la autorización que en esa otra rama del Ordenamiento jurídico permitiría su realización (sistema de *accesoriedad de acto*)[18].

A mero título ejemplificativo están redactadas como normas penales en blanco con un sistema de accesoriedad de Derecho, entre otros, el artículo 325.1 CP al castigar al que «contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente», provoque o realice directa o indirectamente, entre otras cosas, emisiones o vertidos. También el artículo 326.1 CP en el que se castiga a quienes, una vez más, «contraviniendo

de protección de los espacios naturales en detrimento de las actividades de extracción en esos espacios.

17. Sobre el concepto desarrollo sostenible, *cfr.* JORDANO FRAGA, J., «Desarrollo sostenible: el reto del Derecho ambiental», en *Revista Electrónica de Derecho Ambiental*, n.º 38-39, 2021.

18. Para más información sobre la accesoriedad administrativa en los delitos contra el medio ambiente, *cfr.* DE LA MATA BARRANCO, N., *Protección penal del ambiente y accesoriedad administrativa. Tratamiento penal de comportamientos perjudiciales para el ambiente amparados en una autorización administrativa ilícita*, Cedecs, 1996. Específicamente sobre el sistema de accesoriedad de acto, *cfr.* GÓMEZ RIVERO, C., *El régimen de autorizaciones en los delitos relativos a la protección del medio ambiente y ordenación del territorio. (Especial referencia a la responsabilidad del funcionario concedente*), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

las leyes u otras disposiciones de carácter general», recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos. Y una fórmula un tanto similar se emplea en el artículo 348.1 CP, en el que se sanciona a los que, en la fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercialización de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, etc., «contravinieran las normas de seguridad establecidas».

Es menos frecuente que los delitos contra el medio ambiente sean redactados siguiendo un sistema de accesoriedad de acto, pero podemos encontrar algún caso. Por ejemplo, el tipo cualificado contenido en la letra a) del artículo 327 CP, que dispone que los hechos previstos en los tres artículos que le preceden serán castigados con una pena de mayor gravedad si, por ejemplo, la industria o actividad funciona «sin haber obtenido la preceptiva *autorización*[19] o aprobación administrativa de sus instalaciones».

En cualquier caso, se siga uno u otro sistema estamos supeditando la caracterización de la acción prohibida (u exigida) como típica a lo que establezca esa otra rama del Ordenamiento jurídico. Y esto tiene importantes consecuencias. En primer lugar, pueden plantearse problemas de delimitación entre ambos sectores del Ordenamiento jurídico[20]. En segundo término, la operatividad de los delitos medio ambientales va a quedar supeditada a lo que disponga la Administración y a su actuación previa. De modo que, si las normas administrativas no están redactadas de forma adecuada y/o la Administración no cumple adecuadamente con sus funciones de control y prevención[21], los preceptos penales no podrán ser aplicados; y si lo son, puede que el papel que terminen cumpliendo sea únicamente el de cubrir los déficits de funcionamiento de esta otra rama del Ordenamiento jurídico[22]. Pero es que, además de lo anterior, el recurso a esta técnica legislativa va a dificultar el conocimiento de la materia prohibida por parte de los desti-

19. Cursivas añadidas.

20. De hecho, hay quien sostiene que el ámbito medio ambiental es uno de los sectores en los que van a estar más presentes los problemas que surgen de la relación entre ambas ramas del Ordenamiento jurídico (*cfr.* en este sentido, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. «La protección penal del medio ambiente. Algunas cuestiones generales», en MUÑOZ CONDE, F. (dir.), *Problemas actuales del Derecho penal y de la Criminología. Estudios penales en memoria de la Profesora Dra. María del Mar Díaz Pita*, Tirant lo Blanch, 2008, p. 1006). Tan es así que algún autor insta a una limitación de la accesoriedad del Derecho penal respecto del Derecho administrativo en materia medio ambiental (*cfr.* DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L., «La protección penal del bosque», en GÓMEZ MARTÍN, V. y OTROS (dirs.), *Un modelo integral de Derecho penal. Libro homenaje a la profesora Mirentxu Corcoy Bidasolo*, BOE, 2022, p. 1067).

21. Cuestiones éstas, pues, de suma importancia en palabras de DE LA MATA BARRANCO, N. («Derecho comunitario…», *op. cit.*).

22. Como advierte MATELLANES RODRÍGUEZ, N.P.: «si la norma de reenvío no existe o es inadecuada, al Derecho penal solo le queda declarar la atipicidad de la conducta o asumir los efectos de una legislación administrativa ineficaz» («Hitos y tendencias…», *op. cit.*, p. 266).

natarios de la norma, por lo que en el ámbito de los delitos contra el medio ambiente no serán infrecuentes los casos de error de tipo[23]. Y no quedan ahí los inconvenientes[24] que plantea el recurso a la técnica legislativa de las normas penales en blanco. Así, se ha cuestionado el que puedan afectar al principio de igualdad[25] y, muy especialmente, a la exigencia de reserva de ley (o de Ley Orgánica), lo que lleva a dudar, incluso, de su admisibilidad. Cuestión ésta de suma importancia y a la que paso a referirme a continuación con algo más de detalle.

Para entender la trascendencia de esta problemática lo primero es comprender bien qué implica la exigencia de reserva de ley. Hay que destacar que esta exigencia no se cumple con que *formalmente* la «norma penal» sea aprobada con el rango de Ley Orgánica, sino que requiere algo más preciso: que lo que va a ser constitutivo de delito (así como la consecuencia jurídico penal que le sea aplicable), y esto es lo importante, sea aprobado con el rango de Ley Orgánica[26]. Aquí es donde radica el problema. En cuanto que, por definición, en toda norma penal configurada como norma penal en blanco uno de los elementos, o requisitos que determinan la tipicidad de la conducta, es la infracción de una disposición extrapenal o la inexistencia de un acto unilateral de la Administración; lo que va a ser constitutivo de delito, el presupuesto de hecho de esa norma penal, va a ser establecido (ya sea total o parcialmente, pero ese es otro tema que abordaré en el epígrafe siguiente) a través de una disposición que no tiene, porque no tiene por qué tenerlo, rango de Ley Orgánica. La razón es evidente. Si bien la legislación en materia penal es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.6.ª CE), no ocurre lo mismo con la legislación en materia medio ambiental. La legislación básica sobre protec-

23. De modo que, si el delito en cuestión no está previsto a título de imprudencia, la conducta realizada habrá de quedar impune y ello, aunque el error fuera vencible. Entre los delitos contra el medio ambiente que no están previstos a título de imprudencia se encuentran, por ejemplo, el art. 333 (que castiga la introducción o liberación de especies no autóctonas); el art. 335 (que castiga la caza y pesca de especies no protegidas así como la caza, pesca y el marisqueo en terrenos sometidos a régimen cinegético especial); el art. 336 (sobre el empleo de medios de caza destructivos o no selectivos para la especie), o el art. 343 CP (sobre vertidos y emisiones de materiales o radiaciones ionizantes).

24. Más ampliamente sobre el recurso a las normas penales en blanco en el contexto de los delitos contra el medio ambiente y la problemática que ello conlleva, *cfr.* DE LA MATA BARRANCO, N. «Configuración como ley penal en blanco de los delitos contra el medio ambiente», en *Estudios jurídicos en memoria del Profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol I, Universidad de Valencia, Instituto de Criminología, 1997, pp. 569 y ss.; y RODRÍGUEZ MEDINA, M.ª. M., «Problemática de las leyes penales en blanco en el ámbito de los delitos contra el medio ambiente», en *Revista Penal México*, n.º 7, 2015, pp. 195 y ss.

25. Sobre esta temática, *cfr.* SESSANO GOENAGA, J.C., «La protección penal…», *op. cit.*, pp. 10 y ss.

26. Si nos quedáramos con la primera de las afirmaciones, las normas penales en blanco no plantearían, en realidad, problema alguno, ya que también los preceptos en los que se emplea esta técnica legislativa son aprobados a través de una norma con tal rango.

ción del medio ambiente le corresponde al Estado (art. 149.1.23.ª CE), pero las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias de gestión en materia de protección del medio ambiente (art. 148.1.9.ª CE)[27]. Y esas competencias podrá ejercerla a través de disposiciones de los más distintos rangos[28].

Esta *posible* infracción del principio de legalidad (art. 25.1 CE)[29] motivaría que el Tribunal Constitucional tuviera que pronunciarse sobre la admisibilidad de las mismas en materia medioambiental[30] en un caso de condena por el antiguo artículo 347 bis del anterior CP. Me refiero a la STC 127/1990, 5 de julio de 1990 (sin ECLI), por la que se resolvió el recurso de amparo 368/88, interpuesto contra sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de fecha 8

27. Sobre el ejercicio de las competencias legislativas en materia medio ambiental por parte de la Comunidades Autónomas, *cfr.* SILVA SÁNCHEZ, J.M.ª., «¿Competencia "indirecta" de las Comunidades Autónomas en materia de Derecho penal?», en *La Ley*, 1993-1, pp. 964 y ss.

28. Es más, en la medida en que los preceptos penales contra el medio ambiente configurados como normas penales en blanco conforme al sistema de accesoriedad de Derecho, lo que suelen exigir como requisito —sin mayores puntualizaciones— es la contravención de leyes, normas o disposiciones generales sobre la materia, éstas podrán emanar no sólo de los distintos entes administrativos, sino incluso de instancias supranacionales. Sobre la repercusión del Derecho comunitario en la integración de los delitos contra el medio ambiente, *cfr.* DE LA MATA BARRANCO, N., «Derecho comunitario…», *op. cit.* (este autor aclara que la inexistencia de un Derecho comunitario específicamente penal no entraña un obstáculo para que la normativa comunitaria de carácter no penal pueda integrar los tipos penales estatales configurados en blanco. Ahora bien, advierte de que una normativa comunitaria que no aparezca incorporada al ordenamiento interno de un modo absolutamente acorde con el principio de certeza y determinación abre sin duda la puerta a la figura del error); y VERCHER NOGUERA, A., «Algunos planteamientos y reflexiones prácticas en relación al efecto directo de las Directivas Comunitarias en Medio Ambiente y la posibilidad de aplicar las mismas con el objeto de completar normas penales en blanco», en *Revista do Ministério Público do RS*, Porto Alegre, n.º 77, 2015, pp. 123-124 (para quien una norma penal en blanco puede ser completada con una directiva comunitaria ambiental, incluso aunque ésta no haya sido transpuesta).

29. Art. 25.1 CE que prohíbe que el castigo penal de una acción u omisión esté basado en normas distintas o de rango inferior a las leyes orgánicas; y del que surge el derecho de cualquier ciudadano —caso de que esta exigencia no sea cumplida— a ser protegido por el recurso de amparo constitucional (*cfr.* STS 8/1981, de 30 de marzo).

30. Con independencia de que también haya tenido que pronunciarse sobre la admisibilidad de esta técnica legislativa en otros ámbitos. Por ejemplo, en la STC 3/1988, de 21 de enero, se resolvieron dos cuestiones de constitucionalidad planteadas por la imposición de sendas sanciones de multa por una infracción administrativa derivada del incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para joyerías en un Real Decreto. En ella el Tribunal Constitucional entendió que aunque el mandato del art. 25.1 CE determina la necesaria cobertura de la potestad sancionadora de la Administración en una norma de rango legal, esto no excluye que esa norma contenga remisiones a normas reglamentarias siempre que en aquélla queden suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta antijurídica (de tal manera que sólo sean infracciones las acciones u omisiones subsumibles en la norma con rango de ley) y la naturaleza y límites de las sanciones a imponer.

de febrero de 1988 (sin ECLI)[31]. En ella el demandante consideró infringido el principio de legalidad penal reconocido en el art. 25.1 CE porque la sentencia impugnada le había condenado «por un delito de imprudencia temeraria del art. 565.1 C.P., en relación con el art. 347 del mismo Código, (…) norma penal en blanco en cuanto exige para la configuración del supuesto de hecho (…) *la contravención de Leyes o Reglamentos protectores del medio ambiente*[32], integrado en el presente caso por el art. 92 de la Ley de Aguas (Ley 29/1985, de 2 de agosto)». Ley que, además, no se encontraba vigente cuando se produjeron los hechos enjuiciados (28 de octubre de 1985).

El Tribunal Constitucional en esta sentencia reconoció que si bien la legalidad penal comprende una doble garantía[33], las leyes penales en blanco son constitucionalmente admisibles siempre que reúnan los siguientes requisitos:

- Que el reenvío normativo sea expreso[34].
- Que (dicho reenvío normativo) esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal[35].
- Que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición[36].
- Y que sea satisfecha la exigencia de certeza o, «se dé la suficiente concreción, para que la conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se remite, y resulte de esta forma salvaguardada la función de garantía de tipo con la posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente conminada».

---

31. En un caso en el que se había condenado a un sujeto que ordenó un vertido de 4000 litros de lechada de cal en el río Orbigo, en el que a continuación aparecieron muertos 1000 Kg de diversas especies piscícolas, aunque no pudo demostrarse que la muerte de dichos peces fuera producida por el vertido de dicha sustancia.

32. Cursivas añadidas.

33. Una de carácter formal, por la que las normas tipificadoras de las conductas punibles y de previsión de las correspondientes sanciones, han de ser aprobadas como leyes orgánicas; y otra, referida a la seguridad que comporta la necesidad de la predeterminación normativa de las conductas y sus penas a través de una tipificación precisa dotada de la suficiente concreción en la descripción que incorpora.

34. Yo diría incluso, con mayor precisión, que en el precepto penal se exija de forma expresa y no meramente tácita o presunta, la infracción de las disposiciones extrapenales sobre la materia de que se trate; disposiciones que habrán de estar, además, suficientemente precisadas.

35. O, dicho de otra forma, que si se recurre a esta técnica legislativa sea porque el bien jurídico que se protege en ese delito es uno de los que está sometido a una continua y cambiante regulación por esa otra rama del Ordenamiento jurídico.

36. Esto es, que exija la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico, un plus de desvalor que justifique el que el hecho sea sancionable, en vez de por esa otra rama del Ordenamiento jurídico cuyas disposiciones han de infringirse, por el Derecho penal. Las normas penales en blanco que cumplen esta exigencia siguen lo que se denomina un sistema de «accesoriedad limitada».

Dicho lo cual, tras comprobar que el artículo 347 bis CP cumplía todas esas exigencias, concluyó su constitucionalidad. Y, aunque reconoció la efectiva inaplicabilidad de la Ley de Aguas que no estaba aún en vigor, entendió que el hecho seguía siendo constitutivo de delito del artículo 347 bis CP ya que éste era integrable por otras disposiciones administrativas que castigaban la misma conducta y que sí estaban vigentes (FJ 3.B)[37].

En el vigente CP podemos encontrar preceptos en los que se castigan conductas que atentan contra el medio ambiente configurados como normas penales en blanco que, al igual que el artículo 347 bis del anterior CP, cumplen todas estas exigencias. Es el caso, por ejemplo, del artículo 325, tanto en su tipo básico, como en su tipo cualificado; del artículo 326, en su primer apartado; o del 326 bis CP. Y si acudimos a los preceptos que, sin estar previstos en el título XVI como delitos específicos contra el medio ambiente, lo tienen como objeto directo de protección, respetan también todas estas exigencias el artículo 345.1, el 348.1 y el 350 CP. Preceptos, por tanto, todos ellos, configurados como normas penales en blanco constitucionalmente admisibles.

El problema es que también vamos a encontrar preceptos que castigan ataques contra el medio ambiente redactados como normas penales en blanco que no respetan todas y cada una de estas exigencias. Éste es el caso, por ejemplo, del segundo apartado del artículo 326 CP. Éste no contiene de forma expresa la exigencia de la infracción de la normativa extrapenal sobre la materia (lo que exige es que la conducta se realice en alguno de los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión Europea relativo a los traslados de residuos[38]); carece de contenido de desvalor (ya que no exige que se afecte bien jurídico alguno) y no respeta el principio de certeza (al emplear la expresión «cantidad no desdeñable de residuos»). Tampoco posee contenido de desvalor el delito del artículo 336 CP, en el que el legislador se limita a castigar a quien, sin estar autorizado, emplee para la caza o pesca medios destructivos o no selectivos para las especies de fauna. Por lo que ambos preceptos podrían ser declarados inconstitucionales.

---

37. La constitucionalidad del art. 347 bis Cp volvería a cuestionarse un año después (recurso de amparo contra la SAP de La Coruña 129/1991, de 26 de junio) alegándose nuevamente la vulneración del principio de legalidad en su exigencia de reserva de ley, por el hecho de que este precepto estuviera configurado como norma penal en blanco. Cuestión de constitucionalidad resuelta por STC 62/1994, de 28 de febrero, que, apoyándose en la citada STC 127/1990 y en los requisitos que ésta establecía, volvió a confirmarla.

38. Es posible que se esté refiriendo al Reglamento (CE) 1013/2006, de 14 de junio, sobre traslado transfronterizo de residuos o a cualquier otra norma comunitaria futura en la materia, pero no está claro. Desde luego lo que es evidente es que no exige expresamente la infracción de ese Reglamento ni de ninguna otra disposición. En cualquier caso, y tal como propone Muñoz Conde, F. (*Derecho penal. Parte Especial revisada y puesta al día con la colaboración de Carmen López Peregrín*, 25.ª ed., Tirant lo Blanch, 2023, p. 610) para evitar interpretaciones excesivamente amplias habrá que entender que la infracción de la normativa en la materia es también aquí un elemento del tipo.

Estas normas penales en blanco carentes de contenido de desvalor (que siguen lo que se denomina un sistema de «accesoriedad extrema»), elevan a delito algo que, precisamente por carecer de contenido de antijuricidad en sentido material, no es más que una mera infracción formal. Esto produce, a efectos prácticos, un solape total y absoluto (de ahí el nombre de este sistema de accesoriedad) entre ambas ramas sancionadoras del Ordenamiento jurídico.

Veámoslo, tomado como ejemplo el apartado segundo del artículo 326 CP. En él el legislador castiga a quien «fuera del supuesto a que se refiere el apartado anterior» traslade una «cantidad no desdeñable de residuos». Una lectura conjunta de ambos apartados del art. 326 CP y la menor pena con la que se castiga la conducta prevista en el segundo de ellos, permite entender que estamos ante un tipo privilegiado que será el aplicable cuando con los traslados de residuos no se haya «causado o podido causar la muerte o lesiones graves a las personas, ni causado o podido causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo, de las aguas o a animales o plantas, ni podido perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales». Es decir, cuando los residuos trasladados no sean, por ejemplo, peligrosos. El problema es que esta interpretación —en sí misma coherente— tiene la consecuencia absurda de que lo que se está sancionando penalmente en este segundo apartado coincide con conductas ya sancionadas administrativamente.

En efecto, basta con acudir al artículo 108 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (a partir de ahora Ley 7/2022)[39], relativo a las infracciones, en el que se recoge entre las infracciones graves (apartado 3, letra x), la siguiente:

> «El traslado de residuos no peligrosos[40] en el interior del territorio del Estado sin cumplir las obligaciones impuestas en esta ley y su desarrollo reglamentario, incluyendo la remisión de la notificación previa cuando proceda, o sin acompañar el traslado con la documentación exigida en el artículo 31.2, o cuando se lleve a cabo el traslado de forma que no se corresponda con la información contenida en los documentos de notificación previa o de identificación».

Por lo que podemos comprobar cómo el traslado de residuos no peligrosos es una conducta que está castigada tanto penal como administrativamente, sin que exista entre ambas infracciones ningún desvalor añadido que permita diferenciar cuándo habrá que aplicar una rama del Ordenamiento jurídico y cuándo la otra.

---

39. Mediante la que se incorpora al Derecho español, según se indica en su Disposición final duodécima, la Directiva (UE) 2018/851, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos; así como la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.

40. Cursivas añadidas.

Otro ejemplo lo encontramos en el artículo 335.1 CP, que castiga, entre otras conductas, la caza o pesca de especies no protegidas «cuando esté expresamente prohibida» su caza o pesca por las normas específicas en la materia». Las expresiones «cazar» o «pescar» son valorativamente neutras, y para que se dé esta conducta delictiva lo único que hay que hacer es infringir las disposiciones administrativas sobre caza y pesca. Por su parte, el artículo 31 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza (relativo a «las limitaciones y prohibiciones dictadas en beneficio de la caza»), prohíbe, entre otras conductas, cazar en época de veda, cazar fuera del período comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta; cazar en los llamados días de fortuna[41]; o cazar en días de nieve[42]. Luego, literalmente[43], será constitutivo de delito cazar en época de veda[44], o en los denominados días de fortuna, etc. Por lo que nuevamente nos encontramos con que el legislador ha elevado a la categoría de delito lo que, en realidad, no es más que una mera infracción puramente formal, lo que complica y puede hacer imposible la delimitación entre ambos sectores del Ordenamiento jurídico.

Por tanto, si bien el recurso a la técnica legislativa de las normas penales en blanco es irrenunciable para evitar contradicciones internas en la protección del medio ambiente por nuestro Ordenamiento jurídico[45]; esta técnica legislativa no está exenta de inconvenientes. En esta tesitura el legislador debería, por lo menos, respetar los requisitos constitucionalmente exigidos para su admisibilidad. Sin embargo, es frecuente que el legislador penal con-

41. Aquellos en los que, como consecuencia de incendios, epizootias, inundaciones, sequías u otras causas, los animales se ven privados de sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares.

42. Cuando ésta cubra de forma continua el suelo o cuando por causa de la misma queden reducidas las posibilidades de defensa de las piezas de caza.

43. Otra cosa es que, precisamente para evitar este solape entre delito e infracción administrativa, se trate de ofrecer una interpretación más restrictiva del mismo dotándole de un cierto contenido de desvalor que permita defender su conformidad con la Constitución. Tal y como se propone en Muñoz Conde, F./López Peregrín, C./ García Álvarez, P., *Manual…*, *op. cit.*, p. 309.

44. Como se interpreta, por ejemplo, en la STS 570/2020, de 3 de noviembre (ECLI:ES:TS:2020:3566). En ella la Sala, tras señalar que no todo incumplimiento de una prohibición administrativa de caza puede ser calificado como delito; entiende que cazar especies cinegéticas en época de veda constituye una infracción que va mucho más allá de una simple vulneración formal, en cuanto que la definición de períodos prohibitivos de carácter cíclico tiene un valor estratégico de primer orden para la protección de la vida animal (FJ 3.5). Ampliamente sobre esta sentencia, *cfr.* Liñán la Fuente, A., «El delito de caza furtiva en tiempo de veda. Comentario a la STS 3566/2020, de 3 de noviembre», en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, n.º 24, 2020, pp. 261 y ss.

45. Además de que su empleo también ofrece otras ventajas. En efecto, el empleo de esta técnica permite que la regulación penal en estos sectores no quede enseguida obsoleta; y evita que el legislador penal se vea en la necesidad de tener que incorporar toda la regulación extrapenal medio ambiental (profusa, dispersa y cambiante) en cada uno de estos delitos. Tarea esta última, por lo demás, impensable.

figure los delitos medio ambientales como normas penales en blanco con un sistema de accesoriedad extrema elevando a delito una conducta idéntica a algo que ya se sanciona administrativamente. Con ello se produce una instrumentalización del Derecho penal que es empleado para cumplir una función que no es la que le corresponde: (tratar de) cubrir los déficits de funcionamiento del Derecho administrativo. Esta administrativización[46] y la perversión del Derecho penal que la misma entraña, dificultará la delimitación del ámbito de aplicación de ambas manifestaciones del poder sancionador del Estado[47], acentuando aún más si cabe los problemas que van a generarse en esta sede en relación al principio *non bis in idem*[48].

III. LA CONFIGURACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE COMO DELITOS DE PELIGRO

El que el legislador redacte el presupuesto de hecho de una norma penal como delito de resultado lesivo o exigiendo tan sólo una amenaza más o menos próxima para el bien jurídico en él protegido es algo que va a depender, básicamente, de la cantidad de conductas que quiera sancionar. La técnica

46. Sobre la administrativización del Derecho penal en materia medio ambiental *cfr.*, entre otros, Colás Turégano, A./ Morelle Hungría, E., «El Derecho ambiental frente a los delitos ecológicos: la eficacia y eficiencia penal a debate», en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n.º 23-13, 2021, p. 30; y Matellanes Rodríguez, N.P., «Hitos y tendencias…», *op. cit.*, pp. 264 y ss.

47. En este sentido, pueden verse: López Barja De Quiroga, J., «Problemas generados por la dualidad sancionadora administrativa y penal en ámbito de la protección del medio ambiente», en *Problemas derivados de la delincuencia medioambiental*, Editorial del Consejo General del Poder Judicial, 2004, pp. 43 y ss.; y Morón Pendás, N./ Morón Pendás, I., «Responsabilidades penales y administrativas en materia de medio ambiente y ordenación del territorio», en *Revista Penal México*, 2022, pp. 38 y ss.

48. Específicamente sobre la vulneración de este principio en el ámbito de los delitos contra el medio ambiente, *cfr.* entre otros, Muñoz Lorente, J., «Vulneración del principio *non bis in idem* en el ámbito medioambiental: imposición de sanción penal existiendo ya una previa sanción administrativa por los mismos hechos y con idéntico fundamento», en *Revista Mensual de Gestión Ambiental*, n.º 12, 1999, pp. 47 y ss.; El Mismo, «De nuevo sobre el principio *non bis in idem* en el ámbito medioambiental y la pretendida diversidad de fundamento de las sanciones penales y administrativas (Audiencia Provincial de León, Sección 1.ª, sentencia de 12 de enero de 1999. Ponente: Sra. Cabeza Sánchez)», en *Revista Mensual de Gestión Ambiental*, n.º 24, 2000, pp. 62 y ss.; El mismo, *La nueva configuración del principio non bis in idem. (Las sanciones administrativas como límite a la intervención de la jurisdicción penal. Especial referencia al* ámbito *medioambiental)*, Editorial La Ley, 2001; Ochoa Figueroa, A., «El principio *"non bis in idem"* y su repercusión sobre el ilícito penal y el ilícito administrativo», en *Revista Penal Méjico*, n.º 16-17, 2019-2020, pp. 179 y ss.; y Pérez Manzano, M., «El derecho fundamental a no padecer *bis in idem* y las sanciones en protección del medio ambiente», en Jorge Barreiro, A. (dir.), *Estudios sobre la protección penal del medio ambiente en el Ordenamiento jurídico español*, Comares, 2005, pp. 73 y ss.

de tipificación de los delitos de peligro amplía la punibilidad al adelantar las barreras de protección penal a una fase anterior a la lesión del bien jurídico.

Ciertamente, no es que no haya delito alguno contra el medio ambiente configurado como delito de resultado lesivo[49], pero no es lo más habitual. Es más frecuente que en ellos se emplee la técnica de los delitos de peligro. La razón es evidente. Si los daños que se le causen al medio ambiente pueden ser irreversibles, es preferible que se intervenga penalmente sin necesidad de esperar a que se llegue a producir su lesión, adelantando las barreras de protección a un momento anterior.

Dicho esto, hay tres técnicas legislativas de delito de peligro: delito de peligro concreto, delito de peligro abstracto y delito de peligro abstracto-concreto o hipotético.

En materia medio ambiental el legislador hace uso de las tres. Están configurados como delitos de peligro concreto[50], por ejemplo, los relacionados con la energía nuclear del artículo 343 CP o los artículos 348, 349 y 350 relativos a los riesgos provocados por explosivos y otros agentes. Como delitos de peligro hipotético para el medio ambiente[51] se configuran el artículo 325, el primer apartado del artículo 326, el 326 bis o el 345 CP[52]. Y como delitos de peligro abstracto los artículos 326.2, 329, 332, 334, el 335 en sus dos primeros apartados, el 336 y el 352 CP.

Ahora bien, mientras que el recurso a la técnica de los delitos de peligro concreto y a los de peligro hipotético es admitido sin reservas por la doctrina, no ocurre lo mismo con la técnica legislativa de los delitos de peligro abstracto[53]. En ellos se castiga la simple realización de la conducta sin necesidad

---

49. Tenemos, por ejemplo, el delito del artículo 330 CP en el que se castiga el daño a algún elemento que haya servido para calificar a un espacio natural protegido como tal. O el delito del artículo 333 en el que se castiga la introducción o liberación de especies no autóctonas de modo que se perjudique el equilibrio biológico. También está configurado como delito de resultado lesivo el artículo 356 CP en el que se castigan los incendios en zona vegetal no forestal únicamente cuando con ello se perjudica gravemente el medio ambiente.

50. Exigiendo de forma expresa la puesta en peligro del bien jurídico medio ambiente (arts. 348, 349 y 350 CP) o de algunos de los recursos que lo integran (art. 343 CP).

51. Representado en alguno de los recursos que forman parte del mismo.

52. En realidad, en estos cuatro preceptos el legislador castiga a los que realicen las conductas en ellos previstas tanto si con ellas se «causan» ciertos resultados como si simplemente existe la posibilidad de producción de los mismos (con la fórmula «causen» o «puedan causar»), equiparando en gravedad los casos de producción de resultados lesivos y los de mero peligro. Tal equiparación choca desde luego con el principio de proporcionalidad, pero con ella resulta evidente que la constatación de esos resultados deviene innecesaria.

53. La preocupación de la Dogmática penal por la admisibilidad de esta técnica fue puesta de manifiesto por BARBERO SANTOS ya en 1973 («Contribución al estudio de los delitos de peligro abstracto», en *Anuario de Derecho penal y Ciencias penales*, tomo 26, 1973, p. 493). Posteriormente CEREZO MIR, J., rechazando que los delitos de peligro abstracto planteen problema alguno desde el punto de vista del principio de legalidad, estimó que la

de constatar la idoneidad de la conducta para afectar al bien jurídico ni, por supuesto, la puesta en peligro efectiva del mismo. Tanto el recurso a la técnica legislativa de los delitos de peligro hipotético como a la de los delitos de peligro abstracto, respecto a la de los delitos de peligro concreto, facilita (al menos desde un punto de vista teórico[54]) la aplicación de los tipos penales. En ambos casos el juez queda exento de tener que demostrar, por un lado, la puesta en peligro efectiva del bien jurídico medioambiente por una conducta individual. Y por otro, caso de que tal puesta en peligro hubiera tenido lugar, la conexión entre dicha afectación y la conducta individualmente realizada[55]. Las ventajas a efectos de prueba son indiscutibles. Ahora bien, mientras que en los delitos de peligro hipotético hay que demostrar, al menos, la idoneidad de la conducta realizada para afectar al bien jurídico (así como la relación causa-efecto entre la conducta y el riesgo potencial); los configurados como delito de peligro abstracto carecen de un mínimo de contenido de antijuricidad material que justifique la intervención del Derecho penal con arreglo a los principios de ofensividad[56] e intervención mínima. Con ello se incrementa además la dificultad para determinar los comportamientos punibles. Si estos delitos carecen de contenido de desvalor y están, que será lo más normal, configurados como normas penales en blanco, no podrá escindirse con precisión qué conductas habrán de ser sancionadas penalmente con arreglo a ellos y cuáles con arreglo a la otra rama del Ordenamiento jurídico que castiga esas mismas conductas. Y esto, en última instancia, al dificultar la aplicación del precepto penal, terminará provocando justo el efecto contrario al pretendido.

---

legitimidad de los mismos era cuestionable únicamente desde el punto de vista del contenido de injusto material («Los delitos de peligro abstracto en el ámbito del Derecho penal del riesgo», en *Revista de Derecho penal y Criminología*, n.º 10, 2002, pp. 62 y 65). Inconveniente que entendió sólo podría ser resuelto por el legislador transformando los delitos de peligro abstracto puros en delitos de aptitud para la producción de un daño o de peligro abstracto-concreto (*op. cit.*, p. 71). Más recientemente sobre los delitos de peligro abstracto y su problemática, *cfr.* PÉREZ-SAUQUILLO MUÑOZ, C., *Legitimidad y técnicas de protección penal de bienes jurídicos supraindividuales*, Tirant lo Blanch, 2019. Esta autora considera que el recurso a esta técnica legislativa no es en absoluto imprescindible para la protección de los bienes jurídicos colectivos. Admite los delitos que incluyen elementos normativos de aptitud o idoneidad y propone, para aquellos que carezcan de los mismos, una interpretación restrictiva de los mismos con arreglo al principio de ofensividad y de intervención mínima (*op. cit.*, pp. 323 y ss.).

54. Ya que no se corresponde después con la realidad, al producirse en muchas ocasiones el sobreseimiento de la causa. Sobre esta temática *cfr.* MATELLANES RODRÍGUEZ, N.P., «Hitos y tendencias…», *op. cit.*, p. 264.

55. Específicamente sobre la problemática del establecimiento de la relación de causalidad en el ámbito de los delitos contra el medio ambiente, *cfr.* DE LA CUESTA AGUADO, P.M., *Causalidad de los delitos contra el medio ambiente*, 2.ª ed., Tirant lo Blanch, 1999.

56. *Cfr.* HORMAZÁBAL MALARÉE, H., «El principio de lesividad y el delito ecológico», en GONZALO QUINTERO OLIVARES, G. y MORALES PRATS, F. (coords.), *El nuevo Derecho penal español. Estudios penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz*, Aranzadi, 2001, pp. 1417 y ss.

IV. EL EMPLEO DE CONCEPTOS NORMATIVOS

Los conceptos normativos son términos que usa el legislador en la redacción de algunos delitos y que tienen un significado propio en otra rama del Ordenamiento jurídico de la que proceden.

El recurso a este tipo de conceptos no es algo ni extraño ni ajeno al Derecho penal, pero en el ámbito de los delitos contra el medio ambiente se acude a ellos con mucha frecuencia. En este ámbito son conceptos normativos, entre otros muchos más, los términos «vertidos» (art. 325 y 343 CP), «radiaciones» (art. 325 y 343 CP), «residuos» (art. 326 CP), «sustancias inflamables» (art. 346 CP), «montes» (arts. 352 y 354 CP), «especies protegidas» (art. 332 y 334 CP), «espacios naturales protegidos» (art. 330 CP), «especies en peligro de extinción» (art. 332 y 334 CP) o «sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes» (art. 348 CP). Y son únicamente, como digo, meros ejemplos.

De hecho, es lógico que en la redacción de los delitos contra el medio ambiente el legislador acuda a este tipo de conceptos dada la relación de interdependencia que guarda el Derecho penal con el Derecho administrativo en la protección del medio ambiente (también materializada, como hemos visto, en el recurso a la técnica legislativa de las normas penales en blanco). Es al Derecho administrativo al que le corresponde no sólo la protección del medio ambiente sino también, como ya desarrollé *supra*, la regulación de toda esa serie de actividades y conductas que, siendo necesarias socialmente para el desarrollo económico y en última instancia humano (y, por tanto, permisibles), pueden repercutir negativamente en el medio ambiente. Por ello lo habitual será que siempre haya alguna norma o disposición que ofrezca una definición de cada uno de estos términos.

Así, por ejemplo, el término «vertido» aparece definido en la Ley de Aguas (cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio), como toda emisión de contaminantes que se realice directa o indirectamente a las aguas continentales, así como al resto del Dominio Público Hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada (art. 100). El término «residuos», que se emplea en el artículo 326 CP, aparece definido en el artículo 2 de la Ley 7/2022, ya referida, como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. La expresión «montes» se define en el artículo 5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en el siguiente sentido: «A los efectos de esta ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas». Y así respectivamente.

En la medida en que existen tales definiciones, estos términos pueden ser entendidos por los aplicadores del Derecho con el mismo sentido que

ofrezca la respectiva normativa sobre la materia. Ahora bien, en puridad, tales significados no son vinculantes a efectos penales, pudiendo o incluso debiendo a veces ser reinterpretados para ajustarlos a las funciones a cumplir por esta otra rama del Ordenamiento jurídico. Es lo que desde mi punto de vista ha de hacerse, por ejemplo, con el concepto normativo «especies protegidas» que se emplea en los artículos 332 y 334 CP en relación, respectivamente, a la flora y a la fauna. La determinación de cuándo una especie de flora o fauna está protegida nos remite a un complejo entramado normativo de carácter administrativo y, en ocasiones, a la previsión de la especie en cuestión dentro de unos catálogos. En este sentido a nivel nacional contamos con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que establece la necesidad de garantizar la conservación de las especies autóctonas silvestres (artículo 54). Esta Ley crea en su artículo 56 el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial que, según señala, se instrumentará reglamentariamente previa consulta a las comunidades autónomas e incluirá especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor «científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España». A su vez, dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se establece el Catálogo Español de Especies Amenazadas, que incluye, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, los taxones o poblaciones de la biodiversidad amenazada[57]. Tanto el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial como el Catálogo Español de Especies Amenazadas, son desarrollados por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, que especifica las especies, subespecies o poblaciones que los integran[58].

Pues bien, si nos damos cuenta, el artículo 56 *supra* indicado permite que en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial sean incluidas especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una

57. El Catálogo integra las especies en dos categorías: *especies en peligro de extinción*, formada por taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando; y *especies vulnerables*, integrada por taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a «en peligro de extinción» en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.

58. Estos registros han sido actualizados hasta el momento mediante siete Órdenes ministeriales. En la actualidad el Listado cuenta con 974 taxones, de los cuales 345 se encuentran en el Catálogo (137 en la categoría «vulnerable» y 208 en la categoría «en peligro de extinción»). Para la inclusión, exclusión o cambio de categoría de los taxones, tarea realizada por el MITECO a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, el Real Decreto 139/2013, de 4 de febrero, especifica el procedimiento a seguir (artículo 6). Para más información, cfr. https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-listado.html (última consulta 6 de septiembre de 2023).

atención y protección particular en función no sólo de su valor «científico, ecológico o grado de amenaza», sino incluso por su «valor cultural, por su singularidad o rareza». Cualidades muy distintas y que, a efectos de intervención de un Derecho penal orientado a la protección de bienes jurídicos, no pueden ni deben tener la misma relevancia. Por ello soy de la opinión de que el concepto normativo «especies protegidas» sea interpretado a efectos penales de forma más restrictiva. No debe ser suficiente para la configuración de los delitos de los artículos 332 y 334 CP el que la especie a la que pertenezca el ejemplar objeto material de la conducta típica respectiva se encuentre catalogada formalmente como especie protegida. Deberá constatarse en el caso concreto, además de lo anterior, que dicha especie requiere de esa protección particular por motivos de supervivencia y, por tanto, de diversidad y equilibrio biológico[59], ya que sólo así estos delitos podrán cumplir la función que realmente les corresponde.

Desde este punto de vista, si bien el empleo de este tipo de términos pone de manifiesto una cierta vinculación entre el Derecho penal y lo que disponga el Derecho administrativo en materia medio ambiental, ello no implica *per se* que el primero pierda por ello su autonomía. De hecho, la admisibilidad de los conceptos normativos en la redacción de los supuestos de hecho de los preceptos penales sería reconocida también por nuestro Tribunal Constitucional en la citada sentencia 127/1990, 5 de julio de 1990 (FJ 3.B), siempre y cuando, eso sí, la conducta típica esté redactada con suficiente precisión. El problema es que, como ya he desarrollado (y como veremos también en el epígrafe siguiente) es frecuente que esto no ocurra en los delitos medioambientales.

En cualquier caso, realmente el recurso a este tipo de conceptos en el ámbito del Derecho penal no es lo deseable. Las propuestas de reinterpretación de los mismos no son unánimemente asumidas y no todos los destinatarios de la norma tendrán por qué poder conocer sus significados[60]. Desconocimiento que supondrá la atipicidad de la conducta si el delito en cuestión no está previsto a título de imprudencia.

---

59. Sobre la necesidad de reinterpretación de este concepto, *cfr.* entre otros, Matallín Evangelio, Á., «El art. 332 CP: el art. 332 CP: el concepto de especie protegida y otras cuestiones de legalidad y ofensividad», en *Revista General de Derecho Penal*, 2021, pp. 1 y ss.; y Muñoz Conde, F./López Peregrín, C./ García Álvarez, P., *Manual…*, *op. cit.*, pp. 300 y ss.

60. Si bien es cierto que muchos de los preceptos penales en los que se castigan conductas que atentan o pueden atentar contra el medio ambiente, sin necesidad de que estén configurados como delitos especiales, sólo podrán ser cometidos por personas especialistas en la materia o por personas que, al menos, tengan conocimiento de ese tipo de actividades y que, por lo tanto, estarán familiarizadas con dichos conceptos. Pero si no fuera así, el desconocimiento de un elemento del tipo determinará, si el precepto en cuestión no está previsto a título de imprudencia, la atipicidad de la conducta incluso aunque el error fuera vencible.

V. AMPLITUD Y FALTA DE PRECISIÓN EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA TÍPICA. LOS CONCEPTOS INDETERMINADOS

Otra nota que hay que destacar de la técnica legislativa empleada por nuestro legislador en la redacción de los delitos contra el medio ambiente es la amplitud con la que suele describir en ellos la conducta típica. El legislador penal persigue con ello, muy probablemente, abarcar prácticamente cualquier comportamiento que pueda tener consecuencias negativas en el medio ambiente o para alguno de sus recursos tratando de evitar toda posible «laguna de punibilidad».

Un claro ejemplo lo tenemos en el artículo 325 CP. En él, para describir la conducta contaminante el legislador usa dos verbos «provocar» y «realizar» con diferentes significados. Así, mientras que con el uso del verbo *realizar* alude a la ejecución inmediata de la emisión o vertido, con el de *provocar* hace referencia a conductas de intervención mediata. Ahora bien, a lo anterior añade que tanto la *realización* como la *provocación* podrán llevarse a cabo de forma *directa* o *indirecta*, lo que permite englobar como comportamientos típicos tanto la ejecución material, como el dar la orden para que otro ejecute, realizar actividades en principio inocuas que originan productos secundarios nocivos o que pueden serlo por una transformación ulterior, o llevar a cabo comportamientos meramente omisivos (como consentir, tolerar, no impedir, etc.). Esta descripción de la conducta típica es tan amplia que prácticamente conduce a un concepto unitario de autor, por lo que será necesario realizar una interpretación restrictiva que evite una punición indiscriminada a título de autoría[61].

Otro ejemplo de redacción de la conducta de forma excesivamente amplia nos lo ofrece el artículo 326 bis CP, en cuanto que lo que exige es que se lleve a cabo «la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos». En esta ocasión el núcleo de la conducta típica se define de un modo tan amplio e impreciso que lo mismo podría aplicarse a una central nuclear, que a un almacén de explosivos, o a un sótano en el que se manipulen drogas o incluso medicamentos de forma ilegal; cuando además, el manejo incorrecto de todos estos materiales y sustancias está ya expresamente previsto en otros lugares del Código penal (véanse, por ejemplo, arts. 341 y ss., art. 348, art. 368 o art. 362 CP), con los que evidentemente se van a producir entonces problemas de delimitación[62].

61. Para más información, *cfr.* García Álvarez, P./López Peregrín, C., «Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio, y a la jurisprudencia sobre la materia», en *Revista General de Derecho Penal*, n.° 9, 2013, pp. 23-25.

62. *Cfr.* Muñoz Conde, F./López Peregrín, C./ García Álvarez, P., *Manual…*, *op. cit.*, p. 267.

Tampoco es en ocasiones fácil distinguir entre las conductas reconducibles al tipo básico de un delito o a sus correspondientes tipos cualificados, ya que la distinción que efectúa el legislador entre los elementos sobre los que ha de recaer la peligrosidad de la conducta en ambos casos carece, directamente, de sentido.

Podemos comprobarlo en el artículo 325 CP. El legislador hace recaer la diferencia entre el tipo básico del primer apartado de este precepto y el primer tipo cualificado de su segundo apartado, en que la provocación o realización de vertidos, emisiones, ruidos, etc., en vez de *causar o poder causar* «daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas» (como se exige en su primer apartado), «pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales». Cuando, si nos damos cuenta, los distintos recursos naturales a los que puede afectar la conducta contaminante en el tipo básico no son más que distintos elementos de la riqueza medioambiental, por lo que la alteración de los primeros termina siendo, en última instancia, una alteración del equilibrio de los sistemas naturales (tipo cualificado). Pero es que, además, si la conducta realizada llegara efectivamente a dañar sustancialmente la calidad del aire, del suelo o del agua, o a animales o plantas, debe ser porque tal conducta es al menos *idónea* para perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Esto determinará que el tipo básico del primer apartado de este art. 325 quede desplazado por el tipo cualificado de su segundo apartado, más gravemente penado y, en realidad, más fácil de aplicar en la práctica en cuanto que no exige un resultado lesivo sino una mera peligrosidad de la conducta. Luego, tampoco existe una relación de proporcionalidad adecuada entre el contenido de desvalor que se exige para la apreciación del tipo básico respecto al que se exige para la apreciación del tipo cualificado, lo que tampoco tiene sentido.

La misma crítica ha de hacerse en relación con los delitos previstos en los artículos 326.1 y 326 bis CP, ya que en ellos también el tipo básico exige que la conducta prevista «cause o pueda causar daños sustanciales» a alguno de los recursos naturales que en ellos se enumeran, entrando el tipo cualificado en consideración cuando el riesgo de grave perjuicio recaiga sobre el «equilibrio de los sistemas naturales».

Tampoco resulta nítida en ocasiones la delimitación entre los ámbitos de aplicación de distintos delitos medioambientales. Así, por ejemplo, es difícil imaginar que con las conductas previstas en el primer apartado del artículo 326 CP se causen resultados lesivos, si no es porque se ha producido una emisión o un vertido de tales residuos, en cuyo caso el precepto a aplicar debería ser el art. 325 CP que, aunque prevé las mismas penas, es más específico.

De manera que la situación es la siguiente: por un lado, la amplitud con la que se redactan en ocasiones los delitos contra el medio ambiente produce consecuencias inadmisibles que obligarán, al menos, a que tengan que ser reinterpretados; y, por otro, la falta de precisión en la redacción de lo prohibido planteará problemas de delimitación entre el tipo básico de un delito y

sus correspondientes tipos cualificados, así como entre los distintos preceptos penales, provocando incluso que alguno de ellos se convierta en superfluo.

VI. CONCLUSIONES

El legislador penal español a partir de la aprobación del Código penal 1995 se ha tomado en serio la protección del medio ambiente, al que se reconoce en cuanto bien jurídico merecedor, necesitado y capaz de protección por el Derecho penal, de forma independiente.

Ahora bien, la técnica legislativa empleada por el legislador no es la más adecuada.

Si bien en este ámbito resulta imprescindible el recurso a las normas penales en blanco, el legislador no respeta las exigencias establecidas por nuestro Tribunal Constitucional para la admisibilidad de la mismas. Cuando acude a la técnica de los delitos de peligro, lo que ocurre con frecuencia en esta materia, no exige en ocasiones el contenido mínimo de desvalor, castigando conductas que constituyen una mera infracción formal. Lo anterior unido a una excesiva amplitud en la configuración de las conductas típicas y falta de precisión en la redacción de las mismas, dificultará la delimitación del ámbito de aplicación de los distintos preceptos obstaculizando, en última instancia, la operatividad de los delitos contra el medio ambiente. Tan es así, que parte de la doctrina llega a apuntar el carácter puramente simbólico del Derecho penal medio ambiental[63]. Con todo esto no pretendo insinuar, en absoluto, que deba renunciarse a la protección del medio ambiente por el Derecho penal, sino resaltar que debe prestarse una especial atención a los criterios y técnicas de tipificación, haciendo especial hincapié en la necesidad del respeto de los principios, como en cualquier otro ámbito delictivo, de intervención mínima, proporcionalidad y seguridad jurídica. No debe elevarse a delito lo que no sea más que una mera infracción formal, ni castigarse penalmente conductas que revistan menor gravedad que las sancionadas administrativamente, los preceptos penales deben redactarse de la forma más precisa posible, no pueden castigarse con la misma pena conductas de distinta gravedad y debe cuidarse la coherencia no sólo con el resto del Ordenamiento jurídico sino también dentro del propio Derecho penal. De hecho, y con esto concluyo, este es el único camino para que las expectativas generadas con la plasmación de la protección del medio ambiente en el CP puedan cumplirse verdaderamente en la práctica.

---

63. En este sentido, por ejemplo, ESCAJEDO SAN EPIFANIO, L., *El medio ambiente en la crisis del Estado social: su protección penal simbólica*, Comares, 2006; y MUÑOZ CONDE, F./ LÓPEZ PEREGRÍN, C./ GARCÍA ÁLVAREZ, P., *Manual*…, *op. cit*., p. 239. Cuestionan también su eficacia, COLÁS TURÉGANO, A./ MORELLE HUNGRÍA, E., «El Derecho ambiental…», *op. cit*., pp. 1 y ss.; y SESSANO GOENAGA, J.C., «La protección penal…», *op. cit.*, pp. 33-34.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Barbero Santos, M., «Contribución al estudio de los delitos de peligro abstracto», en *Anuario de Derecho penal y Ciencias penales*, tomo 26, 1973, pp. 487-498.

Berdugo Gómez de la Torre, I., «La protección penal del medio ambiente. Algunas cuestiones generales», en Muñoz Conde, F. (dir.), *Problemas actuales del Derecho penal y de la Criminología. Estudios penales en memoria de la Profesora Dra. María del Mar Díaz Pita*, Tirant lo Blanch, 2008, pp. 997-1008.

Cerezo Mir, J., «Los delitos de peligro abstracto en el ámbito del Derecho penal del riesgo», en *Revista de Derecho penal y Criminología*, n.º 10, 2002, pp. 47-72.

Colás Turégano, A. / Morelle Hungría, E., «El Derecho ambiental frente a los delitos ecológicos: la eficacia y eficiencia penal a debate», en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n.º 23-13, 2021, pp. 1-34.

Conde-Pumpido Tourón, C., «Complementariedad de la tutela penal y administrativa sobre el medioambiente. Problemas que suscita desde la perspectiva del Derecho penal», en Pico Lorenzo, C. (dir.), *Cuadernos de Derecho Judicial. Las fronteras del Código penal de 1995 y el Derecho administrativo sancionador*, n.º 11, 1997, pp. 437-496.

De la Cuesta Aguado, P.M., *Causalidad de los delitos contra el medio ambiente*, 2.ª ed., Tirant lo Blanch, 1999.

De la Cuesta Arzamendi, J.L., «La protección penal del bosque», en Gómez Martín, V. y Otros (dirs.), *Un modelo integral de Derecho penal. Libro homenaje a la profesora Mirentxu Corcoy Bidasolo*, BOE, 2022, pp. 1059-1069.

De la Mata Barranco, N.:

- *Protección penal del ambiente y accesoriedad administrativa. Tratamiento penal de comportamientos perjudiciales para el ambiente amparados en una autorización administrativa ilícita*, Cedecs, 1996.

- «Configuración como ley penal en blanco de los delitos contra el medio ambiente», en *Estudios jurídicos en memoria del Profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, Universidad de Valencia, Instituto de Criminología, 1997, pp. 569-596.

- «Derecho comunitario y Derecho estatal en la tutela penal del ambiente», en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n.º 2, 2000.

Escajedo San Epifanio, L., *El medio ambiente en la crisis del Estado social: su protección penal simbólica*, Comares, 2006.

García Álvarez, P./López Peregrín, C., «Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, con referencia a la reforma introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio, y a la jurisprudencia sobre la materia», en *Revista General de Derecho Penal*, n.º 9, 2013, pp. 1-77.

García Arán, M., «Remisiones normativas, leyes penales en blanco y estructura de la norma penal», en *Estudios Penales y Criminológicos*, n.º 16, 1992-1993, pp. 65-103.

Hormazábal Malarée, H., «El principio de lesividad y el delito ecológico», en **Quintero Olivares, G.** y **Morales Prats, F.** (coords.), *El nuevo Derecho penal español. Estudios penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz*, Aranzadi, 2001, pp. 1417-1428.

Jordano Fraga, J., «Desarrollo sostenible: el reto del Derecho ambiental», en *Revista Electrónica de Derecho Ambiental*, n.º 38-39, 2021.

Liñán la Fuente, A., «El delito de caza furtiva en tiempo de veda. Comentario a la STS 3566/2020, de 3 de noviembre», en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, n.º 24, 2020, pp. 261-274.

López Barja de Quiroga, J., «Problemas generados por la dualidad sancionadora administrativa y penal en ámbito de la protección del medio ambiente», en *Problemas derivados de la delincuencia medioambiental*, Editorial del Consejo General del Poder Judicial, 2004, pp. 43-68.

Matallín Evangelio, Á., «El art. 332 CP: el art. 332 CP: el concepto de especie protegida y otras cuestiones de legalidad y ofensividad», en *Revista General de Derecho Penal*, 2021, pp. 1-53.

Matellanes Rodríguez, N. P., «Hitos y tendencias en materia de protección penal del medio ambiente», en Ferré Olivé, J.C. y Otros (edits.) H*omenaje al Profesor Ignacio Berdugo Gómez de la Torre. Liber Discipulorum. Schola Iuris Criminalis Salmanticensis*, tomo I, Ediciones Universidad Salamanca, 2022, pp. 261-278.

Morales Prats, F., «El delito de contaminación ambiental: análisis del artículo 325.1 CP. La relación entre Derecho penal y Derecho administrativo medioambiental», en Quintero Olivares, G. y Morales Prats, F. (coords.)*, Estudios de Derecho ambiental: libro homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*, Tirant lo Blanch, 2008, pp. 1030-1066.

Morón Pendás, N./ Morón Pendás, I., «Responsabilidades penales y administrativas en materia de medio ambiente y ordenación del territorio», en *Revista Penal México*, 2022, pp. 37-47.

Muñoz Conde, F., *Derecho penal. Parte Especial revisada y puesta al día con la colaboración de Carmen López Peregrín*, 25.ª ed., Tirant lo Blanch, 2023.

Muñoz Conde, F./García Arán, M., *Derecho penal. Parte General revisada y puesta al día con la colaboración de Pastora García Álvarez*, 11.ª ed., Tirant lo Blanch, 2022.

Muñoz Conde, F./López Peregrín, C. / **García Álvarez, P.**, *Manual de Derecho penal medioambiental,* 2.ª ed., Tirant lo Blanch, 2015.

Muñoz Lorente, J.:

- «Vulneración del principio *non bis in idem* en el ámbito medioambiental: imposición de sanción penal existiendo ya una previa sanción administrativa por los mismos hechos y con idéntico fundamento», en *Revista Mensual de Gestión Ambienta*l, n.º 12, 1999, pp. 47-51.

– «De nuevo sobre el principio *non bis in idem* en el ámbito medioambiental y la pretendida diversidad de fundamento de las sanciones penales y administrativas (Audiencia Provincial de León, Sección 1.ª, sentencia de 12 de enero de 1999. Ponente: Sra. Cabeza Sánchez)», en *Revista Mensual de Gestión Ambiental*, n.º 24, 2000, pp. 62-76.

– *La nueva configuración del principio non bis in idem. (Las sanciones administrativas como límite a la intervención de la jurisdicción penal. Especial referencia al ámbito medioambiental)*, Editorial La Ley, 2001.

Ochoa Figueroa, A., «El principio "*non bis in idem*" y su repercusión sobre el ilícito penal y el ilícito administrativo», en *Revista Penal Méjico*, n.º 16-17, 2019-2020, pp. 179-193.

Pérez Manzano, M., «El derecho fundamental a no padecer bis in idem y las sanciones en protección del medio ambiente», en Jorge Barreiro, A. (dir.), *Estudios sobre la protección penal del medio ambiente en el Ordenamiento jurídico español*, Comares, 2005, pp. 73-107.

Pérez-Sauquillo Muñoz, C., *Legitimidad y técnicas de protección penal de bienes jurídicos supraindividuales*, Tirant lo Blanch, 2019.

Pozuelo Pérez, L., «La reparación del daño al medio ambiente», en *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, n.º 191, 2002, pp. 133-166 (también publicado en Jorge Barreiro, A. (dir.), Estudios sobre la protección penal del medio ambiente en el Ordenamiento jurídico español, Comares, 2005, pp. 237-264).

Puente Aba, L. M.ª., «La reparación en el marco del Derecho Penal Medioambiental», en *Revista General de Derecho Penal*, n.º 3, 2005, pp. 1-31.

Rodríguez Medina, M.ª. M., «Problemática de las leyes penales en blanco en el ámbito de los delitos contra el medio ambiente», en *Revista Penal México*, n.º 7, 2015, pp. 195-215.

Sánchez Pérez, L., «El incremento de la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal», en *Revista Penal*, 2019, pp. 178-198.

Sessano Goenaga, J.C., «La protección penal del medio ambiente. Peculiaridades de su tratamiento jurídico», en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n.º 4, 2002, pp. 1-34.

Silva Sánchez, J.M.ª., «¿Competencia "indirecta" de las Comunidades Autónomas en materia de Derecho penal?», en *La Ley*, 1993-1, pp. 964-982.

Vercher Noguera, A., «Algunos planteamientos y reflexiones prácticas en relación al efecto directo de las Directivas Comunitarias en Medio Ambiente y la posibilidad de aplicar las mismas con el objeto de completar normas penales en blanco», en *Revista do Ministério Público do RS*, Porto Alegre, n.º 77, 2015, pp. 107-124.

COMENTARIOS AL PROYECTO DE NUEVA DIRECTIVA EUROPEA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DEL DERECHO PENAL DESDE UNA PERSPECTIVA VICTIMOLÓGICA

Manuel José García Rodríguez
Universidad Pablo de Olavide

I. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo perseguimos analizar en qué medida la nueva propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que se pretende sustituir a la Directiva 2008/99/CE[1], puede representar un paso adelante en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea (UE) para cumplir algunos de los objetivos propuestos por la denominada Victimología verde. Que como una nueva rama en el seno de la disciplina victimológica general, se propone estudiar la victimización causada contra el medioambiente, así como valorar y dar respuesta a los múltiples daños que de ella se derivan[2]. Y examinar si entre las disposiciones de su articulado, más allá de una mejor concreción de las conductas tipificadas o de los daños medioambientales que se definen en la proyectada norma, pueden en ella ser destacadas algunas específicamente destinadas a reforzar la protección y mejorar la reparación de los diferentes afectados por este tipo de atentados, que no únicamente son seres humanos, abarcando también ecosistemas y otras especies. Cuyas consecuencias además se extienden, cada vez con mayor frecuencia, fuera de las fronteras de los Estados miembros en que estos delitos se cometen.

1. COM (2021) 851 final. Bruselas, 15.12.2021.

2. Hall, M., y Varona, G., «La victimología verde como espacio de encuentro para repensar la otredad más allá de la posesión», *Revista de Victimología,* N.º 7, 2018, pp. 108-109.

Así pues, en el actual proceso de gestación de la nueva propuesta de Directiva europea sobre la protección del medio ambiente a través del Derecho penal, con la que se quiere revisar la todavía vigente Directiva 2008/99/UE, de 19 de noviembre[3], el objetivo principal de este trabajo será estudiar aquellas disposiciones de la futura norma que puedan incorporar algunos de los postulados propuestos por la denominada Victimología verde. Al considerar que de este modo, podría darse una mayor visibilidad a las víctimas medioambientales y conseguir una mejor respuesta a todos los aspectos relacionados con su victimización, tras ser implementadas en las legislaciones nacionales de los distintos Estados miembros.

Razón por la cual, en el desarrollo de este capítulo, destacaremos desde una perspectiva victimológica todos aquellos elementos que en la nueva propuesta de Directiva de protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, consideremos que puedan responder al marco teórico que propone esta nueva disciplina «verde». Para la que se abren nuevos caminos, y una de cuyas principales novedades radica precisamente en la ampliación del objeto de estudio y método empleado hasta el momento por la Victimología tradicional[4]. Al poner de manifiesto lo complicado que puede llegar a ser la valoración del daño medioambiental, y los obstáculos que podemos encontrarnos para responder al mismo desde el sistema de justicia penal. En particular, si consideramos como ya hemos anticipado, que ese daño se puede llegar a experimentar no sólo por seres humanos, sino también por animales y ecosistemas, todos los cuales tienen un valor en sí mismos considerados y no en tanto en cuanto se lo otorgue un determinado ordenamiento jurídico.

II. EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DEL DERECHO PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA ¿DE DÓNDE PARTIMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS?

Hasta la fecha, la culminación del proceso de evolución legislativa para conseguir una mejor respuesta en la tutela penal del medio ambiente en el marco de la Unión Europea, viene constituido por la Directiva 2008/99/CE, de protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. La cual además, fue complementada con la Directiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, por la que se modifica la Directiva 2005/35/

3. DO L 328 de 6.12.2008, pp. 28-37.

4. Varona Martínez, G., Herrera Moreno, M., Tamarit Sumalla, J. M., «Explorando caminos futuros en victimología», en VARONA MARTÍNEZ, G., (Dir.): *Victimología: en busca de un enfoque integrador para repensar la intervención con víctimas,* Aranzadi, 2018, p. 43.

CE relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones[5].

De estas dos normas, es la primera la que nos interesa a los efectos de desarrollar el presente capítulo, pues es dicha disposición la que ahora se pretende derogar y sustituir por otra nueva propuesta legislativa presentada por la Comisión Europea, la cual al tiempo de cerrar las líneas de este trabajo aún se encuentra en fase de tramitación en las Instituciones comunitarias.

En cualquier caso, pese a poner en valor el avance que supuso la todavía vigente Directiva 2008/99/CE a la hora de definir la competencia de la Unión Europea para establecer unas reglas mínimas acerca de la definición de los delitos y sus penas en el ámbito de la delincuencia medioambiental, y de la necesidad de combatirlos con una base común[6], no pueden desconocerse las deficiencias detectadas para su efectiva aplicación en la práctica. Razón por la cual, aun reconociendo el hito que la misma supuso en el contexto del Derecho ambiental internacional al constituir el primer instrumento normativo de carácter vinculante que recurre al Derecho penal para luchar contra la degradación del medio ambiente[7], se sintió la necesidad de proceder a su revisión a través de la presentación una nueva propuesta legislativa. La cual es consecuencia de los resultados derivados de la evaluación que sobre la citada norma llevó a cabo la Comisión Europea, y cuyas conclusiones fueron publicadas en octubre de 2020[8].

De modo que a través de estas conclusiones, se constató que la Directiva 2008/99/CE no había sido efectiva en la práctica, pues durante la última década los casos de criminalidad medioambiental investigados y condenados eran muy reducidos, y la gravedad de las sanciones impuestas demasiado leves para llegar a ser disuasorias. Además de advertirse que la cooperación transfronteriza entre los diferentes Estados miembros tampoco se había llevado a cabo de forma sistemática.

Asimismo, en la citada evaluación se pusieron de manifiesto diferencias considerables en la aplicación de la norma por parte de los diferentes Estados miembros. Detectándose también deficiencias en sus recursos, conocimientos especializados, cooperación e instrumentos de información entre

5. DO L 280 de 27.10.2009, pp. 52-54.

6. Iglesias Skulj, A., «La protección del medio ambiente en la Unión Europea», en Faraldo Cabana, P., (Dir.), Puente Aba, L. M., (Coord.): *Ordenación del territorio, patrimonio y medio ambiente en el Código Penal y la legislación especial,* Tirant lo Blanch, 2011, p. 53.

7. Fuentes Loureiro, M. A., «El proceso de consolidación del Derecho penal ambiental de la Unión Europea», *Revista de Estudios Europeos,* Vol. 79, enero-junio 2022, p. 337.

8. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Evaluación de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal («Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal») SWD (2020) 259 final, de 28 de octubre de 2020.

ellos, llegándose a constatar que tampoco existían estrategias nacionales generales en sus respectivos territorios para combatir este tipo de criminalidad con un enfoque multidisciplinar. A lo que se sumaba, la falta de datos estadísticos fiables sobre los procesos relacionados con esta delincuencia medioambiental que permitiera comprobar la eficacia de las medidas contempladas en la Directiva 2008/99/CE.

Una situación que determinó que a partir de la ya mencionada evaluación, la Comisión decidiera revisar dicha normativa con la presentación a finales de 2021 de una nueva Propuesta de Directiva que podemos ubicar en el contexto de los trabajos para impulsar el Pacto Verde Europeo[9], que en resumen consiste en una hoja de ruta para lograr que la economía de la UE sea sostenible, transformando los retos en materia de clima y medio ambiente en oportunidades reales[10]. Y que además fue acompañada de una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la intensificación de la lucha contra la delincuencia medioambiental[11], en la cual se explica detalladamente la finalidad que guía la propuesta para conseguir subsanar o corregir todos aquellos problemas que fueron observados en la todavía vigente Directiva. De modo que mediante la nueva Propuesta legislativa, cuya base jurídica se encuentra en el art. 83.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)[12], se persigue alcanzar los siguientes objetivos:

- Mejorar la eficacia de las investigaciones y enjuiciamiento de los delitos medioambientales mediante la actualización del ámbito de aplicación de la Directiva, y la adecuación o eliminación de términos vagos que son utilizados en las definiciones relativas a la criminalidad medioambiental.
- Garantizar tipos y niveles de sanciones eficaces, disuasorias y proporcionadas para la delincuencia medioambiental, además de fomentar la investigación y el enjuiciamiento transfronterizos de este tipo de delincuencia.
- Mejorar el proceso de toma de decisiones bien fundamentadas en materia de delincuencia medioambiental mediante una mejora de la recogida y la difusión de datos estadísticos sobre la misma, y

9. COM (2019) 640 final. Bruselas, 11.12.2019.

10. García Lupiola, A., «El Pacto Verde Europeo y las propuestas para su desarrollo. ¿Mayor ambición de la UE para alcanzar el desarrollo sostenible?», *Revista de Estudios Europeos*, Vol. 79, enero-junio 2022, p. 81.

11. COM (2021) 814 final. Bruselas, 15.12.2021.

12. Conforme al art. 83.2 TFUE «Cuando la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en materia penal resulte imprescindible para garantizar la ejecución eficaz de una política de la Unión en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización, se podrá establecer mediante directivas normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en el ámbito de que se trate [...]».

– Mejorar la eficacia operativa de las cadenas nacionales de aplicación de la Ley para fortalecer las investigaciones, enjuiciamiento y sanción de esta delincuencia.

Objetivos que como veremos a continuación, se intentarán conseguir con la introducción en la proyectada norma de nuevas disposiciones que no se contemplaban en la Directiva de 2008, de las cuales nosotros comentaremos en las siguientes líneas aquellas que conforme a la orientación que guía nuestro trabajo consideramos que tienen un eminente valor victimológico para mejorar la respuesta del sistema penal a esta criminalidad.

III. NUEVOS TÉRMINOS DE VALOR VICTIMOLÓGICO QUE INCLUYE EL PROYECTO DE NUEVA DIRECTIVA

El primero de los aspectos que creemos oportuno destacar en la proyectada Directiva europea, es la inclusión en su texto de nuevas definiciones que aluden a una serie de términos que posteriormente son empleados en la norma, sobre los que la todavía vigente Directiva 2008/99/CE no se pronunciaba. Entre los cuales, además de una definición más depurada de lo que se entiende por «conducta ilícita» a efectos de definir los delitos medioambientales que abarca, queremos poner en valor la introducción en la futura disposición de una nueva definición de «víctima» a los efectos de poder determinar quienes puedan tener tal condición en este tipo de criminalidad y también poder reconocerles derechos ante el sistema de justicia penal. Sin perjuicio de que los diferentes Estados miembros, a la hora de aplicar la futura Directiva en sus respectivos ordenamientos jurídicos, también estén obligados a garantizar los derechos de los sospechosos o acusados en los procesos penales, y en particular los reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como el derecho a la protección de datos de carácter personal (art. 8), presunción de inocencia y defensa (art. 48), principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y penas (art. 49), o a no ser juzgado o condenado dos veces por la misma infracción (art. 50)[13].

A partir de lo cual, lo que hace la proyectada Directiva sobre protección penal del medioambiente en su art. 2.5, a la hora de concretar esa definición de «víctima», es remitirse al significado que a ese término le es atribuido en el art. 2.1.a) de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, apoyo y protección de las víctimas de delitos, y se sustituye la anterior Decisión Marco 2001/220/JAI[14]. Lo cual en principio merece ser

13. COM (2021) 851 final, *cit.*, p. 18.

14. *Vid.* García Rodríguez, M. J., *Código de los Derechos de las Víctimas,* (3.ª ed.), Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2019, pp. 229-260. Disponible en: http://www.

valorado como algo positivo desde los postulados de la denominada Victimología verde, pues dada la complejidad existente para visibilizar el impacto de los delitos medioambientales, este término puede ayudar a identificar mejor los diferentes daños que de ellos se derivan, y contribuir a superar una visión exclusivamente antropocéntrica de los mismos ligada sólo a los seres humanos[15], ofreciendo una visión más omnicomprensiva acorde a las nuevas formas de criminalidad que tipifica la nueva norma europea. Para conseguir salvar la hasta ahora habitual ausencia de las víctimas de daños medioambientales de los debates académicos y políticos[16], ya que tradicionalmente no han sido ampliamente reconocidas como víctimas de un delito, quedando excluidas de la visión de la Victimología, basada en las construcciones convencionales del delito[17].

Sin embargo, si partimos de la referida remisión a la Directiva 2012/29/UE, podemos comprobar cómo esta norma en su art. 2.1.a) la define como «la persona física que haya sufrido un daño o perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por una infracción penal», además de incluir a «los familiares de la persona cuya muerte haya sido directamente causada por un delito y que hayan sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de esa muerte». Y aunque este concepto de víctima es más amplio que el propuesto en otros textos comunitarios precedentes, abarcando no sólo a las víctimas directas sino también a las indirectas, debe considerarse más restrictivo que el propuesto en el marco del Derecho internacional. Ámbito en el que representa un estándar la definición ofrecida por la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder, aprobada por la Resolución 40/34 de la Asamblea General de Naciones Unidas, al incluir no sólo a los familiares o personas que tengan una relación inmediata con la víctima directa, sino también a las personas que hayan podido sufrir daños al intervenir para asistir a la víctima o para prevenir la victimización[18]. Lo que se ajustaría mejor a la ampliación de la tutela jurídica que pretende dispensar la futura norma comunitaria a estos otros colectivos también necesitados de protección.

juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/libros/derechoVictimas/ [Consulta: 15-09-23].

15. Hall, M., y Varona, G., «La victimología verde como espacio de encuentro...», *op. cit.,* p. 113.

16. Hall, M., «Enviromental harm and enviromental victims: Scoping out a "green victimology"», *International Review of Victimology,* Vol. 20 (I), 2014, p. 135.

17. Hamilton, M., «Victims of Enviromental Harm», in: *Enviromental Crime and Restorative Justice.* Palgrave Studies in Green Criminology. Palgrave Macmillan, 2021, p. 5.

18. García Rodríguez, M. J., «El nuevo estatuto de las víctimas del delito en el proceso penal según la Directiva Europea 2012/29/UE, de 25 de octubre, y su transposición al ordenamiento jurídico español», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología,* 18-24, 2016, p. 13. Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/18/recpc18-24.pdf [Consulta: 15-09-23].

Razón por la cual, y a los efectos de concretar la victimización derivada de los delitos medioambientales, dicha definición nos parece insuficiente. Pues dejaría fuera el concepto de victimización difusa o colectiva como afectación de bienes jurídicos supra individuales, que precisamente es una de las notas características de este tipo de criminalidad medioambiental, con independencia de que con ocasión de ella se puedan también producir simultáneamente, lesiones concretas a bienes jurídicos de carácter individual[19]. Y de otro lado, también excluye de su ámbito de aplicación a las personas jurídicas que hayan podido sufrir un perjuicio directamente causado por una acto u omisión de estas características que infrinja la legislación penal de un Estado miembro[20]. Una exclusión sobre la que ya tuvo ocasión de pronunciarse la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Asuntos C-467/05 —Dell´Orto[21] y C-205/09— Eredics y Sápi[22]), para justificarla con diversos argumentos durante la vigencia de la anterior Decisión Marco 2001/220/JAI ahora derogada. Pero que a nuestro juicio, y en el contexto de los diferentes daños que como sabemos puede llegar a provocar la victimización medioambiental, deberían ser reconsiderados en futuros pronunciamientos del TJUE. Habida cuenta de que existen determinados delitos que no sólo afectan a bienes jurídicos individuales, sino que se extienden a otros de naturaleza colectiva, afectando a personas jurídicas o incluso a la propia comunidad, como es el caso de los delitos contra el medio ambiente[23].

Pues es evidente que como señalan Hall y Varona, en el marco de la delincuencia medioambiental estamos ante unos daños que no resultan tan

19. Hall, M., y Varona, G., «La victimología verde como espacio de encuentro...», *op. cit.*, p. 113.

20. García Rodríguez, M. J., «El nuevo estatuto de las víctimas del delito en el proceso penal...», *op. cit.,* p. 13.

21. Según la STJUE de 28 de junio de 2007 (Sala Tercera), Dell´Orto, C-467/05 (ECLI:EU:C:2007:395), apartado 54: «Interpretar la Decisión marco en el sentido de que también contempla a las personas jurídicas que, al igual que la parte civil en el litigio principal, alegan haber sufrido un perjuicio directamente causado por una infracción penal sería contrario al propio tenor del artículo 1, letra a), de dicha Decisión marco».

22. En el mismo sentido se pronuncia la STJUE de 21 de octubre de 2010 (Sala Segunda), Eredics y Sápi, C-205/09 (ECLI:EU:C:2010:623), apartado 30: «Interpretarla Decisión marco en el sentido de que solamente se refiere a las personas físicas no es tampoco constitutivo de una discriminación contra las personas jurídicas. Efectivamente, el legislador de la Unión ha podido establecer de manera legítima un régimen protector a favor únicamente de las personas físicas porque estas últimas se hallan en una situación objetivamente diferente a la de las personas jurídicas debido a su mayor vulnerabilidad y a la naturaleza de los intereses que sólo pueden lesionarse en el caso de las personas físicas, como la vida y la integridad física de la víctima».

23. Pérez Hierro, N., «La protección jurídica de la víctima del delito en el marco de la delincuencia socio-económica en la Unión Europea», *Revista de Estudios Europeos,* Volumen 79, enero-junio 2022, pp. 248 y 249.

evidentes como los que se derivan de un asesinato o un robo, porque muchos de sus efectos se producirán a largo plazo. Mientras que en el corto o medio plazo, puede llegar incluso a percibirse que generan un impacto positivo para la sociedad, en forma de crecimiento industrial, de incremento en el empleo o la recaudación fiscal, entre otros supuestos beneficios, conllevando a que llegue a ser socialmente consentida[24]. Y es que estos delitos contra el medio ambiente revisten una gran complejidad respecto a la identificación de cuáles sean las víctimas, a partir del impacto tanto individual, social, económico y cultural que dichas infracciones conllevan[25]. Lo que justifica que dentro del marco de la llamada justicia medioambiental, se haya defendido que en la identificación y valoración de los daños medioambientales se haya de ir más allá de una visión antropocéntrica. Que sería aquella centrada en la creencia de que los seres humanos son superiores al resto de la naturaleza, considerándolos como legítimos dueños de aquella que pueden utilizarla para sus propósitos, frente otra visión ecocéntrica que considera que la naturaleza contiene un valor inherente, independientemente de si le es de utilidad o no al ser humano[26]. Y entender al hilo de lo dicho, que el daño medioambiental sobrepasa a los seres humanos, y que la victimización en este tipo de delincuencia es también experimentada por los animales u otras especies, así como por los propios ecosistemas[27].

Debiéndose realizar por tanto, un particular esfuerzo para determinar el alcance del daño en este tipo de victimización medioambiental, cuya visibilidad como señala Varona ofrece mayores dificultades por los siguientes motivos[28]: 1.º) No ser un daño individual, sino colectivo; 2.º) Su carácter transnacional, donde a pesar de la normativa internacional aún no existen instituciones fuertes e independientes para darle respuesta; 3.º) Sus efectos en múltiples seres vivos más allá del ser humano; 4.º) Dificultad de responsabilizar a Estados y empresas, en lo que se conoce como delitos de cuello blanco o delitos de los poderosos, además de presentar conexiones con el poder político y económico; 5.º) Potencial impacto en el futuro, incidiendo en las generaciones venideras; 6.º) Carácter complejo, incluyendo la normativa reguladora en los diferentes ordenamientos, que dificulta la prueba de la entidad del daño, de su causalidad y responsabilidad; 7.º) Estar ligado

24. Hall, M., y Varona, G., «La victimología verde como espacio de encuentro...», *op. cit.*, p. 113.

25. Pérez Hierro, N., «La protección jurídica de la víctima del delito...», *op. cit.*, p. 249.

26. Ochoa Figueroa, A., «Medioambiente como bien jurídico protegido ¿visión antropocéntrica o ecocéntrica?», *Revista de Derecho Penal y Criminología,* N.º 11, Enero 2014, p. 260.

27. White, R., «Green victimology and non-human victims», *International Review of Victimology,* Vol. 24 (2), 2018, p. 241.

28. Varona Martínez, G., *Victimidad y violencia medioambiental contra los animales: retos de la victimología verde,* Comares, 2020, p. 29 y ss.

a la idea de progreso y crecimiento, definido como bueno en sí mismo o prioritario por razones económicas; 8.º) Falta de estudios criminológicos en esta materia; y 9.º) Por su invisibilidad física en determinados casos aunque el daño sea letal.

De otro lado, y ligado al concepto de víctima ya tratado, la nueva propuesta de Directiva de protección del medioambiente mediante el Derecho penal, incorpora también como novedad en su texto la definición de «público interesado» (art. 2.4 de la Propuesta), para referirse a aquellas personas que hayan sido o pudieran verse afectadas por algunos de los delitos contemplados en su texto (arts. 3 o 4 de la Propuesta). Precisándose a continuación, que a tales efectos, se considerará que tendrán dicho interés «las personas que tengan un interés suficiente o que manifiesten el menoscabo de un derecho, así como las organizaciones no gubernamentales que promuevan la protección del medio ambiente y que cumplan cualquier requisito proporcionado con arreglo al derecho interno».

IV. PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR DELITOS MEDIOAMBIENTALES ANTE EL SISTEMA PENAL

A partir de las nuevas definiciones comentadas, otra de las novedades que presenta la propuesta de Directiva, es reconocer a todas las personas que aleguen un interés o menoscabo en sus derechos, así como a las organizaciones no gubernamentales implicadas en la protección medioambiental, unos amplios derechos de participación en los procesos penales (art. 14), con el fin de que puedan defender de forma efectiva sus intereses[29]. Constituyendo este reconocimiento de alcance procesal otro de los extremos que merece ser puesto en valor de la futura norma desde una perspectiva victimológica. Pues tal como reconoce de manera expresa en su texto, dado que la naturaleza no se puede representar a sí misma como víctima en un proceso penal, a efectos de la aplicación efectiva de la ley, esos miembros del público interesado deberán «tener la posibilidad de actuar en nombre del medio ambiente como bien público, dentro del ámbito de aplicación del marco jurídico de los Estados miembros y con sujeción a las normas procesales pertinentes»[30].

29. Según el art. 14: «Los Estados miembros velarán por que, de conformidad con su ordenamiento jurídico nacional, los miembros del público interesado tengan los derechos adecuados para participar en los procesos relativos a los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4, por ejemplo como parte civil».

30. *Vid.* Considerando 26 de la Propuesta de Directiva.

Lo que consideramos un avance evidente en relación a la Directiva 2008/99/CE, que no abordaba la regulación de estos derechos, y además está en consonancia con las disposiciones del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998, ratificado por España[31]. Que por un lado, en su art. 2.5 nos brinda una definición de público interesado que prácticamente reproduce la contenida en la proyectada Directiva europea, entendiendo como tal «el público que resulta o puede resultar afectado por las decisiones adoptadas en materia medioambiental o tiene interés que invocar en la toma de decisiones». Además de incluir también a las organizaciones no gubernamentales que trabajan a favor de la protección del medio ambiente, a las que considera que ostentan un interés justificado, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por el derecho interno.

Sin olvidarse tampoco, de determinar cuál sea el alcance de cada uno de estos derechos procesales, al establecer en su art. 9.3 que sin perjuicio de los procedimientos de recurso que son reconocidos a toda persona que estime que su solicitud de información no ha sido atendida, rechazada ilícitamente o no haya obtenido una respuesta suficiente, éstas pueden «entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las disposiciones del derecho medioambiental nacional». Los cuales entendemos perfectamente ejercitables en España, con arreglo a nuestro ordenamiento procesal vigente.

Por último, y para concluir este apartado, no queremos dejar de tratar una previsión de máximo interés que no solo puede ayudar a prevenir esta victimización medioambiental, sino contribuir también a que las víctimas puedan llegar a tomar conciencia de ella, y de esta forma promover su interés para participar en los procedimientos judiciales dirigidos a su investigación y enjuiciamiento. Lo que se pretende llevar a la práctica obligando a los Estados miembros a realizar campañas de información, sensibilización y educación dirigidas a la opinión pública, conforme a lo dispuesto en el art. 15 de la proyectada Directiva[32]. Debiéndose considerar también como un avance respecto a la regulación actual, en la medida que sobre este particular tampoco se pronuncia la aún vigente Directiva 2008/99/CE.

---

31. *Vid.* Instrumento de ratificación del Convenio por el Estado español de 29 de diciembre de 2004 (BOE núm. 40, de 16 de febrero de 2005). Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-2528 [Consulta: 15-09-23].

32. Según el art. 15: «Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas, como campañas de información y sensibilización y programas de investigación y educación, para reducir la delincuencia medioambiental en general, sensibilizar a la opinión pública y reducir el riesgo de que la población se convierta en víctima de un delito medioambiental. Los Estados miembros actuarán, cuando proceda, en colaboración con las partes interesadas pertinentes».

V. NUEVAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS PARA LAS PERSONAS DENUNCIANTES DE LOS DELITOS MEDIOAMBIENTALES TIPIFICADOS EN LA FUTURA DIRECTIVA

Asimismo, queremos destacar en el presente capítulo, otro elemento nuevo que el legislador comunitario introduce en el texto de la proyectada Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, que tiene un indudable valor victimológico y sobre el que la actual Directiva 2008/99/CE tampoco contiene referencia alguna entre sus disposiciones. Como es la inclusión de expresas medidas destinadas a la protección de las personas que denuncien estos delitos medioambientales o que colaboren en su investigación[33]. Y mediante las cuales, se persigue proteger a todas aquellas personas que como denunciantes, defensores del medio ambiente y otras personas interesadas puedan comunicar información o aporten pruebas a una investigación relacionada con este tipo de delitos[34]. Al entender que con esta previsión, ahora contemplada en el articulado de la nueva propuesta de Directiva (art. 13)[35], se colma una laguna que era necesario cubrir para apoyar y ayudar a todas aquellas personas que alertan sobre este tipo de delitos y cooperan con la aplicación de las normas en este ámbito[36]. Contribuyendo de esta forma a hacer más efectiva la persecución de este tipo de criminalidad, en el marco de las previsiones contempladas en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del

33. Vercher Noguera, A., «La evolución de los delitos contra el medio ambiente en el contexto europeo: la Directiva 2008/99/CE», *Diario La Ley*, N.º 10047, Abril 2022, p. 7.

34. Gudin, F., «Un análisis sobre el proyecto de nueva Directiva europea para delitos medioambientales», *Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental,* N.º 40, 2022, p. 6. Disponible en: https://huespedes.cica.es/gimadus/40/40-01-faustino.html [Consulta: 15-09-23].

35. Conforme al art. 13 de la proyectada Directiva:

«1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la protección otorgada en virtud de la Directiva (UE) 2019/1937 sea aplicable a las personas que denuncien los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas que denuncien los delitos a los que se refieren los artículos 3 y 4 de la presente Directiva y aporten pruebas o cooperen de otro modo en la investigación, el enjuiciamiento o la resolución de tales delitos reciban el apoyo y la asistencia necesarios en el contexto de los procesos penales».

36. Shiavon, A., «Contra la impunidad ambiental en Europa: un paso más hacia la revisión de la Directiva 2008/99/CE», *Legal Today,* 26 abril 2023, p. 3. Disponible en: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-internacional/internacional/contra-la-impunidad-ambiental-en-europa-un-paso-mas-hacia-la-revision-de-la-directiva-2008-99-ce-2023-05-18/ [Consulta: 15-09-23].

Derecho de la Unión[37]. La cual ha sido recientemente implementada en el ordenamiento jurídico español, mediante la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

De modo que a través de estas disposiciones de la propuesta de Directiva en proyecto, se toma conciencia de que los delitos medioambientales conllevan daños tanto para la naturaleza como para la sociedad. Ya que en línea con las orientaciones de la criminología verde y dentro del marco de la llamada justicia medioambiental, se subraya la necesaria implicación de las personas y de las comunidades en todas aquellas decisiones que puedan afectar al medioambiente[38]. Lo que lleva a la proyectada norma europea a considerar, que quienes denuncian infracciones del Derecho de la Unión en materia de medio ambiente prestan un servicio de interés público y desempeñan un papel clave en la detección y prevención de dichas infracciones, imprescindible para salvaguardar el bienestar de la sociedad. Siendo por ello necesario ofrecerles una efectiva tutela con el fin de promover su colaboración en la persecución de este tipo de hechos, y conseguir eliminar en ellos el temor a sufrir cualquier tipo de represalia a causa de facilitar información acerca de esta criminalidad[39].

No obstante, otras personas que también pueden poseer información valiosa sobre posibles delitos medioambientales, serán los miembros de la comunidad afectada o de la sociedad en general que participen activamente en la protección del medio ambiente. Razón por la cual, se considera que también ellos, al igual que los denunciantes deben recibir el apoyo y la asistencia necesarios en el contexto de los procesos penales, de modo que esa cooperación no les cause un perjuicio[40]. Una necesidad que también fue reconocida en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la intensificación de la lucha contra la delincuencia medioambiental, al poner en valor el trabajo de todas estas entidades que pueden actuar y colaborar activamente en su defensa. Pues tal como se expresa en la citada Comunicación «el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas, que denuncian delitos, recopilan pruebas sobre los mismos y destacan sus repercusiones, ayuda en gran medida a luchar contra los delitos contra las especies silvestres. Y de manera más general, la sociedad civil, incluidas

37. DO L 305 de 26.11.2019, pp. 17-56.

38. Hall, M., y Varona, G., «La victimología verde como espacio de encuentro...», *op. cit.*, p. 114.

39. Según el considerando 24 de la propuesta de Directiva: «Aquellos que denuncian irregularidades son conocidos como denunciantes. Sin embargo, los posibles denunciantes suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a sufrir represalias. Estas personas deben beneficiarse de la protección equilibrada y eficaz para denunciantes establecida en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo».

40. *Vid.* Considerando 25 de la propuesta de Directiva.

varias ONG, desempeña un papel fundamental a la hora de alertar a las autoridades sobre problemas como la eliminación ilegal de residuos»[41].

Sin olvidar tampoco la necesaria tutela que asimismo debe ser dispensada a las víctimas propiamente dichas de este tipo de delincuencia. Pues acorde con lo dicho en el primer apartado de este capítulo, la nueva propuesta de Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, les otorga una entidad propia entre las definiciones que incorpora en su art. 2.5 a diferencia del silencio que sobre este colectivo guarda la actual Directiva 2008/99/CE. Pues no debemos olvidar que la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, acerca de una Estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de las víctimas (2020-2025)[42], parte de la necesidad de reforzar el marco para el apoyo y protección de todas las víctimas a partir del progreso que significó entre otras la Directiva 2012/29/UE ya referida. Cuyo principal objetivo es dispensarles una tutela más efectiva en todo el espacio judicial europeo, para garantizar sus derechos de acceso a la información, participación, reparación e indemnización, protección y apoyo ante el sistema de justicia penal[43]. Y entre las que deben entenderse incluidas las de los delitos medioambientales, pues estas víctimas según hemos comprobado pueden estar particularmente expuestas a la victimización secundaria, la intimidación y las represalias, especialmente cuando se trata de actos llevados a cabo en el marco de la delincuencia organizada.

Razón por la cual, por la propia Comisión se reconoce que en atención a su situación de vulnerabilidad, también estas víctimas deben tener acceso a un apoyo y una protección especializados[44]. Que en lo referente a nuestro país, entendemos que habrán de implementarse en el amplio catálogo de derechos que ya se les reconoce al amparo de la Ley 4/2015, de 27 de abril, sobre el estatuto de la víctima del delito, y el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, que desarrolla sus disposiciones. Para ofrecerles en consonancia con dicha normativa europea, una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, que va más allá de la mera reparación de los daños y perjuicios sufridos, al intentar minimizar también cualquier efecto traumático que puedan llegar a padecer como consecuencia de su victimización[45].

---

41. COM (2021) 814 final, *cit.,* p. 8.

42. COM (2020) 258 final. Bruselas, 24.06.2020.

43. García Rodríguez, M. J., «El nuevo estatuto de las víctimas del delito en el proceso penal...», *op. cit.,* p. 14.

44. COM (2020) 258 final, *cit.,* p. 16.

45. García Rodríguez, M. J., «Los derechos reconocidos a las víctimas del delito en la Ley 4/2015, de 27 de abril», en Torres Fernández, C., Jerez Rivero, W., de la Serna Tuya, J. M., (Coords.): *Claves y retos de una justicia del siglo XXI: derechos, garantías y procedimientos,* Dykinson, 2022, p. 143.

Todo lo cual viene a justificar a nuestro juicio, el apoyo decidido que se les brinda en el nuevo proyecto de Directiva europea que estamos comentando, junto al ofrecido también a otros defensores del medio ambiente. Que podría fomentarse a juicio de la Comisión, mediante la utilización del Reglamento (UE) 2021/783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, por el que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) N.º 1293/2013[46], para aquellos proyectos que impliquen la participación de estos colectivos en la lucha contra la delincuencia medioambiental[47]. Además de animar a los diferentes Estados miembros a que procedan a implantar sistemas eficaces para la tramitación de reclamaciones, que permitan a la sociedad civil informar a las autoridades competentes sobre los delitos medioambientales de forma segura, habiéndose publicado desde la Comisión una guía con el fin de dar respuesta a estas recomendaciones[48].

Por tanto, y en línea con lo comentado, la UE deberá seguir promoviendo sus estándares en materia de derechos de las víctimas, incluidos los derechos para las víctimas de delitos contra el medio ambiente[49], por medio de nuevos programas que se habrán de desarrollar con arreglo al marco financiero plurianual (2021-2027)[50]. Sin perjuicio de que la UE en el contexto de las negociaciones de los procesos de adhesión en curso, deba seguir colaborando con los países candidatos o candidatos potenciales para reforzar estos derechos de las víctimas. Para lo cual también consideramos imprescindible la formación de jueces, fiscales, miembros y cuerpos de seguridad, personal judicial y otras autoridades que hayan de hacerlos efectivos en el curso de los procesos penales sustanciados por esta criminalidad. Y que a diferencia de la Directiva 2008/99/CE, ahora afortunadamente se exige que sea llevada a cabo por parte de todos los Estados miembros en sus respectivos territorios, de conformidad al art. 17 de la propuesta de la futura norma. Pensando que para el desarrollo de esta labor formativa en nuestro país, podría contarse con la experiencia de la impartida por el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) del Ministerio para la Transición

46. DO L 172 de 17.05.2021, pp. 53-78.

47. COM (2021) 814 final, *cit.,* p. 8.

48. Comisión Europea, Dirección General de Medio Ambiente, *Garantía de cumplimiento medioambiental vademécum – Tramitación de reclamaciones y participación de los ciudadanos*, Oficina de Publicaciones, 2020. Disponible en: https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/1fc175c2-8051-11ea-b94a-01aa75ed71a1/language-es [Consulta: 15-09-23].

49. COM (2021) 814 final, *cit.,* p. 8.

50. En el marco financiero plurianual (MFP) con un importe de 1074,3 millones de euros, la financiación de la UE se prevé que sea destinada a prioridades nuevas y reforzadas en todos los ámbitos de actuación de la UE, incluida la transición ecológica. Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/ [Consulta: 15-09-23].

Ecológica y el Reto Demográfico, a partir de las necesidades de cada uno de esos colectivos[51].

VI. LA JUSTICIA RESTAURATIVA COMO RESPUESTA ALTERNATIVA A LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL ANTE LA CRIMINALIDAD MEDIOAMBIENTAL

Otro tema que entendemos reviste también especial interés en el desarrollo del presente capítulo, es el evaluar la adecuación que pueda tener la llamada justicia restaurativa o reparadora para ser aplicada como respuesta alternativa a la aplicación del Derecho penal ante los delitos medioambientales. Y asimismo examinar los resultados que la misma pudiera ofrecer a la hora de reparar los daños producidos por este tipo de criminalidad, que como hemos sostenido en este trabajo constituye uno de los pilares sobre los que se sustenta la Victimología verde. Cuestiones sobre las cuales la proyectada Directiva, incluye también algunas novedades frente a la todavía vigente Directiva de 2008, que serán abordadas en las siguientes líneas.

VI.1. La reparación del daño medioambiental ¿Qué puede ofrecer la justicia restaurativa?

La justicia restaurativa es concebida como un nuevo paradigma de justicia, que siguiendo el patrón de la Unión Europea con arreglo a la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, ya referida, es definida como «cualquier proceso que permita a la víctima y al infractor participar activamente, si dan su consentimiento libremente para ello, en la solución de los problemas resultantes de la infracción penal con la ayuda de un tercero imparcial» (art. 2.1.d) Directiva). En términos muy similares a como también lo hace en el plano internacional el art. 2 de la Resolución 2002/12, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, sobre principios básicos para la aplicación de programas de justicia restaurativa en materia penal[52], entendiéndola como «todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con ayuda de un facilitador». Y que por tanto consideramos perfectamente aplicables al contexto de la delincuencia medioambiental.

---

51. Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). *Formación Ambiental*. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental.html [Consulta: 15-09-23].

52. *Vid.* García Rodríguez, M. J., *Código de los Derechos de las Víctimas..., op.cit*., pp. 87-92.

Y aunque debamos reconocer que estos procedimientos, entre los que no sólo se incluye la mediación penal, puedan ser de gran ayuda para satisfacer los intereses de las víctimas, también requieren la adopción de ciertas garantías para protegerlas contra cualquier tipo de victimización secundaria o reiterada, intimidación o represalias que pudieran sufrir con ocasión de su participación en ellos[53]. Lo cual en el concreto ámbito de la criminalidad medioambiental, habría de pasar en primer lugar, por darle voz a las víctimas y afectados por este tipo de delitos, pese al carácter colectivo o difuso que éstas puedan tener, además de ofrecer a los causantes de esos daños, ya se trate de personas físicas o jurídicas, la posibilidad de tomar conciencia de los mismos para que ello se traduzca en una efectiva asunción de compromisos u obligaciones que puedan ir más allá de una mera compensación económica a las primeras[54].

Al entender que la introducción de esta nueva perspectiva destinada a la reparación de los daños medioambientales causados, puede tener una gran potencialidad para prevenir la reincidencia futura en la comisión de estos delitos, sin perjuicio de valorar también su idoneidad para conseguir dar una respuesta más satisfactoria a las necesidades de sus víctimas, sean de carácter humano o no. Y considerar que la respuesta a los daños medioambientales no debe pasar únicamente por la aplicación de la pena privativa de libertad en el marco del Derecho penal, sino que debe subrayarse la posibilidad de aplicar nuevas estrategias como la justicia restaurativa o reparadora como respuesta a la victimización medioambiental frente a una justicia penal cada vez más represiva.

Pues es evidente que no siempre las agresiones contra el medio ambiente requerirán el aplicar la pena de prisión, que entendemos debería quedar reservada para los atentados más graves. Y por ello, pese a la existencia actual de movimientos que luchan por una mayor criminalización en este ámbito, también queremos hacernos eco de posiciones que también abogan por la utilización de este tipo de programas de justicia restaurativa y de otras alternativas a la imposición de la pena de prisión. Ya que como expone Varona, la prisión particularmente en este tipo de delitos, es percibida como discriminatoria y tiende a crear desconexión y falta de responsabilización en los infractores, mientras que la justicia restaurativa permitiría esa asunción de responsabilidad por parte de los autores y la comunidad, dar una mayor visibilidad a las víctimas, y reducir la victimización terciaria, además de los costes económicos y humanos provocados por el uso de la prisión[55].

53. García Rodríguez, M. J., «El nuevo estatuto de las víctimas del delito en el proceso penal...», *op. cit.*, p. 17.

54. Varona Martínez, G., *Victimidad y violencia medioambiental...*, *op. cit*., p. 74.

55. Varona, G., «Victimización en delitos contra los ecosistemas y los animales: Percepción del daño y su reparación por parte de las personas internas en prisiones españolas», *Revista de Victimología,* N.º 15, 2023, p. 87.

De modo que en relación a la posibilidad de acudir a la justicia restaurativa en este campo, no debemos olvidar la previsión contemplada en la aún vigente Directiva 2008/99/CE en sus arts. 5 y 7 sobre la necesidad de aplicar «sanciones penales eficaces, proporcionadas y efectivas», tanto para las personas físicas o jurídicas responsables de tales conductas. Que deja un amplio margen de actuación a cada uno de los Estados miembros, en cuanto a las penas privativas de libertad, multas u otro tipo de sanciones o medidas que pueden imponer en sus respectivos ordenamientos internos, y contrasta con la exhaustividad empleada en la definición de las acciones contra el medio ambiente susceptibles de ser consideradas ilícito penal[56]. Impidiendo por tanto dicha discrecionalidad el establecimiento de un régimen punitivo que haga posible uniformar el sistema de penas entre todos los países miembros[57].

Y aunque estas disposiciones se ha mantenido también en la redacción de la nueva propuesta de Directiva en sus artículos 5 y 7, se han introducido en su articulado algunas importantes novedades que van más allá de exigir unos mínimos en la pena de prisión a imponer para los delitos medioambientales más graves, y que no se encontraban en la norma anterior de 2008. Además de contemplar también en clave claramente restaurativa, la obligación de los Estados miembros del deber de adoptar aquellas medidas necesarias para garantizar que las personas físicas o jurídicas —arts. 5.5.a) y 7.1.a) de la nueva Propuesta de Directiva— que hayan cometido delitos contra el medio ambiente, puedan ser objeto de sanciones o medidas adicionales, entre las cuales se incluye la «la obligación de restablecer el medio ambiente en un plazo determinado».

Una previsión cuya finalidad precisamente responde a la necesidad de restaurar el equilibrio ecológico perturbado, y respecto a la cual debemos destacar como aspecto novedoso la imposición de un plazo concreto para que pueda desarrollarse esa acción reparadora. Suscitándose la duda sobre cuáles hayan de ser las consecuencias que pudieran derivarse de que dicha previsión no se lleve a cabo en el tiempo establecido y sobre cuáles sean las posibilidades de reacción ante dicho incumplimiento[58].

Razón por la cual, valoramos muy positivamente que la nueva propuesta de Directiva aliente a los Estados miembros a introducir distintos niveles y tipos de sanciones específicas para los delitos medioambientales que se encarga de describir en su articulado (arts. 3 y 4). En la medida que esta nueva previ-

56. Sánchez Pérez, L., «El incremento de la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal», *Revista Penal,* N.° 44, Julio 2019, p. 182, y en el mismo sentido Fuentes Loureiro, M. A., «El proceso de consolidación del Derecho penal ambiental...», *op. cit.*, p. 339.

57. Borrillo, D., «Delitos ecológicos y derecho represivo del medio ambiente: reflexiones sobre el derecho penal ambiental en la Unión Europea», *Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD),* 3 (I) janeiro-junho 2011, p. 13.

58. Gudín Rodríguez-Magariños, A. E., «El nuevo proyecto de Directiva sobre delitos medioambientales», *Revista General de Derecho Penal,* N.° 39, 2023, p. 14.

sión permitirá ofrecer no sólo una respuesta más adaptada a la gravedad de las diferentes conductas descritas en la norma comunitaria, sino también y por qué no, abrir un nuevo camino para otro tipo de respuestas alternativas que no habrán de venir necesariamente por un mayor empleo de la pena de prisión. Ante la dispar aplicación que a partir de las disposiciones aun vigentes de la Directiva 2008/99/CE, esta pena ha tenido hasta ahora entre los distintos Estados miembros de la UE para dar respuesta a estos delitos[59].

Posición en las que entrarían no sólo las obligaciones reparadoras ya vistas en el párrafo anterior —arts. 5.5.a) y 7.1.a) de la nueva Propuesta de Directiva—, sino muy significativamente la atenuación de las sanciones previstas para los infractores en este tipo de delitos cuando hayan llevado a cabo una acción restaurativa, contemplada en el art. 9 de la futura norma, que tampoco se encuentra prevista en la redacción actual de la Directiva 2008/99/CE[60]. Y mediante la cual se viene a exigir a los distintos Estados miembros que en relación con estos delitos contra el medioambiente, puedan contemplar como circunstancia atenuante en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales el hecho de «que el infractor restablezca la naturaleza a su condición anterior».

Sin debernos olvidar, que en paralelo a la circunstancia atenuante comentada, la proyectada Directiva también contiene un conjunto de circunstancias agravantes (art. 8), que asimismo habrán de tenerse en cuenta a la hora de aplicar las sanciones respecto a cada uno de los delitos medioambientales que en la misma se prevén[61], y valoramos muy positivamente en la medida que sobre ellas tampoco se pronunciaba el texto de la Directiva de 2008. Destacándose dentro de ese listado la prevista en la letra h) del citado precepto, al contemplar como agravante «que la conducta del infractor de lugar a responsabilidad por daños medioambientales, pero el infractor no cumpla con sus obligaciones de adoptar acciones reparadoras», con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2004/735/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales[62]. La cual ha sido modificada en cuatro ocasiones, la última de las cuales a través del Reglamento (UE) 2019/1010, de 5 de junio, relativo a la adaptación de las obligaciones de información en el ámbito de la legislación relativa al medioambiente[63], que la actualizó e impuso a la Comisión Europea la obligación de desarrollar unas Directrices para proporcionar un concepto común del término «daño ambiental», que

59. Montero Ruiz, M. T., «Breves reflexiones sobre la determinación legal de la pena de prisión y su utilidad para los delitos ecológicos», *La Ley Penal,* N.º 158, Septiembre 2022, p. 4.

60. Vercher Noguera, A., «La evolución de los delitos contra el medio ambiente en el contexto europeo...», *op. cit.*, p. 7.

61. Gudín Rodríguez-Magariños, A. E., «El nuevo proyecto de Directiva...», *op. cit.,* p. 17.

62. DO L 143, de 30.4.2004, pp. 56-75.

63. DO L 170, de 25.06.2019, pp. 115-127.

fueron aprobadas el 7 de abril de 2021 (2021/C 118/01)[64], con el fin de corregir las diferencias en la aplicación de la norma en los distintos Estados miembros, y elevar la protección otorgada al medio ambiente en la Unión.

De manera que para determinar el alcance de esa responsabilidad medioambiental habremos de acudir a dicha disposición, y en particular a las previsiones de su art. 6, el cual determina que cuando se hayan producido daños medioambientales, el operador deberá informar sin demora a la autoridad competente de todos los aspectos pertinentes sobre la situación creada y adoptará «todas las medidas posibles para, de forma inmediata, controlar, contener, eliminar o hacer frente de otra manera a los contaminantes de que se trate y a cualquiera otros factores perjudiciales, con objeto de limitar o impedir mayores daños medioambientales y efectos adversos para la salud humana o mayores daños en los servicios»[65].

VI.2. Posibilidades ofrecidas por el Código Penal español para aplicar la justicia restaurativa ante la criminalidad medioambiental

En línea con lo manifestado en el apartado anterior, sería conveniente que a continuación y como complemento a las previsiones restaurativas que incorpora la proyectada norma europea, nos ocupáramos de exponer las posibilidades que puede ofrecer nuestro Código Penal para la aplicación de este tipo de programas en el concreto ámbito de la delincuencia medioambiental. A propósito de lo cual, queremos destacar en primer lugar la inclusión dentro de su Título XVI, sobre «los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente», de unas disposiciones comunes (Capítulo V) donde se contienen las bases para el desarrollo de este tipo de soluciones reparadoras. Pues con arreglo al art. 339 CP se prevé que jueces y tribunales ordenen a cargo del autor de estos hechos «la adopción de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado», y a través de la aplicación del art. 340 CP que puedan imponer al culpable la pena inferior en grado a las respectivamente previstas cuando «hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado». Conductas ambas que en el plano sustantivo se consideran que han de tener una particular relevancia en orden a la determinación de la pena, por ir dirigidas precisamente a reparar o reducir los efectos nocivos en

64. DO C 118, de 07.04.2021, pp. 1-49.

65. Según el art. 2.6 de la Directiva 2004/35/CE se entenderá por operador «cualquier persona física o jurídica, privada o pública, que desempeñe o controle una actividad profesional o, cuando así lo disponga la legislación nacional, que ostente, por delegación, un poder económico determinante sobre el funcionamiento técnico de esa actividad, incluido el titular de un permiso o autorización para la misma, o la persona que registre o notifique tal actividad».

este tipo de delitos[66]. Por lo que deben ser tenidas en cuenta en los programas restaurativos a los que nos estamos refiriendo, de cara a su contenido y su impacto a la hora de concretar la imposición de la pena[67].

De manera que por lo que se refiere a la primera de estas previsiones (art. 339 CP), se puede afirmar que no estamos ante una sanción, al no estar prevista entre el catálogo de penas, sino ante una institución directamente encaminada a la reparación, en la línea del principio, tan reclamado para el Derecho penal medioambiental, de «quien contamina paga»[68]. Que merece una crítica positiva, en la medida que dota al ordenamiento punitivo de un carácter preventivo y reparador especialmente interesante en un ámbito como el medioambiental en el que resulta conveniente, sin lugar a dudas, que el menoscabo causado no vaya en aumento, so pena de ser irreparable[69]. Y que como hemos comprobado, ha sido acogido también ahora de forma expresa entre las disposiciones de la futura Directiva europea, al considerar la atenuación de las sanciones que puedan imponerse a los infractores en este tipo de delitos, cuando lleven a cabo acciones dirigidas al restablecimiento del medio ambiente.

No obstante, el problema que se presenta en este tipo de atentados contra el medio ambiente, como expone Gudín Rodríguez-Magariños, surge precisamente por la dificultad de concretar el daño producido en atención a la existencia de una pluralidad de intereses difusos que son muy difíciles de individualizar[70]. Razón por la cual para estas situaciones en las que no sea posible concretar el daño, Jordano Barea contempla tres clases de reparación[71]: primaria o destinada a que los recursos naturales retornen a su estado básico; complementaria para compensar aquello en lo que puedan restituirse los recursos naturales; y compensatoria, para restañar las pérdidas de los recursos naturales hasta que la reparación primaria surta sus efectos.

Pese a lo cual, como manifiesta Gutiérrez Azanza, no es necesario en este tipo de casos fijar el daño causado en una persona individualmente considerada, ni es necesario que exista otro delito de diferente naturaleza

66. De la Cuesta, J. L., Germán, I., *La justicia restaurativa en España*, Iustel, 2022, p. 71.

67. Varona Martínez, G., *Victimidad y violencia medioambiental..., op. cit*., p. 76.

68. Muñoz Conde, F., López Peregrín, C., García Álvarez, P., *Manual de Derecho penal medioambiental*, Tirant lo Blanch, 2015, p. 332.

69. Mendo Estrella, A., «Disposiciones comunes de los artículos 338 a 340 del Código Penal y su aplicación a los delitos contra el medio ambiente: aportaciones a la luz de la doctrina y la jurisprudencia», *La Ley Penal,* N.º 122, Septiembre 2016, pp. 3 y 4.

70. Gudín Rodríguez-Magariños, A. E., «El nuevo proyecto de Directiva...», *op. cit.,* p. 22.

71. Jordano Barea, J., «Responsabilidad por daños al medio ambiente», en Esteve Pardo, J., (Coord.): *Derecho del Medio Ambiente y Administración Local,* Fundación Democracia y Gobierno Local, 2006, p. 454.

en concurso (del tipo que sea) para que se consideren afectados bienes jurídicos de naturaleza individual y, en consecuencia, estos daños se reparen o indemnicen. Y desde luego, cuando resulten afectados estos bienes jurídicos individuales, procederá la restitución o reparación y, en su defecto, la indemnización, que alcanzará el daño emergente, el lucro cesante y los perjuicios morales[72].

En cuanto a la segunda de las previsiones apuntadas (art. 340 CP), la misma recoge un tipo privilegiado según el cual habrá de aplicarse la pena inferior en grado a la prevista para el delito cometido cuando el culpable haya procedido voluntariamente a reparar el daño causado. De forma que como se ha afirmado, esta causa de atenuación se enmarca en el contexto de la irrupción de una serie de cláusulas legales a través de las cuales se viene a conceder creciente relevancia a comportamientos positivos y en concreto a los de reparación del daño causado[73]. Advirtiéndose con razón, que el citado artículo plasma un especial efecto atenuante, que de no existir habría de dar lugar a la aplicación de la atenuante genérica del art. 21.5 CP, con la que el tipo privilegiado del art. 340 CP guarda relación de concurso de leyes, que, debiendo solventarse por el principio de especialidad, ha de determinar su aplicación preferente[74].

Y en lo que respecta a la concreción del ámbito de aplicación de esta atenuante cualificada, como señala Mendo Estrella: en lo referente a su ámbito de aplicación temporal, la reparación sólo debe tener efectos atenuantes si tiene lugar antes de la celebración del juicio oral, por razones de política criminal y por respeto a principios irrenunciables, como el de tutela judicial efectiva y de contradicción procesal; en cuanto a su ámbito de aplicación material, ha de bastar con una actuación seria dirigida a disminuir los efectos del delito, es decir una acción reparadora positiva y acreditada por actos externos del acusado, sin perjuicio de que se alcance efectivamente o no la reparación; y en relación a su ámbito subjetivo, únicamente se requiere que esa reparación sea voluntaria, entendiendo por tal toda aquella que haya tenido lugar antes de la ejecución forzosa de la responsabilidad civil declarada en un proceso penal y que, necesariamente, se lleve a cabo antes del momento del juicio oral[75].

---

72. Gutiérrez Azanza, D. A., «La responsabilidad civil en el delito ecológico», *La Ley Penal,* N.º 151, Julio 2021, p. 9.

73. Tamarit Sumalla, J. M., «La reparación como instrumento de protección penal del ambiente», en Quintero Olivares, G., Prats Canut, J. M., (Coords.): *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut,* Tirant lo Blanch, 2008, p. 747.

74. Muñoz Conde, F., López Peregrín, C., García Álvarez, P., *Manual de Derecho penal medioambiental..., op. cit*., pp. 333 y 334.

75. Mendo Estrella, A., «Disposiciones comunes de los artículos 338 a 340 del Código Penal...», *op. cit*, pp. 5 y 6.

Asimismo y sin ánimo de exhaustividad, también en el Código Penal se contemplan otras posibilidades para introducir estas alternativas de carácter restaurativo entre las disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal del Libro I, y que por tanto deben entenderse también aplicables a esta criminalidad medioambiental. Entre las cuales habría que referirse en primer lugar a la atenuante genérica de reparación del daño del art. 21.5 CP, si bien este precepto conforme a lo dicho en el párrafo anterior no se aplicaría en virtud de la preferencia del art. 340 CP.

Debiéndonos asimismo hacer eco de las posibilidades restaurativas que ofrece la aplicación de la suspensión de la pena privativa de libertad (art. 80 y 83.1.6.ª, 84.1.1.ª CP). Donde el primero de ellos, se refiere expresamente al «esfuerzo por reparar el daño causado» como uno de los elementos a valorar judicialmente a la hora de decidir sobre dicha suspensión[76]. Contemplándose además en el art. 83.1.6.ª CP, la posibilidad reconocida a jueces y tribunales para condicionar dicha suspensión al cumplimiento de determinadas prohibiciones y deberes cuando ello resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos, entre los que incluye expresamente el participar en programas formativos «de defensa del medio ambiente o de protección de los animales». Lo que se completa con la previsión del art. 84.1.1.ª CP, al prever que esa suspensión de la pena impuesta pueda ser condicionada por los jueces y tribunales al cumplimiento «del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación».

Sin perjuicio de poder incluir en esta concreta parcela de la reparación de los daños medioambientales, las posibilidades que también puede ofrecer la actual regulación de los trabajos en beneficio de la comunidad (art. 49 CP)[77]. Los cuales con arreglo a dicho precepto podrán consistir «en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas», que no habrán de ser necesariamente las del delito, aunque nada impide que lo puedan ser[78]. Si bien con relación a estos delitos contra el medio ambiente, y pese a la vinculación establecida en el art. 49 CP entre la pena de trabajos y la idea de reparación social, resulta llamativo como señala Tamarit Sumalla la escasa convicción con la que nuestro legislador se sigue enfrentando a la necesidad de fortalecer las penas no privativas de libertad y con contenidos socialmente positivos[79].

Finalmente y para concluir este apartado, nos parece muy destacable, en línea con la necesaria y efectiva reparación de los daños medioambientales

76. de la Cuesta, J. L., Germán, I., *La justicia restaurativa en España..., op. cit*., p. 74.

77. Varona Martínez, G., *Victimidad y violencia medioambiental..., op. cit*., p. 76.

78. De la Cuesta, J. L., Germán, I., *La justicia restaurativa en España..., op. cit*., p. 73.

79. Tamarit Sumalla, J. M., «La reparación como instrumento de protección penal...», *op. cit.,* p. 749.

que venimos sosteniendo en este trabajo, y en sintonía con los postulados defendidos por la criminología verde, la novedosa previsión que incluye la proyectada Directiva Europea (art. 10) sobre la posibilidad de los Estados miembros de establecer medidas para que sus autoridades competentes puedan congelar y confiscar los ingresos derivados de esta criminalidad medioambiental. Pues no cabe duda que la adopción de este tipo de medidas, puede representar una vía muy eficaz para detener las consecuencias a menudo catastróficas que suelen acompañar a este tipo de atentados y reparar los daños que de ellos se derivan[80]. De modo que la regulación que se establece para el embargo y decomiso en la proyectada Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal viene a reforzar la perspectiva comunitaria ya existente en la materia[81], desarrollada en la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea[82].

Ya que con arreglo a su art. 3, esa posibilidad no únicamente podría aplicarse a las infracciones penales contempladas en dicho precepto, sino a cualquier otro acto jurídico, cuando en dicho acto se establezca expresamente que la Directiva 2014/42/UE se aplique a las infracciones penales que se armonicen en él. Como así se prevé en el art. 10 de la nueva propuesta de Directiva europea para los delitos medioambientales, en la que consideramos un acierto que haya sido incluida esta posibilidad de embargo y decomiso para cubrir la laguna antes existente sobre este particular en la Directiva 2008/99/CE[83], La cual en su momento, deberá ser implementada en nuestro ordenamiento para de este modo conseguir una mejor respuesta reparadora a los daños que lleva aparejada este tipo de criminalidad.

VII. REFLEXIONES FINALES

Tras analizar desde una perspectiva victimológica la nueva propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, con la que se pretende sustituir

80. Gudin, F., «Un análisis sobre el proyecto de nueva Directiva europea...», *op. cit.*, p. 6.

81. Vercher Noguera, A., «La evolución de los delitos contra el medio ambiente en el contexto europeo...», *op. cit.*, p. 7.

82. DO L 127 de 29.04.2014, pp. 39-50.

83. Según el art. 10 de la Propuesta de Directiva: «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar, según proceda, que sus autoridades competentes puedan embargar o decomisar, de conformidad con la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, los productos derivados y los instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión o contribución a la comisión de los delitos a que se refiere la presente Directiva».

a la todavía vigente Directiva 2008/99/CE, nos merece en general un juicio positivo. Pudiendo afirmar que este nuevo proyecto legislativo puede representar un paso adelante a la hora de hacer realidad los objetivos de la denominada Victimología verde, como nueva rama que en el seno de disciplina victimológica general se ocupa de estudiar la victimización causada contra el medio ambiente, así como de valorar y dar una mejor respuesta a los múltiples daños que de ella se derivan. En la medida que como se ha podido comprobar a lo largo del capítulo, la futura propuesta incorpora con esta finalidad nuevas disposiciones en su texto con un indudable valor victimológico, que eran desconocidas en la Directiva de 2008.

Destacándose en primer lugar los nuevos términos empleados en la propuesta, entre los que hemos puesto en valor la inclusión de una definición de «víctima», a los efectos de poder determinar quiénes pueden tener tal condición ante este tipo de criminalidad y reconocerle derechos ante el sistema penal. Pues ante la complejidad existente para visibilizar el impacto de los delitos medioambientales, este término consideramos que sin duda alguna puede ayudar a identificar mejor los diferentes daños que de ellos se derivan, y contribuir a superar la visión antropocéntrica que sobre ellos hasta ahora ha primado.

Y estrechamente ligada a la de víctima, hemos visto como la nueva propuesta legislativa incorpora también en su texto la nueva definición de «público interesado», para referirse a todas aquellas personas que hayan sido o pudieran verse afectadas por alguno de los delitos tipificados en la futura Directiva (arts. 3 y 4). Lo que a nuestro juicio reviste también un especial interés, en la medida que a todas ellas se les reconoce unos amplios derechos de participación en los procesos penales (art. 14), con el fin de que puedan defender de forma más efectiva sus intereses.

Asimismo, tras examinar las nuevas medidas de protección previstas en la futura norma para las personas denunciantes de los delitos medioambientales o que colaboren en su investigación, podemos concluir que las mismas tienen también un indudable valor victimológico. Pues con ellas se persigue mejorar la tutela a todas aquellas personas que como denunciantes, defensores del medio ambiente y otras personas interesadas, pudieran conocer información o aportar prueba a una investigación relacionada con esta delincuencia. Razón por la cual nos han merecido un juicio positivo, al considerar que con ellas se colma una laguna que era necesario cubrir para promover la persecución de este tipo de criminalidad conforme a las previsiones de la comentada Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Finalmente, pero no por ello menos importante, tras evaluar la adecuación de la llamada justicia restaurativa o reparadora como respuesta alternativa a la aplicación del Derecho penal ante la los delitos medioambientales, y estudiar los resultados que puede ofrecer a la hora de reparar los daños que de ellos se derivan, hemos de reconocer que la proyectada norma europea

representa también un avance con respecto a la regulación actual. Considerándose que nuestro actual Código Penal contempla numerosas opciones para la aplicación de este tipo de programas. Las cuales en el plano sustantivo estimamos que pueden tener una particular relevancia en orden a la determinación de la pena, por ir dirigidos a reparar o reducir los efectos de la delincuencia medioambiental. Y permitir asimismo diversificar la respuesta penal ante la misma, que entendemos no debe dirigirse necesariamente a la imposición de la pena de prisión.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Borrillo, D., «Delitos ecológicos y derecho represivo del medio ambiente: reflexiones sobre el derecho penal ambiental en la Unión Europea», *Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD),* 3 (I) janeiro-junho 2011: 1-14.

Centro Nacional De Educación Ambiental (Ceneam). *Formación Ambiental*. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental.html [Consulta: 15-09-23].

de lLa Cuesta, J. L., **Germán, I.**, *La justicia restaurativa en España,* Iustel, 2022.

Fuentes Loureiro, M. A., «El proceso de consolidación del Derecho penal ambiental de la Unión Europea», *Revista de Estudios Europeos*, Vol. 79, enero-junio 2022: 324-343.

García Lupiola, A., «El Pacto Verde Europeo y las propuestas para su desarrollo. ¿Mayor ambición de la UE para alcanzar el desarrollo sostenible?», *Revista de Estudios Europeos*, Vol. 79, enero-junio 2022: 80-114.

García Rodríguez, M. J., *Código de los Derechos de las Víctimas,* (3.ª ed.), Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2019. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/libros/derechoVictimas/ [Consulta: 15-09-23].

García Rodríguez, M. J., «Los derechos reconocidos a las víctimas del delito en la Ley 4/2015, de 27 de abril», en Torres Fernández, C., Jerez Rivero, W., De La Serna Tuya, J. M., (Coords.): *Claves y retos de una justicia del siglo XXI: derechos, garantías y procedimientos,* Dykinson, 2022: 143-161.

García Rodríguez, M. J., «El nuevo estatuto de las víctimas del delito en el proceso penal según la Directiva Europea 2012/29/UE, de 25 de octubre, y su transposición al ordenamiento jurídico español», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología,* 18-24, 2016: 1-84. Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/18/recpc18-24.pdf [Consulta: 15-09-23].

Gudin, F., «Un análisis sobre el proyecto de nueva Directiva europea para delitos medioambientales», Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental, N.º 40, 2022: 1-9. Disponible en: https://huespedes.cica.es/gimadus/40/40-01-faustino.html [Consulta: 15-09-23].

Gudín Rodríguez-Magariños, A. E., «El nuevo proyecto de Directiva sobre delitos medioambientales», *Revista General de Derecho Penal,* N.º 39, 2023: 1-27.

Gutiérrez Azanza, D. A., «La responsabilidad civil en el delito ecológico», *La Ley Penal,* N.º 151, Julio 2021: 1- 13.

Hall, M., «Enviromental harm and enviromental victims: Scoping out a "green victimology"», *International Review of Victimology,* Vol. 20 (I), 2014: 129-143.

Hall, M., y **Varona, G.**, «La victimología verde como espacio de encuentro para repensar la otredad más allá de la posesión», *Revista de Victimología,* N.º 7, 2018: 107-128.

Hamilton, M., «Victims of Enviromental Harm», in: *Enviromental Crime and Restorative Justice.* Palgrave Studies in Green Criminology. Palgrave Macmillan, 2021: 1-19.

Iglesias Skulj, A., «La protección del medio ambiente en la Unión Europea», en Faraldo Cabana, P., (Dir.), Puente Aba, L. M., (Coord.): *Ordenación del territorio, patrimonio y medio ambiente en el Código Penal y la legislación especial,* Tirant lo Blanch, 2011: 35-53.

Mendo Estrella, A., «Disposiciones comunes de los artículos 338 a 340 del Código Penal y su aplicación a los delitos contra el medio ambiente: aportaciones a la luz de la doctrina y la jurisprudencia», *La Ley Penal,* N.º 122, Septiembre 2016: 1-11.

Jordano Barea, J., «Responsabilidad por daños al medio ambiente», en **Esteve Pardo, J.**, (Coord.): *Derecho del Medio Ambiente y Administración Local,* Fundación Democracia y Gobierno Local, 2006: 427-460.

Montero Ruiz, M. T., «Breves reflexiones sobre la determinación legal de la pena de prisión y su utilidad para los delitos ecológicos», *La Ley Penal,* N.º 158, Septiembre 2022: 1-13.

Muñoz Conde, F., **López Peregrín, C.**, **García Álvarez, P.**, *Manual de Derecho penal medioambiental,* Tirant lo Blanch, 2015.

Ochoa Figueroa, A., «Medioambiente como bien jurídico protegido ¿visión antropocéntrica o ecocéntrica?», *Revista de Derecho Penal y Criminología,* N.º 11, Enero 2014: 253-294.

Pérez Hierro, N., «La protección jurídica de la víctima del delito en el marco de la delincuencia socio-económica en la Unión Europea», *Revista de Estudios Europeos,* Vol. 79, enero-junio 2022: 243-257.

Sánchez Pérez, L., «El incremento de la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal», *Revista Penal,* N.º 44, Julio 2019: 178-198.

Shiavon, A., «Contra la impunidad ambiental en Europa: un paso más hacia la revisión de la Directiva 2008/99/CE», *LegalToday,* 26 abril 2023: 1-3. Disponible en: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-internacional/internacional/contra-la-impunidad-ambiental-en-europa-un-paso-mas-hacia-la-revision-de-la-directiva-2008-99-ce-2023-05-18/ [Consulta: 15-09-23].

Tamarit Sumalla, J. M., «La reparación como instrumento de protección penal del ambiente», en Quintero Olivares, G., Prats Canut, J. M., (Coords.): *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut,* Tirant lo Blanch, 2008: 747-760..

Varona, G., «Victimización en delitos contra los ecosistemas y los animales: Percepción del daño y su reparación por parte de las personas internas en prisiones españolas», *Revista de Victimología,* N.º 15, 2023: 57-98.

Varona Martínez, G., *Victimidad y violencia medioambiental contra los animales: retos de la victimología verde,* Comares, 2020.

Varona Martínez, G., **Herrera Moreno, M.**, **Tamarit Sumalla, J. M.**, «Explorando caminos futuros en victimología», en Varona Martínez, G., (Dir.): *Victimología: en busca de un enfoque integrador para repensar la intervención con víctimas,* Aranzadi, 2018: 37-49.

Vercher Noguera, A., «La evolución de los delitos contra el medio ambiente en el contexto europeo: la Directiva 2008/99/CE», *Diario La Ley*, N.º 10047, Abril de 2022: 1-14.

White, R., «Green victimology and non-human victims», *International Review of Victimology,* Vol. 24 (2), 2018: 239-255.

NESSO DI RISCHIO E SCOPO DI TUTELA NELL'IMPUTAZIONE DEGLI EVENTI DI DISASTRO. UN'ANALISI CRITICA DEL DIRITTO VIVENTE IN TEMA DI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBLICA

Francesco Contri
Universidad de Ferrara

Abstract. Lo scritto esamina la stretta (e spesso travisata) interconnessione sussistente tra la verificazione di un disastro e la *mala gestio* del rischio specifico che ivi si è concretizzato. Non dubitando della necessità di accertare, anche nell'esegesi dei delitti di comune pericolo, che l'evento corrisponda al risultato che la regola cautelare violata mirava a prevenire (c.d. nesso di rischio), si è evidenziato come in tale settore la multidirezionalità dei rischi, in combinato disposto con la diffusività del pericolo e l'indeterminatezza delle possibili vittime, imponga, nella ricerca del rischio realizzatosi, la valorizzazione della *ratio* principale dei doveri cautelari violati. A tal fine, sono stati criticati alcuni degli arresti giurisprudenziali – sia di merito sia di legittimità – intervenuti nell'ambito di vicende macro-lesive (o pericolose) per lavoratori e/o soggetti terzi, per le quali sono state proposte soluzioni ritenute più coerenti con i principi di legalità e di responsabilità per fatto proprio e colpevole. Così argomentando, da un lato, si è ritenuta irragionevole (oltre che illegittima) la distinzione tra disastro interno ed esterno ai luoghi di lavoro fondata sull'omissione delle medesime cautele; dall'altro lato, si è osservato come l'esegesi della fattispecie di cui all'art. 437 c.p. dovrebbe essere ricollegata alla scorretta gestione (e alla eventuale realizzazione) di un vero e proprio rischio lavorativo piuttosto che alla verificazione di disastri (o infortuni) sui luoghi di lavoro.

Sommario. I. Cenni introduttivi. – II. La sottovalutazione della (necessaria) individuazione del rischio realizzatosi nell'evento disastroso. – III. La multidirezionalità dei rischi e la (corrispondente) pluridirezionalità delle regole

cautelari violate. – III.1. La discutibile (e discussa) creazione di nuovi garanti alla luce della (necessaria) gestione integrata di rischi diversi. – IV. Il *leading case* in materia: il disastro ferroviario di Viareggio... – V. (*Segue*) ...e la sua valenza più generale in tema di disastri – VI. Disastro interno, disastro esterno e rischio lavorativo. Vi è ancora spazio per i disastri «sui luoghi di lavoro»? – VI.1. La mancata apposizione di cautele volte a ridurre le emissioni nocive o inquinanti. – VI.2. La mancata predisposizione di cautele poste a salvaguardia della sicurezza di impianti o servizi. – VII. Sintesi e conclusioni.

I. CENNI INTRODUTTIVI

Il presente contributo prende le mosse dal frequente imbarazzo – ravvisabile nelle pronunce sia di merito sia di legittimità – insito nell'individuazione del «tipo» di disastro verificatosi (e dunque della fattispecie applicabile al caso concreto) allorquando questo non appaia «nitido» nella sua conformazione.

Come noto, il raggruppamento dei delitti di «pericolo comune» si deve, per primo, al codice Zanardelli, che, al Titolo VII del Libro II, li articolava in quattro Capi, rispettivamente rubricati: «dell'incendio, della inondazione, della sommersione e di altri delitti di comune pericolo»; «dei delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione»; «dei delitti contro la sanità e alimentazione pubblica»; «disposizioni comuni ai capi precedenti»[1].

In questo nuovo «paradigma punitivo», ad assumere rilevanza non erano più (o tanto) i beni giuridici facenti capo a singoli soggetti; quanto, piuttosto, un bene impersonale, collettivo, che trovava il proprio referente valoriale nell'integrità fisica, nella salute e nel patrimonio delle persone[2].

---

1. Per una ricostruzione delle origini storiche e codicistiche dei delitti contro l'incolumità pubblica *cfr.*, tra gli altri, CORBETTA, S. *Delitti contro l'incolumità pubblica. Tomo I. I delitti di comune pericolo mediante violenza*, Cedam, Padova, 2003, pág. 3 ss.; GARGANI, A. voce «Disastro colposo», en obra colectiva *Enc. dir., I Tematici, II*, Giuffrè, Milano, 2021, págs. 411-412; ID., *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Giappichelli, Torino, 2005, pág. 31 ss. (anche per ulteriori riferimenti bibliografici); ID., «Incolumità pubblica (delitti contro la)», en obra colectiva *Enc. dir., Annali VIII*, Giuffrè, Milano, 2015, pág. 571 ss.; ID., *Reati contro l'incolumità pubblica. Tomo I. Reati di comune pericolo mediante violenza*, Giuffrè, Milano, 2008, pág. 13 ss.; G. SAMMARCO, voce «Incolumità pubblica (reati contro la)», en obra colectiva *Enc. dir., Vol. XXI*, Giuffrè, Milano, 1971, pág. 28 ss.

2. La mancata collocazione dei reati in esame tra quelli posti a tutela del patrimonio, si deve al fatto che «essi colpiscono non soltanto la proprietà, ma anche le persone, dell'incolumità delle quali è giusto che la legge si mostri particolarmente sollecita». Così la *Relazione ministeriale al progetto di codice penale per il regno d'Italia*, en *Riv. pen.*, 1988, pág. 198, ripresa, in dottrina, anche da GARGANI, A. *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Giappichelli, Torino, 2005, pág. 51 ss. Sul punto, *cfr.* altresì CORBETTA, S. *Delitti contro l'incolumità pubblica. Tomo I*. cit., pág. 9; GARGANI, A. voce «Incolumità pubblica (delitti contro la)...», *op. cit.*, pág. 572.

Con l'entrata in vigore del Rocco, tale modello di tutela, pur mantenendo come propri i caratteri della «potenza espansiva del nocumento» e della «diffusibilità del danno ad un numero indeterminato di persone», viene ristretto alle ipotesi di c.d. danno «qualificato dal pericolo»[3]: i beni patrimoniali non godono (più) di tutela in quanto tali, bensì rilevano solamente per la veicolazione di un più ampio pericolo per una pluralità indeterminata di persone[4].

Nondimeno, se il codice del 1930 ha senza dubbio adeguato tale peculiare forma «anticipata» di tutela alle innovazioni tecnologiche e produttive del tempo[5]; la preoccupazione del legislatore di delineare tassativamente tutte le ipotesi idonee a ledere una indistinta pluralità di consociati ha

3. Così, in particolare, A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*..., *op. cit.*, *passim*.

4. In questo senso, si osserva come il codice Rocco, rispetto al suo predecessore, abbia adottato una nozione di incolumità pubblica intesa in senso «restrittivo». Su tale nozione, nondimeno, si sono succedute nel tempo svariate definizioni. La stessa è stata intesa ora quale interesse social-statualistico ricollegabile alle condizioni garantite dall'ordinamento volte a tutelare vita, integrità fisica e salute come beni «di tutti e di ciascuno» (MANZINI, V. *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, VI, Utet, Torino, 1935, pág. 193); ora quale sintesi dell'interesse generale dell'incolumità pubblica e dei singoli concretamente colpiti o messi in pericolo (ANTOLISEI, F. *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, coordinador C. F. Grosso, Giuffrè, Milano, 2022, pág. 7); ora quale «interesse diffuso», adespota (DE VITA, A. *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell'offesa e tutela processuale*, Jovene, Napoli, 1999, pág. 4 ss.; GARGANI, A. voce «Disastro colposo...», *op. cit.*, pág. 412; ID., voce «Incolumità pubblica (delitti contro la)...», *op. cit.*, pág. 576); ora quale interesse della comunità attaccata dalla condotta (DEAN, F. *L'incolumità pubblica nel diritto penale. Contributo alla teoria generale dei reati di comune pericolo*, Giuffrè, 1971, pág. 32 ss.); ora quale offesa al «complesso delle condizioni garantite dall'ordinamento giuridico» afferenti la «comune sicurezza delle persone» intesa come un'entità obiettiva ed indeterminata e cioè come un bene «"di tutti e di ciascuno" tutelato in quanto tale nella sua essenza e dimensione collettivistica» (SAMMARCO, G. voce «Incolumità pubblica (reati contro la)», *op. cit.*, págs. 31-32); ora quale mera tecnica anticipatoria di beni facenti capo ai singoli: come «astrazione concettuale, che abbraccia la vita e l'incolumità fisica di soggetti concreti» (Così CORBETTA, S. *Delitti contro l'incolumità pubblica... op. cit.*, pág. 17 e, in senso analogo FIANDACA, G. «La tipizzazione del pericolo», en *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, a cagrgo del CRS, Franco Angeli. Centro studi e iniziative per la riforma dello stato, Milano, 1987, pág. 66; RIONDATO, S. «Rovina di edifici e omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano la rovina», en obra colectiva *Enc. dir., Vol. XXXVI*, Giuffrè, Milano, 1989, págs. 163-164). Per una compiuta ricostruzione delle posizioni succedutesi in materia sia consentito il rinvio, in particolare, ad GARGANI, A. *Il danno qualificato dal pericolo*... *op. cit.*, pág. 31 ss. nonché a CANESTRARI, S. & CORNACCHIA, L. «Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica», en *Trattato di diritto penale. Parte speciale – IV. I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, coordinadores A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Utet, Milano, 2010, pág. 3 ss. Per l'individuazione del ruolo che l'incolumità pubblica gioca nella fattispecie di cui all'art. 437 c.p. v., invece, ALESSANDRI, A. «Il pericolo per l'incolumità pubblica nel delitto previsto dall'art. 437 c.p.», en *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, pág. 270 ss.

5. *Cfr.*, tra gli altri, CORBETTA, S. *Delitti contro l'incolumità pubblica... op. cit.*, págs. 8-9; GARGANI, A. voce «Incolumità pubblica (delitti contro la)...», *op. cit.*, pág. 572.

ingenerato rilevanti questioni – oggi ancora in apparenza irrisolte – circa il riconoscimento della tipologia di disastro verificatosi nei casi in cui questo appaia ricollegabile a più (e diverse) delle «morfologie» tipizzate nel Titolo VI, Libro II, c.p. Da qui l'imprevedibilità dell'inquadramento giuridico da parte delle Pubbliche Accuse (e della conseguente eventuale dichiarazione di responsabilità all'esito del giudizio) per fatti assolutamente assimilabili tra loro che mina, oltre alla certezza del diritto, anche le concrete possibilità di difesa degli imputati. Come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, infatti, tale prassi operativa, valorizzando segnatamente la portata lesiva del concreto evento disastroso a discapito della valorizzazione del rischio specifico concretizzatosi, rende sostanzialmente fungibili le fattispecie poste a tutela della pubblica incolumità, rimproverando – anche sotto questo angolo visuale – i soggetti ritenuti causalmente responsabili non tanto per fatti *propri* e *colpevoli* quanto, piuttosto, per l'essersi inseriti in un più ampio contesto di attività intrinsecamente rischiosa[6].

6. Tale assunto parte dalla constatazione, da un lato, della tendenziale mancata valorizzazione, nel diritto vivente, dei limiti imposti all'esercizio di attività rischiose allorquando, nonostante il rispetto di questi, si siano verificati eventi avversi; dall'altro lato, del sostanziale appiattimento, nei casi di successione diacronica dei garanti, delle singole responsabilità su una vera e propria responsabilità da posizione. Quanto al primo profilo, alcune vicende emblematiche mostrano come la giurisprudenza sia ancora incline a considerare non «bilanciabili» la tutela dei beni vita, salute e integrità fisica rispetto al diritto al lavoro ed alla libera iniziativa economica privata. Sul punto, non paiono dunque aver sortito effetto alcuno le due sentenze della Corte costituzionale n. 85/2013 e 58/2018, che, seppur con esiti di segno opposto, hanno evidenziato l'inesistenza di «diritti tiranni» e, conseguentemente, la possibilità, per il legislatore, di bilanciare tutti i beni poc'anzi richiamati. Come anticipato, nelle motivazioni di più pronunce – sia di merito sia di legittimità – sono rinvenibili statuizioni che paiono porsi in frontale contrasto rispetto a tale assunto. Nella vicenda «ambiente svenduto» – su cui si tornerà in seguito – relativa all'acciaieria Ilva di Taranto, ad esempio, – procedimento nell'ambito del quale è stata oltretutto pronunciata la prima delle citate sentenze della Consulta – la Corte di Assise ha osservato che «non potrà mai dirsi scriminata la condotta del gestore - per il delitto di disastro, si badi bene, per cui si procede [ovvero quello di cui all'art. 434, comma 2, c.p.] - se nella valutazione complessiva della attività emissiva dello stabilimento, la stessa abbia determinato quella compromissione dell'aria-ambiente che renda concreto il pericolo per la salute della collettività locale»; e ciò in quanto «il fatto che un titolo autorizzatorio e la norma da cui esso discende riconosca un diritto o una facoltà giuridica, di cui segni i limiti formali, non è di ostacolo al riconoscimento dell'illecito penale quando il suo esercizio si ponga, in concreto, in contrasto con i fini sostanziali che il titolo (e la norma) si prefigge ovvero con una norma diversa o con gli stessi principi generali dell'ordinamento». E ancora, nella vicenda relativa alla centrale termoelettrica di Porto Tolle, la Cassazione ha ritenuto di escludere la possibilità di assolvere gli imputati nel merito – dovendo nondimeno riconoscere, parallelamente a quanto è avvenuto nel processo Eternit, l'estinzione del reato di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. per avvenuta prescrizione – perché, pur operando sempre nel rispetto dei limiti di emissione, questi si erano dimostrati consapevoli del degrado ambientale prodotto dall'attività, epperò in «mala fede». Per un commento alle due pronunce della Consulta con riferimento specifico all'(ir)rilevanza del rispetto dei c.d. «limiti soglia» v. CASTRONUOVO, D. «Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente», en *Lavoro e diritto*, vol. 2. 2022 pág.

Ma ciò non basta. Il timore di lasciar impuniti fatti caratterizzati da un marcato disvalore (anche sociale) non si è arrestato innanzi alla predetta «penalizzazione a tappeto», ma ha altresì condotto alla genesi di una fattispecie «aperta» di disastro c.d. «innominato» (art. 434 c.p.), collocata in chiusura del Capo I del Titolo VI, Libro II, c.p. Com'era d'altronde prevedibile, però, una volta entrata nel circuito applicativo del diritto vivente, la portata applicativa di una simile norma incriminatrice non è stata limitata, in ossequio ai principi di legalità e colpevolezza, alle ipotesi compatibili con la sua collocazione sistematica, bensì è stata ampliata sino a ricomprendere – in contrapposizione con l'opinione di gran lunga prevalente in dottrina – fenomeni, seppur connotati da un marcato disvalore, del tutto estranei al suo legittimo ambito applicativo[7].

379 ss. Quanto, invece, allo snaturamento dei profili lato sensu soggettivi nell'ambito dell'attribuzione di responsabilità individuali per la verificazione di eventi disastrosi non può che essere evidenziato come, sul piano oggettivo, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, «il cedente non può liberarsi da responsabilità per omesso impedimento dell'evento, se al momento del trasferimento degli obblighi di garanzia, l'attività risulta inficiata da inosservanze cautelari, che si rivelano causalmente efficienti rispetto all'evento dannoso, verificatosi in epoca successiva al subentro di terzi nella titolarità della posizione di garante»; nonché, sul piano della colpa, «la successione nella posizione di garanzia non possa elidere la responsabilità inerente a situazioni di pericolo colposamente scaturite nel periodo in cui i danti causa ne fossero titolari e che l'obbligo di impedimento continui, dunque, a gravare sui garanti originari, pur essendosi l'evento di danno concretizzato in epoca successiva al trasferimento dei compiti di garanzia», dovendosi altresì escludere che il soggetto garante possa fare affidamento sull'assolvimento dei propri obblighi da parte del suo successore. (Così GARGANI, A. voce «Disastro colposo...», *op. cit.*, pág. 428). «Negando qualunque effetto "liberatorio" all'adempimento — da parte del garante originario — dell'obbligo di corretta informazione del garante subentrante in ordine ai fattori di rischio – conclude l'Autore –, la teoria giurisprudenziale della continuità delle posizioni di garanzia si risolve nell'affermazione di una responsabilità di "posizione", in palese contrasto con l'art. 27 comma 1 cost».

7. Il riferimento è, evidentemente, all'inquadramento, ad opera della giurisprudenza, di fenomeni di inquinamento storico-progressivo nella fattispecie di "altro disastro" di cui all'art. 434 c.p. Sul punto, la bibliografia è ampia e pressoché tutta sfavorevole alla sussunzione nella citata fattispecie di ipotesi di danno ambientale da cui deriva un pericolo per la salute pubblica non caratterizzate da una etiologia immediata, visibile e "violenta". Invero, le opinioni di segno contrario – di matrice segnatamente giurisprudenziale, anche se non solo (in dottrina, *cfr.* RAMACCI, L. «Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità», en *Lexambiente.it,* 2012, págs. 723-724; E. ROSI, «Brevi note in tema di "disastro" ambientale. Per una effettiva tutela dell'ambiente è necessaria la sincronia degli strumenti giuridici vigenti», en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 16.4.2015, pág. 7 ss.) – si ritengono rafforzate dall'(al più solo apparente) avallo ricevuto dalla pronuncia – talvolta additata come «non felice» (così D. BRUNELLI, «Il disastro populistico», en *Criminalia*, 2014, pág. 264) – della Corte costituzionale n. 327/2008. Nondimeno, è quantomeno sintomatico che qualche anno dopo la pubblicazione di tale sentenza, il Giudice redattore, con un proprio parere pro-veritate, abbia smentito il (presunto) avallo dato dalla Consulta alla «giurisprudenza vivente», conformandosi all'orientamento prevalente della dottrina. Così, in particolare, G. M. FLICK, «Parere *pro-veritate* circa la riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art. 434», en *Cass. pen.*, 2015, pág. 12 ss. In argomento v., senza pretesa di esaustività, G. P. ACCINNI,

In sintesi, le esigenze di salvaguardia dei beni giuridici in questione, per un verso, sono sfociate nell'enucleazione di una fattispecie indeterminata – riconducibile, peraltro, alla figura delle clausole generali[8] –; per altro verso, hanno provocato una vasta tipizzazione delle ipotesi di disastro, corrispondente ad altrettante fattispecie incriminatrici, il cui spazio di tutela – lo si anticipa sin d'ora – non può che corrispondere a quel «cono» di protezione offerto dalla ratio dei doveri cautelari specificamente violati.

Si badi bene, però, a non cadere in un equivoco: la preoccupazione del legislatore di non lasciar impuniti fatti da cui potrebbe derivare un pericolo per la pubblica incolumità, se è criticabile nel suo eccesso, integrato dalla creazione di una fattispecie dai contorni tutt'altro che nitidi[9], va accolta, nel suo

*Disastro ambientale. Dall'*horror vacui *all'*horror pleni, Giuffrè, Milano, 2018, pág. 29 ss.; R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2023, pág. 173 ss.; D. Brunelli, *Il disastro populistico*, cit., pág. 254 ss.; D. Castronuovo, «Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche», en *Casi di diritto penale dell'economia*, vol. II, coordinadores L. Foffani, D. Castronuovo, Il Mulino, Bologna, 2015, pág. 129 ss.; G. de Santis, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Giuffrè, Milano, 2012, pág. 166 ss.; F. Forzati, «Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed Emergenza Rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo Stato di diritto», *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 11.3.2015, pág. 8 ss.; A. Gargani, voce «Disastro colposo», cit., pág. 422 ss.; Id., *Reati contro l'incolumità pubblica, tomo I*, cit., pág. 468 ss.; F. Giunta, «I contorni del «disastro innominato» e l'ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza», en *Giur. cost*. 2008, pág. 3539; R. Martini, «Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia», en *Leg. Pen.,* 2008, pág. 339 ss.; C. Piergallini, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Giuffrè, Milano, págs. 280 s., 289; S. Tordini Cagli, «I delitti di comune pericolo», en D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, Torino, 2021, págs. 284-285; F. Venturi, «Tanto tuonò che piovve: il disastro innominato "ambientale" come reato eventualmente permanente. Analisi ciritica della giurisprudenza di legittimità in materia di inquinamento storico e progressivo», en *Leg. pen.*, 29 aprile 2021, pág. 3 ss.; A. L. Vergine, «Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen.», en *Ambiente & Sviluppo* 2013, pág. 534 ss.; S. Zirulia, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Giuffrè, Milano, 2018, pág. 254 ss. Per un'attenta disamina dei confini applicativi della fattispecie di disastro ambientale c.d. «innominato» (art. 434 c.p.) a seguito dell'introduzione della fattispecie di disastro ambientale c.d. «nominato» (art. 452-*quater* c.p.) *cfr.*, *ex multis*, A. Gargani, «Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale», en *Leg. pen.*, 3 febbraio 2020.

8. Così, in particolare, D. Castronuovo, «Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche», cit., pág. 131.

9. Rilevava come tale disposizione fosse «di un'elasticità e una indeterminatezza tale da [far] dubitare, persino durante i lavori preparatori, della sua compatibilità col principio di stretta legalità» già G. Marinucci, voce «Crollo di costruzioni», en *Enc. dir., Vol. XI*, Giuffrè, Milano, 1962, pág. 411. *Contra*: D. Brunelli, «Il disastro populistico», cit., pág. 261, il quale ritiene che il legislatore sia stato «davvero lungimirante, quando ha inserito la clausola del disastro innominato proprio pensando al futuro della realtà produttiva ed industriale di cui si cominciavano a scorgere le potenzialità, pronosticando che potessero sorgere nel tessuto dei reati contro l'incolumità pubblica delle "lacune" al confronto con la

complesso, con favore. Risponde infatti all'esigenza di certezza del diritto e, in particolare, al rispetto del principio di legalità, nel suo corollario di tassatività-determinatezza, enucleare norme incriminatrici quanto più precise nella descrizione del fatto tipico. Lungi dal potersi rinvenire in scelte legislative più o meno censurabili, allora, la *causa* del frequente imbarazzo giurisprudenziale nell'individuazione di una (o più) fattispecie tra quelle del Titolo VI, libro II, c.p. pare affondare le proprie radici più in profondità e, segnatamente, nella sovente pretermissione, in questo settore, dell'accertamento del «nesso di rischio»[10].

II. LA SOTTOVALUTAZIONE DELLA (NECESSARIA) INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO REALIZZATOSI NELL'EVENTO DISASTROSO

È ormai data per acquisita, ai fini dell'imputazione –(già) oggettiva[11] o (solamente) soggettiva– di un evento, la mancata autosufficienza

multiforme "varietà dei fatti"». Il medesimo Autore, però, precisa anche che il legislatore «pensava, invero, ai possibili disastri "automobilistici" o ad altri "incidenti" gravi che la tecnologia avrebbe potuto ingenerare, non – con ogni probabilità – alle devastazioni progressive dell'ambiente dove vive l'uomo causate dall'incessante attività produttiva, sviluppatasi disordinatamente e senza alcuna cautela per anni o decenni, ove il risultato "disastroso" (perché gravemente distruttivo e vasto), pur in grado di generare pericolo per la vita o l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, non è preceduto da un unico fattore che, isolato nel tempo e nello spazio, costituisce l'"incidente" capace di far deflagrare la "violenza" scatenante la catena causale». A confermare tale assunto soccorrono altresì gli esempi riportati da C. ERRA, voce «Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio», en *Enc. dir., Vol. XIII*, Giuffrè, Milano, 1964, pág. 12, il quale, ritenendo inopportuna la collocazione del delitto di "altro disastro" accanto alla figura specifica del crollo di costruzioni per la sua genericità ed il suo scopo integrativo, osserva come rientrino nell'ambito di applicazione della norma "l'incidente automobilistico o teleferico, la caduta di un ascensore privato, il collocamento, lo scoppio, o l'accensione di dinamite, o di altre materie esplodenti, accecanti, o di altri liquidi infiammabili"».

10. Il fenomeno su cui si vuole, in questa sede, concentrare l'attenzione è dunque sostanzialmente inverso (anche se invero in parte coincidente) rispetto a quello –da più parti denunciato– relativo alla «riscoperta» delle fattispecie di comune pericolo «volta a porre rimedio alle molteplici e multiformi lacune di tutela palesate dal sistema penale nel fronteggiare la natura massiva e latente dei pericoli sottesi alla cosiddetta società del rischio» mediante la «"flessibilizzazione" dei canoni di garanzia, la riconversione teleologica delle figure delittuose in esame in senso plurioffensivo (aspecificità del raggio di prevenzione)». Così A. GARGANI, voce «Incolumità pubblica (delitti contro la)», cit., pág. 588.

11. Il riferimento è, evidentemente, alla teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento, già da tempo adottata dalla dottrina tedesca e la cui riproposizione, nella dottrina nostrana, si deve, tra gli altri, a M. DONINI, «Lettura sistematica delle teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento, Parte II», en *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, pág. 1114 ss. Sul punto *cfr.*, altresì, M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento. «Nesso di rischio» e responsabilità per fatto proprio*, Giappichelli, Torino, 2006, *passim*, nonché, più di recente, ID., «Nesso di rischio. Il disvalore di azione-evento», en *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, pág. 25 ss. Per una

dell'accertamento *(ex post)* del nesso di causa tra una condotta ed il suo verificarsi[12]. Il principio di colpevolezza – sia nel caso in cui venga valorizzato esclusivamente nell'ambito dell'accertamento del dolo o della colpa sia che venga inteso quale principio rilevante già in sede di fatto tipico – impone infatti l'accertamento, tra gli altri, del «nesso di rischio»[13]. Ciò significa che l'evento verificatosi, per essere imputato ad un soggetto, deve corrispondere a quel «tipo» di eventi che la regola cautelare violata – a cui si ricollega causalmente la verificazione dell'evento – mirava, ex ante, a prevenire. In altri termini: «la condotta, dopo aver prodotto o superato un livello di rischio non più lecito, [deve realizzare] nell'evento lo specifico rischio illecito, non un rischio diverso»[14].

Da ciò discende che non tutti gli eventi causalmente provocati dall'attivazione o dall'aumento di un rischio illecito possono essere rimproverati al soggetto che li abbia in tal modo «prodotti»: lo possono essere solo quelli rientranti in quel «cono di protezione» apprestato dalla specifica regola cautelare violata[15].

---

valorizzazione di tale teoria in funzione di dissoluzione dei dubbi circa la presenza di pluralità o unità d'azione nell'ambito del concorso omogeneo *cfr.* L. BIN, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, Giappichelli, Torino, 2022, pág. 298 ss.

12 Così D. CASTRONUOVO, «voce Colpa penale», en *Enc. dir., I Tematici, II, Reato colposo*, Giuffrè, Milano, 2021, pág. 213.

13. Come noto, le tesi, sul punto, sono piuttosto variegate. Sulla teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento cfr. nota 11. Per una disamina di alcune delle posizioni sostenute in dottrina circa l'opportunità di valorizzazione nel nostro ordinamento di tale teoria v. O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Giappichelli, Torino, 2003, pág. 348 ss. Per una frontale contrapposizione al recepimento della stessa, la quale altro non farebbe se non replicare un principio già largamente riconosciuto in ambito colposo *cfr.*, in particolare, G. MARINUCCI, «Non c'è dolo senza colpa. Morte della "imputazione oggettiva dell'evento" e trasfigurazione nella colpevolezza?», en *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, págs. 3 ss., 18 ss.

14. Così M. DONINI, «Nesso di rischio. Il disvalore di azione-evento», cit., pág. 26.

15. Questo assunto, che la dottrina trae quale corollario (solo) del principio di colpevolezza o (anche) del principio di responsabilità per fatto proprio, vale – occorre precisarlo – anche per i reati a coefficiente soggettivo doloso. L'argomento è stato ampiamente approfondito in dottrina; nondimeno, per ciò che qui segnatamente interessa, occorre evidenziare che, nei casi in esame, assai di rado potrà rinvenirsi in capo all'imputato un coefficiente soggettivo doloso rispetto all'evento disastroso. Sul punto *cfr.*, seppur prima della pronuncia delle SSUU del 2014 sul caso Thyssenkrupp, che ha ri-definito il confine tra colpa cosciente e dolo eventuale, M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento.* «*Nesso di rischio*» *e responsabilità per fatto proprio*, cit., pág. 143 ss. Sull'imprescindibilità dell'accertamento del «nesso di rischio» anche ai reati dolosi v. anche G. MARINUCCI, «Non c'è dolo senza colpa. Morte della "imputazione oggettiva dell'evento" e trasfigurazione nella colpevolezza?», cit., pág. 30, il quale arriva a sostenere che «non c'è dolo senza colpa: si configura la realizzazione dolosa del fatto, sempreché – in assenza di dolo – siano presenti, rispetto allo stesso fatto, gli estremi della colpa»; nonché a concludere che «dal punto di vista strutturale, dolo e colpa sono concetti giuridici che esprimono fenomeni diversi, da *aliud* a *aliud*; ma nell'ordine dei criteri normativi che fondano e graduano la colpevolezza

Anche nei casi in cui si siano verificati veri e propri eventi disastrosi – da intendersi, in ultima analisi, quali fatti di danno alle cose qualificati dal pericolo per una pluralità indeterminata di persone – risulta dunque necessaria la verifica della corrispondenza di tali peculiari eventi alla *ratio* dei doveri cautelari violati. Breve, il disastro potrà essere imputato al soggetto garante – inteso quale «gestore del rischio specifico» – solamente se la sua realizzazione, oltre a dipendere (*rectius* co-dipendere) causalmente dalla violazione di una regola cautelare, rientri nello spettro di tutela da essa apprestato[16].

Ciononostante, mentre nell'esegesi dei delitti colposi di omicidio e lesioni personali l'inevitabilità dell'accertamento del nesso di rischio pare essere ormai stata acquisita dal diritto vivente (si pensi, in particolare, alle materie della sicurezza del lavoro e della circolazione stradale)[17]; le motivazioni delle

dell'agente, dolo e colpa si trovano in rapporto scalare: da più a meno colpevole». Invero, anche i sostenitori della teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento ritengono che tale giudizio debba considerarsi – insieme all'attivazione o all'aumento di un rischio *ex ante* illecito – quale elemento comune ai reati sia dolosi sia colposi; a tal fine, però, valorizzano il coefficiente di colpevolezza già insito nella condotta di per sé considerata. In questo senso, essi evidenziano come, a partire dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 364/1988, «non abbiamo più dolo e colpa "psicologici" spalmati sulla c.s.q.n. come una diversa marmellata su un identico panino: sono invece amalgamati in un modo di agire umanistico, doloso o colposo, che modifica anche il significato della c.s.q.n., perché le modalità condizionanti sono decisive per il "fatto tipico" colposo e per quello doloso. Il sostrato che veicola il dolo non è lo stesso che veicola la colpa. È, insomma, un problema di tipicità, di fatto tipico». Così M. DONINI, «Nesso di rischio. Il disvalore di azione-evento», cit., pág. 29. Sul punto *cfr.*, anche per gli ulteriori riferimenti, altresì L. BIN, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, cit., pág. 305 ss.

16. Sul punto, M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento.* «*Nesso di rischio*» *e responsabilità per fatto proprio*, cit., pág. 143 ss. pone in luce come, in queste fattispecie, l'evento – peraltro non più inquadrabile, come era nelle intenzioni originarie del legislatore, nell'ambito delle condizioni obiettive di punibilità – dipenda anche da fattori «sopravvenuti, naturali o sociali che non è possibile dominare una volta attivata la situazione pericolosa. Esso è dunque codeterminato dal caso». Proprio nell'ambito dell'esegesi di questi delitti, allora, si fa ancor più sentita la necessità di individuare un rischio ex ante illecitamente attivato o aumentato, la sua particolare realizzazione nell'evento, nonché di accertare che quei fattori, i quali ex post hanno fondato o aggravato la responsabilità, corrispondano a quello specifico rischio attivato o aumentato ex ante dal soggetto, non ad un rischio diverso. Sulla «normale inevitabilità» dei disastri *cfr.*, in particolare, F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2004, *passim*.

17. La giurisprudenza in materia di sicurezza del lavoro, infatti, oggi perviene all'esclusione della responsabilità del soggetto garante riconoscendo la condotta colposa ed imprevedibile del lavoratore idonea ad escludere il nesso causale solamente in quella che attiva un rischio esorbitante rispetto alla sfera di competenza del soggetto debitore di sicurezza. Sul punto *cfr.*, anche per i rispettivi riferimenti giurisprudenziali, R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., pág. 212 ss.; ID., «Sicurezza del lavoro e reati colposi», en *Enc. dir., I Tematici, II*, Giuffrè, Milano, 2021, págs. 1193-1194; D. CASTRONUOVO, «I delitti di omicidio e lesioni», en D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, Torino, 2023, págs. 353 ss.; J. DELLA VALENTINA, «Ancora una decisione

pronunce – sia di merito sia di legittimità – in materia di disastri paiono adombrare, sul punto, una confusione (anche concettuale) difficilmente giustificabile. Salvo rari casi, in cui, peraltro, dalla concretizzazione di un peculiare tipo di rischio negli eventi (segnatamente di danno alle persone) dipendono importanti esiti del processo, infatti, la giurisprudenza non pare – almeno sino ad ora – aver riservato particolare attenzione all'individuazione della natura del rischio, *ex ante* illecitamente attivato (o aggravato), realizzatosi nell'evento di danno (alle cose) qualificato dal pericolo (per un numero indeterminato di persone)[18].

in materia di responsabilità del datore di lavoro per infortuni auto-inferti dal lavoratore: alla ricerca di nuove soluzioni mediante il reimpiego di vecchi paradigmi», en *DPEI*, 9 marzo 2023; M. Donini, «Nesso di rischio. Il disvalore di azione-evento», cit., pág. 41 ss.; A. Massaro, «"Concretizzazione del rischio" e prevedibilità dell'evento nella prospettiva della doppia funzione della colpa», en *Cass. pen.*, 2009, pág. 4699 ss., nonché, altresì per alcuni riferimenti sulla valorizzazione del nesso di rischio in materia di circolazione stradale, S. Dovere, «Giurisprudenza della Corte Suprema sulla colpa», en *Enc. dir., I Tematici, II*, Giuffrè, Milano, 2021, pág. 597 ss. In tema, v. diffusamente, A. Perin, «Concretizzazione del (nesso di) rischio», en *Enc. dir., I Tematici, II*, Giuffrè, Milano, 2021, pág. 288 ss., il quale osserva oltretutto che «il criterio dello scopo/ambito di protezione della norma emerge specialmente rispetto ai casi di violazione di regole cautelari predefinite: il criterio in parola è funzionale proprio perché tali regole sono già riconosciute nel contesto di attività o professionale di riferimento e, quindi, sono dotate di ambiti di applicazione e protezione altrettanto definiti».

18. Una delle (rare) ipotesi – su cui si tornerà, in particolare, al Par. 4 – in cui la giurisprudenza di legittimità ha fatto sfoggio (oltre che applicazione) – grazie invero all'evidente approfondimento dogmatico del proprio Estensore – di questi principi anche nell'ambito dei delitti di comune pericolo si rinviene nella pronuncia della suprema Corte relativa al disastro ferroviario di Viareggio (*Cassazione Penale, [sección 4] núm. 32899/2021, de 8 de enero* [en *Sist. pen*. con scheda di P. Brambilla, «Disastro ferroviario di Viareggio: le motivazioni della sentenza di Cassazione»]). Per un commento alla pronuncia *cfr.* R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., pág. 24 ss.; P. Brambilla, «Disastro ferroviario di Viareggio: le motivazioni della sentenza di Cassazione», cit.; S. Buoso, «Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi», en *Lavoro e diritto*, 2022, pág. 283 ss.; M. F. Carriero, V. Camurri, «La Cassazione sul "disastro di Viareggio": l'aggravante antinfortunistica e la giurisdizione sugli enti stranieri», en *Arch. pen.*, 2022; D. Castronuovo, «I delitti di omicidio e lesioni», cit.; Id., «Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente», cit., pág. 388 ss.; F. Giunta, «Le aggravanti del "luogo di lavoro": a proposito di un'espressione fuorviante», en *Discrimen*, 11 dicembre 2021; M. Mantovani, «Il disastro ferroviario di Viareggio e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro», en *DPEI*, 19 ottobre 2021; V. Mongillo, «Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio», en *Giur. it.*, 2022, pág. 953 ss.; B. Paterra, «L'estensibilità all'extraneus della tutela antinfortunistica», en *Leg. pen.*, 28 giugno 2022, pág. 18 ss.; S. Tordini Cagli, «Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica», en *Discrimen*, 16 febbraio 2022; C. Valbonesi, «La regola cautelare nell'era del rischio: note a margine della sentenza per il disastro ferroviario di Viareggio», en *Discrimen*, 14 gennaio 2022; nonché, volendo, F. Contri, «L'estensione della nozione di rischio lavorativo nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro. Note a margine del disastro della funivia del Mottarone», en *Cass. pen.*, 2023, pág. 2509 ss.

Nel prosieguo, si cercherà allora di evidenziare come, a causa della diffondibilità del pericolo e dell'indeterminatezza delle possibili vittime «quali connotati tipici del pericolo comune»[19], le medesime cautele violate fungano spesso da base per la valorizzazione di diverse fattispecie, tutte poste a tutela della pubblica incolumità, e rispondenti non solo alla realizzazione di rischi diversi, bensì finanche ad una opposta dinamica etiologica nella causazione dell'evento[20].

In sintesi, una volta accertata la verificazione di un vero e proprio disastro, complici anche la comparabilità delle cornici edittali delle norme incriminatrici che vengono in rilievo, il processo di identificazione del rischio che ivi si è concretizzato non pare giocare, nella sostanza, alcun ruolo: la scelta della fattispecie applicabile al caso concreto pare avvenire sulla sola base degli effetti che si sono in concreto prodotti[21].

Sulle conseguenze di tale prassi esegetica si tornerà più avanti; basti, per il momento, evidenziare che la mancata attenzione per la natura del rischio realizzatosi, oltre a rendere sostanzialmente fungibili i delitti di comune pericolo – così arrecando un evidente vulnus al principio di legalità –, provoca gravi pregiudizi anche ai canoni, costituzionalmente tutelati, di responsabilità per fatto proprio (e colpevole).

In particolare, mediante siffatta illegittima prassi interpretativa, diventa altamente probabile (se non certo) che il soggetto garante –inteso quale persona fisica su cui grava il potere-dovere di gestire un rischio specifico[22]– non risulti

19. *Cfr.*, *inter alios*, A. Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., pág. 160 ss.

20. È l'ipotesi relativa, ad esempio, al caso Ilva di Taranto, su cui si tornerà segnatamente al Par. 6.1.

21 Un esempio è rinvenibile nel caso del disastro della funivia del Mottarone, in cui la fattispecie di "rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro" (art. 437 c.p.) non viene fondata sulla concretizzazione di un vero e proprio rischio lavorativo, bensì sulla qualificazione della cabina crollata quale luogo di lavoro per i dipendenti della società Mottarone s.r.l. e per gli addetti alla sua manutenzione (cfr. Par. 6.2). Peraltro, tale specifica ipotesi evidenzia come la mancata attenzione per il rischio realizzatosi nei risultati lesivi non riguardi soltanto i casi di "isolata" contestazione di delitti di comune pericolo, ma anche quelli in cui, nel capo di imputazione, vengano valorizzati i delitti di evento dannoso alle persone in forza delle morti e le lesioni discendenti dall'evento disastroso.

22. Così, in giurisprudenza, SSUU, 24 aprile 2014, n. 38343, en *www.giurisprudenzapenale.com*, 18 settembre 2014; nonché, in dottrina, pur con sfumature non soltanto terminologiche, *inter alios*, R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., pág. 206 ss.; D. Castronuovo, «I delitti di omicidio e lesioni», en D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, Torino, 2021, pág. 300 ss.; L. Cornacchia, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Giappichelli, Torino, 2004, *passim*; M. Donini, *Imputazione oggettiva dell'evento.* «*Nesso di rischio*» *e responsabilità per fatto proprio*, cit., *passim*; S. Dovere, «Giurisprudenza della Corte Suprema sulla colpa», cit., pág. 597 ss. D. Micheletti, «Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell'evento. L'abbrivio dell'imputazione colposa», en *Discrimen*, 3 settembre 2018, *passim*.

correttamente individuato[23]; che gli venga attribuita una responsabilità penale per un mero *varsari in re illicita*[24]; che sia chiamato a rispondere per delitti diversi da quello che, viceversa, meritava valorizzazione; che gli sia attribuita una responsabilità penale per fatti che non ha contribuito oggettivamente a causare[25].

---

23. Il processo di individuazione dei garanti – che deve essere condotto «a ritroso», partendo dall'identificazione del rischio che si è realizzato negli eventi lesivi per poi risalire ai soggetti che avevano il potere/dovere di gestirlo – risulta invero ancor più complicato nell'attuale conformazione «organizzata» delle realità economiche. L'allocazione dei rischi nella sfera di competenza di più soggetti (in via sia sincronica sia diacronica), nonché la nascita di nuovi garanti mediante la frequente traslazione di determinate funzioni – facenti originariamente capo a determinati individui – a più (e distinti) soggetti mediante la redazione di deleghe (e sub-deleghe), rende infatti estremamente ardua la corretta mappatura del riparto delle competenze. Sul tema v., di recente, i lavori monografici di A. Gargani, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa*. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse, Pisa, Pisa University Press, 2022 e F. Consulich, *Il concorso di persone nel reato colposo*, Torino, Giappichelli, 2023. In precedenza, per tutti, L. Cornacchia, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit. Sulle diverse posizioni relative all'efficacia della delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro e alla loro idoneità, da un lato, a fondare nuovi centri di imputazione della responsabilità penale, nonché, dall'altro lato, a garantire la sua valenza liberatoria nei confronti del soggetto delegante *cfr.*, tra gli altri, F. D'Alessandro, voce «Delega di funzioni (diritto penale)», en *Enc. dir.*, Annali IX, Milano, 2016, 242-243; V. Mongillo, «La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto "correttivo". Condizioni di ammissibilità e dovere di vigilanza del delegante», en *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2012, fasc. 2, págs. 93-94; S. Tordini Cagli, «La delega di funzioni», en D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, Torino, 2021, págs. 136-137. Per un confronto tra i requisiti richiesti per la validità della delega di funzioni nella sicurezza alimentare e del lavoro v., anche per gli ulteriori riferimenti, E. Mazzanti, «Soggetti attivi e posizioni di garanzia», en *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, a cura di A. Gargani, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 107 ss. Sui requisiti della delega di funzioni in materia ambientale cfr. L. Ramacci, «Tutela dell'ambiente e delega di funzioni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione», en *Lexambiente*, 2008, fasc. 1, pp. 19 ss. Critica, infine, l'orientamento giurisprudenziale che nega – diversamente rispetto a quanto avviene in materia ambientale (o alimentare) – la possibilità di trasferire gli obblighi tributari in forza del loro carattere strettamente personale V. Rochiara, «La delega di funzioni tributarie: l'irragionevole presunzione di non delegabilità degli adempimenti fiscali secondo la giurisprudenza penale», en *www.giurisprudenzapenale.com*, 10 luglio 2023, pp. 11 ss. Più in generale, sul criterio della competenza, v., anche per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali, D. Micheletti, «Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell'evento», cit., *passim*.

24. Ciò quando – è sottinteso – alla *versari in re illicita* ci si può riferire, ovvero qualora venga accertata l'effettiva violazione di determinate cautele, seppur non segnatamente volte a gestire quel determinato rischio invece concretizzatosi nei risultati lesivi. La precisazione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale volto a non considerare l'avvenuto rispetto dei limiti per l'esercizio di determinate attività economiche imposti dall'ordinamento, pare obbligatoria. Sul punto, sia consentito il rinvio, anche per gli opportuni riferimenti, alla nota 6.

25. Inoltre, la «non curanza» nell'individuazione dello specifico rischio realizzatosi nei risultati lesivi implica spesso di rimandare – più o meno esplicitamente – tale accertamento all'ultimo momento utile (quello di decisione finale), con evidenti ripercussioni negative – come si

III. LA MULTIDIREZIONALITÀ DEI RISCHI E LA (CORRISPONDENTE) PLURIDIREZIONALITÀ DELLE REGOLE CAUTELARI VIOLATE

La frequente svalutazione della peculiare natura del rischio che si è concretizzato nell'evento disastroso[26], pur restando priva di giustificazione, si spiega, almeno in parte, con la sempre più forte evidenza del disgregamento dei confini (solo in apparenza nitidi) delle diverse aree di rischio.

Soprattutto nei casi di verificazione di eventi caratterizzati da un'ampia portata diffusiva del pericolo, infatti, il rischio mostra frequentemente la sua naturale proiezione multidirezionale, finendo per attingere settori, seppur contigui, diversi da quelli direttamente coinvolti. Tipici esempi di questi fenomeni risultano identificabili a proposito della commistione tra rischi attinenti alla sicurezza ambientale, alla sicurezza del lavoro, alla circolazione ferroviaria, ai pubblici trasporti[27].

---

vedrà nel prosieguo – anche sul piano del diritto di difesa degli imputati. Il processo relativo al crollo del Ponte Morandi a Genova, sul punto, è emblematico: ad essere contestati, infatti, sono, in via congiunta, i delitti colposi (art. 449 c.p.) di «Attentati alla sicurezza dei trasporti» (art. 432 c.p.); «Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi» (art. 434 c.p.); «Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.); nonché i delitti colposi di omicidio e lesioni personali aggravati dalla violazione norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.) – imputazione, questa, che ha consentito la chiamata in causa degli enti ASPI (Autostrade per l'Italia) e SPEA (Società progettazioni edili autostradali) ai sensi dell'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 – ed i delitti di omicidio e lesioni gravi o gravissime stradali (artt. 589-*bis* e 590-*bis* c.p.).

26. Fa eccezione, in particolare, come già ricordato *supra*, la pronuncia della Suprema Corte sul caso del disastro ferroviario di Viareggio (*Cassazione Penale, [sección 4] núm. 32899/2021, de 8 de enero* [*en Sist. pen.*, 9 novembre 2021]).

27. Sulla stretta connessione ed interrelazione tra la tutela dell'ambiente (intesa altresì quale tutela della salute e sicurezza) interna ed esterna ai luoghi di lavoro *cfr.*, anche per i rispettivi riferimenti, S. Buoso, «Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi», cit., pág. 271 ss.; D. Castronuovo, «Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente», cit., págs. 375 ss., 388 ss.; C. Lazzari, «Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall'emergenza da Covid-19», en *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, 2020, pág. 136 ss.; S. Tordini Cagli, «Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica», cit., pág. 13 ss.; Id., «Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata», en *DPEI*, in corso di pubblicazione. Più in generale, A. Alessandri, *Diritto penale e attività economiche*, Il Mulino, Bologna, 2010, pág. 137 osserva che «l'espansione geometrica delle capacità produttive, delle potenze impiegate, l'applicazione della razionalità scientifica all'organizzazione del lavoro e alla produzione di beni o servizi, hanno mostrato, con palpabile evidenza, le ricadute nocive ben al di fuori del recinto, tradizionalmente separato della fabbrica, per investire e coinvolgere le attività»; per poi precisare che «sul piano degli interessi tutelati, ferma restando l'esigenza di tutela nei confronti di chi è occupato nella fabbrica (anche rispetto alle modalità lavorative), si è fatta strada la necessità di assumere, in termini collettivi, le pretese alla sicurezza e alla salute di coloro che, pur non coinvolti

Si pensi, ad esempio, a fronte della violazione delle medesime cautele, alla distinzione – su cui si tornerà in seguito – tra disastro "interno" ed "esterno" ai luoghi di lavoro. Distinzione richiamata per fondare l'applicazione, da un lato, della fattispecie di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.); dall'altro lato, di quella di disastro ambientale «innominato» (e sanitario) (art. 434 c.p.)[28]. Ovvero all'ipotesi di disastro ferroviario (art. 430 c.p.) da cui insorge un pericolo per l'incolumità anche di soggetti terzi, del tutto estranei alla circolazione ferroviaria[29]. Sono tutte situazioni, queste, in cui il pericolo per l'incolumità pubblica non viene limitato ad un determinato confine spaziale, bensì si espande verso l'esterno, finendo per attingere aree di rischio non direttamente salvaguardate dai doveri cautelari violati.

Inoltre, tali esemplificazioni mostrano come al carattere multidirezionale del rischio corrisponda la frequente pluridirezionalità delle cautele volte a gestirlo: se è vero che la concretizzazione di singoli rischi può porre in evidenza il loro carattere multidirezionale, è vero anche che le cautele direttamente funzionali a regolarli parrebbero rappresentare la sintesi, in

nell'attività produttiva, possono subire i danni da questa generati, che scavalcano, oltre che i cancelli della fabbrica, spesso le frontiere degli stati».

28. Così A. GARGANI, voce «Disastro colposo», cit., pág. 423, il quale rileva come, mediante tale impostazione, si pervenga ad un'«arbitraria duplicazione della rilevanza penale di un fenomeno offensivo sostanzialmente unitario». In commento al capo d'imputazione del processo Eternit – valorizzante gli eventi lesivi per i singoli sia quali malattie-infortunio ai sensi dell'art. 437 c.p. sia quali «eventi significativi di molteplici disastri interni, ritenuti componenti dei complessivi disastri (interni ed esterni) collegati, rispettivamente, ai quattro siti produttivi» –, evidenzia una violazione del *ne bis in idem* altresì D. CASTRONUOVO, «Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?», cit., pág. 8. Sull'elaborazione della giurisprudenza – da tempo monolitica – del concetto di malattia-infortunio in funzione di «aggiramento» dell'ostacolo insito nel riferimento testuale al concetto di «infortunio» (e perciò in violazione del divieto di analogia in *malam partem*) contenuto nelle disposizioni di cui agli artt. 437, 451, 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p. per ricomprendevi – oltre ai veri e propri eventi ad etiologia tipicamente immediata e violenta – anche le malattie professionali che trovano la propria causa nell'esposizione a fattori patogeni esterni *cfr.*, in giurisprudenza, *ex multis*, *Cassazione Penale, (sección 4) núm. 7564/2020, de 4 de febrero* (*en C.E.D. Cass., n. 278580*); *Cassazione Penale, (sección 4) núm. 45935/2019, de 13 junio* (*en www.olympus.uniurb.it*). In dottrina v., senza pretesa di esaustività, D. CASTRONUOVO, «I delitti di omicidio e lesioni», cit., 2021, pág. 350; D. CASTRONUOVO, «Dispositivi di prevenzione contro disastri o infortuni sul lavoro e mezzi di pubblica difesa o soccorso», en *Trattato di diritto penale*. *Parte speciale – IV*. *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, UTET, MILANO, 2010, pág. 263 ss.; S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica. Tomo I*, cit., pág. 750 ss.; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. Tomo I*, cit., pág. 560 ss.; B. PATERRA, «L'estensibilità all'extraneus della tutela antinfortunistica. Profili evolutivi e sistematici», cit., págs. 2-3; S. TORDINI CAGLI, «I delitti di comune pericolo», cit., pág. 268 ss.

29. È quanto è avvenuto, ad esempio, nella vicenda relativa al disastro ferroviario di Viareggio (*cfr.* Par. 4).

chiave prevenzionistica, di diverse tipologie di rischio. Aspiratori funzionali a ridurre l'esposizione a sostanze tossiche di soggetti posti a stretto contatto con le stesse (tipicamente i lavoratori) evitano altresì che tali polveri nocive si diffondano nelle matrici ambientali, contaminandole, e che possano arrecare pregiudizio alla salute degli abitanti le zone limitrofe al sito produttivo o, ancora, ai consumatori di prodotti agroalimentari contaminati[30]. Le cautele volte a garantire la sicurezza dei pubblici trasporti o della circolazione ferroviaria non tutelano esclusivamente i soggetti «trasportati» o, più in generale, la sicura circolazione (ferroviaria e non), ma risultano per certo idonee a salvaguardare anche l'incolumità dei lavoratori che vi accedono (a qualunque titolo) nonché di tutti coloro i quali potrebbero trovarsi nei pressi del luogo in cui il disastro si verifica[31].

Gli ultimi due esempi richiamati paiono distinguibili (*rectius* rispondere) a due diversi idealtipi di «proiezioni multidirezionali» del rischio e, parallelamente, a due diverse finalità preventive delle regole cautelari violate.

Nel primo caso, quello relativo alla mancata predisposizione degli aspiratori all'interno dell'azienda, la propagazione del pericolo (o della lesione) per la salute «esterna» e per l'ambiente necessita della previa concretizzazione del rischio «interno» ai luoghi di lavoro: la sovrapposizione pare manifestarsi solo in via «indiretta» o «di rimbalzo». I lavoratori risultano inevitabilmente esposti con maggior intensità alla sostanza tossica rispetto ai soggetti esterni o a coloro che in quei luoghi sono presenti solo occasionalmente e, proprio in quanto maggiormente a rischio di ammalarsi, vengono più intensamente tutelati. Nel secondo, quello relativo alla mancata predisposizione di cautele volte a garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria (o dei pubblici trasporti), si prescinde, viceversa, da una concretizzazione anticipata di tali rischi: la commistione (o intersezione) tra la sicurezza dei trasporti, del lavoro e, più in generale, dell'incolumità dei soggetti che potrebbero trovarsi nelle

30. Particolarmente calzante pare, in queste situazioni, il riferimento alla c.d. «porosità» del confine tra interno ed esterno (così, in particolare, S. Buoso, «Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi», cit., pág. 281. L'espressione è stata ripresa, tra i penalisti, altresì da S. Tordini Cagli, «Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata», en *DPEI*, in corso di pubblicazione). Sul tema *cfr.* S. Buoso, «Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi», cit., *passim*.; D. Castronuovo, «Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente», cit., págs. 375 ss., 388 ss.; S. Tordini Cagli, «Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica», cit., pág. 13 ss.; *EAD*., «Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata», cit., in corso di pubblicazione. Il possibile impatto dell'organizzazione produttiva sull'ambiente circostante viene messo in luce altresì da C. Lazzari, «Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall'emergenza da Covid-19», cit., pág. 137.

31. Un chiaro esempio di questa evenienza potrebbe essere rinvenuto sia nel caso del disastro ferroviario di Viareggio sia in quello relativo al crollo della cabina della funivia del Mottarone (*cfr.* Par. 4 s.).

vicinanze del luogo del disastro pare svilupparsi già in via «diretta». Salva invero quest'ultima ipotesi, in cui la potenza del disastro potrebbe essersi attenuata rispetto all'epicentro in cui questo ha avuto origine, l'integrità fisica dei lavoratori e dei trasportati è suscettibile di compromissione con egual intensità: in tal senso, a nulla rileva, naturalmente, la loro diversa qualifica.

Si delinea allora una diversa «insidiosità» nel processo di individuazione del rischio: minore nella prima ipotesi e maggiore nella seconda. Esemplificando, non vi è dubbio che l'apposizione di aspiratori sia volta a regolare in via diretta il solo rischio lavorativo (il danno all'ambiente o alla salute «esterni» – seppur prevedibili – paiono esulare dal principale scopo di tutela apprestato dalle specifiche regole cautelari violate); per converso, la naturale direzione di salvaguardia assicurata, in ipotesi, dalla corretta manutenzione degli impianti o dalla predisposizione del freno d'emergenza di una cabina funiviaria obbliga, per la sua identificazione, ad un approfondimento ulteriore.

III.1. La discutibile (e discussa) creazione di nuovi garanti alla luce della (necessaria) gestione integrata di rischi diversi

A fronte della rappresentata sovrapposizione tra rischi distinti, nonché della frequente pluridirezionalità delle regole cautelari violate, la dottrina ha evidenziato l'assoluta necessità di prevederne una gestione integrata.

In particolare, analizzando la stretta concatenazione sussistente tra la salvaguardia degli ambienti interni ed esterni ai luoghi di lavoro (intesi quale tutela sia dell'ambiente sia della salute e sicurezza della popolazione circostante al sito produttivo), si è osservato che «l'intreccio tra tutela dell'ambiente di lavoro e tutela dell'ambiente *tout court* sia "nell'ordine delle cose"; che l'ambiente di lavoro non sia che una declinazione dell'ambiente in genere; che pensare a rigidi confini tra l'uno e l'altro sia velletario»[32].

32. Così S. TORDINI CAGLI, «Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata», cit., in corso di pubblicazione. Sulla commistione tra rischi interni ed esterni ai luoghi di lavoro *cfr.*, in particolare, S. BUOSO, «Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi», cit., pág. 288 ss., la quale osserva, rispetto alla tutela antinfortunistica ed ambientale, che: «se, oggi, la tutela comune per salute e ambiente è impostata sulla eccezionalità degli incidenti e degli eventi dispersivi di sostanze inquinanti, la nuova logica deve essere quella di rafforzare sempre più la ordinarietà della preservazione *ex ante* e congiunta di quei beni. Siamo giunti a una fase di "distruzioni estreme di ogni tipo di terra", soprattutto a causa delle attività "estrattive e industriali": lo spazio delle incertezze e delle indecisioni sta davvero finendo». Sul punto, seppur con diversi orientamenti, v. altresì, tra i penalisti, D. CASTRONUOVO, «Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente», cit., págs. 375 ss., 388 ss.; S. TORDINI CAGLI, «Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata», cit., in corso di pubblicazione.

Inoltre, si è posto in luce come i rischi insiti nell'esercizio di attività produttive risentano di un inevitabile carattere circolare, che travalica i confini tra «interno» ed «esterno»; e ciò non solo nell'ottica della predisposizione di una – già menzionata – loro gestione integrata, ma anche per giustificare una possibile responsabilizzazione (persino penale) delle figure debitrici di sicurezza lavorativa nei casi di messa in pericolo (o lesione) dei beni ambiente e salute «esterni»[33]. Valorizzando ora un'interpretazione del (novellato) art. 41 Cost. in funzione di «un vero e proprio obbligo a carico dell'imprenditore di adottare provvedimenti finalizzati alla implementazione della tutela di salute e ambiente (un vero e proprio dovere di protezione o cautelare)»[34]; ora le indicazioni del quadro strategico della Commissione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, tra cui rientra l'obiettivo di «anticipare e gestire i cambiamenti del mondo del lavoro a partire dalle questioni ecologiche»[35]; ora le disposizioni normative contenute nel d. lgs. 81/2008 – ma non solo – da cui parrebbe potersi astrattamente rinvenire un vero e proprio obbligo di valutazione e gestione del rischio ambientale (inteso in senso ampio) in parallelo a quello lavorativo[36]; è stata dunque vagliata la possibilità di ravvedere nella qualifica di garanti «lavorativi» anche quella di garanti «ambientali»[37].

---

33. Così, in particolare, P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, Adapt University Press, Bergamo, 2018, *passim*.

34. S. Tordini Cagli, «Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata», cit. in corso di pubblicazione. Sul punto, S. Buoso, «Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi», cit., pág. 277, pur non ritendendo sufficiente tale modifica normativa per ampliare l'apparato di tutela predisposto dal d. lgs. 81/2008 anche alla salvaguardia dell'ambiente esterno al luogo di lavoro, osserva che «a ben vedere […] il nuovo testo dell'art. 41 Cost. accelera il passo dell'avanzata possibile verso un sempre migliore adattamento dell'organizzazione del lavoro non solo alle persone che lavorano ma anche ai vincoli dell'ambiente naturale».

35. S. Tordini Cagli, «Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata», cit. in corso di pubblicazione. In senso analogo v. anche S. Buoso, «Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi», cit., págs. 273-274.

36. Sulla questione v., seppur con diversi orientamenti, S. Buoso, «Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi», cit., págs. 278-279, 283 ss.; D. Castronuovo, «Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente», cit., pág. 390; S. Tordini Cagli, «Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica», cit., pág. 13 ss.; S. Tordini Cagli, «Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata», cit.

37. V. P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, Adapt University Press, Bergamo, 2018, pág. 169 ss., il quale ritiene che l'art. 2087 c.c. possa essere valorizzato per garantire una tutela preventiva sia interna sia esterna all'ambiente lavorativo, con la conseguenza che la violazione degli obblighi prevenzionistici connessi alla tutela dell'ambiente inteso in senso lato e della popolazione sarebbe idonea a rilevare, oltre che sul piano dell'esatto adempimento della prestazione lavorativa, certamente anche su quello penale. Più sfumata pare invece l'opinione di S. Buoso, *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, Giappichelli, Torino, 2020, págs. 126 ss., la quale, pur ritendendo valorizzabile in chiave preventiva il processo di valutazione dei rischi nell'ottica di salvaguardia anche

A tal fine, si è mostrato come il concetto di rischio lavorativo subisca, prima nell'attuale realtà economica e poi nel diritto vivente, una trasfigurazione tale da mettere in crisi i pilastri che, da sempre, ne sorreggevano l'autonomia[38].

Da un lato, «la digitalizzazione e il progresso tecnologico, ma anche la stessa globalizzazione dell'economia, e quindi la mobilizzazione e delocalizzazione delle imprese e dei lavoratori» – si rileva in dottrina – mettono in crisi la nozione di «luogo di lavoro», che «trasmuta nella organizzazione; si smaterializza, perde la sua originaria fisicità, esce dai confini dell'azienda, si proietta all'esterno»[39].

Dall'altro lato, la definizione di lavoratore tratteggiata dall'art. 2 del d.lgs. 81/2008, «abbandona[ndo] il vincolo legale e […] sgancia[ndosi] dal requisito della subordinazione e dal dato giuridico-formale, per incentrarsi sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro», viene tacciata di tendenziale universalità[40].

Ma ciò non basta.

Anche nel diritto vivente si assiste non di rado ad un evidente ampiamento, in via esegetica, della nozione di «rischio lavorativo»; e ciò per via, in particolare, del suo sostanziale appiattimento sulla nozione di «luogo di lavoro», che assume, nella definizione univocamente accolta in giurisprudenza, caratteri pressoché sconfinati. Tale ultimo concetto viene

della salute e dell'ambiente esterno, si limita a rimettere ai cultori del diritto penale il vaglio di una compatibilità con i principi di legalità e tassatività – nonché, aggiungiamo noi, di colpevolezza – delle ricadute penalistiche di un tale approdo. Nondimeno, prendendo ad esempio l'applicabilità dell'art. 55, comma 3, del d.lgs. 81/2008, che sanziona la carenza dei requisiti indicati nella disposizione o il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (così rivisitato), l'Autrice osserva che «occorrerebbe […] evitare il crearsi di un vuoto normativo nel rapporto tra configurazione della valutazione dei rischi e apparato sanzionatorio».

38. *Cfr.* S. Tordini Cagli, «Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata», cit., in corso di pubblicazione, la quale rileva che «la nozione di rischio lavorativo perde infatti di univocità e acquisisce una valenza multidimensionale e multidirezionale: l'unico elemento qualificante sembra essere la fonte da cui promana e cioè la prestazione lavorativa».

39. S. Tordini Cagli, «Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata», cit., in corso di pubblicazione. Sul punto, anche in un'ottica di disgregamento dei confini del luogo di lavoro discendente dell'emergenza pandemica, *cfr.* S. Buoso, «Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione», cit., pág. 281 ss.; F. Curi, «La tutela penale del lavoratore dai rischi psicosociali: stress da lavoro-correlato e mobbing», en D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, 2021, pág. 466; C. Lazzari, «Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall'emergenza da Covid-19», en *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, 2020, pág. 138; M. Magnani, «I tempi e i luoghi di lavoro. L'uniformità non si addice al postfordismo», en *WP CSDLE «Massimo D'Antona». IT*, 2019, pág. 299, 303; P. Pascucci, «Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro... e sulle norme sulla sicurezza di rider & co.», en *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, 2019, pág. 42 ss.

40. S. Tordini Cagli, *Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata*, cit., in corso di pubblicazione.

infatti definito come «ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro e in cui il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività», e ciò sia dalle finalità (ad esempio ludiche o artistiche) del luogo in cui si svolge l'attività lavorativa sia dalla possibilità per i terzi di accedere allo stesso[41]. I destinatari di tutela delle cautele antinfortunistiche – originariamente, in principalità, i soggetti lavoratori – divengono così, di regola, anche i terzi, sempre se presenti sui luoghi di lavoro ed a prescindere dalla causa per cui ivi si trovino: solo l'«abnormità» della loro presenza in loco parrebbe – nell'opinione giurisprudenziale – estinguere il debito di sicurezza dovuto (anche) nei loro confronti dai garanti lavorativi[42].

Tali rilievi non possono, tuttavia, essere tutti indistintamente condivisi. Se, da un lato, essi dimostrano l'impellenza dell'adozione di scelte – soprattutto legislative – funzionali a garantire una più completa e consapevole gestione preventiva di rischi sovrapposti o multidirezionali; dall'altro lato, il loro completo avallo porterebbe, in ultima analisi, a negare la valenza di canoni costituzionali fondanti la materia penale. La precisa individuazione dei soggetti garanti nonché il corretto accertamento del nesso causale e dell'elemento soggettivo impongono infatti lo sviluppo di un procedimento logico a ritroso, che trova la propria genesi nell'identificazione del rischio realizzatosi nei risultati lesivi e che, per questo, deve poter mantenere una propria identità e autonomia[43]. Come è stato attentamente evidenziato, «è da escludersi la

41. *Cfr*., *ex multis*, *Cassazione Penale, (sección 4) núm. 42024/2022, de 4 octubre* (*en www.olympus.uniurb.it*) e *Cassazione Penale, (sección 4) núm. 44654/2022, de 22 de septiembre (ivi)*. Per ulteriori approfondimenti v., da ultimo, B. PATERRA, «L'estensibilità all'extraneus della tutela antinfortunistica. Profili evolutivi e sistematici», cit., pág. 35.

42. Sul punto, S. DOVERE, «Giurisprudenza della Corte Suprema sulla colpa», cit., pág. 598, a proposito della giurisprudenza di legittimità, osserva che «si è scritto che le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verifichino, a danni del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza del soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso etiologico». La questione è stata invero specificamente approfondita nella sentenza di legittimità sul caso del disastro ferroviario di Viareggio. Per gli opportuni riferimenti dottrinali su questa importante sentenza, sempre nota 18.

43. Sul punto, D. CASTRONUOVO, «Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente», cit., pág. 376 osserva infatti che «un regolamento di confini circa gli ambiti di tutela resta [...] necessario sul piano "tecnico" della responsabilità penale, in funzione, per tacer d'altro, delle differenze in termini di tipicità (o di configurabilità o meno di circostanze aggravanti) tra i diversi gruppi di fattispecie di illecito potenzialmente invocabili, appartenenti a sistemi complessi almeno in parte

sovrapposizione, ricostruita per analogia, tra le aree di rischio, e ciò in ragione dell'autonomia delle proiezioni dei diversi fattori in direzione di beni oggetto di tutela che, quand'anche omogenei, restano comunque diversi. Il criterio per praticare tale autonoma considerazione passa attraverso la corretta descrizione dell'evento, al fine di isolare, procedendo a ritroso e sulla base della verifica circa la concretizzazione, la natura del fattore di rischio specifico che ha trovato concreta realizzazione nel risultato offensivo»[44].

L'attenzione si sposta, di conseguenza, sulla corretta individuazione del rischio che, nel caso di specie, si è concretizzato nell'evento, il quale, se in alcuni casi si appalesa nitidamente, in altri, come già osservato, si nasconde dietro l'estrinsecazione del proprio carattere multidirezionale[45].

IV. IL *LEADING CASE* IN MATERIA: IL DISASTRO FERROVIARIO DI VIAREGGIO...

Una (possibile) svolta nel processo di individuazione del rischio nelle ipotesi in cui questo non appaia limpido nella sua conformazione si è avuta, nel diritto vivente, con la recente pronuncia – e più volte menzionata – della Suprema Corte nel caso del disastro ferroviario di Viareggio[46]. La vicenda riguarda lo svio di un treno merci trasportante GPL, che, a seguito del cedimento di un assile di uno dei carri cisterna, ha provocato, nei pressi della stazione ferroviaria di Viareggio, un incendio di vaste dimensioni, a cui sono seguiti 32 decessi e svariati ferimenti, tutti a carico degli abitanti della zona circostante.

Il relativo procedimento si è concluso, nelle due fasi di merito, con le condanne di diverse persone fisiche e giuridiche per i delitti colposi di omicidio e lesioni personali aggravati dalla violazione di norme antinfortunistiche, nonché, per le sole persone fisiche, per incendio colposo e disastro ferroviario colposo. L'attenzione riservata dalla Cassazione alla specifica natura del rischio realizzatosi negli eventi (di danno e di pericolo) si deve, in principalità,

eterogenei, benché tra loro connessi (reati contro la vita e l'incolumità individuale; reati di comune pericolo contro l'incolumità pubblica; reati in materia di sicurezza del lavoro; reati contro l'ambiente), e riconducibili a tipologie di illecito morfologicamente variabili: delitti e contravvenzioni, reati di danno e di pericolo, dolosi e colposi, semplici o aggravati (dalla violazione di norme antinfortunistiche), etc».

44. Così D. CASTRONUOVO, «Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente», cit., pág. 390.

45. Il riferimento va, evidentemente, a tutte le ipotesi evidenziate sino ad ora, ovvero a tutti i casi in cui l'evento pare rappresentare, se non valutato alla luce dei criteri che verranno meglio di seguito esposti, la concretizzazione di diverse e plurime tipologie di rischio.

46. *Cassazione Penale, (sección 4) núm. 32899/2021, de 8 de enero* (*en Sist. pen.*, 9 novembre 2021). Per i riferimenti dottrinali, *supra*, nota 18.

ai risvolti – negativi per gli imputati – che sarebbero conseguiti alla sua qualificazione in termini «lavorativi». Dall'inquadramento dei delitti colposi di omicidio e lesioni personali come aggravati dalla violazione delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoro (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.), infatti, sarebbero dipese: la configurabilità, per le diverse società imputate, dell'illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231 del 2001; la legittimazione delle parti civili che avevano nel proprio scopo statutario la tutela della sicurezza dei lavoratori; il raddoppio dei termini di prescrizione (limitatamente ai delitti di omicidio colposo); la conversione del regime di procedibilità da «querela di parte» a «d'ufficio» per le lesioni personali colpose[47].

La tesi propugnata dall'Accusa – ed avallata dalle pronunce di merito – era finalizzata ad estendere l'ambito applicativo della normativa sulla sicurezza del lavoro per renderla valorizzabile anche *sedes materiae*: dunque, altresì al caso di specie. In particolare, ad essere contestata era la violazione del combinato disposto di due disposizioni (gli artt. 2, lett. n, e 18, comma 1, lett. q del d. lgs. 81/2008), la cui lettura congiunta avrebbe implicato – nella visione Accusatoria – la ricomprensione di ogni rischio suscettibile di investire la popolazione esterna all'ambiente lavorativo nell'oggetto delle prescrizioni imposte dall'art. 18, comma 1, lett. q del d. lgs. 81/2008. In altri termini, l'obbligo di datori di lavoro e dirigenti di «prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio» (art. 18, comma 1, lett. q del d. lgs. 81/2008) veniva inteso non in senso letterale (ovvero quale obbligo di elidere i rischi per la salute della popolazione o per l'ambiente causati dall'adozione di determinate misure tecniche volte a gestire rischi lavorativi), bensì in senso ampio, come dovere di prendere adeguati provvedimenti per evitare rischi per la salute o per l'ambiente discendenti dall'attività lavorativa[48].

Sul punto, è così intervenuta la Cassazione, che – con una pronuncia auspicabilmente destinata a diventare un *leading case* in materia – ha corretto l'impostazione delle pronunce di merito, enunciando un principio di diritto idoneo, se approfondito, non solo a riportare l'interpretazione del concetto

47. Sul punto *cfr.* M. F. Carriero, V. Camurri, «La Cassazione sul "disastro di Viareggio": l'aggravante antinfortunistica e la giurisdizione sugli enti stranieri», cit., pág. 7 ss.; D. Castronuovo, «I delitti di omicidio e lesioni», cit.; Id., «Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente», cit., págs. 388-389; F. Contri, «L'estensione della nozione di rischio lavorativo nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro», cit., pág. 2505; F. Giunta, «Le aggravanti del "luogo di lavoro": a proposito di un'espressione fuorviante», cit., pág. 1; M. Mantovani, «Il disastro ferroviario di Viareggio e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro», cit., pág. 3; B. Paterra, «L'estensibilità all'extraneus della tutela antinfortunistica», cit., págs. 2-3; S. Tordini Cagli, «Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica», cit., pág. 2.

48. *Cfr. Cassazione Penale, (sección 4) núm. 32899/2021, de 8 de enero*, pág. 317 ss.

di rischio lavorativo su binari di stretta legalità, bensì anche a risolvere gran parte dei «casi limite» sino ad ora attenzionati.

In particolare, ferma la configurazione dei delitti colposi in questione, qualificato il rischio concretizzatosi nell'evento sottoposto al proprio vaglio come «rischio per la circolazione ferroviaria», la suprema Corte ha enucleato la seguente massima: «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 589, co. 2 (e all'art. 590, co. 3) cod. pen., la locuzione "se il fatto è commesso ... con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" va interpretata come riferita ad eventi nei quali risulta concretizzato il rischio lavorativo, per essere quelli causati dalla violazione di doveri cautelari correlati a tale tipo di rischio. Per rischio lavorativo deve intendersi quello derivante dallo svolgimento di attività lavorativa e che ha ordinariamente ad oggetto la sicurezza e la salute dei lavoratori ma può concernere anche la sicurezza e la salute di terzi, ove questi vengano a trovarsi nella medesima situazione di esposizione del lavoratore»[49].

Il carico innovativo, quantomeno nel diritto vivente, di tale assunto è evidente: si può avere concretizzazione di un rischio lavorativo se (e solo se) tale rischio deriva dall'attività lavorativa ed è *«causato»* dalla violazione di doveri cautelari che hanno *ordinariamente* ad oggetto la sicurezza e la salute dei lavoratori[50].

Alla logica di accertamento *ex post* (volta ad individuare il rischio che in concreto si è realizzato nell'evento) se ne accompagna, in questo modo, anche una *ex ante*: l'evento deve rientrare in quella classe di eventi che la regola cautelare violata mirava *direttamente* a prevenire.

Per potersi dire concretizzato un vero e proprio rischio lavorativo, dunque, si deve accertare che l'evento si sia verificato «*a causa* di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline» destinate *in via prioritaria* a garantire la salvaguardia della salute e sicurezza dei soggetti lavoratori. A nulla rileva che in concreto nessun lavoratore sia stato vittima dell'evento avverso: ciò che importa è che il soggetto materialmente colpito si trovi «nella medesima situazione di esposizione del lavoratore»[51].

---

49. *Cassazione Penale, (sección 4) núm. 32899/2021, de 8 de enero*, págs. 311-312.

50. *Cfr.* D. CASTRONUOVO, «I delitti di omicidio e lesioni», cit., p. 374. Per lo sviluppo di tale assunto sia consentito il rinvio a F. CONTRI, «L'estensione della nozione di rischio lavorativo nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro», cit., pág. 2509 ss.

51. Osserva infatti la Corte di legittimità che «quel che la Corte di appello non ha colto è che il rischio tipico dell'imprenditore ferroviario attiene alla sicurezza della circolazione ferroviaria; esso può concretizzarsi anche nei confronti dei lavoratori dipendenti, senza per questo mutarsi – addirittura per chiunque ne risulti investito – in rischio lavorativo» (così *Cassazione Penale, [sección 4] núm. 32899/2021, de 8 de enero*, pág. 312). Ciononostante, V. MONGILLO, «Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio», cit., pág. 954 evidenzia come l'assenza di concrete offese ai lavoratori

Tale assunzione trova di seguito la propria conferma, allorquando la Cassazione, censurando, sul punto, l'impostazione adottata dalla Corte d'Appello, rileva che «essa istituisce il datore di lavoro quale garante della salute della popolazione e della integrità dell'ambiente esterno al luogo di lavoro *in via principale*. Si tratta di una tesi che non trova conforto nei poteri dispositivi del datore di lavoro e nel tratteggio che il legislatore fa del sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali»[52].

La visione – generalizzata – sottesa al rilievo citato è evidente. Esistono rischi per loro natura «multidirezionali»: tuttavia, non per questo il datore di lavoro – ovvero il soggetto garante di uno specifico rischio (in specie, quello lavorativo) – può ritenersi gravato e, dunque, successivamente responsabile, in quanto tale, del dovere di tutelare beni suscettibili di ricevere un danno meramente «indiretto» dalla mala gestio del rischio che è chiamato, in via principale, a gestire. Lo stesso potrà rispondere dei soli eventi lesivi dipendenti dalla violazione di cautele volte prioritariamente a regolare un rischio rientrante nella sua sfera di signoria.

«L'interpretazione letterale delle disposizioni in questione – osserva allora la Corte – evidenzia che esse [ma in specie l'art. 18, lett. q] non pongono in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare misure di prevenzione a tutela della popolazione o dell'ambiente ma piuttosto quello di adottare le misure in grado di evitare che quelle messe in campo per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorativa possano determinare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno. L'intento del legislatore è quindi quello di evitare che in funzione della sicurezza delle attività lavorative e dei relativi addetti si creino rischi per la popolazione e l'ambiente esterno ai luoghi di lavoro. […] Non dover recare danno ad un determinato bene – concluderà il Collegio– è cosa ben diversa dal dovere di tutelarlo»[53].

V. (*SEGUE*) …E LA SUA VALENZA PIÙ GENERALE IN TEMA DI DISASTRI

Le statuizioni – illuminati – di questa pronuncia sono suscettibili – a modesto parere di chi scrive – di travalicare i confini del caso di specie, potendo assumere

abbia senza dubbio agevolato la Suprema Corte nell'individuare il rischio relativo alla sicurezza ferroviaria quale rischio specifico concretizzatosi nell'evento. Nella ricerca del rischio specifico tradottosi nei risultati lesivi, paiono prescindere sia dalla qualifica del soggetto effettivamente coinvolto sia dalla verificazione dell'evento lesivo nell'ambito dello svolgimento di una attività lavorativa altresì M. F. Carriero, V. Camurri, «La Cassazione sul "disastro di Viareggio": l'aggravante antinfortunistica e la giurisdizione sugli enti stranieri», cit., págs. 27 ss.

52. *Cassazione Penale, (sección 4) núm. 32899/2021, de 8 de enero*, pág. 318.

53. *Cassazione Penale, (sección 4) núm. 32899/2021, de 8 de enero*, pág. 318 ss.

funzione dirimente per tutte le ipotesi in cui si abbia una (a questo punto solo «apparente») commistione tra rischi diversi; e ciò sia nell'esegesi dei delitti di evento dannoso alle persone sia nell'interpretazione di quelli posti a tutela della pubblica incolumità[54]. Il principio enunciato risponde infatti a logiche di garanzia proprie del diritto penale e, in particolare, ai canoni di legalità e di responsabilità per fatto proprio (e colpevole).

Nell'analisi dei delitti contenuti nel Titolo VI, Libro II, del c.p., tale corollario non potrà allora essere messo in crisi dai caratteri della diffondibilità del pericolo" e dell'indeterminatezza delle possibili vittime[55]: il primo non fa altro che evidenziare la proiezione multidirezionale del rischio (specifico); il secondo, viceversa, si pone in parallelo alla citata – e condivisibile – irrilevanza della qualifica dei soggetti coinvolti nel singolo evento lesivo.

In estrema sintesi, nei delitti di comune pericolo, come in quelli di evento dannoso alle persone, il rischio concretizzatosi nell'evento disastroso deve coincidere con quello che le cautele violate erano, in via diretta (o prioritaria), volte a gestire: l'evento disastroso deve rispondere alla *ratio* prioritaria di tutela apprestata dalle regole cautelari violate.

Sia consentita, sul punto, una brevissima digressione, pur sempre funzionale a rafforzare tali considerazioni.

Nell'approfondire i delitti posti a tutela della pubblica incolumità, si potrebbe rilevare la presenza di alcune ipotesi, segnatamente quelle in cui appaiano *ex ante* predeterminabili i soggetti suscettibili di ricevere un danno dalla verificazione di un disastro, nelle quali il requisito dell'indeterminatezza delle possibili vittime parrebbe perdere la sua reale portata selettiva[56]. Nondimeno, una più attenta analisi di tali situazioni mostra come, in realtà, la molteplicità e pluridirezionalità dei processi causali innescati dalla fonte di pericolo, nonché l'autonomia della dinamica eziologica attivata dall'evento di danno (alle cose), impediscano di prevedere se taluno, chi e come sarà colpito. «La collocazione, al fine di uccidere, di un ordigno esplosivo su un aereo contenente un numero determinato di persone al momento del decollo; l'incendio di un villaggio avente un numero determinato di abitanti; l'affondamento di una nave avente un certo numero di passeggeri ecc. […], se valutati alla luce del concorrente criterio della diffondibilità del pericolo o del danno, implicata nei mezzi utilizzati, confermano, invero, la difficoltà

54. Sulla possibilità di trasposizione dei principi enucleati dalla pronuncia sul caso del disastro ferroviario di Viareggio anche nell'ambito di applicazione dei delitti di comune pericolo facenti parte del c.d. microsistema posto a tutela della sicurezza del lavoro e, in particolare, del delitto di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.) si rinvia nuovamente a quanto già osservato in

55. Sul significato di tali elementi v., *inter alios*, A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., pág. 160 ss.

56. Sul punto *cfr.*, anche per gli opportuni riferimenti, A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., pág. 164 ss.

di preventivare anticipatamente il «corso delle cose». […] Come escludere, nelle esemplificazioni citate che, a seguito dell'esplosione, l'aereo possa cadere su una zona abitata o collida con altri aeromobili, o che l'incendio si estenda ad altri agglomerati, o, infine, che gli effetti del disastro nautico non si ripercuotano su altre imbarcazioni vicine o giunte in soccorso?»[57].

Breve, il requisito della multidirezionalità delle dinamiche lesive, soccorrente altresì a supporto della validità del connotato relativo all'indeterminatezza delle possibili vittime, è carattere insito e trasversale nei delitti in esame. Le ripercussioni che promanano dalla verificazione di un disastro sia su altri referenti materiali – che potrebbero far sorgere il dubbio della concretizzazione di più e diversi rischi – sia su beni, seppur contigui, distinti dall'incolumità pubblica (come avviene, ad esempio, per il bene ambiente) non possono valere a mutare la morfologia del disastro verificatosi, il quale risponde, a sua volta, alla realizzazione di un rischio specifico. La caduta di un aeromobile su centri abitati dipendente dalla violazione di cautele volte a salvaguardare il rischio relativo alla sicurezza aviatoria non potrebbe valere a mutare la tipologia del disastro (e nemmeno ad affiancarvene un'altra): quello è (e rimane) un disastro aviatorio. In un caso del genere non potrebbe essere valorizzata, in via autonoma o in concorsuale, il delitto di «crollo di costruzioni» (art. 434 c.p.): la fattispecie applicabile dovrebbe rimanere quella di cui all'art. 428 c.p.[58].

Se la caduta dell'aereo nel centro abitato provocasse poi morti o lesioni a carico di soggetti «terzi» non trasportati, tali eventi lesivi potrebbero essere naturalmente imputati al soggetto che abbia mal gestito il rischio relativo alla sicurezza aviatoria: essi ne rappresentano, per l'appunto, la concretizzazione. Parallelamente a quanto avvenuto nell'ipotesi del disastro ferroviario di Viareggio, infatti, il soggetto garante del rischio per l'incolumità dei passeggeri dell'aeromobile risponderebbe di tali eventi lesivi in quanto gli individui «terzi» colpiti si porrebbero, rispetto a tale rischio, nella medesima posizione assunta da quelli direttamente tutelati dalle regole cautelari violate: i trasportati[59].

Quello richiamato, è un caso «semplice», in cui non pare dubitabile che ad essersi concretizzato sia un rischio aviatorio; tuttavia, il carattere

57. A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., pág. 167. Nello stesso senso v. sempre A. GARGANI, voce «Incolumità pubblica (delitti contro la)», cit., pág. 578.

58. In caso contrario, la violazione del principio di *ne bis in idem* sarebbe evidente.

59. Il carattere multidirezionale delle dinamiche lesive insito nei delitti di comune pericolo parrebbe far così rientrare nel cono di protezione predisposto dalla regola cautelare violata anche eventi lesivi che paiono esulare dalla sua destinazione prioritaria, sempre che, però, essi non rappresentino la concretizzazione di un rischio diverso. Per un approfondimento circa il significato di «medesima esposizione» rispetto al rischio *cfr.* F. CONTRI, «L'estensione della nozione di rischio lavorativo nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro», cit., pág. 2515 ss.

diffusivo del pericolo, se non evidenziato quale elemento costitutivo delle ipotesi in esame, potrebbe, anche in quest'ordine di ipotesi, fondare dubbi sull'individuazione del tipo di disastro verificatosi.

In conclusione, se il rischio mostra il proprio carattere multidirezionale nei casi «facili» come quello ora rappresentato, è naturale che tale peculiare connotato esplichi, a maggior ragione, la propria portata anche nei casi in cui una sovrapposizione tra rischi diversi sia «nelle cose»[60]. Ciò non deve spaventare, anzi, porta a rafforzare l'assunto di partenza: anche nei casi di convergenza tra rischi diversi (sia essa diretta o indiretta), l'individuazione della fattispecie applicabile al caso concreto e dei soggetti garanti chiamati a risponderne, così come l'accertamento del nesso causale e dell'elemento soggettivo, dovranno partire dall'identificazione della vera natura del rischio concretizzatosi, quindi dalla valorizzazione della destinazione prioritaria (o ordinaria) delle regole cautelari violate. La multidirezionalità dei rischi e la corrispondente pluridirezionalità delle cautele volte ad evitare l'evento disastroso sono elementi che attraversano trasversalmente tutte le «morfologie» di eventi di danno alle cose «qualificati dal pericolo per una pluralità indeterminata di persone».

Logica conclusione del ragionamento, allora, è che dalla violazione delle medesime cautele potrebbe derivare solamente un «tipo» di disastro, che corrisponde, a sua volta, alla concretizzazione del rischio specifico che quei doveri cautelari violati erano volti (quantomeno in via «prioritaria» o «orinaria») a prevenire, a nulla rilevando le eventuali ripercussioni che questo possa avere su altri oggetti o beni.

VI. DISASTRO INTERNO, DISASTRO ESTERNO E RISCHIO LAVORATIVO. VI È ANCORA SPAZIO PER I DISASTRI «SUI LUOGHI DI LAVORO»?

Uno dei delitti di comune pericolo che, nel diritto vivente, fonda le maggiori oscillazioni interpretative – e che, anche alla luce di quanto esposto *supra*[61], ingenera incertezze quanto alla definizione del proprio ambito applicativo (oltre che alla possibilità di ravvisarne uno) – è, senza dubbio, quello di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.).

60. Il riferimento, qui generalizzato, è a R. DEL PUNTA, «Prefazione» a P. TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., a sua volta richiamato, sempre nell'ambito della tutela dell'ambiente (inteso in senso ampio), da S. TORDINI CAGLI, «Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata», cit., in corso di pubblicazione.

61. V. par. 3.1.

Tale fattispecie si colloca al vertice del c.d. microsistema posto a tutela della sicurezza del lavoro (artt. 437, 451 e 449 c.p.)[62] ed è sempre stata sostanzialmente interpretata – sia in dottrina sia in giurisprudenza – valorizzando segnatamente la nozione di «luogo di lavoro». In altri termini, e con le dovute approssimazioni, la rimozione o l'omissione di «impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro» è sempre stata intesa come rimozione o omissione di mezzi destinati a prevenire disastri o infortuni sui «luoghi di lavoro»[63].

62. Così A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., pág. 532, il quale osserva che: «le fattispecie di "rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro" e di "omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro" formano [...] un "micro-sistema", posto "a cavaliere" tra il polo fondamentale dell'intervento a lesione avvenuta (delitti colposi di danno) e quello, altrettanto essenziale, "della prevenzione legata al dato puramente oggettivo dell'omissione delle cautele prescritte"». Nello stesso senso v., tra gli altri, anche D. Castronuovo, «Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli», en D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, 2021, págs. 21-22. In senso parzialmente difforme, invece, R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., pág. 145 osserva come le fattispecie di cui all'art. 437 e 451 c.p. «[diano] luogo ad una sorta di microsistema, insieme alle fattispecie di disastro innominato doloso e colposo di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen».

63. Sul punto, S. Corbetta, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., págs. 704-783, osserva che tali fattispecie (salvo per il riferimento all'incendio di cui all'art. 451 c.p.) non sono poste a salvaguardia dei lavoratori, bensì della sicurezza dei luoghi di lavoro. In senso analogo anche R. Alagna, «Artt. 437 e 451 c.p.», en *Il diritto penale del lavoro*, coordinadores N. Mazzacuva, E. Amati, Utet, Milano, 2007, pág. 237, il quale rileva che, in questa ipotesi, «la fonte del pericolo è circoscritta ai luoghi di lavoro», arrivando finanche a sostenere che il bene giuridico tutelato sia «l'incolumità sul lavoro»; D. Castronuovo, V. Felisatti, «Dispositivi di prevenzione», en *Diritto penale, vol. II*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Utet, Milano, 2022, pág. 3601 ss., i quali osservano che «l'ambito soggettivo di tutela va delimitato in funzione del luogo di lavoro, ossia del contesto ambientale al quale si riferisce l'esigenza preventiva fatta propria dalla disposizione («disastri o infortuni sul lavoro»)»; A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., pág. 532 ss. e F. Pinelli, A. Berardi, «Lineamenti di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro», Wolters Kluwer, Milano, 2020, pág. 260, i quali fanno esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente lavorativo; S. Tordini Cagli*, «I* delitti di comune pericolo», cit., pág. 262, la quale osserva che «i due articoli [437 c.p. e 451 c.p.] selezionano [...] tra le possibili fonti del rischio, solo quelle che si riferiscono al luogo di lavoro»; V. Zagrebelsky, voce «Omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro», en *Enc. dir., Vol. XXX*, Giuffrè, Milano, 1980, pág. 8 ss. Più sfumate paiono, invece, le opinioni di R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., pág. 165 e di B. Deidda, voce «Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)», en *Enc. dir., Annali X*, Giuffrè, Milano, 2017, pág. 891. Il primo, infatti, osserva che «dei due reati [di cui agli artt. 437 e 434 c.p.] l'uno (ex art. 437 cod. pen.) è destinato a prevenire il pericolo per la pubblica incolumità per una collettività lavorativa e l'altro (ex art. 434 cod. pen.) all'esterno dell'ambiente lavorativo», potendo, dunque, ben concorrere tra loro; il secondo, viceversa, rileva che «destinatari della tutela sono tutti coloro che, in costanza o a causa dell'attività lavorativa, siano esposti ai comuni pericoli che da essa derivano. Nonostante sia chiaro dalla lettera della legge che il bene tutelato è la sicurezza del lavoro – prosegue l'Autore –, i soggetti tutelati non solo i lavoratori, ma tutti coloro che per le più varie ragioni vengono a contatto con l'attività lavorativa».

Nondimeno, la già citata posizione dottrinale, di matrice giuslavoristica, che da tempo evidenzia la necessità di considerare l'ambiente interno ed esterno ai luoghi di lavoro come *unicum* meritevole di salvaguardia mette in crisi la rappresentata impostazione interpretativa[64].

Da un lato, infatti, la c.d. «porosità dei confini dei siti produttivi» risulta insuscettibile, nella concreta realtà economica, di limitare l'espansione degli effetti dannosi o pericolosi derivanti dell'esercizio di attività economiche all'interno dei confini aziendali[65].

Dall'altro lato, il concetto di «luogo di lavoro» – sia per l'ampia definizione datane dal d. lgs. 81/2008 sia per l'estensione che tale elemento assume nel diritto vivente – finisce per assumere, come visto, una modestissima portata selettiva[66].

Inoltre, il progresso tecnologico nonché la grande difficoltà di individuare un vero e proprio luogo di lavoro nell'esercizio di determinate classiche attività economiche contribuiscono alla «decadenza» di tale elemento «spaziale», che, sino a poco tempo fa, definiva, insieme alla nozione di «lavoratore», i confini (molto più nitidi) del «rischio lavorativo». Ci si chiede, allora, se possa considerarsi «luogo di lavoro» un ambiente ad uso non esclusivo dei lavoratori, ma frequentato prevalentemente da terzi (si pensi, a titolo esemplificativo, alle aree comuni di un centro commerciale); quale sia il luogo di lavoro di un conducente di un autobus (se il suo automezzo o la moltitudine delle strade che percorre)[67]; infine, se non sia forse vero che il lavoro svolto mediante l'utilizzo di nuove piattaforme, strumenti o realtà digitali – si pensi, ad esempio, allo smart-working o, magari nel prossimo futuro, al metaverso[68] – conduca ad una smaterializzazione e dissoluzione di tale concetto.

Invero, almeno parte di queste criticità paiono essere state ravvisate dalla giurisprudenza, la quale, però, si è spesso orientata verso moduli applicativi della fattispecie di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli

64 V., per tutti, gli autori citati alla nota 37

65. Già A. ALESSANDRI, «Il pericolo per l'incolumità pubblica nel delitto previsto dall'art. 437 c.p.», cit., pág. 270 osservava infatti che «è utile […] riflettere sulla sempre più evidente interconnessione tra la tutela dell'incolumità dei prestatori di lavoro nell'ambiente di lavoro e la salvaguardia della salute della popolazione: è infatti ormai acquisita la consapevolezza che, in pratica, gli effetti nocivi causati dai processi produttivi, che investono la collettività in generale, di sovente risultano essere l'espansione e la diffusione sul territorio di dinamiche offensive che in via primaria attaccano le persone presenti sul luogo di lavoro. In questo senso, la protezione dell'integrità e della vita di chi si trova sul luogo di lavoro diviene uno dei presupposti – da un punto di vista logico e d'iniziativa sociale – per la più globale tutela dei beni collettivi». Sul punto, sia consentito comunque il rinvio a quanto già osservato al Par. 3.1.

66. *Cfr.* Par. 3.1.

67. F. GIUNTA, «Le aggravanti del "luogo di lavoro": a proposito di un'espressione fuorviante», cit., pág. 1.

68. Per una definizione del termine si rinvia a www.treccani.it/enciclopedia/metaverso/..

infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.) quantomai oscillanti, imprevedibili e talvolta financo obliteranti il riferimento letterale – che ne fonda altresì la collocazione sistematica – al concetto di «disastro»[69]. Ciò è quanto è avvenuto sia nell'ambito di processi caratterizzati dall'evidenza di gravi danni all'ambiente e alla salute della popolazione causati dall'esercizio di attività economiche in violazione (o meno)[70] ora di prescrizioni volte a contenere, in prima battuta, l'esposizione di lavoratori a sostanze tossiche, ora di limiti di emissione di fumi o gas tossici nell'ambiente esterno; sia in ipotesi relative alla verificazione di disastri (tecnologici) dipendenti dall'omissione o dal ritardo di cautele volte a garantire la sicurezza degli utenti o, più in generale, degli impianti o manufatti.

VI.1. La mancata apposizione di cautele volte a ridurre le emissioni nocive o inquinanti

Quanto alla responsabilità insita nell'esercizio di attività produttive, un primo gruppo di ipotesi, tra le quali spiccano sia la costruzione del capo d'imputazione sia le due sentenze di merito nel caso Eternit, si connota, seppur con percorsi argomentativi parzialmente differenti, per la sostanziale estromissione, in via esegetica, del riferimento all'evento disastroso contenuto al primo e al secondo comma dell'art. 437 c.p. In particolare, in queste due pronunce torinesi, relative ad una tra le più tristi e note vicende di esposizione a sostanze tossiche conosciute dalla storia giudiziaria del nostro paese, la fattispecie in esame viene posta a fondamento della contestazione delle oltre 2500 morti (specificatamente individuate) occorse in capo a soggetti lavoratori di Eternit e di società esterne che interagivano con i siti produttivi

69. Per una proposta *de iure condendo* circa l'enucleazione di «delitti di pericolo individuale» – la cui collocazione sistematica potrebbe essere individuata «o all'interno di un autonomo e innovativo Titolo XII-*bis* del codice penale, intitolato "Dei delitti di pericolo individuale", di seguito ai "Delitti contro la persona" o, in alternativa, con la stessa denominazione, all'interno di un nuovo Capo IV, collocato nel Titolo VI ("Delitti contro l'incolumità pubblica") e intitolato "Dei delitti di pericolo individuale"» – ed al cui interno potrebbe essere valorizzata la fattispecie di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.) nella parte in cui si riferisce alla prevenzione degli infortuni sul lavoro *cfr.* A. Gargani, S. Zirulia, D. Castronuovo, *Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci, etc.)*, en *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP*, coordinador Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale, Edizioni DiPLaP, Milano, 2023, pág. 810 ss. In argomento v. altresì A. Gargani, «Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma», en *Leg. pen.*, 9 settembre 2020, *passim*.

70. Il riferimento è alla tendenza giurisprudenziale orientata a non a non ritenere *lato sensu* scriminante il rispetto dei limiti di c.d. «rischio consentito» nell'esercizio di attività intrinsecamente rischiose qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni di legge (o autorizzative), si siano verificati eventi avversi. In argomento, si rimanda a quanto già osservato alla nota 6.

della prima, inquadrate, in primo grado, come altrettanti «infortuni sul lavoro» o, in secondo grado, come elementi strutturali del disastro interno, ritenuto tuttavia prescritto in forza della riconosciuta qualificazione giuridica come circostanza aggravante. La verificazione del vero e proprio «disastro» – la cui definizione risulta, peraltro, tutt'altro che univoca – è ricompresa nell'ambito di applicazione della fattispecie – di formazione giurisprudenziale – di disastro ambientale (e sanitario) di cui all'art. 434 c.p., ritenuta comunque idonea a contenere anche il disastro interno ai luoghi di lavoro[71].

71. Cfr. Trib. Torino, Sez. I, 13 febbraio 2012, imp. Schmidheiny e altro, en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 14 maggio 2012 e C. App. Torino, Sez. III, 3 giugno 2013, en *Quest. giust.*, 21 novembre 2014. Invero, tale impostazione pare essere stata superata dalla Cassazione, che ha confermato l'avvenuta estinzione del delitto di cui all'art. 437 c.p. mediante un semplice richiamo alle argomentazioni, sul punto, relative all'art. 434 c.p., considerando la fattispecie di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro» aggravata non già dai singoli infortuni (anche intesi come oggetto del disastro), quanto, piuttosto, dall'evento di pericolo-disastro interno. In particolare, la Suprema Corte, rigettando le ricostruzioni propugnate dai giudici di merito funzionali a ricondurre alla fattispecie di cui all'art. 434 c.p. fenomeni di perdurante contaminazione ambientale ed (in secondo grado) altresì epidemiologici, evidenzia che il «disastro» deve essere definito quale «fatto distruttivo di proporzioni straordinarie, qualitativamente caratterizzato dalla pericolosità per la pubblica incolumità», da cui devono rimanere estranei i singoli eventi lesivi. Da qui la qualificazione di tale delitto quale reato istantaneo ad effetti eventualmente permanenti e la conseguente dichiarazione estinzione del reato per l'individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione dal momento della cessazione delle condotte. Così Cass. pen., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 24 febbraio, 2015, con nota di S. Zirulia., «Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione». La bibliografia in commento alla vicenda è anche quantitativamente cospicua. Sul punto v., senza pretesa di esaustività, A. Abrami, J.P. Teissonniere, «Il caso Eternit», en *Riv. giur. ambiente*, 2014, pág. 301 ss.; R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., pág. 175 ss.; D. Brunelli, «Il disastro populistico», cit., pág. 254 ss.; D. Castronuovo, «Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche», cit., pág. 107 ss.; S. Corbetta, «Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive», en *Criminalia*, 2014, pág. 275 ss.; F. Forzati, «Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto», en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 11 marzo 2015; A. Gargani, «I mille volti del disastro. Nota introduttiva», en *Criminalia*, 2014, pág. 251 ss.; G.L. Gatta, «Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit», en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 24 novembre 2014; L. Masera, «Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale», en *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2014, fasc. 3-4, pág. 343 ss.; Id., «La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di riflessione», en *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, pág. 1565 ss.; Id., «La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni», en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 30 maggio 2012; A. Miriello, «Disorientamenti sul computo della prescrizione per il disastro innominato», en *Arch. pen.*, 2015, fasc. 2, pág. 686 ss.; A. Palma, «(nota a Trib. Torino, sez. I, 13 febbraio 2012)», en *Studium iuris*, 2012, pág. 1179 ss.; M. Paoli, «Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit», en *Cass. pen.*, 2014, pág. 1802 ss.; M. Poggi D'angelo, «(nota a Cass., sez. I, 19.11.2014, n. 7941)», en *Cass. pen.*, 2015, pág. 2638 ss.; G. Ruta,

In un secondo gruppo di ipotesi, invece, viene mantenuta la distinzione tra veri e propri disastri interni ed esterni ai luoghi di lavoro: i primi sono ricondotti alla fattispecie di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.); i secondi, viceversa, a quella di disastro ambientale innominato (art. 434 c.p.)[72]. Tra queste, è senz'altro annoverabile il caso Ilva: altra emblematica ipotesi di responsabilità per «modo» di produzione connessa alla dispersione, all'interno e all'esterno della realtà aziendale, di sostanze tossiche durante (ed a causa) dello svolgimento dell'attività produttiva[73]. Per vero, in questa vicenda, le malattie insorte in capo ai lavoratori non vengono né, parallelamente a quanto avvenuto nel caso Eternit, valorizzate ai fini della contestazione dei delitti colposi di omicidio e

«Problemi attuali intorno al disastro innominato», en *Criminalia*, 2014, pág. 293 ss.; L. Santa Maria, «Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit», en *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, fasc. 1, pág. 74 ss.; E. Scaroina, «Ancora sul caso Eternit: la "giustizia" e il sacrificio dei diritti», en *Arch. pen.*, 2015, fasc. 3, pág. 877 ss.; S. Tordini Cagli, «I delitti di comune pericolo», cit., pág. 280 ss.; M. Venturoli, «Il caso Eternit: l'inadeguatezza del disastro innominato a reprimere i "disastri ambientali"», en *Giur. it.*, 2015, pág. 1219 ss.; S. Zirulia, «Caso Eternit: luci e ombre nella sentenza di condanna in primo grado», en *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, pág. 471 ss.; Id., *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, cit., pág. 148 ss.; Id., «Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione», en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 24 febbraio 2015; Id., «Processo Eternit: a che punto siamo?», en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 18 novembre 2013. Più complessa pare, invece, la ricostruzione operata dalle pronunce – specificatamente di primo grado e di legittimità – nel caso del disastro del petrolchimico di Porto Marghera. In tali arresti giurisprudenziali, infatti, il disastro c.d. innominato di cui all'art. 434 c.p. viene ritenuto idoneo a ricomprendere due distinte ipotesi di disastro: quello interno e quello esterno ai luoghi di lavoro. Sul punto sia consentito il rinvio, anche per i relativi riferimenti, a S. Zirulia, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, cit., pág. 106 ss.

72. Pare condividere questa impostazione R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., pág. 165, il quale ritiene la previsione di cui all'art. 437 c.p. più specifica rispetto al c.d. disastro innominato di cui all'art. 434 c.p., «con il quale può logicamente concorrere». Il primo – nella visione dell'Autore – è infatti destinato a prevenire il pericolo per la collettività lavorativa; il secondo, viceversa, è posto a tutela dell'incolumità pubblica esterna.

73. *Cfr. Corte d'Assise di Taranto, sentenza núm. 1/2021, de 31 de mayo*. L'espressione è tratta, evidentemente, da F. Bricola, «Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione», en *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Atti del Convegno di studio organizzato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, 17-18 dicembre 1976, Milano, 1978, pág. 75 ss. Nondimeno, proprio con riferimento al caso Ilva, C. Ruga Riva, «Il caso Ilva, avvelenamento e disastri dolosi», en *Casi di diritto penale dell'economia*, vol. II, coordinadores L. Foffani, D. Castronuovo, Il Mulino, Bologna, 2015, pág. 150 evidenzia come «la quantità e qualità delle imputazioni iniziali (35 capi di imputazione contestati a 50 persone fisiche, 3 capi contenenti illeciti amministrativi da reato, contestati a 3 persone giuridiche), così come le vicende cautelari che hanno attinto Ilva e le società controllanti, ingenerano il dubbio che si tratti, più radicalmente, di un processo a un tipo di produzione (grande industria dell'acciaio), reputato in sé non sostenibile sul piano ambientale». Per una precisa sintesi della pronuncia cfr., in particolare, G. Ruggiero, «Appunti sul processo ambiente svenduto», in *Sist. pen.*, 20 dicembre 2023. Per le vicende giudiziarie, anche sovranazionali, che hanno interessato lo stabilimento Ilva, S. Buoso, *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, cit., pp. 104 ss.

lesioni personali né, contrariamente all'ipotesi precedente, specificatamente individuate: l'aumento di morbilità (e di mortalità) interno all'azienda è valorizzato dalla Pubblica Accusa – e riconosciuto dal Tribunale – solamente come prova della verificazione di plurime malattie-infortunio e, soprattutto, del disastro interno ai luoghi di lavoro[74]. Ne discende, in presenza della prova della mancata adozione negli ambienti lavorativi di impianti, apparecchi e segnali volti a prevenirne la verificazione, l'applicabilità della fattispecie di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro» nella sua forma aggravata (art. 437, comma 2, c.p.)[75].

Ciononostante, in entrambe le vicende, ciò che colpisce – e su cui si intende soffermare l'attenzione – è la facilità con cui le violazioni delle medesime regole cautelari sono poste a fondamento di plurime e distinte ipotesi criminose, tutte poste a salvaguardia del medesimo bene giuridico: la pubblica incolumità[76].

Nel caso Eternit, l'uguaglianza della maggior parte delle contestazioni alla base dell'applicazione sia della fattispecie di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.) sia della fattispecie di disastro ambientale innominato e sanitario (art. 434 c.p.)[77], in uno con

74. *Cfr.* C. Ruga Riva, «Il caso Ilva, avvelenamento e disastri dolosi», cit., p. 157 ss.

75. Alcuni dubbi – per vero – potrebbero essere fondati sulla legittimità della riconduzione di alcune delle cautele omesse – specificatamente attinenti alle scorrette modalità lavorative – ai «mezzi» specificatamente enunciati nella disposizione di cui all'art. 437 c.p. Sul punto già C. Ruga Riva, «Il caso Ilva, avvelenamento e disastri dolosi», cit., pág. 158.

76. Per evitare possibili fraintendimenti, pare opportuno precisare (nuovamente) che ciò che in questa sede si intende evidenziare non è tanto la legittimità (o meno) del concorso di più (e diverse) fattispecie diverse, tutte poste a tutela della pubblica incolumità, nei casi in cui il fenomeno disastroso verificatosi appaia come sostanzialmente unitario, ma cagionato dalla violazione contestuale di regole cautelari volte a gestire direttamente (o prioritariamente) due o più rischi specifici diversi: tale questione, che meriterebbe un più specifico approfondimento, potrebbe forse trovare una propria risoluzione mediante l'adozione della teoria del «reato eventualmente complesso». Sul punto *cfr.*, in particolare, L. Bin, «Il reato eventualmente complesso come (unica) ipotesi di concorso apparente ulteriore rispetto alla specialità. L'esempio del rapporto tra incendio e disastro ambientale», en *Leg. pen.*, 9 maggio 2023. Viceversa, ciò che si vuole ora porre in discussione è la prassi mediante la quale la violazione delle medesime cautele (aventi «teleologie prioritarie» distinte) venga posta a fondamento, in chiave accusatoria, di diversi delitti di comune pericolo, a maggior ragione se caratterizzati da diverse etiologie di estrinsecazione nell'offesa.

77 In particolare, al capo A (relativo alla contestazione dell'art. 437 c.p.) agli imputati viene contestato di «avere omesso di adottare: - idonei impianti di aspirazione localizzata; - idonei sistemi di ventilazione dei locali; - sistemi di lavorazione dell'amianto a ciclo chiuso, volti a evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto; - idonei apparecchi personali di protezione; - organizzati sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro all'interno degli stabilimenti». Al capo B (relativo alla contestazione dell'art. 434 c.p.) viene contestato, con riguardo alle aree interne agli stabilimenti, di aver «omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze prede-

l'«esaltazione» dei singoli eventi mortali che hanno riguardato i lavoratori, denota, per un verso, come la valorizzazione della prima venga indebitamente fondata, in definitiva, sulla qualifica di lavoratori dei soggetti colpiti piuttosto che sulla concretizzazione di un vero e proprio rischio lavorativo[78]; per altro verso, come la reale distinzione tra i delitti contestati venga erroneamente fondata, almeno nella prospettazione accusatoria e nella pronuncia di primo grado, sulla valorizzazione ora di plurimi eventi infortunistici, ora di un evento disastroso.

Nella vicenda relativa allo stabilimento siderurgico tarantino, invece, la situazione è, se ben considerata, ancor più grave. In questo caso, infatti, le medesime cautele violate giustificano, nella sostanza, l'integrazione di tre autonomi delitti, tutti a tutela dell'incolumità pubblica, ma collocati in due distinti Capi del Titolo VI, ricomprendenti, a loro volta, ipotesi caratterizzate da un'opposta modalità di estrinsecazione dell'evento disastroso: immediata e violenta nel Capo I e connessa a «fattori di rischio più subdoli» nel Capo II[79]. La confusione, nel caso di specie, è massima: le violazioni cautelari,

tte, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi ed informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi». Con riferimento alle aree esterne, di aver «fornito a privati e a enti pubblici e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche». Presso le abitazioni private dei lavoratori, di aver «omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l'indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia».

78 Con tale osservazione, naturalmente, non si intende sostenere che il rischio concretizzatosi nel caso di specie non sia qualificabile quale vero e proprio rischio lavorativo, bensì che, come si è osservato *supra*, l'individuazione del rischio realizzatosi (e, come tale, anche quello lavorativo), non può dipendere in via isolata dai soggetti, *ex post*, effettivamente *colpiti*.

79. Così, *ex multis*, D. CASTRONUOVO, «Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche», cit., pág. 134 ss. Sulla distinzione tra le dinamiche lesive relative ai primi due Capi del Titolo VI, nonché sulle nozioni di «violenza» e «frode», oltre che sulla configurabilità, allo stato attuale dell'arte, di un vero e proprio «disastro sanitario» quale elemento aggregante e comune alle ipotesi di cui al Capo II, *cfr.*, in particolare, A. GARGANI, voce «Disastro colposo», cit., págs. 415-416; ID., voce «Incolumità pubblica (delitti contro la)», cit., págs. 581-582, nonché, più ampiamente, sempre A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., págs. 278 ss., 409 ss. Ritiene «infeconda» la distinzione tra le fattispecie contenute nei primi due Capi fondata sulle modalità «violente» o «fraudolente», dovendosi, al contrario, essa basarsi (solo) sul diverso bene giuridico tutelato («vita» e «integrità fisica» nel Capo I nonché «salute» nel Capo II) S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità* pubblic*a. Tomo I*, cit., pág. 12 ss. Su questa specifica questione, nonché sulla nozione di disastro sanitario v. anche M. DONINI, «Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica», en *La riforma dei reati contro la salute*

che confluiscono, in ultima analisi, nel mancato sostanziale rispetto delle prescrizioni AIA (autorizzazione integrata ambientale)[80], fondano l'integrazione ora della fattispecie di disastro ambientale innominato (art. 434 c.p.), ora – per via addirittura di un richiamo testuale – della fattispecie di avvelenamento (art. 439 c.p.)[81], ora – seppur con una non totale coincidenza – della fattispecie di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.)[82]. Inoltre, rispetto alla valorizzazione di quest'ultimo delitto, in questa

pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, coordinadores M. DONINI, D. CASTRONUOVO, Cedam, Padova, 2007, págs. 206-207, 210 ss., 325, il quale, in prospettiva de *lege ferenda*, individua i caratteri tipici del disastro sanitario nell'offesa non lieve a tre o più persone e nel pericolo di ulteriori offese ai beni vita, salute o incolumità di più persone, considerando, in tal modo, irrilevanti i danni alle cose. *Contra*: A. GARGANI, «Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni», en *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale*, coordinador S. TORDINI CAGLI, Bononia University Press, Bologna, 2017, pág. 70 ss. In tema altresì E. MAZZANTI, «I delitti contro la salute pubblica in materia agro-alimentare», en *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, coordinador A. GARGANI, Giappichelli, Torino, 2021, pág. 124 ss.

80. In particolare, si contesta di aver diffuso sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale (quali IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive) nelle aree interne ed esterne allo stabilimento. Quanto al rispetto – secondo la Corte d'Assise «solo formale» – dei limiti di emissione sia consentito il rinvio a quanto osservato alla nota n. 6 (Corte d'Assise di Taranto, 31 maggio 2021, n.1/2021).

81. Per un approfondimento circa lo stretto intreccio sussistente tra la tutela dell'ambiente e della sicurezza alimentare *cfr.* L. RAMACCI, «Reati ambientali e tutela agro-alimentare», en *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, coordinador A. GARGANI, Giappichelli, Torino, 2021, pág. 425 ss. Sulla fattispecie di avvelenamento nel caso Ilva, mettendo in luce i possibili profili di applicazione di una logica precauzionale, D. CASTRONUOVO, «Tecniche di tutela e principio di precauzione», en *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, coordinador A. Gargani, Giappichelli, Torino, 2021, pág. 94.

82. La commistione tra le cautele volte a tutelare la sicurezza «interna» ed «esterna» viene in rilievo già nel capo di imputazione. Tale circostanza è evidenziata in particolare, da C. RUGA RIVA, «Il caso Ilva, avvelenamento e disastri dolosi», cit., pág. 159, il quale rileva che «l'accusa sembra voler distinguere il disastro interno al perimetro dello stabilimento, ricondotto allo schema dell'art. 437, comma 2, c.p. e concernente i "lavoratori", dal disastro esterno, riferito all'art. 434, comma 2, c.p. e "alla popolazione residente nei quartieri vicini al siderurgico": tuttavia, la fluidità dei confini tra "stabilimento" e "città" e tra "lavoratori" e "popolazione limitrofa alla fabbrica" emerge dalle contestazioni; in ambedue le imputazioni, infatti, si fa riferimento alla diffusione di sostanze nocive sia nelle aree interne allo stabilimento sia nell'ambiente circostante». Nell'ipotesi accusatoria, infatti, gli imputati, nelle rispettive qualità, letteralmente «omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF e che si diffondevano sia all'interno dello stabilimento siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano altresì eventi di danno alla salute stessa (malattia e morte)». Così *Corte d'Assise di Taranto, sentenza núm. 1/2021, de 31 de mayo.*

sede specifica, non pare rilevare tanto la qualifica lavorativa dei soggetti colpiti (peraltro non meglio individuati), quanto, piuttosto, la materiale omissione, all'interno del sito produttivo, di mezzi che avrebbero impedito la diffusione (all'interno ed all'esterno dello stesso) di polveri e gas tossici.

In radicale contrapposizione rispetto a quanto avvenuto nelle vicende richiamate, tuttavia, a guidare l'interprete nell'identificazione della fattispecie applicabile al caso concreto, nella ricerca dei soggetti garanti nonché nell'accertamento della causalità e dell'elemento soggettivo dovrebbe essere l'individuazione del rischio specifico realizzatosi negli risultati lesivi; indagine che, come già ampiamente osservato, non può prescindere dalla valorizzazione del cono di protezione apprestato dai doveri cautelari violati (che paiono sempre volgersi [almeno «direttamente» o «prioritariamente»] verso la gestione di un determinato rischio).

In definitiva, nel caso Eternit, le cautele poste in via diretta a tutela dei soggetti lavoratori non avrebbero potuto giustificare l'applicazione della fattispecie di «altro disastro» nella sua conformazione di disastro ambientale innominato[83]. E ciò non solo per la collocazione sistematica dell'art. 434 c.p. tra i «delitti di comune pericolo mediante violenza», bensì anche – ed è ciò che in questa sede più interessa – perché l'adozione di quelle cautele rappresentano la modalità di gestione di un vero e proprio rischio lavorativo (la cui concretizzazione dovrebbe perciò portare [al più] alla valorizzazione dell'art. 437 c.p.). I risvolti «esterni» del pericolo per la pubblica incolumità non fanno altro che evidenziare, da un lato, il carattere multidirezionale del rischio (lavorativo) che si è concretizzato nell'evento disastroso nonché, dall'altro lato, il carattere diffusivo, tipico di questi delitti, del pericolo cagionato. Breve, la creazione di un pericolo (o di un danno) per la salute dei soggetti «esterni» non può valere, in generale, a mutare la qualificazione del rischio – da cui dipende anche l'individuazione della fattispecie applicabile – che, nel caso specifico, ha trovato la propria realizzazione: tali soggetti vengono infatti tutelati in quanto «equiparabili» a quelli interni (direttamente tutelati).

Invero, la presenza dell'art. 437 c.p. tra i delitti contenuti al Capo I del Titolo VI ed il riferimento esclusivo della disposizione agli «infortuni» (e non alle «malattie professionali») dovrebbe altresì impedire di poter ricondurre a tale fattispecie la concretizzazione di un vero e proprio rischio lavorativo qualora questo dipenda, come nel caso di specie, dalla violazione di cautele

83. Si pensi, ad esempio, all'omessa adozione di «provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi e informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi».

destinate a evitare eventi ad etiologia lungo-latente e diluita nel tempo. A ben vedere, dunque, seppur tale soluzione sia difficilmente accettabile sul piano «sociale», alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, nel caso in esame, le ipotesi di inquinamento storico-progressivo dipendenti dalla violazione di regole cautelari volte a gestire un rischio lavorativo potrebbero essere ricollegate alle sole fattispecie di matrice amministrativa e contravvenzionale, vigenti al tempo della tenuta delle condotte, destinate a tutelare i lavoratori dalle esposizioni a sostanze tossiche. Ciò, chiaramente, sul presupposto della evidente difficoltà, discendente da un'eventuale contestazione dei delitti di evento dannoso alle persone sia di dar prova del nesso causale e dell'elemento soggettivo sia di individuare correttamente i singoli soggetti garanti tra quelli succedutisi alla guida dell'impresa[84].

Ad opposti risultati si dovrebbe invece pervenire, pur sempre mantenendo fermo il ragionamento, nell'analisi della vicenda relativa all'acciaieria Ilva di Taranto: le cautele collegate al sostanziale mancato rispetto dell'AIA potrebbero al più ritenersi idonee a fondare – alla stregua dell'interpretazione (illegittima) dell'art. 434 c.p. unanimemente accolta dalla giurisprudenza – la fattispecie di disastro ambientale innominato[85]. A differenza di quanto evidenziato nell'ipotesi precedente, la salute dei soggetti lavoratori verrebbe qui salvaguardata solo in via indiretta: essi verrebbero protetti nella loro veste di «cittadini». Ad essersi concretizzato, infatti, non è un rischio lavorativo, bensì un rischio per (l'ambiente) e la salute della popolazione «esterna».

VI.2. La mancata predisposizione di cautele poste a salvaguardia della sicurezza di impianti o servizi

Nell'esegesi della fattispecie di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.), la vera e propria (iper) valorizzazione della nozione di «luogo di lavoro» emerge infine nelle ipotesi di disastro (tecnologico) causato dall'omissione o dal ritardo nell'apposizione di cautele volte a garantire la sicurezza degli utenti che usufruiscono di un servizio o, più in generale, di strutture o manufatti. Emblematico, in questo senso, è

84 Sul punto, per tutti, S. ZIRULIA, «Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale», cit., págs. 50 ss

85. Sulla base di quanto osservato sino ad ora, la questione potrebbe essere ulteriormente approfondita. Posto che il disastro ambientale innominato di cui all'art. 434 c.p. dovrebbe sempre rappresentare la concretizzazione di un vero e proprio rischio per l'incolumità pubblica (il bene ambiente verrebbe in gioco solamente quale referente materiale di un più ampio pericolo per una pluralità indeterminata di soggetti), ci si potrebbe infatti chiedere se le cautele contestate (riconducibili, in ultima analisi, al mancato sostanziale rispetto dell'AIA) siano volte a gestire effettivamente un rischio per la salute pubblica ovvero un rischio ambientale.

il caso, recentemente sottoposto, seppur in via cautelare, all'attenzione della Cassazione, riguardante la caduta di una cabina della funivia del Mottarone (in provincia di Verbania), dalla quale sono derivati eventi lesivi, precisamente 15 decessi ed un ferimento, tutti a carico dei soggetti trasportati.

Il grave evento si assume dovuto – con ogni probabilità – alla materiale apposizione di uno strumento inibente la chiusura delle ganasce da parte dei lavoratori della società Mottarone s.r.l., il quale, seppur volto – nell'intenzione degli stessi – ad evitare l'interruzione del servizio di trasporto e, dunque, la diminuzione degli incassi, ha in concreto impedito (anche) l'attivarsi del freno d'emergenza. A seguito dell'allentamento del cavo traente, infatti, il mancato azionamento automatico del presidio emergenziale, ha determinato il mancato arresto della cabina (nel frattempo retrocessa), che si è staccata dal cavo portante, crollando rovinosamente al suolo[86].

L'impostazione accusatoria – avallata, seppur in sede cautelare, dalla Cassazione – si è fondata sulla contestazione della fattispecie di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.). In particolare, valorizzando la nozione (ultraestensiva) di «luogo di lavoro» attualmente fornita dalla giurisprudenza[87], la Pubblica Accusa vi ha fatto rientrare anche la cabina funiviaria crollata, in quanto ambiente frequentato altresì da lavoratori per svolgere giri di prova, manutenzioni, ovvero per raggiungere, mediante la stessa, la propria base lavorativa.

Anche tale impostazione esegetica, però, non tenendo in debita considerazione la prioritaria destinazione di tutela fornita dalla cautela (man) omessa, non convince. Se è certo, infatti, che il corretto funzionamento del freno d'emergenza di una cabina funiviaria si ponga a salvaguardia *anche* dell'integrità fisica dei lavoratori, è altrettanto certo che tale mezzo sia destinato in via diretta a tutelare gli utenti che accedono al servizio di trasporto: i primi vengono tutelati in quanto «equiparabili» ai soggetti terzi che usufruiscono del servizio. In altri termini, l'omissione della cautela contestata agli indagati rappresenta la (mala) gestione di un rischio relativo alla sicurezza dei trasporti, non di un rischio lavorativo; circostanza che dovrebbe imporre la valorizzazione della fattispecie – a modesto parere di chi scrive, nella propria declinazione colposa – di «attentato alla sicurezza dei trasporti» (artt. 432 e 449 c.p.).

Concludendo, il delitto di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.) riveste ancora oggi una posizione centrale nel nostro ordinamento; non tanto, però, quale fattispecie in cui possa essere sussunto ogni infortunio o disastro verificatosi in un luogo qualificabile come

86. *Cassazione Penale, (sección 1) núm. 39091/2022, de 15 de abril* (*en Cass. pen.*, 2023, pág. 2500 ss., con nota di F. CONTRI, «L'estensione della nozione di rischio lavorativo nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro. Note a margine del disastro della funivia del Mottarone»).

87. Sulla definizione «luogo di lavoro» adottata nel diritto vivente v. Par. 3.1.

«lavorativo», e nemmeno quale delitto volto a ricomprendere ogni omissione o rimozione di cautele fisicamente collocate in ambienti lavorativi a prescindere dalla loro destinazione teleologica, bensì come fattispecie di comune pericolo ricollegabile alla concretizzazione di un vero e proprio rischio lavorativo[88].

Inoltre, appurato che la definizione di «luogo di lavoro» ha perso, rispetto al passato, gran parte della sua portata selettiva, ad orientare l'interprete nell'individuazione di un vero e proprio rischio lavorativo non pare possa esser altro che la prioritaria destinazione antinfortunistica (intesa come tutela dei soggetti lavoratori) delle regole cautelari violate[89]. Breve, la fattispecie in esame dovrebbe trovare applicazione nelle ipotesi di infortuni o disastri dipendenti dalla mancata apposizione di impianti, apparecchi o segnali destinati a salvaguardare in via diretta (o prioritaria) la sicurezza dei soggetti (*rectius* della comunità dei) lavoratori[90].

Alla luce di tale rilettura ermeneutica – obbligata, a modesto parere di scrive, per assicurare pieno rispetto dei principi di legalità e di responsabilità per fatto proprio (e colpevole) – non dovrebbe assumere significato alcuno – pena, tra l'altro, il possibile confondimento dell'interprete nell'individuazione

88. L'ipervalorizzazione dell'ambiente lavorativo quale sede del disastro o dell'infortunio (in luogo dell'individuazione della natura lavorativa del rischio concretizzatosi) porterebbe infatti a considerare sempre valorizzabili le disposizioni poste a tutela della sicurezza del lavoro (prime tra tutte le circostanze aggravanti antinfortunistiche dei delitti colposi di omicidio e lesioni personali di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.); beninteso, sempre che il rischio realizzatosi rientri nella competenza del garante lavorativo. In giurisprudenza, ad esempio, è stata ritenuta applicabile, in ossequio alla nozione attualmente accolta di luogo di lavoro, l'aggravante antinfortunistica dell'omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) in un caso in cui una cliente di un kartodromo era rimasta soffocata dalla propria sciarpa rimasta impigliata nei meccanismi del circuito (così *Cassazione Penale, (sección 4) núm. 2343/2014, de 20 de enero (en www.olympus.uniurb.it)*.

89. Invero, tale statuizione risulta ricavabile anche dal principio di diritto enucleato, nell'ambito dell'esegesi delle fattispecie aggravanti di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., dalla suprema Corte nel caso del disastro ferroviario di Viareggio. Osservando, come già visto, che *«per* rischio lavorativo deve intendersi quello derivante dallo svolgimento di attività lavorativa e che ha ordinariamente ad oggetto la sicurezza e la salute dei lavoratori ma può concernere anche la sicurezza e la salute di terzi, ove questi vengano a trovarsi nella medesima situazione di esposizione del lavoratore», infatti, la Corte di legittimità rilegge tale nozione spostandone il relativo baricentro interpretativo dal luogo di lavoro alla persona del lavoratore. Per un approfondimento sul punto v. D. CASTRONUOVO, «I delitti di omicidio e lesioni», cit., 2023, págs. 373-374; F. CONTRI, «L'estensione della nozione di rischio lavorativo nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro», cit., pág. 2509 ss.

90. In argomento, S. TORDINI CAGLI, «Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata», cit., in corso di pubblicazione, osserva che a causa della perdita di selettività del rischio lavorativo, «è quindi tanto più necessario riflettere su soluzioni normative che consentano di dare una risposta alle rinnovate esigenze, in modo da contenere ulteriori spinte espansive ed evitare che, come ormai troppo frequentemente accade, il silenzio del legislatore venga riempito da un diritto giurisprudenziale "audace", con i rischi connessi per la legalità».

del rischio specifico – la citata distinzione tra disastro «interno» ed «esterno». Il disastro (si badi bene: discendente dalla violazione delle medesime regole cautelari), infatti, è senz'altro unico e la ricerca della fattispecie applicabile, dei soggetti garanti nonché l'accertamento della causalità e dell'elemento soggettivo si concretano nello svolgimento di un procedimento a ritroso, quindi retrospettivo, che trae origine proprio dall'individuazione del rischio specifico realizzatosi nell'evento (dannoso o pericoloso).

Da ultimo, per valutare l'applicabilità di tale fattispecie contro l'incolumità pubblica, non risulterà nemmeno dirimente (quantomeno in assoluto) la qualifica «lavorativa» assunta dai soggetti eventualmente coinvolti nell'evento infortunistico o disastroso: essa – sebbene possa coadiuvare l'interprete nell'individuazione del rischio specifico realizzatosi – non evidenzia, per ciò solo, la sua natura lavorativa. Nella definizione dell'ambito applicativo delle circostanze aggravanti antinfortunistiche dei delitti colposi di omicidio e lesioni personali (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.), si è infatti evidenziato come la tutela apprestata da regole cautelari volte a gestire rischi specificatamente lavorativi non si limiti ai soli lavoratori, bensì ricomprenda anche i terzi «ove questi vengano a trovarsi nella medesima situazione di esposizione del lavoratore»[91]. E se ciò vale nell'esegesi di fattispecie di evento dannoso per le persone, in cui rileva l'individuazione del soggetto passivo[92], non pare dubitabile che tale considerazione possa (*rectius* debba) essere valorizzata, a maggior ragione, anche nell'interpretazione di delitti intrinsecamente connotati dall'irrilevanza delle (eventuali) vittime.

VII. SINTESI E CONCLUSIONI

L'analisi sin qui condotta palesa una sottovalutazione da parte della giurisprudenza – salvo, invero, per qualche pregevole eccezione – per la ricerca del rischio che si è realizzato nel disastro e, di conseguenza, una insostenibile imprevedibilità dell'inquadramento giuridico dei fatti sottesi alle relative incriminazioni sia all'interno del medesimo giudizio sia in giudizi diversi.

---

91. Così *Cassazione Penale, (sección 4) núm. 32899/2021*, de 8 de enero, sul caso del disastro ferroviario di Viareggio.

92. In questo senso l'opinione dottrinale dominante e quella giurisprudenziale. Contra: L. MASERA, *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica*, Giuffrè, Milano, 2007, *passim*; ID., «Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità», cit., pág. 357 ss.; S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, cit., 284 ss.; F. VIGANÒ, «Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese», en *Dir. pen. cont. – riv. trim*., 2013, fasc. 3, pág. 390 ss., i quali, seppur con argomentazioni parzialmente distinte, ritengono sufficiente, per l'applicazione dei delitti di omicidio e lesioni personali, la prova oltre ogni ragionevole dubbio (segnatamente mediante corretti accertamenti epidemiologici) della verificazione della morte di uno o più soggetti, anche se non specificatamente individuati.

Lasciare una tale discrezionalità nelle mani dell'organo giudicante di volta in vota chiamato a decidere non significa infatti solamente porre in dubbio l'attuale vigenza – oltre ai canoni di legalità e di responsabilità per fatto proprio (e colpevole) – dei principi di uguaglianza e di certezza del diritto, bensì anche capovolgere – illegittimamente – l'onere della prova ponendolo a carico degli imputati. In particolare, se l'Accusa potrà trarre a giudizio tutti i vertici (e non solo) di una compagine societaria, contestando, in un primo momento, più fattispecie di comune pericolo, per lasciare, in un secondo momento, al solo decisore l'individuazione del rischio specifico che si è concretizzato nell'evento disastroso; questa potrà, nella sostanza, ritenersi esentata sia dal dimostrare il tipo di rischio che si è verificato sia dal provare che gli imputati avessero il potere/dovere di gestirlo[93]. Dovranno infatti essere questi ultimi a render manifesto, per assicurare la propria irresponsabilità (beninteso, sotto questo preciso profilo), che si sia verificato un rischio diverso rispetto a quello la cui gestione faceva loro capo[94].

93 Ponendo in luce l'imprescindibile valorizzazione del criterio della competenza, D. MICHELETTI, «Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell'evento», cit., págs. 522-523, osserva altresì che «l'individuazione delle figure su cui ricade il potere-dovere di gestire il fattore di rischio che si è storicizzato nell'offesa […] gioverebbe anche in termini di semplificazione processuale, scongiurando quelle pletoriche indagini preliminari generate dalla pioggia di avvisi di garanzia che trova invece alimento nell'alternativa logica condizionalistica».

94. Tale prassi ricorda molto quella – già criticata in dottrina – sviluppatasi nell'ambito dell'accertamento della responsabilità colposa, in cui il richiamo alla colpa generica nel capo d'imputazione funge da «*culpa generalis*», ovvero quale clausola generale volta a ricomprendere ogni forma di colpa rilevabile nel caso concreto, a prescindere dall'avvenuta scadenza dei termini per la modifica dell'imputazione, per contestare (o, finanche, fondare la condanna dell'imputato) sulla violazione di una regola cautelare diversa da quella inizialmente contestata. *Cfr.*, anche per i più recenti riferimenti giurisprudenziali, D. CASTRONUOVO, «I delitti di omicidio e lesioni», cit., 2023, págs. 349 ss. In argomento, v. altresì V. ATTILI, «Dalla struttura alla funzione (probatoria): il "tipo colposo" nel crogiolo dell'accertamento processuale», en *Cass. pen.*, 2012, pág. 1571 ss.; M. CAIANIELLO, «Imputazione e garanzie: la contestazione e la qualificazione del fatto nel reato colposo», en *Reato colposo e modelli di responsabilità*, coordinadores M. DONINI, R. ORLANDI, Bononia University Press, Bologna, 2013, 341 ss.; S. CANESTRARI, «La struttura soggettiva della fattispecie. La colpa», en *Trattato di diritto penale. Parte generale*, diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Vol. II, Utet, Torino, 2013, pág. 164 ss.; D. CASTRONUOVO, «Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo», en *Dir. pen. cont. – Riv. trim*, 2016, fasc. 3, pág. 229 ss.; ID., *La colpa penale*, Giuffrè, Milano, 2009, pág. 197 ss.; ID., «La contestazione del fatto colposo: discrasie tra formule prasseologiche d'imputazione e concezioni teoriche della colpa», en *Cass. pen.*, 2002, pág. 3836 ss; G. CIVELLO, «La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro: il *discrimen* fra regole cautelari e regole meramente gestionali ed organizzative», en *Arch. pen.*, 2011, fasc. 2, pág. 22 ss.; D. PETRINI, «Rischi di responsabilità oggettiva nell'accertamento della colpa del datore di lavoro e dei dirigenti», en *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, coordinador R. Bartoli, Firenze University Press, Firenze, 2010, pág. 308 ss.; G. VARRASO, voce «Imputazione processuale e reati colposi», en *Enc. dir.*, I Tematici, II, Reato colposo, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 678 ss.

Inoltre, tale prassi ingenera il concreto pericolo che, per mezzo della contestazione di più fattispecie rispondenti alla realizzazione di rischi diversi, vengano chiamati a rispondere per talune di queste anche enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, i quali potrebbero considerare più conveniente, pur potendo correttamente valutare la propria estraneità ai fatti per la mancata corrispondenza, nel caso di specie, del rischio realizzatosi ad uno dei reati presupposto loro contestati, chiudere anticipatamente il processo mediante il ricorso al rito di applicazione di pena su richiesta delle parti (artt. 444 c.p.p.). Alla prospettiva di una futura assoluzione nel merito, infatti, farebbero da *pendant*, da un lato, la rilevata imprevedibilità della scelta della (o delle) fattispecie ritenute integrate dall'organo giudicante; dall'altro lato, i gravi danni all'immagine e alla reputazione che potrebbero discendere da una difesa attiva in giudizio[95].

Per superare tale prassi, si rende dunque opportuno che il rischio specifico concretizzatosi nei risultati lesivi venga individuato a monte, mediante una corretta criteriologia, e che solo successivamente (e a ritroso) vengano individuati sia i soggetti che erano chiamati in via originaria o derivata a gestirlo sia le fattispecie applicabili al caso concreto.

Nei casi più ostici, in cui l'evento, soprattutto se di portata disastrosa, pare rappresentare la realizzazione di diversi rischi, tutti, però, gestibili mediante la tenuta delle medesime cautele, la ricerca dovrà essere condotta – corrispondentemente a quanto già evidenziato nelle illuminanti statuizioni insite nella pronuncia di legittimità sul disastro ferroviario di Viareggio – evidenziandone la direzione «prioritaria».

Adottando tale criterio ermeneutico in parallelo all'apprezzamento della principale salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori predisposta dalle regole cautelari antinfortunistiche in luogo di una (iper)valorizzazione della nozione – peraltro dai contorni oggi tutt'altro che nitidi – di «luogo di lavoro», potrebbe altresì essere riservato uno specifico ambito applicativo ai delitti di comune pericolo posti a tutela della sicurezza del lavoro e, segnatamente, alla (più frequentemente richiamata) fattispecie di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.).

Lungo la strada verso la ricerca del rischio specifico realizzatosi nei risultati offensivi, sia di danno sia di pericolo, non dovrà dunque rappresentare un ostacolo il frequente carattere multidirezionale dei rischi nonché, per converso,

95. Ciò è quanto potrebbe avvenire, pur in assenza della realizzazione di un vero e proprio rischio ambientale o lavorativo, mediante la contestazione degli illeciti amministrativi dipendenti ora da reati ambientali (art. 25-*undecies* del d. lgs. 231/2001), ora dai delitti colposi di omicidio e lesioni personali (gravi o gravissime) aggravati dalla violazione di norme poste a tutela della sicurezza del lavoro (art. 25-*septies* del d. lgs. 231/2001). Tale scenario – che implica, per l'Accusa, una «vittoria assicurata» –, lungi dal prospettarsi quale eventualità futura ed incerta, pare aver già mostrato una propria evidente rappresentazione, ad esempio, nel processo relativo al crollo del viadotto Polcevera (c.d. ponte Morandi) a Genova.

la possibilità che questi appaiano «gestibili» mediante l'apprestamento delle medesime cautele: il rischio sarà pur sempre unitario ed alla sua mala gestio corrisponderà la (potenziale) responsabilità dei soli soggetti chiamati *ex ante* a governarlo.

Nelle ipotesi di evento dannoso alle cose qualificato dal pericolo per l'incolumità pubblica, quindi, a nulla rileverà che gli effetti del disastro si siano espansi attingendo altresì elementi materiali che potrebbero astrattamente denotare la verificazione di plurimi e diversi eventi disastrosi: i caratteri della diffusività del pericolo e dell'indeterminatezza delle possibili vittime sono connotati insiti nella nozione di disastro e, perciò, trasversali a tutte le ipotesi delittuose di cui al Titolo VI, Libro II, c.p.

In sintesi, a fronte di tutte le ipotesi di commistione (diretta e indiretta) tra vari e diversi rischi innanzi (soprattutto) alla verificazione di eventi lesivi di diffusività tale da compromettere beni giuridici, seppur contigui, eterogenei, e alla corrispondente pluridirezionalità delle cautele violate, va contrastata l'attuale tendenza a relativizzare il momento di accertamento del *rischio specifico* che si è concretizzato nell'evento disastroso: lo richiedono, in prima battuta, i canoni di legalità, e di responsabilità per fatto proprio e colpevole, nonché, in seconda battuta, quelli di uguaglianza e di presunzione di innocenza.

VIII. BIBLIOGRAFIA

Abrami, A. & **Teissonniere, J.P.** «Il caso Eternit», en *Riv. giur. ambiente*, 2014.

Accinni, G.P. *Disastro ambientale. Dall'horror vacui all'horror pleni*, Giuffrè, Milano, 2018.

Aimi, A. «Decorso del tempo e disastri ambientali. Riflessioni sulla prescrizione del reato a partire dal caso Eternit», en *Quest. giust.*, 2017.

Alagna, R. «Art. 437 e 451 c.p.», en *Il diritto penale del lavoro*, coordinadores N. Mazzacuva, E. Amati, Utet, Milano, 2007.

Alessandri, A.:

- *Diritto penale e attività economiche*, Il Mulino, Bologna, 2010.

- «Il pericolo per l'incolumità pubblica nel delitto previsto dall'art. 437 c.p.», en *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980.

Antolisei, F. *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, coordinador C. F. Grosso, Giuffrè, Milano, 2022.

Attili, V. «Dalla struttura alla funzione (probatoria): il "tipo colposo" nel crogiolo dell'accertamento processuale», en *Cass. pen.*, 2012, pág. 1571.

Bell, A. «Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di Enel condannati per il pericolo di disastro sanitario», en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 16 ottobre 2014.

Bin, L.:

- «Il reato eventualmente complesso come (unica) ipotesi di concorso apparente ulteriore rispetto alla specialità. L'esempio del rapporto tra incendio e disastro ambientale», en *Leg. pen.*, 9 maggio 2023.

- *Unità e pluralità nel concorso di reati*, Giappichelli, Torino, 2022.

Blaiotta, R.:

- «Sicurezza del lavoro e reati colposi», en *Enc. dir., I Tematici, II*, Giuffrè, Milano, 2021.

- *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2023.

Brambilla, P. «Disastro ferroviario di Viareggio: le motivazioni della sentenza di Cassazione», en *Sist. pen.*, 9 novembre 2021.

Bricola, F. «Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione», en *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Atti del Convegno di studio organizzato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, 17-18 dicembre 1976, Milano, 1978, pág. 75.

Brunelli, D. «Il disastro populistico», en *Criminalia*, 2014, pág. 254.

Buoso, S. «Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi», en *Lavoro e diritto*, 2022, pág. 271. add also - S. Buoso, Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro, Giappichelli, Torino, 2020.

Caianiello, M. «Imputazione e garanzie: la contestazione e la qualificazione del fatto nel reato colposo», en *Reato colposo e modelli di responsabilità*, coordinadores M. Donini, R. Orlandi, Bononia University Press, Bologna, 2013, pág. 341.

Canestrari, S. «La struttura soggettiva della fattispecie. La colpa», en *Trattato di diritto penale. Parte generale*, coordinadores A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Vol. II, Utet, Torino, 2013, pág. 127.

Canestrari, S. & **Cornacchia, L.** «Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica», en *Trattato di diritto penale. Parte speciale – IV. I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, coordinadores A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Utet, Milano, 2010, pág. 3.

Carriero, M.F & Camurri, V. «La Cassazione sul "disastro di Viareggio": l'aggravante antinfortunistica e la giurisdizione sugli enti stranieri», en *Arch. pen.*, vol. 1, 28 gennaio 2022.

Castronuovo, D.:

- «Dispositivi di prevenzione contro disastri o infortuni sul lavoro e mezzi di pubblica difesa o soccorso», en *Trattato di diritto penale. Parte speciale – IV. I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Coordinadores A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Utet, Milano, 2010, pág. 167.

- «Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo», en *Dir. pen. cont. – Riv. trim*, Vol. 3. 2016, fasc. 3, pág. 216.

- «I delitti di omicidio e lesioni», en *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, coordinadores, D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, Giappichelli, Torino, 2023, pág. 305.

- «I delitti di omicidio e lesioni», en obra colectiva *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, coordinadores D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, Giappichelli, Torino, 2021, pág. 289.

- «Il caso Eternit. Omissione di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale dolosi», en *Casi di diritto penale dell'economia*, vol. II, coordinadores L. Foffani, D. Castronuovo, Il Mulino, Bologna, 2015, pág. 107.

- «Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?», en *Leg. pen.*, 2015, pág. 1.

- *La colpa penale*, Giuffrè, Milano, 2009.

- «La contestazione del fatto colposo: discrasie tra formule prasseologiche d'imputazione e concezioni teoriche della colpa», en *Cass. pen.*, Vol. 42. 2002, pág. 3836.

- «Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli», en obra colectiva *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, coordinadores D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, Giappichelli, 2021, pág. 3.

- «Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente», en *Lavoro e diritto*, vol. 2. 2022.

Castronuovo, D. &Felisatti,V. «Dispositivi di prevenzione», en *Diritto penale, vol. II*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Utet, Milano, 2022, pág. 3556.

Centonze, F. *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2004.

Civello, G. «La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro: il *discrimen* fra regole cautelari e regole meramente gestionali ed organizzative», en *Arch. pen.*, núm. 2, 2011, fasc. 2, pág. 1.

Contri, F. «L'estensione della nozione di rischio lavorativo nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro. Note a margine del disastro della funivia del Mottarone», en *Cass. pen.*, Vol. 63. 2023, pág. 2503.

Corbetta, S.:

- *Delitti contro l'incolumità pubblica. Tomo I. I delitti di comune pericolo mediante violenza*, Cedam, Padova, 2003.

- «Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive», en *Criminalia*, 2014, pág. 275.

Cornacchia, L. *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Giappichelli, Torino, 2004.

Curi, F. «La tutela penale del lavoratore dai rischi psicosociali: stress da lavoro-correlato e mobbing», en obra colectiva *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, coordinadores D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, Giappichelli, 2021, pág. 431.

D'Alessandro, F. voce «Delega di funzioni (diritto penale)», en *Enc. dir.*, Annali IX, Milano, 2016, pág. 241.

De Santis, G. *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Giuffrè, Milano, 2012.

De Vita, A. *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell'offesa e tutela processuale*, Jovene, Napoli, 1999.

Dean, F. *L'incolumità pubblica nel diritto penale. Contributo alla teoria generale dei reati di comune pericolo*, Giuffrè, 1971.

Deidda, B. voce «Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)», en *Enc. dir., Annali X*, Giuffrè, Milano, 2017, pág. 881.

Della Valentina, J. «Ancora una decisione in materia di responsabilità del datore di lavoro per infortuni auto-inferti dal lavoratore: alla ricerca di nuove soluzioni mediante il reimpiego di vecchi paradigmi», en *DPEI*, 9 marzo 2023.

Di Giovine, O. *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Giappichelli, Torino, 2003.

Donini, M.:

- «Lettura sistematica delle teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento, Parte II», en *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989.

- «Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica», en obra colectiva *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, coordinadores M. Donini, D. Castronuovo, Cedam, Padova, 2007, pág. 201.

- «Nesso di rischio. Il disvalore di azione-evento», en *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, pág. 25.

- *Imputazione oggettiva dell'evento. «Nesso di rischio» e responsabilità per fatto proprio*, Giappichelli, Torino, 2006.

Dovere, S. «Giurisprudenza della Corte Suprema sulla colpa», en obra colectiva *Enc. dir., I Tematici, II*, Giuffrè, Milano, 2021, pág. 579.

Erra, C. voce «Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio», en obra colectiva *Enc. dir., Vol. XIII*, Giuffrè, Milano, 1964, pág. 1.

Fiandaca, G. «La tipizzazione del pericolo», en *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, a cargo del CRS, Franco Angeli. Centro studi e iniziative per la riforma dello stato, Milano, 1987, pág. 49.

Flick, G.M. «Parere *pro-veritate* circa la riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art. 434», en *Cass. pen.*, 2015, pág. 12.

Fornari, G & . **Di Fiorino, E.** «Emissioni nocive dalla centrale di Porto Tolle: la Cassazione mette la parola fine», en *www.giurisprudenzapenale.com*, 4 aprile 2018.

Forzati, F.:

- «Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto», en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 11 marzo 2015.

Gargani, A.:

- «Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale», en *Leg. pen.*, 3 febbraio 2020.

- «Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni», en *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale*, coordinador S. Tordini Cagli, Bononia University Press, Bologna, 2017, pág. 67.

- «I mille volti del disastro. Nota introduttiva», en *Criminalia*, 2014, pág. 251.

- *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Giappichelli, Torino, 2005.

- *Reati contro l'incolumità pubblica. Tomo I. Reati di comune pericolo mediante violenza*, Giuffrè, Milano, 2008.

- voce «Disastro colposo», en obra colectiva *Enc. dir., I Tematici, II*, Giuffrè, Milano, 2021, pág. 411.

- voce «Incolumità pubblica (delitti contro la)», en obra colectiva *Enc. dir., Annali VIII*, Giuffrè, Milano, 2015, pág. 571.

Gargani, A; **Zirulia, S.** & **Castronuovo, D.** «Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci, etc.) », en *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP*, coordinador Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale, Edizioni DiPLaP, Milano, 2023, pág. 801.

Gatta, G.L «Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit», en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 24 novembre 2014.

Giunta, F.:

- «I contorni del «disastro innominato» e l'ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza», en *Giur. cost*. 2008, pág. 3530.

- «Le aggravanti del "luogo di lavoro": a proposito di un'espressione fuorviante», en *Discrimen*, 11 dicembre 2021.

Lazzari, C. «Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall'emergenza da Covid-19», en *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, Vol.1. 2020, pág. 136.

Magnani, M. «I tempi e i luoghi di lavoro. L'uniformità non si addice al postfordismo», en *WP CSDLE «Massimo D'Antona». IT*, 2019, pág. 298.

Mantovani, M. «Il disastro ferroviario di Viareggio e la normativa en materia di sicurezza sul lavoro», en *DPEI*, 19 ottobre 2021.

Manzini, V. *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, VI, Utet, Torino, 1935.

Marinucci, G.:

- «Non c'è dolo senza colpa. Morte della "imputazione oggettiva dell'evento" e trasfigurazione nella colpevolezza?», en *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, pág. 3.

- «Crollo di costruzioni», en obra colectiva *Enc. dir., Vol. XI*, Giuffrè, Milano, 1962, pág. 410.

Martini, R. «Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia», en *Leg. Pen.,* 2008, pág. 339.

Masera, L.:

- *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica*, Giuffrè, Milano, 2007.

- «Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale», en *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2014, fasc. 3-4, pág. 343.

- «La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni», en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 30 maggio 2012.

- «La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di riflessione», en *Riv. it. dir. proc. pen.*, Vol. 58. 2015, pág. 1542.

Massaro, A. «"Concretizzazione del rischio" e prevedibilità dell'evento nella prospettiva della doppia funzione della colpa», en *Cass. pen.*, 2009, pág. 4699.

Mazzanti, E.:

- «I delitti contro la salute pubblica in materia agro-alimentare», en obra colectiva *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, coordinador A. Gargani, Giappichelli, Torino, 2021, pág. 123.

- «Soggetti attivi e posizioni di garanzia», en obra colectiva *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, coordinador A. Gargani, Giappichelli, Torino, 2021, pág. 99.

Micheletti, D. «Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell'evento. L'abbrivio dell'imputazione colposa», en *Discrimen*, 3 settembre 2018.

Miriello, A. «Disorientamenti sul computo della prescrizione per il disastro innominato», en *Arch. pen.*, 2015, fasc. 2, pág. 686.

Mongillo, V.:

- «Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio», en *Giur. it.*, 2022, pág. 953.

- «La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto "correttivo". Condizioni di ammissibilità e dovere di vigilanza del delegante», en *Dir. pen. cont. – Riv. trim.* Vol. 2, 2012, fasc. 2, pág. 75.

Palma, A. «(nota a Trib. Torino, sez. I, 13 febbraio 2012)», en *Studium iuris*, 2012, pág. 1179.

Paoli, M. «Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit», en *Cass. pen.*, 2014, pág. 1802.

Pascucci, P. «Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro... e sulle norme sulla sicurezza di rider & co.», en *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, 2019, pág. 37.

Paterra, B. «L'estensibilità all'extraneus della tutela antinfortunistica», en *Leg. pen.*, 28 giugno 2022.

Perin, A. «Concretizzazione del (nesso di) rischio», en obra colectiva *Enc. dir., I Tematici, II*, Giuffrè, Milano, 2021, pág. 283.

Petrini, D. «Rischi di responsabilità oggettiva nell'accertamento della colpa del datore di lavoro e dei dirigenti», en obra colectiva *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, coordinador R. Bartoli, Firenze University Press, Firenze, 2010, pág. 285.

Piergallini, C. *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Giuffrè, Milano. 2004.

Pinelli, F. & Berardi, A. *Lineamenti di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro*, Wolters Kluwer, Milano, 2020.

Poggi D'angelo, M. «(nota a Cass., sez. I, 19.11.2014, n. 7941)», en *Cass. pen.*, 2015, pág. 2638.

Ramacci, L.:

- «Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità», en *Lexambiente.it,* 2012, pág. 722.

- «Reati ambientali e tutela agro-alimentare», en obra colectiva *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, coordinador A. Gargani, Giappichelli, Torino, 2021, pág. 425.

- «Tutela dell'ambiente e delega di funzioni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione», en *Lexambiente*, Vol. 1, 2008, fasc. 1, pág. 17.

Riondato, S. «Rovina di edifici e omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano la rovina», en obra colectiva *Enc. dir., Vol. XXXVI*, Giuffrè, Milano, 1989, pág. 159.

Rochiara, V. «La delega di funzioni tributarie: l'irragionevole presunzione di non delegabilità degli adempimenti fiscali secondo la giurisprudenza penale», en *www.giurisprudenzapenale.com*, 10 luglio 2023.

Rosi, E. «Brevi note in tema di "disastro" ambientale. Per una effettiva tutela dell'ambiente è necessaria la sincronia degli strumenti giuridici vigenti», en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 16 aprile 2015.

Ruga Riva, C. «Il caso Ilva, avvelenamento e disastri dolosi», en obra colectiva *Casi di diritto penale dell'economia*, vol. II, coordinadores L. Foffani, D. Castronuovo, Il Mulino, Bologna, 2015, pág. 149.

Ruta, G. «Problemi attuali intorno al disastro innominato», en *Criminalia*, 2014, pág. 293.

Sammarco, G. voce «Incolumità pubblica (reati contro la)», en obra colectiva *Enc. dir., Vol. XXI*, Giuffrè, Milano, 1971, pág. 28.

Santa Maria, L. «Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit», en *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, Vol. 1, 2015, fasc. 1, pág. 74.

Scaroina, E. «Ancora sul caso Eternit: la "giustizia" e il sacrificio dei diritti», en *Arch. pen.*, Vol. 3, 2015, fasc. 3, pág. 877.

Tomassetti, P. *Diritto del lavoro e ambiente*, Adapt University Press, Bergamo, 2018.

Tordini Cagli, S.:

- «Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica», en *Discrimen*, 16 febbraio 2022.

- «La delega di funzioni», en obra colectiva *Sicurezza sul lavoro. Profili penali,* coordinadores D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, Giappichelli, Torino, 2021, pág. 127.

- «Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata», en *DPEI*, en edición.

Valbonesi, C. «La regola cautelare nell'era del rischio: note a margine della sentenza per il disastro ferroviario di Viareggio», en *Discrimen*, 14 gennaio 2022.

Venturi, F. «Tanto tuonò che piovve: il disastro innominato "ambientale" come reato eventualmente permanente. Analisi ciritica della giurisprudenza di legittimità in materia di inquinamento storico e progressivo», en *Leg. pen.*, 29 aprile 2021.

Venturoli, M. «Il caso Eternit: l'inadeguatezza del disastro innominato a reprimere i "disastri ambientali"», en *Giur. it.*, 2015, pág. 1219.

Vergine, A. L. «Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen.», en *Ambiente & Sviluppo*, Vol 7. 2013, pág. 534.

Viganò, F. «Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese», en *Dir. pen. cont. – riv. trim.*, Vol 3, 2013, fasc. 3, pág. 380.

Zagrebelsky, V. voce «Omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro», en obra colectiva *Enc. dir., Vol. XXX*, Giuffrè, Milano, 1980, pág. 5.

Zirulia, S.:

- *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Giuffrè, Milano, 2018.

«Caso Eternit: luci e ombre nella sentenza di condanna in primo grado», en *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, pág. 471.

«Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione», en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 24 febbraio 2015.

«Processo Eternit: a che punto siamo?», en *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 18 novembre 2013.

LA MULTIDIRECCIONALIDAD DEL RIESGO EN LOS DELITOS DE DESASTRE MEDIOAMBIENTAL

Donato Castronuovo
Università degli Studi Di Ferrara

I. INTRODUCCIÓN: CRÍTICA A UNA TUTELA INTEGRAL DE BIENES COLECTIVOS E INDIVIDUALES

La tutela de la salud y la preservación del ecosistema están imbricadas de una manera tan estrecha, que se hace difícil distinguirlas, especialmente cuando analizamos el riesgo producido por el desarrollo de actividades productivas[1].

Estos riesgos son «riesgos multidireccionales», es decir, contienen una ofensividad que se proyecta potencialmente tanto sobre bienes de naturaleza colectiva como sobre bienes de naturaleza individual. Hoy tomaremos como ejemplos de unos y otros los siguientes:

- la incolumidad y la salud de los trabajadores;
- la incolumidad y la salud de los ciudadanos *a secas* cuando se exponen por razones *ambientales* a las eventuales consecuencias de desastres o de incidentes industriales relevantes o a la emisión en serie de sustancias patógenas al medioambiente externo;
- la incolumidad y la salud de los consumidores o de otros sujetos que entren en contacto con productos defectuosos o inseguros, generalmente alimentarios, pero no solo;

1. Sobre este punto, en particular, A. LASSANDARI, «Il lavoro nella crisi ambientale», en *Lavoro e diritto*, 2022, pág. 7 y S. BUOSO, «Sicurezza sul lavoro, prevenzione, ambiente: disciplina positiva e dilemmi regolativi», en *Lavoro e diritto*, 2022, pág. 271.

– también, finalmente, el propio medioambiente externo, cuyos diversos componentes (el suelo, el aire, el agua) se exponen a las emisiones o depósitos en serie u ocasionales de residuos o sustancias contaminantes[2].

La tutela de la vida y la salud humanas y la protección del medioambiente son macrovalores que se encuentran en relación antagónica con los intereses económicos y sociales enraizados en el modelo de vida de las sociedades capitalistas y globalizadas.

La yuxtaposición o incluso *confusión* de la vida y la salud humanas y la protección del medioambiente depende también, al menos en parte, del hecho de que la afectación de este repercute gravemente sobre aquellas. Por ello, resulta comprensible que algunos autores traten de idear y poner en práctica modelos de *tutela integral* o, por lo menos, que se ponga en cuestión la distinción entre la tutela del ambiente interno del trabajo y la tutela del medioambiente externo en referencia a los efectos nocivos de las actividades productivas[3].

Sin embargo, en el plano *técnico* de la responsabilidad penal sigue siendo necesario que se delimiten rigurosamente los ámbitos de tutela, entre otras cosas, debido a las diferencias en términos de tipicidad y de concurrencia o no de circunstancias agravantes entre los distintos grupos de delitos potencialmente invocables, los cuales pertenecen a distintos subsistemas penales complejos, que aunque están vinculados entre sí, son, como mínimo, parcialmente heterogéneos y pertenecen a categorías de ilícito morfológicamente distintas, tales como: delitos y contravenciones; delitos de daño y delitos de peligro; delitos dolosos e imprudentes; tipos básicos y tipos cualificados; etc.[4]

---

2. Por lo que se refiere a la distinción, en relación con las actividades de producción, entre los factores de riesgo que se proyectan hacia el exterior (tenidos en cuenta en el contexto de la responsabilidad por productos defectuosos, los delitos medioambientales o determinados delitos de peligro común) y los factores de riesgo, que se limitan al seno de la empresa, relativos en el contexto de la regulación de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, véanse, en la doctrina alemana, las reflexiones de B. SCHÜNEMANN, «Die Kriminalpolitischen und dogmatischen Grundfragen der Unternehmenskriminalität – am Beispiel des Arbeitschutzes in europäischen Perspektive», en *Festschrift Rudolphi*, Neuwied, 2004, pág. 298. Si lo desea, también para obtener más información bibliográfica, D. CASTRONUOVO, «La responsabilità colposa nell'esercizio di attività produttive», en *I Reati contro la persona*, Trattato diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA, vol. I: *I reati contro la vita e l'incolumità individuale*, coordinador S. Canestrari, Giappichelli, Torino, 2006, pág. 579.

3. Para una mirada en profundidad al tema *cfr.* S. BUOSO, «Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro», Giappichelli, 2020, pág. 40 así como, para mayor referencia, A. LASSANDARI, «Il lavoro nella crisi ambientale», cit., pág. 7.

4. Para la necesaria distinción entre la finalidad de proteger las normas relativas a la seguridad en el trabajo y las relativas a la seguridad del transporte ferroviario, véase la reciente sentencia de la Corte de Casación sobre el desastre de Viareggio (*Cassazione Penale, [sección 4] núm. 32899/2021, de 8 de enero [en www.olympus.uniurb.it]*, págs. 302 ss., 320 ss.). Sobre la importante sentencia, *cfr.* D. CASTRONUOVO, «I delitti di omicidio e lesioni», en D. Castronuovo, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro.*

II. EL DERECHO PENAL COMO INSTRUMENTO DE TUTELA FRENTE A ESTA CLASE DE RIESGOS ENTRE EFECTIVIDAD Y GARANTISMO

En Italia, en las últimas décadas, se ha asignado al Derecho penal un papel de *escudo* frente a los riesgos derivados de las actividades económicas contra los bienes primarios de la incolumidad y el medioambiente. Este hecho ha determinado una *sobreexposición* del instrumento de tutela penal, tanto en la evolución normativa de las fuentes positivas internas y supranacionales como en los impulsos dados por jurisprudencia.

Esta sobreexposición del Derecho penal no tiene igual en otros países europeos, en los cuales el contencioso penal es casi inexistente o se reduce a supuestos de daño efectivo derivado de la exposición a sustancias tóxicas por parte de los trabajadores, de los ciudadanos o del propio medioambiente[5]. Y ello a pesar de que también en otros sitios se han registrado

Profili penali, Giappichelli, en prensa; F. Contri, «L'estensione della nozione di "rischio lavorativo" nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro. Note a margine del disastro della funivia del Mottarone», en *Cassazione penale*, 2023, pág. 2509 ss.; R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2023, pág. 24 ss.; B. Paterra, «L'estensibilità all'extraneus della tutela antinfortunistica. Profili evolutivi e sistematici», en *Legislazione penale*, 28 giugno 2022, pág. 18 ss.; D. Castronuovo, «Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente», en *Lavoro e diritto*, 2022, pág. 388 ss.; V. Mongillo, «Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio», en *Giuristrudenza italiana*, 2022, pág. 953 ss.; S. Tordini Cagli, «Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica», en *Discrimen*, 16 febbraio 2022; M. F. Carriero, V. Camurri, «La Cassazione sul "disastro di Viareggio": l'aggravante antinfortunistica e la giurisdizione sugli enti stranieri», en *Archivio penale*, 28 gennaio 2022; C. Valbonesi, «La regola cautelare nell'era del rischio: note a margine della sentenza per il disastro ferroviario di Viareggio», en *Discrimen*, 14 gennaio 2022; F. Giunta, «Le aggravanti del "luogo di lavoro": a proposito di un'espressione fuorviante», en *Discrimen*, 11 dicembre 2021; M. Mantovani, «Il disastro ferroviario di Viareggio e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro», en *DPEI*, 19 de octubre de 2021. Volveremos sobre este punto brevemente a continuación.

5. La referencia se dirige a la investigación realizada entre 2018 y 2020 en el marco de un proyecto promovido por la Asociación Italiana de Profesores de Derecho Penal (AIPDP) titulado «La riforma dei delitti contro la persona», cuyos resultados se pueden leer ahora en el volumen: *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP*, Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale, Edizioni DiPLaP, Milán, 2023. Conviene hacer referencia, en particular, a las notas comparativas que figuran en el documento final elaborado por el Grupo VIII («Reati contro la salute privata e pubblica e contro l'incolumità privata e pubblica», referente: M. Donini), en particular, la sección I: A. Gargani, S. Zirulia, D. Castronuovo, «Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci, etc.)», ivi, págs. 803-810 (§§ 2-2.11); *cfr.*, además, Sección II: C. Ruga Riva, «I reati ambientali», ivi, pág. 820 ss. Para un análisis comparativo más completo, véanse los documentos preparatorios disponibles en https://www.aipdp.it/

análogos episodios de contaminación por amianto o por otros patógenos de origen industrial análogos a los de Italia. Lo que sucede es que, para casos de desastres medioambientales o sanitarios, o de resultados de lesiones o muerte, se prefieren mayormente instrumentos de tutela de las víctimas de tipo extrapenal indemnizatorio.

La exigencia de tutela por medio del Derecho penal típica de Italia tiene luces y sombras. Desde el inicio del presente siglo XXI ha habido un intento por afinar los instrumentos normativos a través de las reformas adoptadas en materia de seguridad en el trabajo y en materia de medioambiente, además de la introducción de supuestos de responsabilidad de las personas jurídicas derivada de delito[6].

Por otro lado, se ha desarrollado un cierto activismo *creativo* por parte de la jurisprudencia, por ejemplo, pero no solo, en materia de exposición de los trabajadores, de los ciudadanos y del medioambiente al amianto o a otras sustancias patógenas.

Sin embargo, estas contribuciones por parte del legislador y la jurisprudencia no siempre se corresponden con resultados satisfactorios en términos de respuestas represivas. Algunas de las «promesas no cumplidas» del Derecho penal como instrumento de tutela de la salud y del medioambiente han sido clamorosas: el caso Eternit y su decepcionante resultado para las víctimas, por poner un ejemplo.

Además, el significativo recurso al instrumento penal de protección de la seguridad, de la salud y del medioambiente ha producido fricciones con los principios de legalidad-taxatividad y personalidad-culpabilidad, y deformaciones de las categorías de la imputación penal tales como la posición de garante, la causalidad y la imprudencia.

En este sentido, como advierte Zirulia, la experiencia jurisprudencial en la Italia de los últimos treinta años en materia de exposición a agentes tóxicos, centrada en casos de homicidios y lesiones imprudentes, se caracteriza «por una serie continua de desviaciones más o menos macroscópicas, pero siempre inaceptables, respecto a los cánones de una determinación de la responsabilidad penal seriamente fiel a las garantías constitucionales», por lo

aipdp-documenti/Documentiper-il-VII-Congresso-La-riforma-dei-reati-contro-la-persona (sub «8° Gruppo»).

6. Se hace referencia a la inclusión, en el catálogo de delitos respecto de los cuales pueden ser penalmente responsables los entes colectivos, del homicidio culposo y de las lesiones graves o muy graves cometidas en contravención de las normas sobre seguridad en el trabajo (art. 25-septies) y de los delitos contra el medio ambiente, en particular las infracciones del Código Ambiental y los delitos contra el medio ambiente introducidos en el nuevo Título VI-bis del Código Penal (art. 25-undecies). Para obtener la información necesaria, respectivamente, D. Castronuovo, «Art. 25-septies», en *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cooridinadores D. Castronuovo *et al.*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, pág. 600 ss.; C. Ruga Riva, M. Montorsi, «Art. 25-undecies», ivi, pág. 682 ss.

que se reconoce, desde la incomodidad, que «las sentencias bien motivadas son sobre todo las de absolución o anulación de las condenas, y viceversa; y esto es una clara indicación del hecho de que el sistema no funciona bien»[7].

Por otra parte, también persisten muchas dudas en el plano del respeto de la taxatividad-determinación respecto al *cambio de paradigma* que ha experimentado la jurisprudencia a partir del caso Eternit, que se ha repetido en otros asuntos hasta el caso ILVA en adelante, y que consiste en privilegiar los delitos de peligro (desastre laboral, desastre medioambiental, desastre sanitario) con el fin de poder determinar la causalidad de manera menos *rigurosa* que en los delitos de lesión de bienes individuales[8].

III. EL ÁMBITO DE RIESGO CONSENTIDO Y LA PONDERACIÓN ENTRE DERECHOS NO TIRÁNICOS

Tratemos ahora el tema del riesgo consentido. Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, en la mayoría de los casos vistos hasta ahora se trata del desarrollo de actividades económicas en principio lícitas que, conllevando un riesgo potencial, pueden desencadenar consecuencias ofensivas en términos de resultados lesivos o peligrosos tanto de puertas para adentro de la empresa u organización (por ejemplo, accidentes y enfermedades laborales o muertes, o bien desastres laborales) como de puertas para afuera (es decir, resultados lesivos contra la vida o la incolumidad de los ciudadanos en general o contra el medioambiente).

El eventual juicio de ilicitud sobre tales consecuencias ofensivas dependerá de varios presupuestos, los cuales, en extrema síntesis, se refieren a la superación del *riesgo consentido*. El perímetro de dicho riesgo consentido lo trazan las normas dirigidas a la contención de este en los límites considerados socialmente aceptables y normativamente tolerados.

De esto se deriva, como efecto no siempre totalmente explícito, que, en rigor, *no existe una prohibición absoluta de contaminar, sino una prohibición relativa,* limitada a la medida en que los resultados contrarios a la incolumidad y al medioambiente producidos por conductas realizadas se sitúen fuera del riesgo consentido. Ni siquiera la verificación de un resultado de lesiones,

7. Así S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Giuffrè, Milano, 2018, pág. 251.

8. *Cfr.* A. GARGANI, «Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale», en *Legislazione penale*, 3 de febrero de 2020, pág. 1 ss.; D. CASTRONUOVO, «Il caso Eternit: omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale dolosi», cit., pág. 107; C. RUGA RIVA, «Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi», en *Casi di diritto penale dell'economia*, coordinadores D. CASTRONUOVO, L. FOFFANI, Il Mulino, Bologna, 2015, pág. 149 ss.

de muerte o de daño medioambiental otorgaría relevancia penal a una conducta única y exclusivamente porque esta esté causalmente conectada con aquel si dicha conducta se sitúa por debajo del nivel de riesgo consentido.

Por lo tanto, la cuestión se desplaza al análisis sobre los límites de la licitud. La extensión del ámbito de riesgo permitido en un determinado momento histórico es resultado, entre otras cosas, de disposiciones normativas, reglas de comportamiento y criterios operativos adoptados en función de decisiones político-administrativas que ponderan intereses potencialmente en conflicto, sin perjuicio de la valoración que se haga sobre la legitimidad de tales opciones políticas o administrativas.

La legitimación de una tutela en esta materia implica siempre una ponderación de intereses entre, por un lado, la libertad de empresa, el derecho al trabajo y el interés de mantener los niveles de ocupación y, por otro lado, los bienes primarios, de dimensión individual o colectiva, de la incolumidad y el medioambiente. Ello depende del hecho de que la expansión de la tutela penal de los mencionados bienes primarios puede corresponder con una restricción del ámbito de las libertades económicas puras reconocidas.

Para la composición de tales conflictos, la Constitución italiana dicta los conocidos *límites* deducibles de su art. 41, actualizados además por una reciente reforma, en virtud de la cual la iniciativa económica privada es libre, pero «no puede desarrollarse en contra de la utilidad social o de modo que produzca daño *a la salud*, *al medioambiente*, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad humana» (apdo. 1). El apartado siguiente, tras prever la coordinación de la iniciativa económica privada con los «fines sociales», añade explícitamente: *«y ambientales»*.

El punto de equilibrio con los intereses potencialmente antagónicos a los económicos debe tener en cuenta, además, la afirmación, de valor general, consagrada en el art. 32.1 de que la República «tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad» y también lo establecido en el art. 9, según el cual la República *«[t]utela el medioambiente, la biodiversidad y los ecosistemas, también en el interés de las futuras generaciones. La ley estatal regula las modalidades y las formas de tutela de los animales»*[9].

En relación con este equilibrio de intereses es particularmente significativa la sentencia emitida por la Corte Constitucional italiana respecto al caso ILVA (Corte Costituzionale, sentencia n.° 85 del 2013). La Corte, trayendo a colación sentencias anteriores, rechaza la existencia de unos *derechos tiránicos* que estarían dotados de prevalencia absoluta sobre los otros, afirmando,

9. En cursiva, entre comillas, las modificaciones introducidas por la Ley Constitucional n.° 1 de 11 de febrero de 2022 «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente». Para obtener un comentario «en caliente», consúltese V. ONIDA, en *Ambiente in Costituzione, in Corti Supreme e salute*, 2022, pág. 1. Anteriormente, sobre el proyecto de ley constitucional, L. CASSETTI, «Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica? », en *Federalismi.it*, 23 giugno 2021.

como consecuencia, que todos los derechos fundamentales, también los *primarios* y *fundamentalísimos* como la salud y el medioambiente, son ponderables de manera *dinámica* por parte del legislador, con el único límite, se entiende, del respeto a la proporcionalidad y racionalidad.

En particular, las dudas manifestadas por el juez que planteó la cuestión de legitimidad constitucional tenían que ver con la posibilidad prevista legalmente de que el ejercicio de la actividad de empresa en las plantas industriales reconocidas como de «interés estratégico nacional» y que ocupen al menos a doscientas personas pueda continuar durante un tiempo no superior a treinta meses, incluso en el caso en el que dichas plantas hayan sido intervenidas judicialmente, siempre y cuando: 1) sea indispensable para la salvaguardia del empleo y de la producción, y 2) se respeten las prescripciones establecidas por la autorización ambiental integral emitida en sede de revisión, con el fin de asegurar la tutela más adecuada del medioambiente y de la salud de acuerdo con las mejor técnica disponible.

De acuerdo con la Corte, el efecto de la regulación cuya legitimidad había sido puesta en cuestión consiste en «realizar una ponderación razonable entre derechos fundamentales tutelados por la Constitución». Ahora bien, justo después de establecer las premisas y las reglas de la ponderación, el juez constitucional recuerda que: «La Constitución italiana, como las otras constituciones democráticas y pluralistas contemporáneas, precisa una continua y recíproca ponderación entre principios y derechos fundamentales, sin que ninguno pueda pretender ser absoluto. […] El punto de equilibrio, precisamente porque es dinámico y no está prefijado *ex ante*, debe ser valorado —por el legislador cuando elabora la legislación y por el juez constitucional cuando controla la legitimidad de esta— de acuerdo con los criterios de proporcionalidad y de razonabilidad, de manera que no se produzca un sacrificio de su núcleo esencial»[10].

La significación de la sentencia del 2013 se demuestra claramente cuando, en una ocasión posterior (Corte Costituzionale, sentencia n.º 58 de 2018), teniendo como objeto un procedimiento penal originado por un gravísimo accidente que tuvo lugar en un alto horno del mismo establecimiento, el Alto Tribunal, pese a confirmar los mismos principios, emitió, con razón, una sentencia con un fallo contrario, considerando que, en dicho concreto, la ponderación realizada por el legislador al restituir de nuevo al gestor la facultad de usar la planta sometida a intervención judicial no se sujetaba a los cánones de razonabilidad y proporcionalidad. La norma sobre la cual el juez planteó la cuestión de inconstitucionalidad no requería en aquella ocasión medidas inmediatas dirigidas a hacer prontamente la situación de peligro para la incolumidad de los trabajadores, sino que subordinaba la continuación de la acti-

10. *Corte costituzionale*, *núm. 85/2013, de 9 de abril (en Giurisprudenza costituzionale, 2013, pág. 1424 ss.)*. Sobre la sentencia, entre otros, C. Ruga Riva, «Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi», cit., pág. 172 ss.

vidad empresarial exclusivamente a la predisposición, en el plazo de 30 días, de un plan elaborado unilateralmente por la propia parte privada objeto de la intervención judicial que contuviese medidas y actividades adicionales, incluso de carácter provisional, que no se definían en concreto y cuya efectividad no era objeto de verificación[11].

En definitiva, la aplicación del mismo principio afirmado en 2013, el principio de que todos los derechos son susceptibles de ponderación, llevó cinco años después a poner en cuestión el equilibrio entre intereses en conflicto operado por el legislador a través de un nuevo y distinto decreto porque dicho nuevo decreto se consideraba excesivamente «desequilibrado» en favor de la continuación de la actividad productiva y, por lo tanto, de la libertad de empresa, en perjuicio del derecho a la incolumidad de los trabajadores.

IV. LA PROBLEMÁTICA PROYECCIÓN DEL ESPECTRO DE TUTELA HACIA EL EXTERIOR DEL CONTEXTO PRODUCTIVO

Me dirijo al final de este capítulo refiriéndome con mayor detalle a la posibilidad de extender la tutela de los bienes de la incolumidad, la vida y la salud también respecto a sujetos *externos* al contexto productivo. Para ello, parti-

11. *Corte costituzionale*, *núm. 58/2018, de 4 de febrero (en www.cortecostituzionale.it)*. Esta es la máxima: «Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione degli artt. 2, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 41 secondo comma, Cost. – l'art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, l'art. 1, comma 2, della legge n. 132 del 2015 e l'art. 21-octies del d.l. n. 83 del 2015, come convertito dalla legge n. 132 del 2015, che consentono la prosecuzione per dodici mesi dell'attività produttiva di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti (come l'altoforno "Afo2" ILVA di Taranto) a sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria in relazione a ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori. La normativa censurata dal GIP del Tribunale di Taranto – diversamente da quella scrutinata dalla sentenza n. 85 del 2013 – non richiede misure immediate e tempestive atte a rimuovere prontamente la situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori, bensì subordina la prosecuzione dell'attività d'impresa esclusivamente alla predisposizione, entro trenta giorni, di un piano, anche provvisorio, formato unilateralmente dalla stessa parte privata colpita dal sequestro, contenente misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, non meglio definite né verificabili nella loro effettiva incidenza. Un simile intervento legislativo – lungi dal bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti – privilegia in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (artt. 4 e 35 Cost.), violando così i limiti all'attività d'impresa, la quale, ai sensi dell'art. 41 Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona».

mos de la importantísima sentencia de la Corte de Casación italiana sobre el desastre ferroviario de Viarreggio[12], sobre la cual escribe en esta misma obra colectiva Francesco Contri[13].

En este caso, los jueces de primera instancia habían considerado que el Decreto legislativo 81/2008, que regula la prevención de riesgos laborales en Italia, también era aplicable respecto a los sujetos externos al perímetro de la empresa, en particular a la población residente en las zonas limítrofes al lugar del descarrilamiento y del incendio, y que, en virtud de ello, los hechos podrían constituir un supuesto de homicidio imprudente múltiple cualificado por la violación de normas de prevención de riesgos laborales (art. 589 CP italiano) y que, por consiguiente, también se podía extender la responsabilidad a las personas jurídicas acusadas, de acuerdo con el art. 25 *septies* del Decreto legislativo n.º 231 de 2001.

Por su parte, la Corte de Casación intervino precisamente en relación con dicha extensión respecto a la persona jurídica, considerando que las normas que se asume que han sido violadas en el caso concreto se refieren a la «seguridad de la circulación ferroviaria» y no a la «seguridad en el trabajo» y que, por lo tanto, no concurre la cualificación específica prevista («si el hecho fuere cometido (…) con infracción de las normas sobre prevención de accidentes en el trabajo») ni, como consecuencia, la responsabilidad de los entes colectivos que habían sido imputados. Por el contrario, se confirmó la responsabilidad de las personas físicas por el delito de desastre ferroviario por imprudencia.

Para llegar a dicho resultado, la Corte de Casación profundiza en la noción de «normas para la prevención de los accidentes en el trabajo» con la finalidad de decidir acerca de la concurrencia de las circunstancias cualificantes previstas, respectivamente, para el homicidio imprudente (art. 589, apdo. 2, CP italiano) y para las lesiones imprudentes (art. 590, apdo. 3, CP).

---

12. *Cassazione Penale, (sección 4) núm. 32899/2021, de 8 de enero (en www.olympus.uniurb.it)* págs. 302 ss., 320 ss. (D. Castronuovo, *I delitti di omicidio e lesioni*, cit.; F. Contri, «L'estensione della nozione di "rischio lavorativo"», cit., pág. 2509 ss.; R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., pág. 24 ss.; B. Paterra, «L'estensibilità all'extraneus della tutela antinfortunistica. Profili evolutivi e sistematici», cit., pág. 18 ss.; D. Castronuovo, «Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente», cit., pág. 388 ss.; V. Mongillo, «Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio», cit., pág. 953 ss.; S. Tordini Cagli, «Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica», cit.; M. F. Carriero, V. Camurri, «La Cassazione sul "disastro di Viareggio": l'aggravante antinfortunistica e la giurisdizione sugli enti stranieri», cit.; C. Valbonesi, «La regola cautelare nell'era del rischio: note a margine della sentenza per il disastro ferroviario di Viareggio», cit.; F. Giunta, «Le aggravanti del "luogo di lavoro": a proposito di un'espressione fuorviante», cit.; M. Mantovani, «Il disastro ferroviario di Viareggio e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro», cit.).

13. V. *supra* pp. 68 y ss.

En la sentencia se observa que la jurisprudencia ha venido realizando una lectura cuanto menos extensiva de la noción de «normas para la prevención de los accidentes en el trabajo». No obstante, la Corte advierte de que, atendida su naturaleza de agravante, «la tradicional interpretación extensiva debe ser adecuadamente controlada, de manera que no invada los límites de la prescrita interpretación analógica *in malam partem*»[14]. En particular, la jurisprudencia ha sostenido frecuentemente que las normas de prevención de riesgos laborales también tutelan los terceros ajenos al ambiente de trabajo o al área de riesgo laboral, añadiendo la precisión según la cual la agravante en cuestión concurre solo con la condición de que el suceso ocurrido haya sido concreción de un específico riesgo laboral, como es el supuesto, por ejemplo, de la presencia no ocasional del tercero en el lugar de trabajo o de contacto directo y vecino con la fuente de peligro[15].

Por lo tanto, no basta que el suceso haya tenido lugar «en ocasión del desarrollo de una actividad laboral», sino que es necesario se haya realizado con infracción de las normas para la prevención de los accidentes en el trabajo y que representen la concreción del riesgo específico prevenido por esas mismas normas. En el caso objeto del juicio, el riesgo que trágicamente se verificó en el resultado ofensivo múltiple (que afectó exclusivamente a víctimas ajenas al lugar de trabajo) atiene a la seguridad de la circulación ferroviaria, no a la seguridad en el trabajo.

Por lo tanto, a juicio de la Corte de Casación, es necesario, a partir del suceso ocurrido y utilizando el juicio de concreción del riesgo específico, mantener bien diferenciadas las distintas esferas del riesgo: en este caso, el riesgo ferroviario y el riesgo laboral; pero lo mismo podría decirse, por ejemplo, respecto al riesgo para el medioambiente.

Es decir, debe predicarse la autonomía de las tutelas frente al riesgo. Esto no significa que no pueda darse una gestión «integrada» de todos estos riesgos. Al contrario, la integración presupone precisamente la autonomía de las esfera de riesgo, no solo la valoración de las correlaciones eventualmente existentes entre ellas[16]. Esta autonomía del riesgo también es necesaria para la correcta determinación de los criterios de imputación: causalidad; gestión del riesgo específico (es decir, competencia subjetiva para los distintos riesgos); imprudencia o, en cualquier caso, elemento subjetivo.

La Corte de Casación también interpreta de manera apropiada al contexto de la responsabilidad penal, que está sometido al principio de legalidad, las disposiciones del Decreto legislativo sobre prevención de riesgos laborales que la tutela integral de la seguridad en el trabajo y el medioambiente

14. *Cassazione Penale, (sección 4) núm. 32899/2021, de 8 de enero (en www.olympus.uniurb.it)* págs. 302 ss., 320 ss.

15. *Ibidem*, pág. 310 ss.

16. *Ibidem*, pág. 314.

externo. La Corte aclara que la relación entre las dos tipologías de riesgo establecida por estas normas debe leerse en el sentido de que de las medidas técnicas con finalidad de prevención de riesgos laborales no se deben generar peligros para la salud de la población o para la integridad del medioambiente externo y no, por el contrario, en el sentido dado por las sentencias de primera instancia, según la cual pesa sobre el empleador la obligación de dominar todo riesgo derivado del desarrollo de la actividad laboral, aunque esté relacionado con un tercero o sea tal que ponga en peligro la salud de la población y el medioambiente externo[17].

En definitiva: hay que excluir la superposición entre las áreas de riesgo, dado que los bienes objeto de tutela, aun cuando sean relacionables, siguen siendo distinguibles. El criterio para la delimitación pasa a través de la correcta descripción del resultado de cada uno de los hechos típicos, con el objetivo de aislar la naturaleza del factor de riesgo específico que encuentra concreta realización en el resultado ofensivo, procediendo para ello de adelante hacia atrás y sobre la base de la verificación de la concreción[18].

V. CONCLUSIONES

Termino con una recapitulación general. Las conclusiones principales se resumen en que una protección penal de la salud y el medioambiente de manera integral, en lugar de por separado, podría colisionar con las restricciones impuestas por los principios garantistas del derecho penal, los cuales requieren una distinción clara entre esferas y matrices de riesgo.

Por otro lado, el análisis de la jurisprudencia italiana nos muestra que el uso excesivo del instrumento penal en estos casos no siempre conlleva un alto grado efectividad en la tutela, debido a las numerosas absoluciones, en muchos casos como consecuencia de una aplicación rigurosa —y, por tanto, correcta— de los principios garantistas propios de la justicia penal.

Por lo tanto, el sistema jurídico debe prestar mayor atención a mecanismos de naturaleza no punitiva, cuya aplicación genera menos problemas a nivel constitucional y, por lo tanto, aunque pueda parecer contraintuitivo, tutelan de manera más efectiva el bien jurídico interesado.

En este mismo sentido, es necesario tener en cuenta que el Derecho penal debe operar solo cuando el riesgo sobrepasa un determinado nivel de riesgo permitido fijado por el legislador para caso concreto y controlado eventualmente por el juez constitucional. Dicho nivel se fija en función de

17. *Ibidem*, pág. 317 ss.

18. Sobre las distintas etapas en las que se articula el nexo de riesgo, *cfr.* M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento.* «*Nesso di rischio*» *e imputazione per fatto proprio*, Giappichelli, Torino, 2006, *passim*.

una ponderación entre derechos y bienes jurídicos, entre los cuales ninguno es absoluto, por lo que ha de respetar el contenido esencial de los intereses en juego.

Por último, volviendo a la crítica a una tutela integral sin matices, el principio de legalidad impone excluir la superposición entre las áreas de riesgo de puertas para dentro y de puertas para afuera. Las normas de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, que pretenden evitar la realización de un resultado ofensivo respecto a los trabajadores, no pueden ser un criterio de imputación cuando el daño se produce a terceros ajenos a la empresa o al medioambiente externo.

VI. BIBLIOGRAFÍA

R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2023.

S. Buoso,:

- «Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro», Giappichelli, 2020.

- «Sicurezza sul lavoro, prevenzione, ambiente: disciplina positiva e dilemmi regolativi», en *Lavoro e diritto*, 2022, pág. 271.

M. F. Carriero, **V. Camurri**, «La Cassazione sul "disastro di Viareggio": l'aggravante antinfortunistica e la giurisdizione sugli enti stranieri», en *Archivio penale*, 28 gennaio 2022.

L. Cassetti, «Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica*?* », en *Federalismi.it*, 23 giugno 2021.

D. Castronuovo,:

- «Art. 25-septies», en *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, coordinadores D. Castronuovo *et al.*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, pág. 600.

- «I delitti di omicidio e lesioni», en D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, - «La responsabilità colposa nell'esercizio di attività produttive», en *I Reati contro la persona*, Trattato diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, M. Papa, vol. I: *I reati contro la vita e l'incolumità individuale*, coordinadores S. Canestrari, Giappichelli, Torino, 2006, pág. 579.

- «Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente», en *Lavoro e diritto*, 2022, pág. 375.

F. Contri, «L'estensione della nozione di "rischio lavorativo" nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro. Note a margine del disastro della funivia del Mottarone», en *Cassazione penale*, 2023, pág. 2503.

M. Donini, *Imputazione oggettiva dell'evento. «Nesso di rischio» e imputazione per fatto proprio*, Giappichelli, Torino, 2006.

A. Gargani, «Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale», en *Legislazione penale*, 3 febbraio 2020.

A. Gargani, S. Zirulia, D. Castronuovo, «Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci, etc.)», en *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP*, Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale, Edizioni DiPLaP, Milano, 2023, pág. 801.

F. Giunta, «Le aggravanti del "luogo di lavoro": a proposito di un'espressione fuorviante», en *Discrimen*, 11 dicembre 2021.

A. Lassandari, «Il lavoro nella crisi ambientale», en *Lavoro e diritto*, 2022, pág. 7.

M. Mantovani, «Il disastro ferroviario di Viareggio e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro», en *DPEI*, 19 ottobre 2021.

V. Mongillo, «Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio», en *Giuristrudenza italiana*, 2022, pág. 953.

V. Onida, en *Ambiente in Costituzione, in Corti Supreme e salute*, 2022, pág. 1.

B. Paterra, «L'estensibilità all'extraneus della tutela antinfortunistica. Profili evolutivi e sistematici», en *Legislazione penale*, 28 giugno 2022.

C. Ruga Riva,:

-«I reati ambientali», en *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP*, Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale, Edizioni DiPLaP, Milano, 2023, pág. 820.

- «Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi», en *Casi di diritto penale dell'economia*, coordinadores D. Castronuovo, L. Foffani, Il Mulino, Bologna, 2015, pág. 149.

C. Ruga Riva, **M. Montorsi**, «Art. 25-undecies», en *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, coordinadores D. Castronuovo *et al.*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, pág. 682.

B. Schünemann, «Die Kriminalpolitischen und dogmatischen Grundfragen der Unternehmenskriminalität – am Beispiel des Arbeitschutzes in europäischen Perspektive», en *Festschrift Rudolphi*, Neuwied, 2004, pág. 298.

S. **Tordini Cagli**, «Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica», en *Discrimen*, 16 febbraio 2022.

C. Valbonesi, «La regola cautelare nell'era del rischio: note a margine della sentenza per il disastro ferroviario di Viareggio», en *Discrimen*, 14 gennaio 2022.

S. Zirulia, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Giuffrè, Milano, 2018.

SOLILOQUI ITINERANTI E GREEN CULTURAL CRIMINOLOGY. UN APPROCCIO VISUALE E SENSORIALE ALLE ESPERIENZE DI VITTIMIZZAZIONE AMBIENTALE

Lorenzo Natali
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca

> «[…] magari fosse possibile un'opera concepita al di fuori del *self*, un'opera che ci permettesse d'uscire dalla prospettiva limitata d'un io individuale, non solo per entrare in altri io simili al nostro, ma per far parlare ciò che non ha parola, l'uccello che si posa sulla grondaia, l'albero in primavera e l'albero in autunno, la pietra, il cemento, la plastica…» (CALVINO, *Lezioni americane*, 122)

I. INTRODUZIONE

Solo di recente la criminologia ha rivolto la propria attenzione ai disastri, ai danni e ai rischi ambientali – una prospettiva nota come *«green criminology»*[1] (SOUTH 1998; SOUTH *et al.* 2013). A partire da questo ambito teorico, il presente contributo propone uno studio pilota il cui scopo è esplorare e mappare la percezione e l'immaginario sociale che ruotano attorno ai crimini ambientali e alla loro gravità. Spesso si tratta di «crimini» – intesi in un'accezione socio-criminologica non riducibile alla definizione normativo-statuale di reato – che si sviluppano lentamente e silenziosamente, come *«creeping disasters»*, che sembrano ancora eludere, almeno in parte, la coscienza sociale, andando a costituire nuove forme di «banalità del male».

1. SOUTH, N. «A Green Field for Criminology? A Proposal for a Perspective», en *Theoretical Criminology*, núm. 2 (2), 1998, págs. 211-234; SOUTH, N., BRISMAN, A. e BEIRNE, P. «A Guide to a Green Criminology», en obra colectiva *Routledge International Handobook of Green Criminology*, coordinadores N. South & A. Brisman, Routledge, Londres, 2013.

Attraverso lo studio di un *case study* – Huelva, una città della Spagna meridionale contaminata dalla presenza di un impianto industriale installato all'inizio degli anni Sessanta[2] –, verranno esplorati i seguenti interrogativi: in che modo gli attori sociali percepiscono e interpretano quei particolari «fatti umani» – i crimini ambientali – che impattano sui mondi sociali ed ecologici? Con quali strumenti metodologici è possibile esplorare le varie forme attraverso le quali la vittimizzazione ambientale viene percepita, a partire dall'esperienza di vita di chi abita ambienti contaminati? Al fine di indagare queste dimensioni complesse, si proporrà una peculiare tecnica di indagine qualitativa, definita «soliloquio itinerante»: i partecipanti alla ricerca conducono il ricercatore in un luogo che ha a che fare con la loro percezione del degrado ecologico che interessa il territorio in cui vivono. Costoro vengono invitati a camminare nella zona scelta, a cercare di esprimere ad alta voce il «flusso di coscienza» (pensieri ed emozioni) che può sorgere durante l'attraversamento e, quando lo ritengono opportuno, a scattare fotografie. L'audio del soliloquio itinerante del soggetto è registrato e il percorso viene filmato da una certa distanza[3] (vedi anche Anzoise *et al.* 2016).

Mediante questa tecnica e, grazie all'ambiguità costitutiva dell'esperienza, delle immagini[4] e dei luoghi, il ricercatore sociale sarà in grado di esplorare i molteplici livelli legati alla percezione sociale della gravità dei danni socio-ecologici che interessano il luogo in cui si vive. In questo senso, il soliloquio itinerante è una tecnica che cerca di valorizzare la ricchezza esperienziale e riflessiva che nasce dall'incontro tra camminare, osservare, interpretare, riflettere, narrare – a se stessi e agli altri – e fotografare[5], aprendo l'immaginazione socio-criminologica a nuove forme di esplorazione e ricerca sulle conseguenze dei crimini ambientali e sui processi di vittimizzazione a essi relazionati[6].

---

2. Natali, L. «The big grey elephants in the backyard of Huelva, Spain», en obra colectiva *Global environmental harm. Criminological perspectives,* coordinador R. White, Willan, Cullompton, 2010. Natali, L. *Green criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, Giappichelli, Turín, 2015.

3. Anzoise, V., Mutti, C. & Natali, L. «PAK-Map: immagini, mappe mentali e soliloqui itineranti. Un'esplorazione transdisciplinare delle percezioni sociali su Expo Milano 2015», en *Metodi Visuali*, obra colectiva, coordinador A. Frisina, Il Mulino, Bologna. 2016.

4. Barthes, R. *La Camera chiara. Nota sulla fotografia*, 1980, trad. it. Torino, Einaudi, 2003.

5. Esiste un'amplissima letteratura sul ruolo che il camminare può svolgere quale metodo di ricerca che mette in gioco le dimensioni materiali, sensuali, affettive e riflessive legate al concreto attraversamento dei luoghi. Si veda Ricketts-Hein, J., Evans, J. & Jones, P. «Mobile Methodologies: Theory, Technology and Practice», in *Geography Compass*, núm. 2(5), 2008, págs. 1266-1285 e Shortell, T. & Brown, E. *Walking in the European City. Quotidian Mobility and Urban Ethnography*, Ashgate, Farnham, 2014.

6. Williams, C. «An Environmental Victimology», en *Social Justice*, núm. 23, 1996, págs. 16-40. Hall, M.«Victims of Environmental Harms and Their Role in National and International Justice», en obra colectiva, *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring*

II. GREEN CRIMINOLOGY, GREEN CULTURAL CRIMINOLOGY E METODOLOGIE VISUALI DI RICERCA SUL CAMPO

La *green criminology*, nel cui solco si colloca l'indagine proposta, è quell'area criminologica che, per la prima volta nella storia di questa disciplina, avvicina una serie di questioni decisive per la contemporaneità: i crimini, i danni e i rischi ambientali, assieme alle varie forme di (in)giustizia riguardanti la relazione tra l'uomo e l'ecosistema[7]. In tal senso, essa rappresenta un vero e proprio «ombrello concettuale» nella cui cornice analitica vengono ricomprese ed esaminate, da molteplici prospettive, le conseguenze bio-fisiche e socio-economiche delle varie fonti di danno ambientale – come l'inquinamento, il deterioramento delle risorse, la perdita di biodiversità, il cambiamento climatico.

Secondo una definizione ampia di *green criminology*[8], essa studia i danni all'ambiente commessi da attori istituzionali dotati di potere – governi, multinazionali, apparati militari – ma anche da persone comuni. In questa ricca multidimensionalità, la maggior parte degli studiosi ha sviluppato approcci socio-legali (*socio-legal approach*) che includono nel proprio campo osservativo non solo i «crimini» definiti come tali dal diritto positivo, ma anche tutti quei danni sociali e ambientali che non rientrano necessariamente nelle definizioni statuali[9]. Come evidenziato dalla letteratura al riguardo, infatti, una definizione esclusivamente legale di crimine ambientale risulta in larga parte inadeguata, innanzitutto perché uno dei maggiori perpetratori di crimini ambientali è lo stesso Stato (tardo) moderno[10].

Pur emergendo nell'ambito della criminologia critica, la *green criminology* si caratterizza per una costitutiva apertura che le permette di andare oltre i confini di una specifica tradizione disciplinare fino a diventare un laboratorio teorico per pensare le «questioni ambientali» nel senso più

Power, Justice and Harm, coordinadores R. Walters, D. Westerhuis & T. Wyatt, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2013.

7. Natali, L. *Green criminology... op.cit.* 2015. Natali, L. «Guerre contemporanee e conseguenze ambientali. Un approccio di green criminology», en *Rassegna Italiana di Criminologia*, núm. X (3), 2016, págs. 209-218. South, N., Brisman, A. e Beirne, P. «A Guide to a Green Criminology…», op.cit. 2013. Pág. 28.

8. South, N. & Brisman, A. *Routledge International Handbook of Green Criminology*, Routledge, Londres, 2013.

9. South, N., Brisman, A. e Beirne, P. . «A Guide to a Green Criminology…», *op.cit.* 2013. Pág. 35.

10. White, R. *Transnational environmental crime: Toward an eco-global criminology*, Routledge, Londres, 2011.

ricco del termine[11]. È in questa ampiezza d'orizzonte che essa sembra in grado di promuovere nuovi «modi di vedere» il complesso rapporto uomo-ambiente, inaugurando un vero e proprio «green gaze» capace di espandere l'immaginazione criminologica sui crimini ambientali al di là dei paradigmi *mainstream*[12]. Diane HECKENBERG e Rob WHITE[13] evidenziano inoltre come nel campo della *green criminology* siano rilevanti indagini empiriche capaci di tener conto dei molteplici «discorsi» – legali e normativi, scientifici (i cosiddetti «saperi esperti»), della comunità o dei «profani», delle vittime, dei mass-media (come il giornalismo d'inchiesta)[14] – che contribuiscono, nel loro complesso intreccio, a dare forma alle questioni ambientali di volta in volta considerate[15]. In particolare, per quanto riguarda le narrazioni delle vittime, ancora poco esplorate (HALL 2013), diventa importante esplorare la natura della vittimizzazione intesa quale processo sociale attivo che implica relazioni di potere, dominio e resistenza, tanto a livello locale che globale[16]. L'idea è anche, e soprattutto, quella di re-incorniciare i processi di vittimizzazione in un più ampio contesto, che possa abbracciare orizzonti di spazio e di tempo al cui interno rendere visibili le conseguenze dannose, globali e a lungo termine, dei crimini ambientali. Per comprendere le molteplici narrazioni sulla vittimizzazione che gravitano attorno a un caso di crimine ambientale le prospettive sociali e culturali risultano decisive[17]. Grazie a esse, infatti,

---

11. SOUTH, N., BRISMAN, A. e BEIRNE, P. «A Guide to a Green Criminology…», *op.cit.* 2013.

12. NATALI, L. «The contemporary horizon of green criminology*»*, en obra colectiva *Routledge international handbook of green criminology,* coordinadores N. SOUTH & A. BRISMAN, Routledge, Londres. 2013. NATALI, L. *Green criminology... op.cit.* 2015. WHITE, R. «Environmental Issues and the Criminological Imagination», en *Theoretical Criminology*, núm. 7, 2003, págs. 483-506.

13. HECKENBERG, D. & WHITE, R. «Innovative Approaches to Researching Environmental Crime», en obra colectiva, *Routledge International Handbook of Green Criminology,* coordinadores N. SOUTH, & A. BRISMAN, Routledge, Londres, 2013, págs. 96-98.

14. WHITE, R. *Transnational environmental crime: Toward an eco-global criminology*, Routledge, Londres, 2011, pág. 119. NATALI, L. «Exploring environmental activism. A visual qualitative approach from an eco-global and green-cultural criminological perspective», en *CRIMSOC: the Journal of Social Criminology. Special Issue:* «*Green Criminology*», Autumn 2013, págs. 64-100.

15. I recenti contributi della *narrative criminology* (SANDBERG, S. & PRESSER, L. *Narrative Criminology: Understanding Stories of Crimes*, NYU Press, Nueva York, 2015.) sono estremamente promettenti, anche per quanto riguarda il possibile incontro tra *narrative e visual criminology* (CARRABINE, E. «Picture this: Criminology, image and narrative», en *Crime Media Culture,* núm. 12(2), 2016, págs. 253-270.).

16. WHITE, R. *Transnational environmental crime…op.cit*. 2011, pág. 106.

17. HALL, M.«Victims of Environmental Harms and Their Role in National and International Justice…», *op.cit.* 2013, págs. 225-226. NATALI, L.«Green criminology e vittimizzazione ambientale. Verso nuove riflessività», en *Studi sulla questione criminale*, núm. 1-2, 2014, págs. 81-98. NATALI, L.«A Critical Gaze on Environmental Victimization», en obra colectiva *Green Harms and Crimes. Critical Criminology in a Changing World,* coordinador

è possibile accedere alla percezione dei danni socio-ambientali *dall'interno*, ossia a partire dalle prospettive simboliche e culturali espresse dagli attori sociali coinvolti[18].

È dunque nell'ampia cornice teorica descritta che esploreremo il caso di Huelva, a partire dalle narrazioni dei suoi abitanti rispetto al tema dell'inquinamento. In questa valorizzazione delle narrazioni delle vittime ambientali, i confini tra criminologia, sociologia, antropologia e geografia si interfacciano in un progetto interdisciplinare, che fa entrare le narrazioni nel cuore della ricerca e che contribuisce a decostruire i meccanismi ideologici che giustificano i danni ambientali, e la vittimizzazione che ne deriva, quali inevitabili effetti dello sviluppo. D'altra parte, pur mantenendo un respiro ampio, capace di mettere in relazione differenti approcci teorici e discipline (interazionismo radicale, ricerca visuale, antropologia culturale, geografia culturale, *green criminology, environmental justice), l'indagine si coagulerà attorno a un centro* – il crimine e il danno ambientale, assieme alle forme di (in)giustizia a essi correlate – che ne denota l'appartenenza al campo della criminologia *(green)* (Natali 2015a).

Infine, l'approccio qui proposto trova la sua collocazione specifica in quella «terra di mezzo» che vede l'incontro tra *green criminology* e criminologia culturale (Ferrell 2013, 349) – ciò che Avi Brisman e Nigel South (2014) definiscono come *«green cultural criminology»*, una prospettiva criminologica che immagina nuove modalità di analisi critica dell'intersezione tra cultura, crimine, giustizia e ambiente. In questo campo emergente, una metodologia qualitativa visuale può infatti rappresentare una delle possibili vie per esplorare i molteplici aspetti dei crimini ambientali da una prospettiva ambientale e culturale[19]. Come ricorda Nicole Rafter[20], se la criminologia è, perlomeno nel suo contenuto minimo, lo studio del crimine nelle sue differenti forme, la criminologia visuale può essere definita come lo studio dei modi attraverso cui tutte le dimensioni visuali interagiscono con il crimine e il campo penale, (re)inventandosi e plasmandosi reciprocamente. Aspetto ancora più rilevante, il suo scopo è quello di sviluppare un proprio approccio teorico e metodologico,

R. Sollund, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2015.

18. Per un approccio antropologico culturale ai disastri ambientali rilevante per le questioni di *green criminology* fin qui introdotte si veda Ligi, G. *Antropologia dei disastri*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

19. Per una nozione di cultura consonante con questa proposta si veda Santoro, M. & Sassatelli, R. *Studiare la cultura. Nuove prospettive sociologiche*, Il Mulino, Bolonia, 2009; Swidler, A. «Cultura in azione: simboli e strategie»,1986, en *Studiare la cultura. Nuove prospettive sociologiche,* coordinador M. Santoro e R. Sassatelli, Il Mulino, Bolonia, 2009.

20. Rafter, N. «Introduction to special issue on Visual Culture and the Iconography of Crime and Punishment», en *Theoretical Criminology*, núm. 18, 2014, pág. 129.

suggerendo nuove forme di esplorazione visuale e di analisi critica delle relazioni sociali e di potere, di danno, sofferenza e (in)giustizia nel campo criminologico[21]. Al riguardo, la criminologia culturale ha svolto un ruolo decisivo nel riconoscimento dell'importanza delle dimensioni visuali del crimine[22]. Lungo queste sensibilità, alcuni criminologi, oltre a dedicare attenzione alle rappresentazioni visuali già esistenti dei fenomeni criminali, hanno anche provato a generare le proprie immagini visuali del crimine e del suo controllo[23]. Tuttavia, se è vero che anche nel contesto specifico della *green criminology* si possono rintracciare alcuni studi sulle dimensioni visuali dei danni ambientali[24], l'utilizzo di metodologie *ad hoc* per svolgere ricerca «sul campo» rimane pressoché inesplorato[25].

---

21. Brown, M «Visual Criminology and Carceral Studies: Counter-images in the Carceral Age», en *Theoretical Criminology*, 18, 2014, pág. 181. Rose, G. *Visual Methodologies. An Introduction to Researching with Visual Materials*, Sage, Londres, 2012. Schept, J. «(Un) seeing Like a Prison: Counter-visual Ethnography of the Carceral State», in *Theoretical Criminology*, núm. 18, 2014, pág. 203.

22. Hayward, K.J. (2009) «Visual Criminology: Cultural Criminology-style», en *Criminal Justice Matters*, núm. 78 (1), 2009, págs. 12-14.
Hayward, K.J. & Presdee, M. *Framing Crime. Cultural Criminology and the Image*, Routledge, Londres, 2010. Rafter, N. «Introduction to special issue on Visual Culture…» *op. cit.* 2014, pág. 131.

23. Ferrell, J., Hayward, K., & Young, J. *Cultural criminology* (2nd ed.), 2015, Sage, Londres. Greek, C. «Documenting and framing police public interaction with citizens: a study in visual criminology», en *Criminal Justice Matters*, núm. 78 (1), 2009, págs. 18-20. Gariglio, L. «Etnografia, studi visuali e metodi visuali in criminologia. Un dialogo con Eamonn Carrabine e Ronnie Lippens sulla criminologia visuale», en *Studi culturali*, XII (1), 2015, págs. 101-119. Gariglio, L. «Photo-elicitation in Prison Ethnography: Breaking the Ice in the Field and Unpacking Prison Officers' Use of Force», en *Crime Media Culture*, 2015, págs. 1-13. Van de Voorde, C. «Ethnographic Photography in Criminological Research», en obra colectiva *The Sage Handbook of Criminological Research Methods*, coordinadores D. Gadd, S. Karstedt & S.F. Messner, Sage, Londres, 2012. Vedi anche: Carrabine, E. «The Iconography of Punishment: Execution Prints and the Death Penalty», en *The Howard Journal*, núm. 50 (5), 2011, págs. 452-464. Carrabine, E. «Just Images. Aesthetics, Ethics and Visual Criminology», en *British Journal of Criminology*, núm. 52 (3), 2012, págs. 463-489. Carrabine, E. «Seeing Things: Violence, Voyeurism and the Camera», en *Theoretical Criminology*, núm. 18, 2014, págs. 134-158.

24. Brisman, A. & South, N. *Green Cultural Criminology. Constructions of Environmental Harm, Consumerism and Resistance to Ecocide*, 2014, Routledge, Londres. Beirne, P. *Hogarth's Art of Animal Cruelty. Satire, Suffering and Pictorial Propaganda*, 2015, Palgrave Macmillan, Londres.

25. Natali, L. «Eliciting narratives on the experiences of environmental victimization: A qualitative visual method», en obra colectiva *Environmental Crime in Transnational Context. Global Issues in Green Enforcement and Criminology*, coordinadores T. Spapens, R. White & W. Huisman, Routledge, Londres, 2016. Natali, L. *A Visual Approach for Green Criminology. Exploring the Social Perception of Environmental Harm*, Palgrave MacMillan, Londres, 2016.

III. SOLILOQUI ITINERANTI: UNA PROPOSTA METODOLOGICA

I geografi Hilary WINCHESTER e Matthew ROFE[26] evidenziano che il paesaggio può essere inteso come l'intreccio dei significati sociali con l'ambiente fisico:

«Così, il paesaggio è un "modo di vedere" specifico e altamente contestuale. In quanto costruzioni sociali, i paesaggi fisici possono essere "letti" al fine di rivelare i significati sociali e le intenzioni a essi attribuiti. La lettura di un paesaggio è un processo impegnativo, ma offre importanti comprensioni della storia dei luoghi e delle lotte attorno a essi. Già trent'anni fa, Lewis […] aveva sostenuto, acutamente, che il "paesaggio umano è la nostra autobiografia inconsapevole ..."»

Per indagare queste dimensioni in uno specifico contesto urbano contaminato, che descriveremo brevemente nel prossimo paragrafo, si è deciso di sperimentare una tecnica definita «soliloquio itinerante». Essa si ispira in parte alle esplorazioni dell'antropologo visuale Andrew IRVING[27] e intende contribuire a decifrare, strada facendo, «come gli spazi si fanno luoghi»[28], nella concreta complessità del rapporto dinamico tra attore sociale e ambiente vissuto. I partecipanti sono stati invitati a condurre il ricercatore in un luogo «significativo» che avesse a che fare con la loro percezione sociale della contaminazione. Si è poi chiesto di camminare in quel luogo e provare a esprimere ad alta voce il flusso di pensieri e di emozioni *(stream of consciousness)* [29] che poteva sorgere nel corso dell'attraversamento e, quando lo ritenevano opportuno, di prendersi una pausa per scattare delle fotografie, così da includere nel flusso narrativo delle forme espressive di tipo visuale[30].

---

26. WINCHESTER, H.P.M. & ROFE, M.W. «Qualitative Research and Its Place in Human Geography», en obra colectiva, *Qualitative Research Methods in Human Geography*, coordinador I. HAY, Oxford University Press, Oxford, 2010 págs. 10-11.

27. IRVING, A. «Strange Distance: Towards an Anthropology of Interior Dialogue», en *Medical Anthropology Quarterly*, núm. 25 (1), 2011, págs. 22-44.

28. NUVOLATI, G. «Introduzione», en obra colectiva *Lezioni di sociologia urbana*, coordinador G. NUVOLATI, Il Mulino, Bolonia, 2011. BRISMAN, A. & SOUTH, N. *Green Cultural Criminology. Constructions of Environmental Harm, Consumerism and Resistance… op.cit.* 2014.

29. Lo «*stream of consciousness*» è stato sperimentato, come tecnica narrativa, in alcune opera letterarie, in particolare di Virginia Woolf e James Joyce. In ogni caso, come nota Irving (IRVING, A. «Strange Distance: Towards an Anthropology of Interior Dialogue…», *op.cit.*, 2011, pág.26.), «a differenza dei tentativi poetici, letterari o artistici volti a comprendere e rappresentare i dialoghi interiori delle persone e mondi vitali dell'immaginazione, un approccio antropologico all'interiorità ha il dovere di offrire resoconti veritieri ed empiricamente fondati delle esperienze delle persone, sollevando così significative questioni epistemologiche, metodologiche ed etnografiche».

30. ANZOISE, V., MUTTI, C. & NATALI, L. «PAK-Map: immagini, mappe mentali e soliloqui itineranti. Un'esplorazione transdisciplinare delle percezioni sociali su Expo Milano 2015», en *Metodi Visuali*, obra colectiva, coordinador A. FRISINA, Il Mulino, Bologna. 2016.

In sostanza, ciò che diventa significativo e centrale durante il soliloquio itinerante non è solo la «vista», ma anche, e soprattutto, l'«essere nel mondo» – valorizzando una sorta di «democraticità dei sensi»[31] . Ogni osservatore, infatti, non è mai distaccato dal mondo, è anzi immerso in quello che può essere nominato come «il disordine del mondo reale»[32]. In tal senso, le sue osservazioni e le sue narrazioni sono sempre inserite in un contesto esperienziale specifico, in un vero e proprio *«web of life»*[33] – ben lontano dall'ideale di un'osservazione «distaccata» e impersonale al centro dei metodi scientifici tradizionali [34].

L'idea che ha motivato la sperimentazione di questa tecnica risiede nella convinzione che la dimensione cognitiva, per quanto imprescindibile, non è sufficiente per cogliere il senso di questi eventi, che anche a livello interpretativo «quel che succede dipende da dove succede»[35], e che, pertanto, è necessario ideare approcci metodologici che aiutino a interpretare in modo complesso e multisensoriale i fenomeni indagati[36]. Come ricorda Irving[37], «i metodi convenzionali delle scienze sociali e le tecniche di misurazione sono spesso troppo statici per catturare il carattere incompiuto, transitorio e mutevole delle esperienze e delle espressioni interiori delle persone mentre emergono nel tempo presente», nella «fluidità della percezione, dell'essere e dell'espressione» (*ivi*, 26).

---

31. Back, L. *The Art of Listening*, 2007, Bloomsbury, Londres.

32. Robins, K. *Into the Image: Culture and Politics in the Field of Vision*, Routledge, Londres, 1996. Iovino, S. «Le voci di dentro (e quelle di fuori)», en obra colectiva, *Teresa e le altre. Storie di donne nella terra dei fuochi*, coordinador M. Armiero, Jaca Book, Milán, 2014.

33. Degen, M. & Rose, G. «The Sensory Experiencing of Urban Design: the Role of Walking and Perceptual Memory», en *Urban Studies*, 2012, págs. 1-17.

34. Blumer, H. *La metodologia dell'interazionismo simbolico*, 1969. Irving, A. «Strange Distance: Towards an Anthropology of Interior Dialogue…», op.cit. 2011. Non possiamo che limitarci a segnalare l'acceso e sconfinato dibattito scaturito nel campo dell'etnografia in seguito alla pubblicazione di *Writing culture* (Clifford. J. & Marcus, G.E. (coordinador) *Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnograhy*, 1986, University of California Press, Berkeley.) – soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra letteratura e scienze sociali. Si veda Dawson, A., Hockey, J. & James, A. *After Writing Culture: Epistemology and Praxis in Contemporary Anthropology*, 1997, Routledge, Londres.

35. Nuvolati, G. «Introduzione», en obra colectiva *Lezioni di sociologia urbana*, coordinador G., Il Mulino, Bolonia, 2011.Vedi anche: Ingold, T. «Culture on the ground: The world perceived through the feet», en *Journal of Material Culture*, núm. 9 (3), 2004, págs. 315-340.

36. Pink, S. «Walking with video», en *Visual Studies*, núm. 22 (3), 2007, págs. 240-252. Pink, S. «An Urban Tour. The Sensory Sociality of Ethnographic Place-making», en *Ethnography*, núm. 9, 2008, págs. 175-196. Peyrefitte, M. «Ways of Seeing, Ways of Being and Ways of Knowing in the Inner-City: Exploring Sense of Place Through Visual Tours», en *Sociological Research Online*, núm. 17 (4), 2012, págs. 1-11.

37. Irving, A. «Strange Distance: Towards an Anthropology of Interior Dialogue…», *op.cit.*, 201, pág, 25.

Seguendo questa proposta, la questione dell'«interiorità» può essere avvicinata più adeguatamente con pratiche etnografiche e collaborative, co-costruite sul campo *con* i partecipanti (*ivi*, 25)[38]. Più precisamente, il soliloquio itinerante può essere definito come una tecnica che prova a valorizzare la ricchezza esperienziale e riflessiva che nasce dall'incontro tra il camminare, l'osservare, l'interpretare, il riflettere e il narrare[39] – a se stessi e agli altri –, aprendo l'immaginazione sociologica a nuove forme di riflessione e ricerca sul campo. D'altra parte, considerato che la percezione e l'interpretazione di un luogo che si attraversa mediante soliloquio itinerante (dimensione locale legata a uno specifico territorio) sono profondamente legate al *Self*, alle caratteristiche e alla storia del singolo attore sociale, questo approccio potrà contribuire a valorizzare l'unicità dei molteplici, e talvolta ossimorici, punti di vista su un territorio e, così facendo, concorrerà a (ri)disegnarne le mappe interpretative. Anche nella mia proposta è dunque importante essere consapevoli che «non sono solo le immagini a essere ambigue, ma anche le scene e i luoghi della vita quotidiana»[40], e che «pratiche apparentemente congruenti (camminare) e ambienti sociali condivisi (per esempio, una strada) hanno una comunanza solo superficiale e si differenziano a seconda del territorio interiore della biografia personale, del dialogo, dell'umore e dell'immaginazione» *(ibidem)*. Inoltre, questo metodo, e la concezione del *Self* che è presupposta, sfida quegli approcci che vedono l'interiorità come diretta solo «verso l'interno» e la narrazione (*storytelling*) solo «verso l'esterno», oltrepassando così una rigida dicotomia interno-esterno[41]. Al contrario, il processo è circolare[42]. Sappiamo infatti che l'osservazione e la conoscenza concorrono a plasmare il reale: quanto più il mondo acquista una forma sotto gli occhi dell'osservatore, tanto più il suo *Self* viene coinvolto (e sconvolto) da questo processo[43].

Nella tecnica del soliloquio itinerante, il punto di partenza e il luogo sono scelti dal partecipante; in mezzo, si apre un vasto campo di possibilità che egli è chiamato a esplorare, partendo dalle sollecitazioni del suo soliloquio e insieme della sua immaginazione visiva, dipingendo sulle pareti del suo «cinema mentale» – una sorta di caverna platonica – gli affreschi della sua

38. Anche le cosiddette derive psicogeografiche hanno chiari punti di contatto con questa proposta. Si veda NUVOLATI, G. *L'interpretazione dei luoghi. Flânerie come esperienza di vita*, Firenze University Press, Florencia, 2013.

39. NUVOLATI, G. *L'interpretazione dei luoghi...op.cit.*, 2013.

40. IRVING, A. «Strange Distance: Towards an Anthropology of Interior Dialogue…», *op.cit.*, 201, pág, 35.

41. IOVINO, S. «Le voci di dentro (e quelle di fuori)...», *op.cit.*, 2014.

42. IRVING, A. «Strange Distance: Towards an Anthropology of Interior Dialogue…», *op.cit.,* 2011, págs. 29 y 40. CERETTI, A & NATALI, L. *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, 2009, Raffaello Cortina, Milán.

43. CALVINO, I. *Lezioni americane*, 1988, Mondadori, Milán. Págs. 108-109.

esperienza dell'attraversamento urbano, incluse le sensazioni che riaffiorano, come epifanie, da un tempo dimenticato[44]. La narrazione è così «rivestita da un involucro immaginoso, affettivo, di voce monologante o dialogante» (*ivi*, 91). Il soliloquio itinerante è dunque un processo che intende mettere in dialogo l'intenzionalità del pensiero discorsivo con la generazione spontanea di immagini[45]. Un'operazione simile a quella descritta da Italo Calvino nelle *Lezioni Americane*:

> «Anche quando la mossa d'apertura è dell'immaginazione visiva che fa funzionare la sua logica intrinseca, essa si trova prima o poi catturata in una rete dove ragionamento ed espressione verbale impongono anche la loro logica. Comunque, le soluzioni visive continuano a essere determinanti, e talora arrivano inaspettatamente a decidere situazioni che né le congetture del pensiero né le risorse del linguaggio riuscirebbero a risolvere» (ivi, 92).

Infine, la solitudine che accompagna necessariamente il soliloquio, essenziale per dare spazio ai processi riflessivi tra sé e sé[46], è al tempo stesso una solitudine *aperta* al dialogo interiore con «altri significativi» – e quindi con le possibili audience immaginate[47] (Blumer 1969) – e con il mondo. Infatti, le parole e le fotografie dei partecipanti servono a «costruire un ponte tra le proprie espressioni interiori e un pubblico sconosciuto, ma interessato di persone immaginate»[48] – in questo caso, lo stesso ricercatore.

Più in concreto, i soliloqui ad alta voce sono stati audio-registrati e gli spostamenti nello spazio-luogo videoregistrati a distanza. Per quanto riguarda il ruolo peculiare giocato dal ricercatore nell'*accompagnare* i partecipanti, sono necessarie alcune precisazioni metodologiche. La proposta di realizzare la «performance» del soliloquio è stata accolta in modi differenti dai partecipanti: alcuni non hanno mostrato alcuna titubanza, spiegando che raccontare è qualcosa per loro molto naturale; altri, invece, hanno espresso incertezze e dubbi sulla loro capacità/efficacia nel produrre

---

44. Calvino, I. *Lezioni americane... op.cit*., 1988, pág.88.

45. Nel campo specifico della sociologia visuale, si parla al riguardo di produzione soggettiva di immagini (*native image making*). Un lavoro pioneristico è quello di Worth, S. & Adair, J. *Through Navajo Eyes: An Exploration in Film Communication and Anthropology*, University of New Mexico Press, 1997 [1972], intitolato *Through Navajo Eyes*. Più in generale, la produzione di immagini da parte dei partecipanti su invito del ricercatore rientra nell'ambito dell'*auto-photography*, un metodo di ricerca etnografica che prova a vedere il mondo attraverso lo sguardo dell'altro. Sul tema si veda Thomas, M.E. «Auto-Photography», en obra colectiva *International Encyclopedia of Human Geography*, coordinadores R. Kitchen & N. Thrift, Elsevier, 2009.; e Schoepfer, I. «Capturing neighbourhood images through photography», *Visual Ethnography*, núm. 3 (1), 2014, págs. 7-34.

46. Nuvolati, G. *L'interpretazione dei luoghi... op.cit*., 2013.

47. Blumer, H. *La metodologia dell'interazionismo simbolico*, 1969.

48. Irving, A. «Strange Distance: Towards an Anthropology of Interior Dialogue…», *op.cit.*, 2011, pág. 29..

delle «buone narrazioni»; altri ancora, non hanno accettato di partecipare, giustificando la scelta sul timore di un eccessivo coinvolgimento emotivo e sul non desiderio di aprirsi fino a quel punto. D'altra parte, si è trattato di una performance sui generis: pubblica in quanto realizzata in uno spazio pubblico, ma protetta dal pericolo della spettacolarizzazione del contenuto del soliloquio mediante alcuni accorgimenti tecnici. Pur trattandosi di soliloqui itineranti sollecitati, audio e videoregistrati dal ricercatore, la dimensione della solitudine era garantita in una certa misura dal fatto che si è scelto di seguire i partecipanti a una certa distanza, in modo che costoro potessero sviluppare un proprio percorso narrativo più liberamente e senza le presenza ravvicinata del ricercatore, che avrebbe trasformato il soliloquio in un dialogo[49]. Il microfono era indossato dal partecipante e il ricercatore non poteva sentire «in diretta» la sua narrazione – a cui poteva accedere solo una volta conclusa l'esperienza. Inoltre, le riprese sono state realizzate a distanza, con una telecamera di piccole dimensioni, in modo che il partecipante potesse in qualche misura lasciare sullo sfondo la presenza, a volte invisibile, altre volte intravista, del ricercatore. L'audio veniva poi aggiunto al video – e ai suoni d'ambiente registrati dal microfono della telecamera – in fase di editing e montaggio. Quest'ultimo aspetto veniva esplicitato all'intervistato, che poteva così sentirsi maggiormente libero di stare e conversare con se stesso. In genere, dopo qualche istante necessario per ambientarsi nel nuovo ruolo proposto, i partecipanti sono riusciti a svolgere la performance con grande naturalezza. Certamente, nei loro racconti con se stessi hanno tenuto conto dell'ascoltatore «immaginato», che poteva essere il ricercatore, quale riferimento simbolico a cui raccontare la storia del proprio rapporto con l'ambiente contaminato, o «altri fantasma»[50] ai quali ogni narrante si rivolge quando racconta la propria storia.

IV. IL CASO DI HUELVA, SPAGNA. OVVERO: LA SCENA DEL CRIMINE

Prima di riportare alcuni esempi che possono aiutare a descrivere meglio questa tecnica, è necessario tratteggiare il contesto socio-ambientale che fa da sfondo alle riflessioni metodologiche fin qui introdotte.

Gli studiosi più attenti hanno evidenziato come sia essenziale che i criminologi *green* «si rendano consapevoli delle variazioni locali e regionali delle forme del danno, e delle specifiche forze in gioco in ogni regione. […]. Infatti, la questione della scala dell'analisi – che va dal livello locale fino a quello globale – è una questione centrale negli sforzi attuali rivolti allo studio dei

49. Schoepfer, I. «Capturing neighbourhood images through photography…», *op.cit,* 2014, pág. 12.

50. Ceretti, A & Natali, L. *Cosmologie violente...op.cit.*, 2009.

crimini ambientali transnazionali»[51]. All'interno di questa consapevolezza, la necessità di non smarrire la dimensione locale di questi fenomeni di rilevanza globale ha orientato la nostra attenzione su una specifica area geografica.

Situata nel sud-ovest della Spagna, Huelva rappresenta un *case study* estremamente prezioso per approfondire la percezione dell'inquinamento generato da attività produttive risalenti nel tempo[52]. Huelva, infatti, è una città gravemente contaminata per la presenza di un imponente polo industriale installato nei primi anni Sessanta e composto da un gran numero di *corporation* del campo della chimica e dell'energia. Il polo venne costruito in prossimità della città, in quello che può essere definito come il «giardino sul retro» *(backyard)*. Riportiamo qui un'immagine della città in cui sono evidenziati i luoghi più critici interessati dalla contaminazione ambientale.

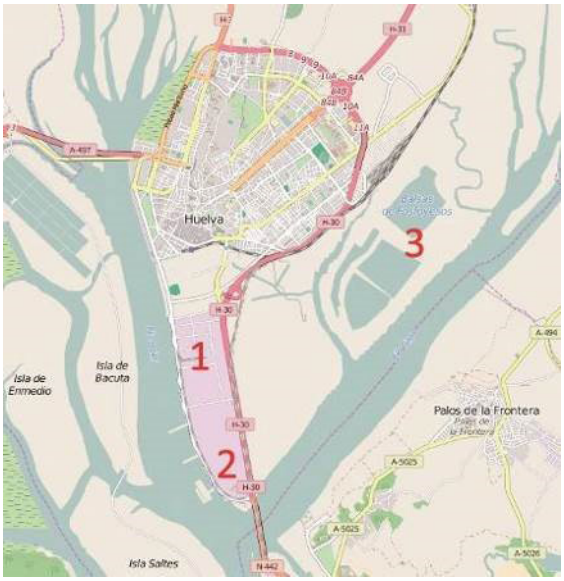


Figura 1. Huelva e il suo «giardino sul retro». 1. Il Polo chimico e industriale; 2. La spiaggia della «*Punta del Sebo*»; 3. Le «*balsas de fosfoyesos*». Source: https://ejatlas.org/ (Environmental Justice Atlas).

51. WHITE, R. *Transnational environmental crime: Toward an eco-global criminology*, Routledge, Londres, 2011. Pág.10.

52. Il caso di Huelva può essere inquadrato in una nozione ampia di «inquinamento storico». Si veda al riguardo ARROYO ZAPATERO, L., DE PABLO SERRANO, A. & GIMENO BEVIÁ, J. (en edición) «Historical Pollution in Spain. A Powerful Legal Framework for a Few Past Cases», en *Historical Pollution'. Long-term Pollution and Criminal Policy Responses,* obra colectiva, coordinadores S. MANACORDA e F. CENTONZE, Springer, Cham; e NATALI, L.«The contribution of green criminology to the exploration of "historical pollution"», en obra colectiva «*Historical Pollution*». *Long-term pollution and Criminal Policy Responses,* coordinadores S. MANACORDA & F. CENTONZE, en edición, Springer, Cham.

A partire dai primi anni che videro l'avvio delle attività industriali, la vita degli abitanti di Huelva – e l'immagine stessa della città – cambiò radicalmente: il «benessere» era finalmente giunto anche per loro. Progressivamente, però, gli effetti distruttivi e irreversibili per l'ambiente e per la salute delle persone iniziarono a imporsi e a *oscurare* la promessa di prosperità di cui le fabbriche erano state portatrici.

Questa situazione critica, dominata dalla presenza di attività industriali che fin dagli anni Sessanta rilasciavano i loro residui direttamente nel fiume Tinto, si aggravò ulteriormente quando alcune imprese del Polo chimico iniziarono a sversare anche i *«fosfoyesos»* (fosfogessi) – un residuo del processo di produzione dell'acido fosforico che contiene differenti concentrazioni di uranio. Da qui la creazione delle cosiddette *«balsas de fosfoyesos»*, veri e propri bacini contaminati che si estendono per una superficie di 1200 ettari, a sole poche centinaia di metri dalla città[53].

Sia per la gravità della contaminazione del territorio che per l'assenza di una risposta delle istituzioni a questa grave situazione, sembra proprio che il quadro generale di Huelva – qui solo brevemente tratteggiato – si avvicini, pur a livello locale, a ciò che Ulrich Beck[54] chiama «irresponsabilità organizzata». La città di Huelva è davvero un «laboratorio a cielo aperto», nel quale nessuno è responsabile del risultato degli esperimenti[55].

Molti abitanti sono ormai convinti che si tratti di una situazione irreversibile, sedimentata nel tempo, e si sentono in balia di attori potenti contro i quali è impossibile lottare. Alcuni di loro continuano a coltivare la volontà e la speranza di recuperare i propri spazi vitali legati all'ambiente e proteggere la propria salute. Quando, però, sull'altro piatto della bilancia vengono collocati i posti di lavoro e i vantaggi economici generati dall'industria la domanda diventa: come è possibile restare in equilibrio, seduti sull'altalena di un tragico e ingiusto dilemma? Nonostante questo scenario preoccupante, sembra che esso rimanga sorprendentemente *invisibile*. È questa constatazione che ci spinge ad andare oltre, domandandoci: che cosa sta davvero accadendo a Huelva?

Assunto pertanto che il crimine «esiste» – perlomeno se si accoglie, come è stato proposto in questa sede, una definizione allargata di crimine ambientale come quella proposta dalla *green criminology*[56] – le domande

53. NATALI, L. *Green criminology. Prospettive emergenti ... op.cit*., 2015. Págs. 138-142.

54. BECK, U. Conditio humana*. Il rischio nell'età globale*, 2007, trad. it Bari, Laterza, 2008. pág. 54.

55. In questo senso, lo scenario indagato ben rappresenta ciò che Rob Nixon (NIXON, R. *Slow violence and the environmentalism of the poor*, Harvard University Press, Cambridge, 2011.) definisce «slow *violence»,* ossia una violenza che si produce silenziosamente e sul lungo termine, rimanendo in larga parte invisibile nonostante la gravità dei danni prodotti.

56. Per una ricostruzione del contesto giuridico di riferimento si veda Arroyo Zapatero *et al. op.cit.* (in corso di stampa).

che hanno focalizzato l'obiettivo esplorativo sono state le seguenti: da quali manifestazioni gli abitanti di Huelva si accorgono della sua esistenza? Quali sono le dimensioni, richiamate dalle loro narrazioni, che consentono anche a noi osservatori di cogliere la sua «realtà», così tragicamente elusiva? Quali narrazioni e quali immagini riguardanti il problema della contaminazione circolano tra gli abitanti del territorio implicato? Quali questioni criminologiche e quali domande di giustizia fanno emergere?

La letteratura sociologica che si è interessata allo studio della percezione sociale del rischio da parte di chi vive in ambienti contaminati è estremamente ampia[57]. Nello specifico, l'esplorazione criminologica che qui si propone, attingendo a una tradizione di pensiero nota come interazionismo simbolico radicale[58], si orienterà nella direzione tracciata e seguita dai sociologi Javier Auyero e Debora Swistun (2009) nello studio della baraccopoli *Flammable* (Buenos Aires, Argentina), ossia verso le origini delle percezioni sociali e dei vissuti riguardanti la contaminazione. A partire da uno sguardo sintonizzato con le esperienze e le narrazioni degli abitanti di Huelva, quali attori sociali collocati in una ben precisa rete di simboli, interazioni sociali e rapporti di dominio, sarà possibile ricostruire e comprendere ciò che orienta la loro «definizione della situazione», e che *può* motivare il loro agire o non agire.

Concentrando dunque la nostra attenzione su un *altrove* che ben esemplifica uno dei *loci* caratteristici della «modernità» e delle sue «conseguenze»[59], avremo modo di notare come abitare un ambiente contaminato sia un'esperienza estremamente complessa che si costruisce a partire da molteplici sfere interagenti: da quella personale a quella sociale, fino al livello storico e politico[60]. Occuparsi del «problema della contaminazione» e delle esperienze degli abitanti di Huelva rispetto a esso, non significherà andare alla ricerca delle cause dell'attuale degrado ambientale o delle responsabilità di imprese multinazionali *(corporation)* o dello Stato. A interessare il nostro sguardo saranno piuttosto le percezioni sociali e i significati che compongono le esperienze di contaminazione e di ingiustizia ambientale dei residenti, ciò che costoro sanno, pensano e sentono in relazione alla drammatica situazione ambientale in cui vivono. Coerentemente, la finalità non sarà tanto valutare o verificare il valore di verità delle narrazioni emerse, quanto piuttosto comprendere le possibili «lenti» simboliche ed emotive che organizzano le prospettive psico-sociali sulla contaminazione[61].

---

57. Auyero, J. & Swistun, D. *Flammable. Environmental Suffering in an Argentine Shantytown*, 2009, Oxford University Press, Oxford.

58. Athens, L. «Radical Interactionism. Going Beyond Mead», en *Journal for the Theory of Social Behaviour*, núm. 37(2), págs. 2007. 137-165.

59. Giddens, A. *Le conseguenze della modernità*, 1990, trad. it. Il Mulino, Bolonia, 1994.

60. Auyero, J. & Swistun, D. *Flammable. Environmental Suffering …op.cit*., 2009. Pág. 5

61. Natali, L. *A Visual Approach for Green Criminology… op.cit*., 2016.

L'assunzione di una prospettiva che rinunci alla pretesa positivistica di rappresentare *direttamente* gli «oggetti» osservati è un passaggio imprescindibile: questi ultimi, infatti, saranno l'esito di ciò che è stato ri-creato dal ricercatore stesso in collaborazione con i partecipanti – i quali non vivono in uno spazio indifferenziato e astratto, bensì in un ambiente *reale* e, nel nostro caso, gravemente «contaminato». Se è vero che, con le parole di James HILLMAN[62], «perfino le biografie incominciano collocando il soggetto in un luogo fisico», che «l'io nasce in mezzo agli odori di una precisa geografia» e che «[s]iamo ecologici già dal primo giorno», di questi aspetti occorrerà tener conto[63] . La poliedricità della realtà osservata è, da questa visuale, innanzitutto molteplicità sensoriale. Scrive l'antropologo David Le Breton[64] «La percezione non è coincidenza con le cose, bensì interpretazione. Ogni uomo cammina in un universo sensoriale che è legato a ciò che la sua storia personale ha prodotto […]. Nel percorrere la medesima foresta, individui diversi sono sensibili a cose differenti». È questa la direzione che, all'interno di una prospettiva di *green cultural criminology*, intendiamo intraprendere.

V. IL SOLILOQUIO ITINERANTE DI AURELIO. L'IMMAGINAZIONE STORICA E LA MEMORIA COLLETTIVA DI UN LUOGO

I frammenti dei soliloqui itineranti che ora proponiamo sono stati realizzati a Huelva nel maggio del 2015[65]. I partecipanti hanno scelto dei luoghi che in qualche misura risuonassero con i loro vissuti biografici legati al «problema» della contaminazione della città. Iniziare con l'illustrazione di singole esperienze di soliloquio itinerante consentirà di osservare da vicino alcuni

62. HILLMAN, J. *Il codice dell'anima. Carattere, vocazione, destino*, 1996, trad. it., Adelphi, Milán, 2007. Pág, 117.

63. IOVINO, S. «Le voci di dentro (e quelle di fuori)...», *op.cit.* 2014.

64. LE BRETON, D. *Il sapore del mondo. Un'antropologia dei sensi*, 2006, trad. it., Raffaello Cortina, Milán, 2007.

65. Questa sperimentazione rappresenta lo sviluppo metodologico di una ricerca qualitativa avviata nel 2008 (NATALI, L. *A Visual Approach for Green Criminology… op.cit.* 2016.) e attualmente in corso. I partecipanti ai soliloqui qui riportati erano già stati intervistati nel 2008 con la tecnica nota come *photo elicitation* (HARPER, D. «Talking about Pictures: A Case for Photo Elicitation», *Visual Studies*, núm. 17(1), 2002) – «un processo di organizzazione delle interviste attorno alle fotografie» (HARPER, D. *Changing works: visions of a lost agriculture*, University Of Chicago Press, Chicago, 2001). Per quanto riguarda le persone selezionato, si è deciso di non costruire un campione statistico. In una prospettiva interazionista simbolica, infatti, «un piccolo numero di informatori ben informati rappresentano […] un campione più efficace rispetto a un campione composto da un gran numero di soggetti solo minimamente coinvolti» (HARPER, D. *Changing works...op.cit.*, 2001, pág. 27; vedi anche CARDANO, M. *Tecniche di ricerca qualitativa. Percorsi di ricerca nelle scienze sociali*, 2003, Carocci, Roma).

aspetti significativi emersi da questa prima sperimentazione. Esse verranno presentate individualmente, riportando per ciascun partecipante trascrizioni di una certa estensione, che possano restituire, nella loro concretezza, la dimensione temporale e insieme spaziale del flusso coscienza. Il focus specifico di questo contributo, infatti, non consiste nell'analisi e nell'interpretazione dei materiali narrativi raccolti al fine di mettere in luce eventuali consonanze o dissonanze tra i soliloqui emersi. Questo livello, più legato al contenuto delle storie raccolte e a una lettura «trasversale», richiederebbe ben altro spazio. Si tratta piuttosto di presentare questa tecnica di raccolta dati attraverso alcuni esempi utili per evidenziare le potenzialità emerse nello studio pilota, avviando riflessioni metodologiche stimolate dalla messa in risonanza – e non da una semplice giustapposizione – delle singole esperienze qui presentate.

Il primo soliloquio vede come protagonista Aurelio (60 anni, pensionato) che si occupa attivamente del problema della contaminazione a Huelva, partecipando con un ruolo di spicco all'associazione *Mesa de la Ría*. Aurelio sceglie di realizzare il suo soliloquio itinerante lungo la strada che costeggia il fiume Tinto e al tempo stesso la zona industriale. La «schizofrenia visuale» del luogo fa da sfondo alla sua narrazione.

Figura 2. Aurelio mentre cammina e narra a se stesso il paesaggio che attraversa. Fermo immagine tratto dalla videoripresa del soliloquio itinerante (NATALI 2015).

La ría de Huelva ... la mia ría … che sfocia nel mare ... luogo d'incontro ... luoghi di vita, di scambio .... Come mi piace questo luogo, che meraviglia ... Mi sento come se stessero per arrivare le navi fenice ... come se stessero per giungere le navi romane ... entrando in questo meraviglioso spazio naturale, di incontro di culture ... questa ria che è certamente il luogo dove si incontravano queste culture, dove i Fenici scambiavano … con i Tartari ... dove i Romani venivano a raccogliere le loro grandi ricchezze, ma dove portavano anche la propria … dove i musulmani hanno fatto il loro insediamento lì ... proprio lì, la Isla Saltés … il grande accampamento musulmano, dove si scambiavano

le culture, le lingue, la conoscenza ... questa è la ría de Huelva, questa è la meraviglia che ammiro ... mi incanta ... ma occorre anche tenere a mente che questa è la vita ... che anche qui viene a scambiare, anche qui viene a dare e a ricevere ... queste specie del Golfo di Cadice salgono fin qui e qui, in queste acque, si realizza lo scambio … depongono le uova, nascono, vanno via e tornano ... da millenni, questo fantastica ria che è il fiume Odiel ... a Huelva ... Onuba, come la chiamavano gli antichi, Onuba ... un luogo dove mi ritrovo, dove percepisco ... un luogo dove trovo molte spiegazioni che danno senso al mio mondo ... mi piace la ría de Huelva […]

... il luogo dove Colombo pregò per invocare buona fortuna per il suo viaggio ... ed è partito da qui, da questo stesso spazio che sto vedendo proprio ora ... è meraviglioso, mi piace ... è una cosa che mi fa sentire ... mi dà un'iniezione di vita .. questi eventi storici in cui è possibile vedere come gli esseri umani si fanno sempre più grandi nel corso dei secoli ... beh, di questi secoli passati ...

Nella narrazione di Aurelio, questo «prima» – presente anche nella memoria storica di molti abitanti di Huelva[66] – risulta in drastica opposizione rispetto a «ciò» che adesso è «lì», ossia la realtà delle fabbriche. Un contrasto che può assumere contenuti rivendicativi.

[…] non sono molto soddisfatto di ciò che è accaduto nel ventesimo secolo ... ogni cosa ha la sua storia, naturalmente ... la storia del ventesimo secondo non mi convince […] ah, madre mia, quanto sfruttamento, quanto la follia in questo ventesimo secolo ... questo ventesimo secolo che ci ha dato ciò che vediamo lì in fondo, questo è ciò che mi rende triste ... quello che vediamo là in fondo, è ciò che ha fatto cambiare questa terra, questo estuario, questa ricca storia di Huelva ... e che l'ha affondata nella miseria più assoluta, che è quello che abbiamo ora […] Il ventesimo secolo ... questo è quello che ha portato il Novecento ... le barbarie del ventesimo secolo ... due guerre, una super-industrializzazione ... quello che viene chiamato, tra virgolette, il «progresso umano» ... Ha portato ovunque ... no, no ... a Huelva è questo ciò che abbiamo ... questi sono gli esiti dell'industrializzazione degli anni Sessanta, qualcuno, al di sopra del bene e del male, ha deciso di installare queste fabbriche qui ... e la meraviglia che è la ría de Huelva, il luogo di incontro della vita e della cultura, diventa una fossa piena di inquinamento, piena di morte e in un luogo dove si depreda questa terra ... le risorse vengono sfruttate qui, ma non torna niente ... abbiamo attraversato questo secolo di progresso che è il ventesimo secolo ... e che ci ha portato questo ... e a questa terra non le viene dato, si prendono tutto ... qui ... e non lasciano nulla ... beh, davvero non lasciano niente, Aurelio? Certo che lasciano qualcosa, lasciano i residui, 120-130 milioni di tonnellate di rifiuti tossici scaricati là nelle paludi del fiume Tinto ... e ciò che viene scaricato nei fondali ... questo è quello che ci rimane ... questa barbarie ... qui è dove si vede ... il ventesimo

66. Natali, L. *Green criminology. Prospettive emergenti...op.cit.*, 2015, págs. 154-158.

secolo ... tutto questa meraviglia della foce di Huelva diventa un immenso mucchio di letame pieno di milioni di tonnellate di rifiuti tossici che sono là, sul fondale di questo estuario ...

La consapevolezza e il senso di ingiustizia sociale e ambientale che progressivamente affiora trova il suo apice alla vista di una delle industrie ritenute maggiormente responsabili dell'inquinamento del territorio di Huelva. Da qui, inizia una riflessione che, partendo dal tragico dilemma lavoro/fabbriche *versus* salute/ambiente[67] e incontrando «strada facendo» il senso del disgusto per ciò che si vede e si percepisce, approda infine a un senso di profonda tristezza per il destino di Huelva:

> Ecco l'industria Fertiberia, creatrice di posti di lavoro secondo loro, in realtà generatrice di morte, ha prodotto il maggiore ecocidio che c'è in Europa e forse in tutto il mondo ... una palude che hanno riempito di residui alle porte di una città e che nessuno ha provato a bloccare, qui tutti danno per scontato, inconsciamente ... penso che questa foto potrebbe essere ...

Figura 3. Avenida Francisco Montenegro, Huelva. (autore: Aurelio 2015)

l'usurpazione della ría de Huelva ... foto, qualche foto, quante volte dovremo ancora denunciare questo oltraggio? Cosa possiamo fare di più? Dio santo ... come si può consentire una simile aberrazione nel ventunesimo secolo, in cui si presume che le norme ambientali europee siano tra le più esigenti? E questo è già stato denunciato in Europa, al governo dello stato, a quello locale, alla municipalità, ma fino a quando si consentirà tutto questo? Fino a quando? Che immensa tristezza mi fa sentire ... dio mio ... vorrei

67. *Ibidem*. Págs. 160-162.

compensare la foto di questa barbarie con qualcosa che può fare un po' ... questa foto può compensare un po' l'immensa tristezza che sento ...

Figura 4. Particolare della Avenida Francisco Montenegro, Huelva. (autore: Aurelio 2015)

[…] Dovremo cominciare a pensare a qualcosa che possa muoverci verso sentimenti più gratificanti perché ogni volta che si passa di qui, Aurelio, provi disgusto ... un immenso disgusto … e anche se continui a guardare il fiume non puoi ignorare quello che c'è lì, dall'altro lato ... ciò che è stato e ciò che stanno ancora facendo ... mio dio ... «mi huelva tenía una ría», dice la canzone ... [canta tra sé e sé]

Giunto alla *Punta del Sebo* – la spiaggia dove prima dell'inquinamento industriale gli abitanti di Huelva andavano a fare il bagno –, e grazie al ricordo di una esperienza di mobilitazione collettiva evocato da questo luogo significativo, Aurelio introduce nel flusso narrativo un'ulteriore dimensione della memoria storica, che lo avvicina ancora di più alla rivendicazione dei luoghi:

> […] Questo spazio è autentica storia recente... qui è proprio dove c'era lo stabilimento balneare ... dove le persone andavano a fare il bagno ... dove arrivavano con un piccolo treno ... e vivevano i loro giorni di vacanza, di acqua, di mare ... sul fiume, qui ... alla confluenza del Tinto e Odiel ... un bellissimo spazio, come sempre alla confluenza di due fiumi, naturalmente. Mesopotamia ... luogo di incontro, la ría de Huelva […] Oh, mi ricordo la grande Garbanzada, 11 anni fa ... questo mese di ottobre ... la grande garbanzada ... dove tutta le gente di Huelva venne a dire che non voleva più le fabbriche ... che le portassero via ... non volevano più inquinamento, che lo eliminassero! Migliaia di persone qui, e chi ci ha fatto caso? Mi sto ricordando di tutti coloro che sono andati in Galizia quando ci fu la marea nera del Prestige ... fantastico, arrivarono anche i tedeschi ... per salvare le spiagge e la costa galiziana contaminati dallo sversamento del petrolio ... ma io

dico: perchè non vengono qui? Perché non vengono a Huelva a salvarci? Perché non vengono a pulire le nostre coste? I nostri estuari, le nostre paludi ... perché non arrivano? Perché Huelva deve essere la grande ignorata? Perché Huelva deve essere questo spazio verso cui nessuno mostra rispetto? È molto forte ... questo. È molto forte ... mi chiedo ... penso che risale a quando gli inglesi lavoravano le miniere ed esercitavano il loro potere come fossero nel bel mezzo dell'Africa ... e non vuol dire che se fosse avvenuto in Africa sarebbe stato giustificato, non andava bene da nessuna parte ... ma qui erano in Europa, sfruttando le risorse naturali in Europa ... con amministrazioni statali non corrotte … ma niente ... qui hanno sfruttato tutto questo. […] Facciamo l'ultima foto e torniamo a casa Aurelio, che dici? ... perché per oggi la camminata è stata sufficiente ... ben fatto … andiamo ...

VI. IL SOLILOQUIO ITINERANTE DI MANOLO. LA NOSTALGIA DI UN «PASSATO LUMINOSO» E «LA FOLLIA DELLA POLITICA»

Il protagonista del secondo soliloquio itinerante è Manolo (70 anni, pensionato) che sceglie di condurre la sua esplorazione narrativa e visuale nei pressi del molo del Río Tinto, il punto finale dei binari dove giungeva il minerale estratto dalle miniere inglesi verso la fine del 1800, e che ora è usato per attività di pesca e tempo libero. I ricordi personali evocati dal luogo si intrecciano con la memoria storica e la nostalgia di un passato ormai lontano e irrecuperabile.

Figura 5. Manolo mentre percorre l'antico molo del Río Tinto. Fermo immagine tratto dalla videoripresa del soliloquio itinerante (NATALI, 2015).

A questo molo giungevano i carichi di minerali de la miniera del Río Tinto ... provenivano da cinquanta chilometri nell'interno della provincia e arrivavano fino a quell'angolo e lì caricavano tutti i minerali … ma tutta questa zona ... la visione

che ho da bambino ... è che tutta questa zona aveva un'attività completamente febbrile, con barche, navi, barche da pesca ... che purtroppo oggi non c'è più ...

La prepotenza della politica e certamente la sensazione, dei politici, di non essere attaccati alla terra le vediamo bene espresse in questo bordo della banchina che hanno realizzato e che è ancora incompiuta, togliendo 80 metri di profondità alla nostra ... quando ero bambino facevo il bagno in quella zona che chiamano «bajamar» con una sabbia bianchissima … oggi non è più possibile ... nella follia politica e nell'insensibilità dalla classe politica di rispettare l'ambiente in cui vivono i cittadini essi sono stati anche privati del diritto di vedere il loro estuario ... se ora un cittadino quando sarà finito questo lungomare volesse vedere la foce del fiume non potrà farlo come prima, quando bastava scendere una scalinata e farsi il bagno, con una sabbia bianca ... in tutta questa zona ... ora questo non sarebbe più possibile, dovrebbe spingersi fino alla fine del pontile per vedere la foce … ma questo estuario è nostro, dei cittadini … e siamo stati privati di tutto questo ambiente che abbiamo qui, di una bellezza ineguagliabile, per più di 60 anni ... quando per di più l'espansione della città era rivolta verso il fiume, la città guardava al fiume ... io da bambino sono venuto qui diverse volte e mi mettevo a guardare il tramonto ... il sole tramontava laggiù ... e lo spettacolo era indescrivibile ... mi ricordo che mi sedevo sul bordo del molo, o qui sul ponte, e iniziavo a scrivere poesie ... avrò avuto dieci o undici anni ... ma era questo il sentimento che questo paesaggio ti ispirava ... questa pace ... e questa natura … non rotta dall'attività dell'uomo … perché la pesca era una funzione molto degna ... e quando camminavamo in quella direzione che ora è occupata dai volumi delle ciminiere delle fabbriche contaminanti del polo, beh, laggiù, in fondo, si poteva vedere perfettamente la statua di Colombo e un posto molto popolare come è stata la Punta del Sebo …Io per ragioni biologiche e per motivi di età non riuscirò a vederlo, ma ... ho fiducia che questa memoria collettiva, che è ancora sepolta nella coscienza dei cittadini di Huelva, possa risvegliarsi e riconquistare quella Huelva che ci ha felicemente accompagnati nella nostra infanzia ... Non sto dicendo che prima Huelva era meglio ... dico però che era certamente più naturale, più autentica ... più adatta alla vita ... in modo che potevi sentirti parte della terra ... e si è sempre detto che Huelva è una città di mare, ma questa possibilità oggi è vietata...

Il soliloquio di Manolo chiama direttamente in causa l'esperienza di ingiustizia (ambientale) legata alla privazione di un diritto, come quello di poter godere di un ambiente salubre, non minaccioso o pregiudizievole per la salute umana. È una questione al centro del dibattuto tema della giustizia ambientale *(Environmental justice)* che riguarda «la distribuzione dell'ambiente tra le persone in termini di accesso e uso di specifiche risorse naturali in precise aree geografiche, e l'impatto di determinate pratiche sociali e rischi ambientali su certe popolazioni»[68] . Inoltre, la percezione sociale di un luogo e di un

68. WHITE, R. *Crimes Against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*, Willan, Londres, 2008, pág. 15. NATALI, L. *Green criminology. Prospettive emergenti... op.cit.*, 2015, págs. 170-174.

«prima» non ancora intaccato dall'orizzonte della contaminazione, si tinge di colorazioni biografiche in chi ha vissuto direttamente quelle esperienze[69], come Manolo. I ricordi sono costellati di cose e persone appartenenti ai vissuti unici e personali. Si tratta di narrazioni che potremmo definire «transitive» nel senso che *mediano* tra il mondo interno dell'attore sociale e l'ambiente socio-naturale in cui si trova, condensando significati e atmosfere peculiari:

> Beh, mi dicono che hanno preso un cavalluccio marino e che recentemente hanno visto una tartaruga ... mmm, è un buon segno ... e, naturalmente, loro stessi si danno delle spiegazioni ... dicono che si stanno chiudendo le fabbriche ... si dovrebbe immaginare, beh no, io l'ho vissuto… senza fabbriche, la quantità di pesce che c'era qui ... e ricordo che più o meno in questa zona dove c'è lo stadio di calcio, la zona chiamata «bajamar», arrivavano piccole imbarcazioni a remi o con piccoli motori ... per scaricare … e quando venivamo a fare il bagno da bambini l'acqua era molto chiara e trasparente ... sulle rive c'era sabbia bianca … e ci divertivamo a prendere le teste di pesce legandole a un bastone messo nell'acqua … dopo neanche dieci minuti quella testa di pesce era ricoperta di granchi che cercano di divorare il pesce ... era un divertimento … e rendeva evidente che le acque erano pulite e pure ... e poi tutta quella zona chiamata «Bacuta», dove sembra che ci siano resti archeologici che risalgono a circa 3000 mila anni ... come sempre non è stato erogato denaro pubblico per proseguire le ricerche e per far sì che questa città possa conoscere tutto il suo brillante passato, anche se non recente ... nell'antichità sì, ha avuto un passato luminoso ...

VII. IL SOLILOQUIO ITINERANTE DI REBECA. «LE FABBRICHE NEL FONDO DI OGNUNO DI NOI» E I SENTIMENTI CONTRASTANTI

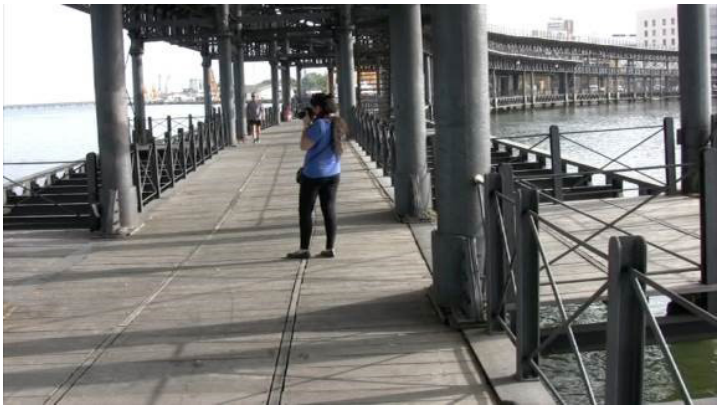


Figura 6. Rebeca mentre scatta una fotografia sul molo del Río Tinto, lo stesso luogo scelto da Manolo. Fermo immagine tratto dalla videoripresa del soliloquio itinerante (Natali, 2015).

69. Jedlowski, P.*Storie comuni. La narrazione nella vita quotidiana*, Mondadori, Milán, 2000.

Il terzo soliloquio è quello di Rebeca (40 anni, insegnante) che sceglie di condurci nello stesso luogo di Manolo, il molo del Río Tinto. Vediamo come l'attraversamento di uno stesso luogo da parte di differenti attori sociali faccia sorgere pensieri ed emozioni uniche e non riducibili all'ambiente che fa da «stimolo» alla narrazione[70].

… la struttura è meravigliosa ... Huelva è uno dei posti migliori dove stare ... e guarda ... ho una foto del matrimonio di mia sorella in questo luogo ... erano molto diverse le cose... milioni di ricordi qui ... grandi festeggiamenti ... proprio qui di fianco fuochi d'artificio ... e tutti in città potrebbe godere di questa passeggiata ... beh, i sentimenti sono contrastanti ... sono doppi ... perché da un lato c'è la preziosità di questo sito ... e dall'altro il dolore per ciò che resta ... e ora vai in giro qua cosa senti? Lavori in corso ... cosa vedi ? Ancora lavori ... faccio una foto ...

Figura 7. Vista dal molo del Río Tinto, Huelva. (autore: Rebeca 2015)

Dove è finita la riva del mare? Dov'è la spiaggia? Non c'è nessuna riva, nessuna spiaggia ... perché l'acqua dovunque vai è inquinata ... e ora che stava iniziando a ripulirsi un po' ... niente ... lì possiamo vedere ciò che ne hanno fatto della riva ... un nuovo lungomare, uh che bello !! ... Stupendo ... che bello e come lo facciamo? Oh, guarda che bella idea: rimuoviamo tutti

70. Irving, A. «Strange Distance: Towards an Anthropology of Interior Dialogue…», *op.cit.* 2011. Pág.35.

i residui che stavano lì ... draghiamo tutto il fondo del mare ... rimuoviamo tutto … con tutti i rifiuti che erano lì ... con tutto l'inquinamento e con tutto il resto ... e lo utilizziamo per fare cosa? ... un lungomare? Un pontile? Così che non si possono più mettere i piedi nell'acqua? In modo che non si può più nemmeno vedere la sabbia? E per che cosa? Per passeggiare accanto alla contaminazione rimossa? Passeggiando qui intorno significa sentire le due cose insieme […] pertanto io vedo questo in questo pontile … questa meravigliosa ricchezza ... ma vedo anche che la contaminazione che ha cominciato da allora ... beh, la doppia faccia delle cose […] Continuo a camminare … Huelva è un posto molto tranquillo, molto bello, ma dovunque vai finisci per vedere sempre la stessa cosa, le fabbriche sullo sfondo […] che non sono davvero in fondo ... beh si, sono nel fondo di ognuno di noi ... ogni volta che vedo una ciminiera mi ricordo di tutti i programmi di salute che ci sono qui ... è che qui tutti si lamentano dei problemi di salute, ma nessuno si preoccupa sul serio, giusto? Voglio dire, certo si preoccupano quando vengono toccati in prima persona, ma ... poi quando si tratta di trovare una soluzione, di lottare … ci sono 2 o 3 che ne parlano ma … è finito anche quello …

Un senso di rassegnazione spinge Rebeca a riflettere sull'apatia che attraversa i vissuti degli abitanti di Huelva e si domanda come si possa risvegliare un sentimento di rivolta nei confronti di tutto questo, quando anche un grave incidente avvenuto recentemente ad alcuni operai delle fabbriche non è riuscito a scalfire l'immobile passività della coscienza sociale e delle risposte istituzionali:

> … preferisco restare con tutti i miei ricordi ... molti anni di lotta e mi sembra che si sia tornati indietro ... allora forse non resta che rassegnarsi … Non so cosa accadrà a tutto ciò che è costruito qui quando il mare dirà: «riprenderò questo posto che è mio» ... perché tutti questi edifici sono costruiti sulle paludi ... l'altro giorno c'è stato un terremoto e la mia collega mi ha detto che si è spostato un po' tutto ... e quando il mare dirà «tornerò» non so cosa succederà a metà della città di Huelva ... che prende sempre più lo spazio del mare … Beh, lì abbiamo di nuovo le fabbriche ... ohi, e come staranno quei tre operai che hanno avuto l'incidente? E questo non è abbastanza forte? Che non ci sia un reparto ustionati nell'ospedale di Huelva? E che devi morire lungo la strada che porta da Huelva a Siviglia? E avendo il polo chimico proprio qui … con tutto il pericolo che rappresenta ... e questo non è forte? Ecco, in realtà quello che succede qui è che il sangue non brucia, dai ... tre uomini ustionati … che disastro … ah come sono negativa oggi!

Beh, torno a sperare quando vedo, come adesso, i bambini da queste parti ... speranza che tutto questo venga recuperato e che possano goderne davvero ... in fondo non è così difficile ... basta fare leggi migliori per le industrie ... dare valore a questo e non lasciare che sia il potere, che normalmente si corrompe, a prendere le decisioni ... sì, preferisco rimanere con questa idea di speranza ...

VIII. QUESTIONI APERTE TRA METODO E NARRAZIONE

Alcuni degli interrogativi di portata generale sollecitati dalla lettura e nell'analisi di questi brevi frammenti dei soliloqui itineranti condotti nello specifico scenario di Huelva sono: quali corrispondenze/continuità e quali dissonanze/interruzioni si registrano nelle narrazioni verbali e visuali dei partecipanti? Quali pensieri e quali immagini relative alla contaminazione ambientale pesano qualitativamente di più nella percezione, nell'interpretazione e nell'immaginazione degli attori sociali coinvolti?

Non possiamo approfondire in questo contributo le articolate questioni che dovremmo introdurre per rispondere a tali interrogativi. Tuttavia, alcuni punti possono essere perlomeno sfiorati. In primo luogo, ciò che è emerso con particolare evidenza esplorando via narrazione (discorsiva e visuale) la percezione sociale della contaminazione è stata la complessa connessione delle persone al *luogo*. Mentre alcuni partecipanti hanno un forte rapporto con il «giardino» (*backyard*) incontaminato dei tempi passati, il loro attuale *«sense of place»* spesso oscilla. A volte si sentono come se fossero sono stati scacciati quel «giardino» – quasi dei rifugiati temporali; in altre occasioni, invece, sembrano rimanere saldamente ancorati al loro luogo. Inoltre, alcuni dei partecipanti considerano la natura «non umana» come inanimata; altre volte, essi personificano la natura come una vittima di inquinamento ed entrano in dialogo con essa[71]. In tal senso, la tecnica del soliloquio ha rappresentato anche il contesto al cui interno i partecipanti hanno potuto riconsiderare il loro rapporto con la natura «non umana». Infine, nelle narrazioni si possono rintracciare repertori di spiegazioni adottati per tenere insieme la complessità paradossale – schizofrenica appunto – del loro abitare quei luoghi[72]. Nel flusso dinamico del processo narrativo, le fotografie hanno a volte ri-orientato le narrazioni dei soliloqui sviluppati dai partecipanti nel corso del proprio attraversamento, dando vita a nuove intuizioni per il narratore e il ricercatore[73].

---

71. L'ecocriticismo materiale rappresenta un prezioso orizzonte interpretativo per approfondire la relazione complessa tra narrazioni, linguaggio e mondo materiale, nella co-presenza tra attori umani e «non umani». Si veda IOVINO, S. & OPPERMANN, S. «Stories come to matter», en obra colectiva, *Material ecocriticism*, coordinadores S. IOVINO & S. OPPERMANN, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 2014. Si veda anche CIANCHI, J. *Radical environmentalism. Nature, identity and more-than-human agency*, 2015, Palgrave, Basingstoke. In particolare, sull'utilità di impiegare metodologie visuali al fine di tener conto anche degli aspetti «materiali» dei mondi socio-culturali si veda SCHOEPFER, I. «Capturing neighbourhood images through photography...», *op.cit.*, 2014.

72. NATALI, L. *A Visual Approach for Green Criminology… op. cit.* 2016.

73. CALVINO, I. *Lezioni americane*, 1988, Mondadori, Milán, pág. 92. SCHOEPFER, I. «Capturing neighbourhood images through photography...», *op.cit.*, 2014, pág. 18

Sul piano metodologico, occorre poi evidenziare che nel lavoro di trascrizione e interpretazione dei soliloqui itineranti, sembra essenziale *inseguire* l'articolato percorso delle narrazioni, molteplici e ossimoriche, che catturano e mettono in relazione punti vicini e lontani, nello spazio e nel tempo, introdotti dalle prospettive dei partecipanti. In tal senso, «[…] ogni breve testo sta vicino agli altri in una successione che non implica una consequenzialità o una gerarchia ma una rete entro la quale si possono tracciare molteplici percorsi e ricavare conclusioni plurime e ramificate»[74]. Questo delicato processo di avvicinamento richiede una sensibilità particolare alle prospettive, ai racconti e «modi di vedere» *(ways of seeing)*[75] degli attori coinvolti, un ascolto attento e prossimo alle «verità» espresse nelle loro narrazioni. La sfida è quella di indagare le narrazioni elaborate dai partecipanti per come si aggregano, si concentrano o si disperdono, in ragione dell'intenzionalità del narrante nell'incontro con quella dell'ascoltatore «immaginato». Si tratta di una ricerca di voci, realizzata mediante l'ascolto attivo da parte del ricercatore sociale quale «persona-orecchio». Come scrive Svetlana Aleksievič[76]:

Flaubert si definiva un uomo-penna; io potrei dire di essere una donna-orecchio. Quando cammino per strada e colgo parole, frasi ed esclamazioni, mi dico sempre: quanti romanzi spariscono senza lasciare traccia! Spariscono nell'oscurità. C'è tutta una parte della vita umana, quella delle conversazioni, che non riusciamo a cogliere attraverso la letteratura. Non l'apprezziamo per il suo valore, non ci stupisce, non ci appassiona. Ma a me affascina, ne sono rimasta prigioniera. Adoro il modo in cui parlano le persone … adoro le voci umane solitarie. È la cosa che amo di più, la mia passione.

Da questa visuale, la tecnica del soliloquio itinerante può contribuire a generare comprensione rispetto ai «flussi di coscienza» e alle narrazioni[77] che accompagnano le esperienze di vittimizzazione ambientale delle persone, accogliendo anche i conflitti e i dilemmi in essi presenti. Come ricorda Ancora Irving[78], «i flussi di pensieri, reverie e immaginazione, complessi, a volte ripetitivi, e spesso idiosincratici, che rimangono al di sotto delle espressioni e attività pubbliche degli attori sociali non possono

74. CALVINO, I. *Lezioni americane*. *op.cit*. 1988. Pág. 72.

75. BERGER, J. *Ways of seeing*, (2008 [1972]), Penguin, Londres. ROSE, G. *Visual Methodologies. An Introduction to Researching with Visual Materials*, Sage, Londres, 2012, pág. 13.

76. ALEKSIEVIČ, S. «Io, l'orecchio di tante voci solitarie», en *La Repubblica*, 8 dicembre 2015 (discorso pronunciato il 7 dicembre 2015 per il conferimento del Nobel per la letteratura).

77. Nuovamente, un approccio di *narrative criminology* può dimostrarsi estremamente prezioso per cogliere questi livelli di analisi (vedi SANDBERG, S. & PRESSER, L. *Narrative Criminology: Understanding Stories of Crimes*, NYU Press, Nueva York, 2015).

78. IRVING, A. «Strange Distance: Towards an Anthropology of Interior Dialogue…», *op cit.*, 2011, págs. 23-24.

essere considerati come irrilevanti e soggettive»[79]: al contrario, essi sono costitutivi rispetto alle esperienze vissute e sono il «mezzo principale attraverso cui le persone interpretano, comprendono e gestiscono la loro condizione» (*ivi*, 24), inclusi i contesti di vittimizzazione ambientale.

Naturalmente, evitare di imporre schemi predeterminati sulla realtà indagata[80] non significa accettare acriticamente tutto ciò che si presenta alla nostra attenzione di ricercatori sociali. È sempre necessario stabilire una «giusta» distanza, già profondamente politica, che consenta una visione critica in grado di evidenziare, ad esempio, tutti quei fenomeni di diniego[81] che contribuiscono a costruire e a orientare i processi interpretativi relativi ai danni ambientali[82]. Non è raro, infatti, che i residenti finiscano per «subire» decisioni prese «dall'alto» senza poter opporre alcuna resistenza o avere alcun potere di influenza sulla progettazione delle politiche ambientali o, cosa ancora più grave, senza neanche «mettere a fuoco» e comprendere i processi in atto[83]. È su questo margine che il ruolo di «scholar-activist» che studia le percezioni – senza ridursi o immedesimarsi in esse – può contribuire a creare una giusta distanza riflessiva e critica, promuovendo percorsi di riconoscimento e mettendo in moto dialoghi pubblici – aspetti che rinviano alla nozione di *public criminology*[84] (Chancer e McLaughlin 2007).

Per quanto riguarda la direzione di senso che motiva la raccolta delle voci delle vittime è opportuno ricordare come nel campo ambientale si registri una tendenza a «lasciare la questione agli esperti»[85]. Le ragioni di questa tendenza sono molteplici, e sono state ben descritte dalle sofisticate proposte teoriche di Bruno Latour[86] e Beck[87]. Tali autori evidenziano come la scienza abbia da sempre emarginato le voci dei «profani» e le loro

79. «Le persone restano degli esseri pensanti e parlanti anche quando, pur esteriormente in silenzio, nel loro intimo rimuginano su una serie di preoccupazioni più o meno serie» (Irving, A. «Strange Distance: Towards an Anthropology of Interior Dialogue…», *op cit.*, 2011, pág. 24).

80. Blumer, H. *La metodologia dell'interazionismo simbolico*, 1969.

81. Cohen, S. *Stati di negazione. La rimozione del dolore nella società contemporanea*, 2001.

82. Heckenberg, D. & White, R. «Innovative Approaches to Researching Environmental Crime», en obra colectiva, *Routledge International Handbook of Green Criminology,* coordinadores N. South & A. Brisman, Routledge, Londres, 2013.

83. Halsey, M. *Deleuze and environmental damage: Violence of the text*, Ashgate, Aldershot, 2006.

84. Chancer, L. & Mclaughlin, E. «Public criminology: Diverse perspectives on theory and policy», in *Theoretical Criminology*, núm. 11 (2), 2007, págs. 155-173.

85. Natali, L. *Green criminology. Prospettive emergenti... op.cit.* 2015, págs. 127-128.

86. Latour, B. *Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze*, 1999, Raffaello Cortina, Milán, 2000.

87. Beck, U. *Conditio humana… op.cit.* 2007.

narrazioni perché è prevalsa la convinzione che in queste narrazioni non ci fosse riflessività (e tantomeno «verità»), ma solo percezioni distorte e cariche di pregiudizi, ridotte cioè a quello che Latour chiama l'«inferno del sociale» – una *doxa*, un'opinione illusoria. Scrive LATOUR[88] sulla *riflessività* degli attori sociali:

Da dove proviene quella sorta di disfattismo che obbligherebbe a credere che quando un umano parla, egli vaga penosamente nell'illusione se non c'è una voce tonante e venuta dal nulla – la voce della Natura, la voce della Legge – che gli detti sempre convinzioni e condotta? Siamo davvero così sprovveduti, noi, poveri esseri umani? La costruzione brancolante di verità indiscutibili che avviene attraverso la discussione tra umani mi è sempre sembrata più interessante, più duratura e più dignitosa.

Seguendo questa specifica opzione epistemologica, diventa chiaro che per allargare la comprensione delle questioni ambientali è necessario introdurre *tutta* la conoscenza rilevante – non solo quella della Scienza con la S maiuscola. Le esperienze che gli abitanti di un luogo hanno del territorio in cui vivono rappresentano in tal senso uno dei saperi di cui occorre tener conto. Un sapere, anch'esso «esperto», che spesso rimane invisibile e *inaudito* perché proviene da attori sociali che sono sprovvisti del potere necessario per agire in maniera significativa sul proprio ambiente (naturale *e* sociale) [89]. La comprensione dei modi in cui le persone percepiscono e valutano le questioni ambientali di rilevanza anche criminologica può così diventare uno dei mezzi fondamentali per ampliare l'esperienza necessaria quando si deve immaginare, progettare e mettere in pratica politiche pubbliche in campo ambientale. Per fare ciò, è necessario fornire descrizioni dense («*thick description*») che siano in grado di cogliere e contenere le ambiguità e le sfide complesse che connotano questi scenari[90]. Forme di *«mobile methodologies»* come il soliloquio itinerante, che valorizzano il *movimento* quale dimensione costitutiva e insostituibile nella (ri)costruzione della conoscenza degli abitanti dei luoghi mostrano grandi potenzialità anche in dialogo con i crescenti sviluppi tecnologici[91].

---

88. LATOUR, B. *La fabbrica del diritto. Etnografia del Consiglio di Stato*, 2002, Città Aperta Edizioni, Troina, 2007, págs. 232-233.

89. La nozione gramsciana di folklore, inteso come un fenomeno da studiare e prendere sul serio (Angioni 2011, 206-213), sembra rivelarsi utile anche nel campo ambientale. Oggi abbiamo infatti a che fare con nuove forme di subalternità, con nuovi aspetti del senso comune che interessano direttamente le questioni uomo-ambiente, proprio a partire da ciò che pensa la «gente comune». In tal senso, ho proposto la nozione di *folk green criminology* (Natali 2016c).

90. FERRELL, J., HAYWARD, K., & YOUNG, J. *Cultural criminology* (2nd ed.), 2015, Sage, Londres. BRISMAN, A. & SOUTH, N. *Green Cultural Criminology…op.cit.*, 2014.

91. RICKETTS-HEIN, J., EVANS, J. & JONES, P. «Mobile Methodologies: Theory, Technology and Practice», in *Geography Compass*, núm. 2(5), 2008, págs. 1266-1285.

IX. CONCLUSIONI E STRADE FUTURE

Nel volume «The poetics of crime: understanding and researching crime and deviance through creative sources»[92], il curatore Michael Hviid Jacobsen evidenzia l'importanza per la criminologia di sperimentare metodologie creative, che oltrepassino i confini disciplinari e gli habitus *mainstream,* rappresentino il motore di un modo di svolgere indagini «poeticamente inspirate» e contribuiscano a fecondare di nuovi sguardi l'immaginazione criminologica, al fine di sviluppare approcci *«verstehen oriented»*. Naturalmente, non si deve dimenticare che la sperimentazione di metodologie inedite non è un fine da perseguire in se stesso: queste ultime sono dei mezzi ideati e progettati per sondare empiricamente questioni di rilevanza scientifica in modo differente rispetto ai tradizionali metodi di osservazione, raccolta e analisi dei dati. Il metodo di osservazione proposto si muove proprio in questa direzione e sembra mostrare l'attitudine a riunire la natura molteplice e complessa delle esperienze di coloro che vivono in aree inquinate, descrivendo nel dettaglio e dal *loro* punto di vista, ciò che sanno, pensano e sentono rispetto alla realtà in cui vivono[93]. Esso contribuisce a mettere in discussione concezioni semplicistiche circa il modo in cui le vittime interpretano la «scomoda verità» della contaminazione e dei danni ambientali, valorizzando il «visuale» quale possibile strumento euristico della *green cultural criminology*[94]. L'esame dei principali aspetti metodologici del soliloquio itinerante, è stato accompagnato da alcuni brani che hanno illustrato come le parole e le immagini[95] prodotte nel corso dell'attraversamento urbano, possano contribuire, nella loro intima connessione, a (ri)conoscere gli sguardi e le voci di chi vive esperienze di vittimizzazione ambientale. Questa tecnica è stata ideata e testata per mostrare i molteplici modi in cui l'ambiente «stimola e provoca incessantemente pensieri interiori, emozioni e sensazioni» senza tuttavia condizionarli in modo deterministico, e al tempo stesso, per rendere visibili e udibili le esperienze interiori e i mondi immaginativi degli attori sociali mentre attraversano un certo luogo[96] contaminato.

---

92. Hviid Jacobsen, M. *The poetics of crime: understanding and researching crime and deviance through creative sources*, Routledge, Londres, 2014.

93. Un'analoga sensibilità alle dimensioni narrative, visuali, sensoriali ed emozionali si ritrova – pur applicata a un differente oggetto di studio – nella proposta del criminologo Andrew Millie (2016), che inaugura una *aesthetic criminology*.

94. Brisman, A. & South, N. *Green Cultural Criminology…op.cit*., 2014.

95. Certamente «[i]l reale non si risolve nelle sue rappresentazioni o nei suoi simulacri, ma è l'effetto del tutto sensibile e anche materiale di pratiche, tra cui la produzione di immagini, che variamente si intrecciano e ci restituiscono il senso del mondo» (Demaria 2011, 157).

96. Irving, A. «Strange Distance: Towards an Anthropology of Interior Dialogue…», *op cit.*, 2011, pág. 26.

L'attenzione alla dimensione spaziale del flusso di coscienza e alle modalità con cui esso intercetta i differenti luoghi incontrati dai partecipanti potrà trovare, in prospettiva futura, possibili sviluppi per quanto riguarda la fase di condivisione e restituzione dei risultati della ricerca. Per esempio, ambienti interattivi online, che possano raccogliere e organizzare – anche secondo logiche non lineari – le narrazioni emerse, partecipano delle metodologie *open source* sempre più diffuse e aiutano a ripensare le versioni più tradizionali con cui vengono articolate le fasi di restituzione della ricerca[97] rappresentando un passaggio innovativo per dare sostanza metodologica alla «doppia ermeneutica» descritta da Giddens[98]. In più, simili forme di restituzione e condivisione dei dati si muovono nella direzione di una *newsmaking criminology* in campo ambientale[99], ossia una prospettiva criminologica che si propone di partecipare al dibattito pubblico e «popolare», immettendo contro-narrative e discorsi sostitutivi rispetto a quelli prodotti dalle narrative mass-mediatiche, che possano in qualche misura resistere al monopolio narrativo della criminologia *mainstream*[100].

Con l'entrata in scena della *green criminology*, è nato un nuovo contesto teorico e metodologico al cui interno esplorare le possibilità espressive – cognitive, emozionali e immaginative – con cui si manifestano i danni ecologici, sul piano globale e locale. Metodi di «osservazione attenta e di analisi compassionevole» come quello descritto possono aiutare «noi stessi e gli altri a capire e affrontare la realtà quotidiana di ingiustizia» [101]: «esponendo/rivelando le ingiustizie, decostruendo le ideologie che attraversano il crimine e i processi di vittimizzazione, dando voce a chi non viene ascoltato e riconosciuto, tali metodi possono costruire una conoscenza decisamente pericolosa»[102]. A tal fine, sembra necessario sviluppare non solo metodi flessibili, ma anche strumenti concettuali altrettanto duttili e sensibili, capaci di catturare in modo critico l'elusività e l'inafferrabilità delle problematiche ambientali e della loro

97. Anzoise, V., Mutti, C. & Natali, L. «PAK-Map: immagini, mappe mentali e soliloqui itineranti. Un'esplorazione transdisciplinare delle percezioni sociali su Expo Milano 2015», en *Metodi Visuali*, obra colectiva, coordinador A. Frisina, Il Mulino, Bologna. 2016. Ricketts-Hein, J., Evans, J. & Jones, P. «Mobile Methodologies…», *op.cit.*, 2008, págs. 1279-1280.

98. Giddens, A. *Le conseguenze della modernità*, *op.cit.* 1990.

99. Brisman, A. & South, N. *Green Cultural Criminology…op.cit.*, 2014, pág. 32.

100. Per un approccio storico al ruolo della narrazione come strumento di testimonianza e resistenza in campo ambientale si veda Armiero, M. «Introduzione. Raccontare ***è*** resistere», en *Teresa e le altre*. *Storie di donne nella terra dei fuochi*, obra colectiva, coordinador M. Armiero, Jaca Book, Milán, 2014.

101. Ferrell, J., Hayward, K., & Young, J. *Cultural criminology* (2nd ed.), 2015, Sage, Londres, págs. 236-237.

102. *Ibidem*.

rappresentazione[103], senza ridurne le dimensioni complesse, molteplici e conflittuali che le connotano. L'augurio è che queste sensibilità emergenti nel campo della criminologia *green* e visuale possano aprire la strada a nuove esplorazioni dei crimini e dei danni ambientali, troppo a lungo trascurati dagli ambiti socio-criminologici. Come ricorda Calvino[104], «[…] l'immaginazione, pur seguendo altre vie da quelle della conoscenza scientifica, può coesistere con quest'ultima, e anche coadiuvarla, anzi essere per lo scienziato un momento necessario per la formulazione delle sue ipotesi».

X. BIBLIOGRAFÍA

Aleksievič, S. «Io, l'orecchio di tante voci solitarie», en *La Repubblica*, 8 dicembre 2015 (discorso pronunciato il 7 dicembre 2015 per il conferimento del Nobel per la letteratura).

Angioni, G. *Fare, dire, sentire. L'identico e il diverso nelle culture*, Il Maestrale, Nuoro. 2011.

Anzoise, V., **Mutti, C.** & **Natali, L.** «PAK-Map: immagini, mappe mentali e soliloqui itineranti. Un'esplorazione transdisciplinare delle percezioni sociali su Expo Milano 2015», en *Metodi Visuali*, obra colectiva, coordinador A. Frisina, Il Mulino, Bologna. 2016.

Armiero, M. «Introduzione. Raccontare ***è*** resistere», en *Teresa e le altre*. *Storie di donne nella terra dei fuochi*, obra colectiva, coordinador M. Armiero, Jaca Book, Milán, 2014.

Arroyo Zapatero, L., **De Pablo Serrano, A.** & **Gimeno Beviá, J.** (en edición) «Historical Pollution in Spain. A Powerful Legal Framework for a Few Past Cases», en *Historical Pollution.´ Long-term Pollution and Criminal Policy Responses,* obra colectiva, coordinadores S. Manacorda e F. Centonze, Springer, Cham.

Athens, L. «Radical Interactionism. Going Beyond Mead», en *Journal for the Theory of Social Behaviour*, núm. 37(2), págs. 2007. 137-165.

Auyero, J. & **Swistun, D.** *Flammable. Environmental Suffering in an Argentine Shantytown*, 2009, Oxford University Press, Oxford.

Barthes, R. *La Camera chiara. Nota sulla fotografia*, 1980, trad. it. Torino, Einaudi, 2003.

103. Sheppard, S.R.J. *Visualizing Climate Change. A Guide to Visual Communication of Climate Change and Developing Local Solutions*, Routledge, Londres, 2012. Nixon, R. *Slow violence and the environmentalism of the poor*, Harvard University Press, Cambridge, 2011, págs. 2-3.

104. Calvino, I. *Lezioni americane*, *op.cit.*, 1988, pág. 89.

Beirne, P. *Hogarth's Art of Animal Cruelty. Satire, Suffering and Pictorial Propaganda*, 2015, Palgrave Macmillan, Londres.

Back, L. *The Art of Listening*, 2007, Bloomsbury, Londres.

Beck, U. Conditio humana*. Il rischio nell'età globale*, 2007, trad. it Bari, Laterza, 2008.

Berger, J. *Ways of seeing*, (2008 [1972]), Penguin, Londres.

Blumer, H. *La metodologia dell'interazionismo simbolico*, 1969, trad. it, Armando Editore, Roma, 2006.

Brisman, A. & **South, N.** *Green Cultural Criminology. Constructions of Environmental Harm, Consumerism and Resistance to Ecocide*, 2014, Routledge, Londres.

Brown, M. «Visual Criminology and Carceral Studies: Counter-images in the Carceral Age», en *Theoretical Criminology*, 18, 2014, págs. 134-158.

Calvino, I. *Lezioni americane*, 1988, Mondadori, Milán.

Cardano, M. *Tecniche di ricerca qualitativa. Percorsi di ricerca nelle scienze sociali*, 2003, Carocci, Roma.

Carrabine, E.:

- «The Iconography of Punishment: Execution Prints and the Death Penalty», en *The Howard Journal*, núm. 50 (5), 2011, págs. 452-464.

- «Just Images. Aesthetics, Ethics and Visual Criminology», en *British Journal of Criminology*, núm. 52 (3), 2012, págs. 463-489.

- «Seeing Things: Violence, Voyeurism and the Camera», en *Theoretical Criminology*, núm. 18, 2014, págs. 134-158.

- «Picture this: Criminology, image and narrative», en *Crime Media Culture*, núm. 12(2), 2016, págs. 253-270.

Ceretti, A. & **Natali, L.** *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, 2009, Raffaello Cortina, Milán.

Chancer, L. & **Mclaughlin, E.** «Public criminology: Diverse perspectives on theory and policy», in *Theoretical Criminology*, núm. 11 (2), 2007, págs. 155-173.

Cianchi, J. *Radical environmentalism. Nature, identity and more-than-human agency*, 2015, Palgrave, Basingstoke.

Clifford. J. & **Marcus, G.E.** (coordinador) *Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnograhy*, 1986, University of California Press, Berkeley.

Cohen, S. *Stati di negazione. La rimozione del dolore nella società contemporanea,* 2001, trad. it.Carocci, Roma, 2002.

Dawson, A., **Hockey, J.** & **James, A.** *After Writing Culture: Epistemology and Praxis in Contemporary Anthropology*, 1997, Routledge, Londres.

Degen, M. & **Rose, G.** «The Sensory Experiencing of Urban Design: the Role of Walking and Perceptual Memory», en *Urban Studies*, 2012, págs. 1-17.

Demaria, C. «"Documentary turn"? La cultura visuale, il documentario e la testimonianza del "reale"», en *Studi culturali*, VIII (2), 2011, págs. 155-176 .

Ferrell, J. «Tangled Up in Green. Cultural Criminology and Green Criminology», en obra colectiva, *Routledge International Handbook of Green Criminology*, coordinadores N. South & A. Brisman, 2013, Routledge, Londres.

Ferrell, J., **Hayward, K.**, & **Young, J**. *Cultural criminology* (2nd ed.), 2015, Sage, Londres.

Gariglio, L.:

- «Etnografia, studi visuali e metodi visuali in criminologia. Un dialogo con Eamonn Carrabine e Ronnie Lippens sulla criminologia visuale», en *Studi culturali*, XII (1), 2015, págs. 101-119.

- «Photo-elicitation in Prison Ethnography: Breaking the Ice in the Field and Unpacking Prison Officers' Use of Force», en *Crime Media Culture*, 2015, págs. 1-13.

Giddens, A. *Le conseguenze della modernità*, 1990, trad. it. Il Mulino, Bolonia, 1994.

Greek, C. «Documenting and framing police public interaction with citizens: a study in visual criminology», en *Criminal Justice Matters*, núm. 78 (1), 2009, págs. 18-20.

Hall, M.«Victims of Environmental Harms and Their Role in National and International Justice», en obra colectiva, *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*, coordinadores R. Walters, D. Westerhuis & T. Wyatt, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2013.

Halsey, M. *Deleuze and environmental damage: Violence of the text*, Ashgate, Aldershot, 2006.

Harper, D.:

- *Changing works: visions of a lost agriculture*, University of Chicago Press, Chicago, 2001.

- «Talking about Pictures: A Case for Photo Elicitation», *Visual Studies*, núm. 17(1), 2002, págs. 13-26.

Hayward, K.J. (2009) «Visual Criminology: Cultural Criminology-style», en *Criminal Justice Matters*, núm. 78 (1), 2009, págs. 12-14.

Hayward, K.J. & **Presdee, M.** *Framing Crime. Cultural Criminology and the Image*, Routledge, Londres, 2010.

Heckenberg, D. & **White, R.** «Innovative Approaches to Researching Environmental Crime», en obra colectiva, *Routledge International Handbook of Green Criminology,* coordinadores N. South & A. Brisman, Routledge, Londres, 2013.

Hillman, J. *Il codice dell'anima. Carattere, vocazione, destino*, 1996, trad. it., Adelphi, Milán, 2007.

Hviid Jacobsen, M. *The poetics of crime: understanding and researching crime and deviance through creative sources*, Routledge, Londres, 2014.

Ingold, T. «Culture on the ground: The world perceived through the feet», en *Journal of Material Culture*, núm. 9 (3), 2004, págs. 315-340.

Iovino, S. «Le voci di dentro (e quelle di fuori)», en obra colectiva, *Teresa e le altre*. *Storie di donne nella terra dei fuochi*, coordinador M. Armiero, Jaca Book, Milán, 2014.

Iovino, S. & **Oppermann, S.** «Stories come to matter», en obra colectiva, *Material ecocriticism*, coordinadores S. Iovino & S. Oppermann, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 2014.

Irving, A. «Strange Distance: Towards an Anthropology of Interior Dialogue», en *Medical Anthropology Quarterly*, núm. 25 (1), 2011, págs. 22-44.

Jedlowski, P. *Storie comuni. La narrazione nella vita quotidiana*, Mondadori, Milán, 2000.

Latour, B.:

- *Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze*, 1999, Raffaello Cortina, Milán, 2000.

- *La fabbrica del diritto. Etnografia del Consiglio di Stato*, 2002, Città Aperta Edizioni, Troina, 2007.

Le Breton, D. *Il sapore del mondo. Un'antropologia dei sensi*, 2006, trad. it., Raffaello Cortina, Milán, 2007.

Ligi, G. *Antropologia dei disastri*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

Millie, A. «Urban interventionism as a challenge to aesthetic order: Towards an aesthetic criminology», en *Crime Media Culture*, 2016, págs. 1-18.

Natali, L.:

- «The big grey elephants in the backyard of Huelva, Spain», en obra colectiva *Global environmental harm. Criminological perspectives,* coordinador R. White, Willan, Cullompton, 2010.

- «The contemporary horizon of green criminology», en obra colectiva *Routledge international handbook of green criminology,* coordinadores N. South & A. Brisman, Routledge, Londres. 2013.

- «Exploring environmental activism. A visual qualitative approach from an eco-global and green-cultural criminological perspective», en *CRIMSOC: the Journal of Social Criminology. Special Issue: «Green Criminology»*, Autumn 2013, págs. 64-100.

- «Green criminology e vittimizzazione ambientale. Verso nuove riflessività», en *Studi sulla questione criminale*, núm. 1-2, 2014, págs. 81-98.

- *Green criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, Giappichelli, Turín, 2015.

-«A Critical Gaze on Environmental Victimization», en obra colectiva *Green Harms and Crimes. Critical Criminology in a Changing World,* coordinador R. Sollund, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2015.

- «Eliciting narratives on the experiences of environmental victimization: A qualitative visual method», en obra colectiva *Environmental Crime in Transnational Context. Global Issues in Green Enforcement and Criminology*, coordinadores T. Spapens, R. White & W. Huisman, Routledge, Londres, 2016.

- «Guerre contemporanee e conseguenze ambientali. *Un approccio di green criminology», en Rassegna Italiana di Criminologia*, núm. X (3), 2016, págs. 209-218.

- *A Visual Approach for Green Criminology. Exploring the Social Perception of Environmental Harm*, Palgrave MacMillan, Londres, 2016.

- «The contribution of green criminology to the exploration of "historical pollution"», en obra colectiva *«Historical Pollution». Long-term pollution and Criminal Policy Responses*, coordinadores S. Manacorda & F. Centonze, en edición, Springer, Cham.

Nixon, R. *Slow violence and the environmentalism of the poor*, Harvard University Press, Cambridge, 2011.

Nuvolati, G.:

- «Introduzione», en obra colectiva *Lezioni di sociologia urbana*, coordinador G., Il Mulino, Bolonia, 2011.

- *L'interpretazione dei luoghi. Flânerie come esperienza di vita*, Firenze University Press, Florencia, 2013.

Peyrefitte, M. «Ways of Seeing, Ways of Being and Ways of Knowing in the Inner-City: Exploring Sense of Place Through Visual Tours», en *Sociological Research Online*, núm. 17 (4), 2012, págs. 1-11.

Pink, S.:

- «Walking with video», en *Visual Studies*, núm. 22 (3), 2007, págs. 240-252.

- «An Urban Tour. The Sensory Sociality of Ethnographic Place-making», en *Ethnography*, núm. 9, 2008, págs. 175-196.

Robins, K. *Into the Image: Culture and Politics in the Field of Vision*, Routledge, Londres, 1996.

Rafter, N. «Introduction to special issue on Visual Culture and the Iconography of Crime and Punishment», en *Theoretical Criminology*, núm. 18, 2014, págs. 127-133.

Ricketts-Hein, J., **Evans, J.** & **Jones, P.** «Mobile Methodologies: Theory, Technology and Practice», in *Geography Compass*, núm. 2(5), 2008, págs. 1266-1285.

Rose, G. *Visual Methodologies. An Introduction to Researching with Visual Materials*, Sage, Londres, 2012.

Sandberg, S. & **Presser, L.** *Narrative Criminology: Understanding Stories of Crimes*, NYU Press, Nueva York, 2015.

Santoro, M. & **Sassatelli, R.** *Studiare la cultura. Nuove prospettive sociologiche*, Il Mulino, Bolonia, 2009.

Schept, J. « (Un)seeing Like a Prison: Counter-visual Ethnography of the Carceral State», in *Theoretical Criminology*, núm. 18, 2014, págs. 198-223.

Schoepfer, I. «Capturing neighbourhood images through photography», *Visual Ethnography*, núm. 3 (1), 2014, págs. 7-34.

Sheppard, S.R.J. *Visualizing Climate Change. A Guide to Visual Communication of Climate Change and Developing Local Solutions*, Routledge, Londres, 2012.

Shortell, T. & **Brown, E.** *Walking in the European City. Quotidian Mobility and Urban Ethnography*, Ashgate, Farnham, 2014.

South, N. «A Green Field for Criminology? A Proposal for a Perspective», en *Theoretical Criminology*, núm. *2* (2), 1998, págs. 211-234.

South, N. & **Brisman, A.** *Routledge International Handbook of Green Criminology*, Routledge, Londres, 2013,

South, N., **Brisman, A.** e **Beirne, P.** «A Guide to a Green Criminology», en obra colectiva *Routledge International Handobook of Green Criminology*, coordinadores N. South & A. Brisman, Routledge, Londres, 2013.

Swidler, A. «Cultura in azione: simboli e strategie»,1986, en *Studiare la cultura. Nuove prospettive sociologiche,* coordinador M. Santoro e R. Sassatelli, Il Mulino, Bolonia, 2009.

Thomas, M.E. (2009) «Auto-Photography», en obra colectiva *International Encyclopedia of Human Geography*, coordinadores R. Kitchen & N. Thrift, Elsevier, Oxford, 2009.

Van de Voorde, C. «Ethnographic Photography in Criminological Research», en obra colectiva *The Sage Handbook of Criminological Research Methods*, coordinadores D. Gadd, S. Karstedt & S.F. Messner, Sage, Londres, 2012.

White, R.:

- «Environmental Issues and the Criminological Imagination», en *Theoretical Criminology*, núm. 7, 2003, págs. 483-506.

- *Crimes Against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*, Willan, Londres, 2008.

- *Transnational environmental crime: Toward an eco-global criminology*, Routledge, Londres, 2011.

Williams, C. «An Environmental Victimology», en *Social Justice*, núm. 23, 1996, págs. 16-40.

Winchester, H.P.M. & **Rofe, M.W.** «Qualitative Research and Its Place in Human Geography», en obra colectiva, *Qualitative Research Methods in Human Geography*, coordinador I. Hay, Oxford University Press, Oxford, 2010.

Worth, S. & **Adair, J.** *Through Navajo Eyes: An Exploration in Film Communication and Anthropology*, University of New Mexico Press, 1997 [1972].

LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS NATURALES COMO UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LOS DESAFÍOS GLOBALES DEL SIGLO XXI

MANAGING NATURAL HAZARDS AS A SECURITY AND HUMAN RIGHTS ISSUE IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL CHALLENGES OF THE 21st CENTURY

Marga Zango-Pascual[123]
Universidad Pablo de Olavide
Área: Tecnologías del medio ambiente
mzanpas@upo.es

Resumen: desde el siglo pasado el concepto de seguridad ha sufrido una gran evolución, al igual que la forma en que nos enfrentamos a los desastres naturales. Se ha pasado de verlos como trágicos e inabordables, desde una gestión puramente correctiva, a entender que es posible minimizar e incluso evitar gran parte de sus efectos con la gestión adecuada, de carácter más prospectivo. No son sólo naturales, la participación del ser humano influye en sus efectos y la ciencia y la tecnología han avanzado tanto que el conocimiento que tenemos de los fenómenos naturales, combinado con las adecuadas políticas de gestión, podría disminuir notablemente sus consecuencias, es decir, el riesgo. Así mismo, la vulnerabilidad de la sociedad va en aumento, local y globalmente y es muy variable en componentes y

1. Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Sistemas Químicos, Físicos y Naturales. Área: Tecnologías del medio ambiente. Carretera de Utrera, Km 1, 41013 Sevilla. www.upo.es
2. GREPAC-OEPAC: Grupo de investigación en Emergencias en Patrimonio Cultural-Observatorio de Emergencias en Patrimonio Cultural. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes. C/ Pintor El Greco, n.º 2. Madrid. www.oepac.es
3. IERD. Instituto Español para la Reducción de los Desastres. Cádiz. www.ierd.es

por contextos y países diversos. En consecuencia, a pesar de los esfuerzos internacionales por reducir el número de víctimas y pérdidas no siempre se consigue. Por ello es esencial que el Marco de Sendai 2015-2030, principal instrumento de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre (RRD) esté en línea con otros grandes desafíos de la sociedad actual, como la lucha contra el cambio climático y la consecución de los ODS.

Palabras clave: Seguridad Civil para la Sociedad, Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), Marco de Sendai 2015-2030, Desafíos globales, Desastres Naturales, Resiliencia.

Abstract: We have gone from seeing them as tragic and unapproachable, from a purely corrective management, to understand that it is possible to minimize and even avoid a large part of its effects with adequate, more forward-looking management. They are not only natural, human participation influences their effects and science and technology have advanced so much whereas our policies, it could significantly reduce its consequences, i.e. risk. Likewise, the vulnerability of society is increasing, locally and globally, and is highly variable in components and by different contexts and countries. As a result, despite international efforts to reduce the number of causalities and losses, this is not always achieved. That is why it is essential that the Sendai Framework 2015-2030, the main instrument for Disaster Risk Reduction (DRR) of United Nations is aligned with other major challenges of today`s society, such as the fight against Climate Change and the achievement of the SDGs.

Key words: Civil Security for society, Disaster Risk Reduction (DRR), Sendai Framework 2015-2030, Global Challenges, Natural Disasters, Resilience.

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En 2023 celebramos el 75 aniversario de la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, en adelante, DUDH, y aunque desde que fue proclamada en 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas[4] ha sido traducida a más de 500 idiomas y se han hecho grandes esfuerzos por su aplicación, aún hoy siguen siendo muchos los desafíos de Derechos Humanos a los que nos enfrentamos.

La DUDH reconoce en su artículo 1 el derecho a la vida, pero continuando con la declaración integra, todos y cada uno de ellos, se ven afectados en caso de desastres naturales. Incluso los planteamientos de Derechos Humanos más actuales, como los conocidos como *Derechos Humanos de Tercera Generación*, en particular si nos centramos en el *Derecho al Desarrollo, el*

4. Proclamada por la Resolución de la Asamblea General de la ONU 217 A (III) *Carta Internacional de los Derechos del Hombre,* en su sesión 183a de 10 de diciembre de 1948.

Derecho al medio ambiente adecuado (o *sano*, se emplean ambas acepciones) y el *Derecho a la Paz*, se ven gravemente interferidos en casos de desastres naturales[5]. Con el desarrollo tecnológico se ha acuñado el término *NaTECH* para dar respuesta a las cada vez más frecuentes catástrofes tecnológicas desencadenadas por riesgos naturales, un ejemplo reciente es el terremoto y posterior maremoto de Japón en 2011 que desencadenó el accidente nuclear de Fukushima.

Además del Sistema de Naciones Unidas, que cuenta con una Oficina especializada en la Reducción del Riesgo de Desastres, conocida como *UNDDR*[6] por sus siglas en inglés (*United Nations Office for Disaster Risk Reduction*) y la *Plataforma Global para la RRD (GPDRR)*[7], son varios los proyectos internacionales que se están realizando desde hace décadas, para fortalecer los derechos humanos en los desastres. La séptima sesión de *La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 2022* (GP2022) se llevó a cabo del 23 al 28 de mayo en Bali, Indonesia, y el tema fue *«Del riesgo a la resiliencia: hacia el desarrollo sostenible para todos en un mundo transformado por COVID-19»*.

Algunas de estas iniciativas han sido abordadas por importantes *Organizaciones No Gubernamentales*, en adelante ONG`s y entidades internacionales en el campo de la Cooperación Internacional al Desarrollo y la Acción Humanitaria, como por ejemplo, OXFAM internacional y su campaña «Rights in Crisis» (Derechos en la Crisis), o el Proyecto Esfera, lanzado en 1997 por un grupo de ONG´s dedicadas a la acción humanitaria y el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. La finalidad del Proyecto Esfera es la elaboración de una Carta Humanitaria de referencia sobre unas Normas mínimas como meta a alcanzar en la asistencia en casos de desastre[8].

Durante mucho tiempo los desastres se enfrentaron como inevitables, las víctimas y las pérdidas parecían algo que no pudieran prevenirse y sin embargo inciden en los desafíos globales con los que la DUDH quiere lidiar desde su concepción. Cuestiones como la pobreza, la degradación del medio ambiente, la paz, los desplazamientos forzosos, la seguridad incluyendo la de colectivos más vulnerables, como mujeres, niños, personas con diversidad funcional, entre otros, en situaciones de desastre se ve amenaza. Sin embargo, muchos de los debates y avances sobre cómo enfrentarlos y sobre

5. Zango-Pascual, M. *La Gestión Integral de los Riegos Naturales en el marco de los Derechos Humanos de Tercera Generación. El caso de los efectos inducidos por la sismicidad en El Salvador (Centroamérica)*. Tesis Doctoral. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 2011. Parte I, Cap. 1, Pág. 6

6. https://www.undrr.org/

7. https://globalplatform.undrr.org/2022/

8. Puede encontrarse información complementaria sobre la versión más actualizada del manual esfera en esta web: https://spherestandards.org/es/manual-2018.

el papel que el Sistema de Naciones Unidas y los ·Estados tienen en la protección de los ciudadanos frente a los riesgos naturales, ambientales y tecnológicos quedan entre expertos y en el imaginario colectivo no se asocian al papel que tienen en la lucha contra el cambio climático y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. *El Marco de Sendai 2015-30*, es continuación de *El Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 y* éste de otros instrumentos y estrategias de RRD que nos hacen remontarnos al *Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales de Naciones Unidas 1989-1999*[9].

Algo que distingue a los países que cuentan con una gestión más eficiente es la *«rendición de cuentas»* y la capacidad de aprender de sus errores, que en estos contextos se conoce como *«lecciones aprendidas».* El papel del *Derecho Penal,* que siempre debería ser el último recurso, esta infra o super valorado dependiendo de los países. El derecho administrativo es también fundamental.

Se comentarán algunos ejemplos, especialmente de casos en España, para ilustrar como un correcto uso del derecho penal y el administrativo, en el que finalmente se han resuelto algunos casos, podría mejorar la tasa de supervivencia en los desastres. Por ello, se hará primero referencia a la diferente visión que existe sobre el concepto de riesgo catastrófico en diferentes ámbitos. Se incluye a continuación la definición para el ámbito socio-económico y en la *tabla I.1*, obtenida de Zango-Pascual M y Alé, G [10], para los ámbitos jurídicos, científico-técnico y Código Penal Español.

> «Un evento desencadenado por la acción voluntaria del hombre, o las fuerzas de la naturaleza o por circunstancias tecno-sociológicas internas, susceptible de causar una multiplicidad de daños en los bienes y en las personas, de difícil previsibilidad y evitabilidad, cuya consecuencia económica directa e indirecta pueden causar un desequilibrio en la economía de un determinado sector socioeconómico o país y en los patrimonios de las entidades aseguradoras».[11]

9. En 1984, Frank Press, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos lanzó la idea, y en su conferencia en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York, el 19 de septiembre de 1987, *señaló que los Desastres Naturales afectan a países grandes y pequeños, a ricos y pobres y son una de las barreras más formidables para el desarrollo mundial, regional y local.* Varias resoluciones de Naciones Unidas, reuniones y un informe *ad hoc* de 25 expertos internacionales (del que Frank Press fue el presidente) culminaron con el primer gran esfuerzo de colaboración mundial para la reducción de desastres, la proclamación del DIRND por medio de la *Resolución 44/236 de 22 de diciembre de 1989*.

10. Zango-Pascual, M. y Romero Alé, G. «Reflexiones sobre el riesgo catastrófico, por amenazas naturales y ambientales en España, como un problema añadido a la seguridad colectiva» *CONAMA* 2016 (XIII Edición Congreso Nacional de Medio Ambiente. España). 30 pp. Pág. 2. ISBN: 978-84-617-7390-9. http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2016/CT%202016/1998971882.pdf

11. Hernando de Larramendi, I. «Seguro y catástrofe. Su definición jurídica». *Separata de Revista Española de Seguros*, núm. 5. Pág. 50. Madrid, Mapfre 1987.

Figura 16. Definición de riesgo catastrófico	
Ámbito jurídico	Para Ignacio Hernando de Larramendi, empresario español conocido por haber sido el artífice del crecimiento y expansión internacional de MAPFRE, el riesgo catastrófico en el ámbito jurídico es el causado por *"un evento desencadenado por la acción voluntaria del hombre, o las fuerzas de la naturaleza o por circunstancias tecno-sociológicas internas, susceptible de causar una multiplicidad de daños en los bienes y en las personas, de difícil previsibilidad y evitabilidad, cuya consecuencia económica directa e indirecta pueden causar un desequilibrio en la economía de un determinado sector socioeconómico o país y en los patrimonios de las entidades aseguradoras"* (Seguro y Catástrofe. Su definición Jurídica, Madrid 1987).
Ámbito científico-técnico	Según la ***Terminología de la UNISDR 2009 de las Naciones Unidas sobre Reducción de Riesgo de Desastres***, el riesgo de desastres o catastrófico son *"las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período específico de tiempo en el futuro"*.
Código Penal Español	En el Código Penal, concretamente en el **Título XVII**, **Capítulo I**, *de los delitos de riesgo catastrófico*, se define el riesgo catastrófico como delitos relativos a la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, estragos, y riesgos provocados por explosivos u otros agentes, que pongan en peligro la vida, la integridad, la salud de las personas o sus bienes.
Fuente: Elaboración propia	

Tabla I.1 Definiciones de riesgo catastrófico en varios ámbitos.
ZANGO-PASCUAL, M y ROMERO ÁLE. G (2016) Modificado en formato.

II. DESASTRES. TIPOS Y CIFRAS DE REFERENCIA

En los siguientes apartados se irán desglosando algunos de los casos más significativos en España y en el Mundo, que han hecho evolucionar los planteamientos sobre la Gestión del Riesgo de Desastres, pero previamente se hará una breve foto fija, a partir de organismos e instituciones referentes en la materia de cuál es la situación actual. Para ello resulta imprescindible previamente incluir una clasificación de los tipos de desastres a los que nos enfrentamos habitualmente.

II.1. Definición de desastres y tipos

Dada la complejidad y la necesidad de manejar un lenguaje común, la UNDRR desde sus inicios creó un grupo especialista en terminología que periódicamente

revisa y actualiza los términos. De la versión vigente, adoptada en febrero de 2017[12] obtendremos la de «Desastre» que es extensa, pero se menciona aquí únicamente la definición y los tipos que enumera:

> Desastre. Disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad en cualquier escala debida a fenómenos peligrosos que interaccionan con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, ocasionando uno o más de los siguientes: pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales.
>
> …
>
> Para los fines del ámbito de aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (párrafo 15) también se tienen en cuenta los siguientes términos:
>
> - Desastre en pequeña escala: tipo de desastre que afecta únicamente a las comunidades locales, que requiere asistencia del exterior de la comunidad afectada.
> - Desastre en gran escala: tipo de desastre que afecta a una sociedad, que requiere asistencia nacional o internacional.
> - Desastres frecuentes y poco frecuentes: atendiendo a la probabilidad de que suceda y al período de recurrencia de una amenaza determinada y sus impactos. El impacto de los desastres frecuentes puede ser acumulativo o convertirse en crónico para una comunidad o una sociedad.
> - Desastres de evolución lenta son los que surgen gradualmente con el paso del tiempo. Pueden estar relacionados con la sequía, la desertificación, el aumento del nivel del mar o las enfermedades epidémicas, entre otros.
> - Los desastres de aparición súbita están provocados por un suceso peligroso que se produce de forma rápida o inesperada. Pueden estar relacionados, por ejemplo, con terremotos, erupciones volcánicas, crecidas repentinas, explosiones químicas, fallo de infraestructuras vitales o accidentes de transporte.

Entre los muchos desastres que podríamos citar, para contextualizar estas definiciones, escogeremos algunos de los que serán comentados con mayor profundidad. Se incluye una clasificación elaborada por la autora para su investigación doctoral[13], y publicada en otros trabajos, con idea de situar al lector en el origen y tipo de desastres o catástrofes, que se mencionarán.

12. A/71/644. Asamblea General de Naciones Unidas. Septuagésimo primer período de sesiones. Tema 19 c) del programa *Desarrollo sostenible: reducción del riesgo de desastres. Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres. 1 de diciembre de 2016. Original en inglés y disponible en línea*. Pág. 13.

13. Zango-Pascual, M. *La Gestión Integral…op. cit.*,Parte I, Cap. 1, Pág. 18.

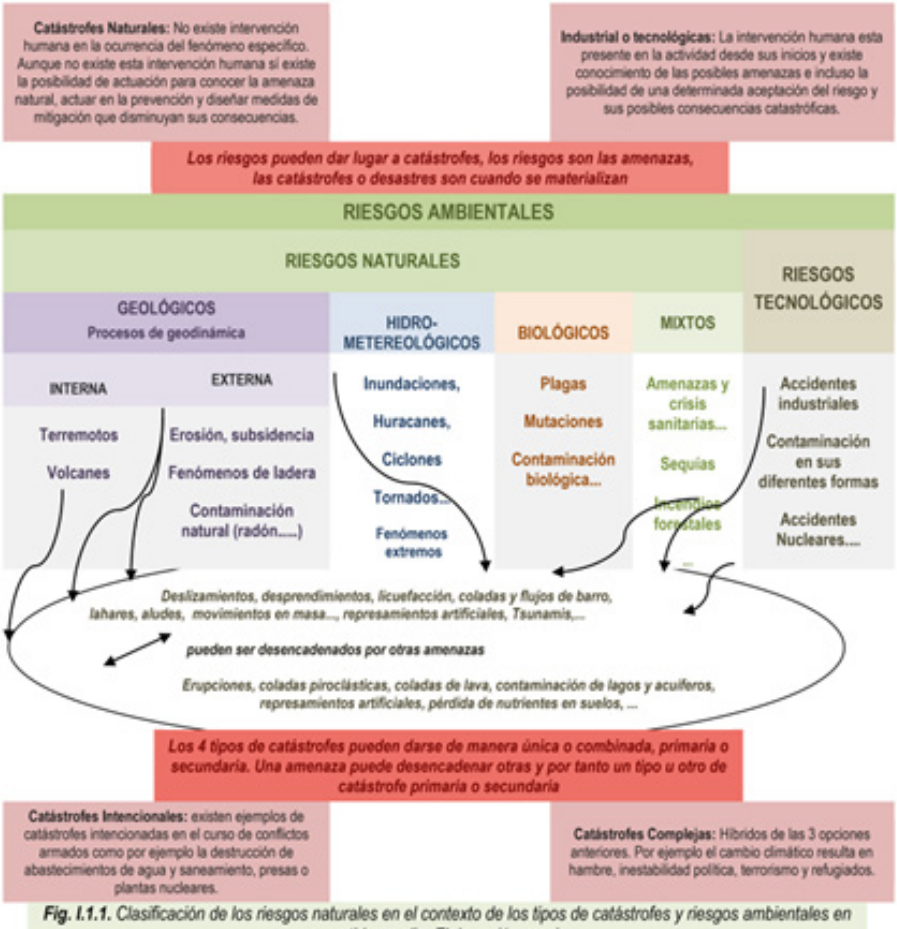
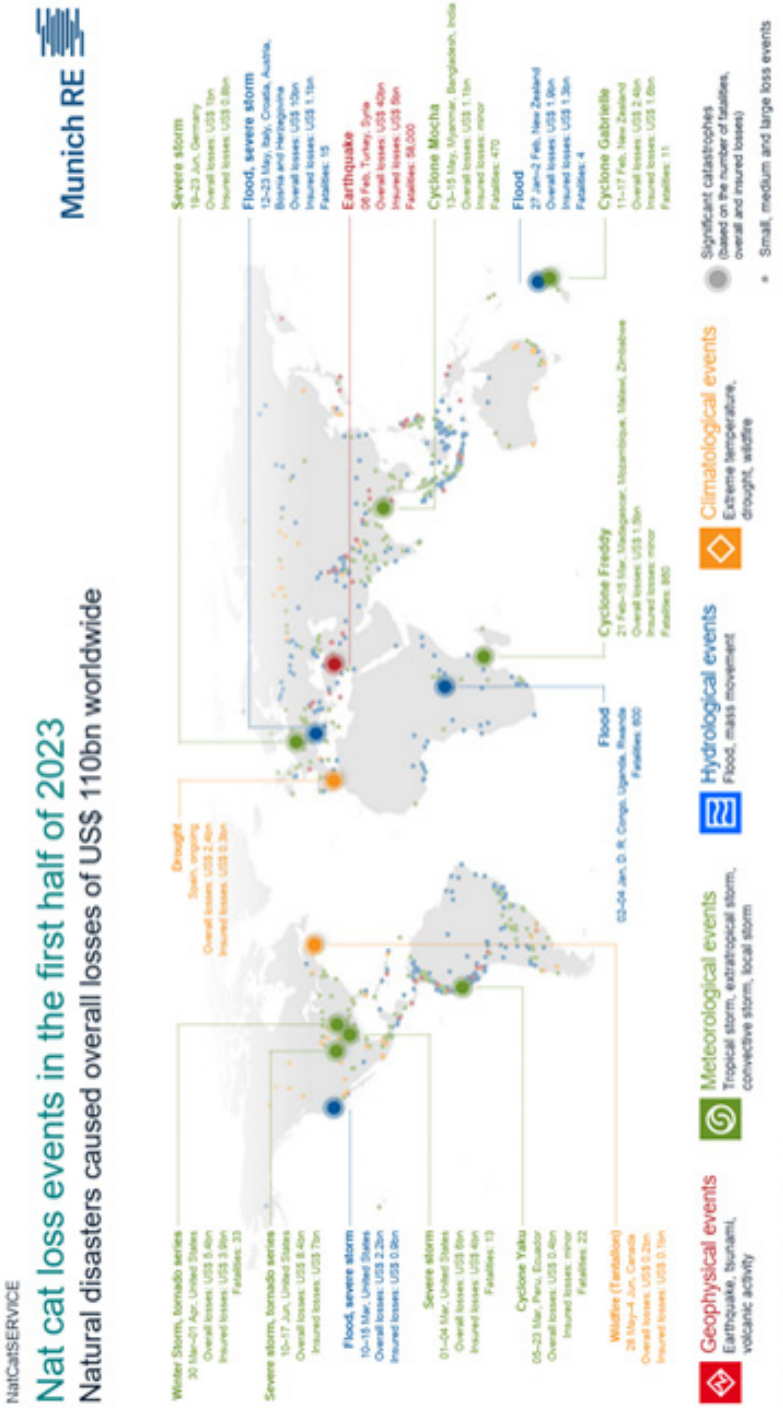


Fig. I.1.1. *Clasificación de los riesgos naturales en el contexto de los tipos de catástrofes y riesgos ambientales en sentido amplio. Elaboración propia.*

En la Figura I.1.2 presentada en su informe anual por Múnich RE muestra la distribución por continentes y tipos de desastre en el año 2023[14] e incluye datos de pérdidas económicas y de vidas.

14. *Múnich RE*, es una de las mayores compañías de seguros especializadas en daños por desastres, para ilustrar las pérdidas y tipos de desastres a nivel mundial emite informes anuales, usando entre otras fuentes la Base de Datos EM-Dat del CRED. Disponible online: https://www.munichre.com/content/dam/munichre/mrwebsitespress-releases/MunichRe-NatCat-Worldmap-HJ-2023.pdf/_jcr_content/renditions/original./MunichRe-NatCat-Worldmap-HJ-2023.pdf


NatCatSERVICE
Nat cat loss events in the first half of 2023
Natural disasters caused overall losses of US$ 110bn worldwide
Munich RE
Severe storm
19–23 Jun, Germany
Overall losses: US$ 1bn
Insured losses: US$ 0.8bn
Flood, severe storm
12–23 May, Italy, Croatia, Austria, Bosnia and Herzegovina
Overall losses: US$ 10bn
Insured losses: US$ 1.1bn
Fatalities: 15
Earthquake
06 Feb, Turkey, Syria
Overall losses: US$ 40bn
Insured losses: US$ 5bn
Fatalities: 58,000
Cyclone Mocha
13–15 May, Myanmar, Bangladesh, India
Overall losses: US$ 1.1bn
Insured losses: minor
Fatalities: 470
Flood
27 Jan–2 Feb, New Zealand
Overall losses: US$ 1.9bn
Insured losses: US$ 1.3bn
Fatalities: 4
Cyclone Gabrielle
11–17 Feb, New Zealand
Overall losses: US$ 2.4bn
Insured losses: US$ 1.6bn
Fatalities: 11
Drought
Soan, ongoing
Overall losses: US$ 2.4bn
Insured losses: US$ 0.3bn
Flood
03–04 Jan, D. R. Congo, Uganda, Rwanda
Fatalities: 800
Cyclone Freddy
21 Feb–15 Mar, Madagascar, Mozambique, Malawi, Zimbabwe
Overall losses: US$ 1.5bn
Insured losses: minor
Fatalities: 800
Winter Storm, tornado series
30 Mar–01 Apr, United States
Overall losses: US$ 5.4bn
Insured losses: US$ 3.9bn
Fatalities: 33
Severe storm, tornado series
10–17 Jun, United States
Overall losses: US$ 8.4bn
Insured losses: US$ 7bn
Flood, severe storm
10–15 Mar, United States
Overall losses: US$ 2.2bn
Insured losses: US$ 0.8bn
Severe storm
01–04 Mar, United States
Overall losses: US$ 6bn
Insured losses: US$ 4bn
Fatalities: 13
Cyclone Yaku
05–23 Mar, Peru, Ecuador
Overall losses: US$ 0.4bn
Insured losses: minor
Fatalities: 22
Wildfire (Tantalion)
28 May–4 Jun, Canada
Overall losses: US$ 0.2bn
Insured losses: US$ 0.1bn
Geophysical events
Earthquake, tsunami, volcanic activity
Meteorological events
Tropical storm, extratropical storm, convective storm, local storm
Hydrological events
Flood, mass movement
Climatological events
Extreme temperature, drought, wildfire
Significant catastrophes (based on the number of fatalities, overall and insured losses)
Small, medium and large loss events
Source: Munich Re, NatCatSERVICE, July 2023

El desastre de Biescas, ocurrido en Huesca, España en 1996, por una riada que arrastró un camping situado en un cono de deyección activo, podría considerarse *un desastre en pequeña escala*, aun siendo local, murieron 87 personas, además de otras muchas heridas y daños materiales. Se escoge por su recorrido judicial que se explicará posteriormente.

La COVID-19 puede encuadrarse en varios tipos, y uno de ellos es que ha sido un *desastre a gran escala*, mundial. En esta categoría podemos incluir también las grandes inundaciones que han asolado Europa recientemente, que no incluimos como súbito, pues pueden predecirse, seguirse y actuar con un cierto margen de tiempo. Aunque dada su capacidad de reiteración y ocurrencia en ciclos, también se las puede incluir en *desastres frecuentes o poco frecuentes. C*omo *desastre a gran escala*, que afecta a una sociedad, se podría incluir el ocurrido en España, en su fase más álgida en 1981, conocido como SAT, Síndrome del Aceite Tóxico de colza desnaturalizado con anilinas y que puso en riesgo a una población de 300.000 personas, a fecha de hoy las muertes relacionadas superan las 5000 y las personas con enfermedades crónicas fruto del envenenamiento llegaron en su momento a más 20.000.

Desastres de evolución lenta, podría parecer que estos casos no son comunes, y de serlo podría actuarse mitigándolos con más facilidad, pero no siempre ocurre así y aquí es interesante mencionar otro concepto muy significativo: «Factores subyacentes del riesgo de desastres»:

> Procesos o condiciones, a menudo relacionados con el desarrollo, que influyen en el nivel de riesgo de desastres al incrementar los niveles de exposición y vulnerabilidad o reducir la capacidad.
>
> Comentario: Los factores subyacentes del riesgo de desastres, también denominados impulsores subyacentes del riesgo de desastres, incluyen la pobreza y la desigualdad, el cambio climático y la variabilidad del clima, la urbanización rápida y no planificada y la falta de consideraciones relativas al riesgo de desastres en la ordenación territorial y la gestión de los recursos ambientales y naturales, así como otros factores agravantes como los cambios demográficos, las políticas no informadas por el riesgo de desastres, la falta de regulación e incentivos para las inversiones privadas en la reducción del riesgo de desastres, las cadenas de suministro complejas, la limitada disponibilidad de tecnología, los usos no sostenibles de los recursos naturales, el debilitamiento de los ecosistemas, y las pandemias y epidemias.

En esta categoría de *desastres de evolución lenta* se podrían incluir «El Nevado del Ruíz» en Armero en Colombia en 1986 y el desastre de la presa de Vaillont en Italia el 9 de octubre de 1963, pues en ambos casos se conocía previamente el riesgo con tiempo suficiente para tomar decisiones, pero como se explicará después, no fue suficiente para evitar las tragedias, que provocaron respectivamente más de 25.000 y 2000 víctimas mortales.

Respecto a los *desastres de impacto súbito,* muchos de ellos relacionados con amenazas naturales, pero no sólo, podríamos citar el terremoto de Lis-

boa de 1755 y habría que añadir los riesgos en cascada que suelen producirse, en este caso el maremoto posterior que asoló las costas del Golfo de Cádiz y los incendios que destruyeron la ciudad de Lisboa. Tal vez, por ello se le conoce por ese nombre aunque ocurrió en alguna de las fallas submarinas del Golfo de Cádiz. En la actualidad es una de las mayores amenazas, desde el punto de vista natural, que podrían afectar a Europa y desde hace pocos años se han ido estableciendo Directrices y Planes de Protección Civil y Emergencias[15]. En la actualidad no pueden obviarse las amenazas en cascadas NaTECH que podrían desencadenarse.

II.2. Cifras y situación de los desastres en el mundo

Tomando los datos de varios organismos especializados sobre cuantificación en Desastres, podemos incluir datos, tablas y gráficos que permiten visualizar la envergadura de la situación. *El CRED (Centro de Epidemiología de los Desastres de la Universidad Católica de Lovaina)* es uno de estos referentes, mantiene la *base de datos EM-Dat* de carácter público y abierto y del que incluiremos alguna consulta concreta sobre el mencionado tema de las inundaciones, pero en primer lugar, se hará referencia a su informe *Executive Summary 2022*[16].

En 2022 se han registrado 387 eventos catastróficos, mientras en el periodo 2002-2021 la media ha sido de 370 por año. Se recogen solo los provocados por fenómenos naturales, no se incluyen riesgos biológicos ni extraterrestres. Se han producido 30.704 pérdidas de vidas y se han visto afectadas 185 millones de personas. Las pérdidas económicas totales son alrededor de 223.8 billones de dólares estadounidenses.

---

15. Como por ejemplo, *El Plan Nacional Ante el Riesgo de Maremoto* y la correspondiente *Directriz Básica de 2016 y 2015* respectivamente, elaboradas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCyE) del Ministerio del Interior. La edición comentada del Plan Estatal de Maremotos. Editada en 2021 puede consultarse en: https://www.ign.es/web/libros-digitales/plan-estatal-maremotos, es una versión didáctica del *I Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos*, incorporándolo al *Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil*, como un anexo y aprobado por Consejo de Ministros el 18 de mayo de 2021.

    Así como, el más reciente autonómico, de la Junta de Andalucía y aprobado mediante *el Decreto 127/2023, de 12 de junio, por el que se aprueba el Plan de Emergencia ante el riesgo de maremotos en Andalucía. Puede consultarse online en*:

    https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciainteriordialogosocialysimplificacionadministrativa/consejeria/transparencia/planificacion-evaluacion-estadistica/planes/detalle/426316.html

16. CRED. Centre for Research on Epidemiology of Disasters & USAID. Brussels 2023. *Disaster in Numbers 2022.* Pág. 2. Disponible online en: https://cred.be/sites/default/files/2022_EMDAT_report.pdf

Aunque el número de muertes en 2022 es inferior a la media del periodo de 2002-2021 que es de 60.955 al año, este período está influido por los mega-desastres como el terremoto de Haití de 2010 en el que hay contabilizadas 222.570 muertes.

Los gráficos siguientes[17] muestran el detalle por continentes y tipos de fenómenos causantes de los desastres en 2022 y los mayores desastres del periodo 2001-2021[18]. Se indican 11 países y no 10, pues hay 4 países, con 8 desastres cada uno (es lo que indica la nota 8 de la gráfica Occurence of disasters).

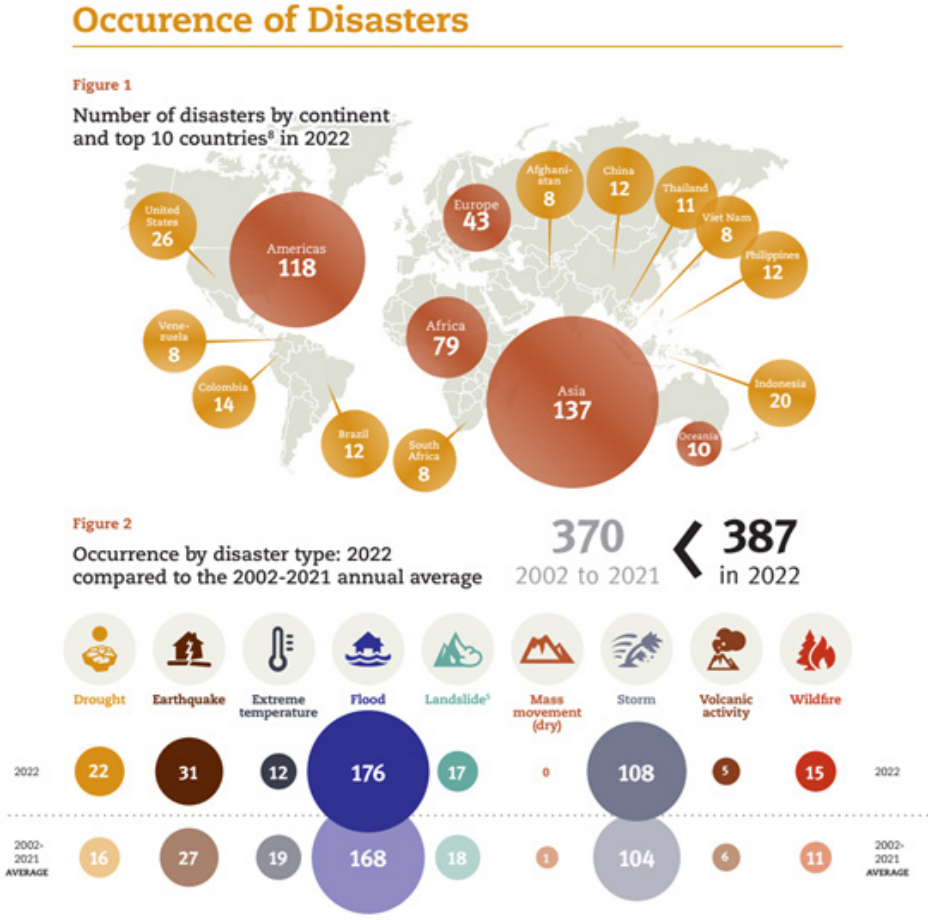


Figura II.2.1 Ocurrencia de desastres en el mundo en 2022. Fuente: CRED 2023.

17. *Vid.*, *Ibidem*, p. 4.

18. CRED. Centre for Research on Epidemiology of Disasters & USAID. Brussels 2022. *Disaster in Numbers 2021.* Pág. 3. Disponible online en: https://www.cred.be/disasters-numbers-2021

Otro de los referentes es la Reaseguradora *Múnich RE*[19], a través de su servicio *NatCatSERVICE,* recopila, analiza y aplica su amplia experiencia en el mercado de los seguros internacional en sus informes sobre siniestros por catástrofes naturales. La información procede de organismos gubernamentales, institutos científicos, asociaciones, la industria aseguradora, los medios de comunicación y otras fuentes públicas. Su informe más reciente, recién publicado *«Natural disasters in the first half of 2023»* muestra los siguientes datos sobre la primera mitad del año, referentes a los 5 mayores desastres ocurridos en el mundo y su comparación con los 5 peores de años anteriores en las siguientes tablas.

The five largest natural disasters in the first half of 2023

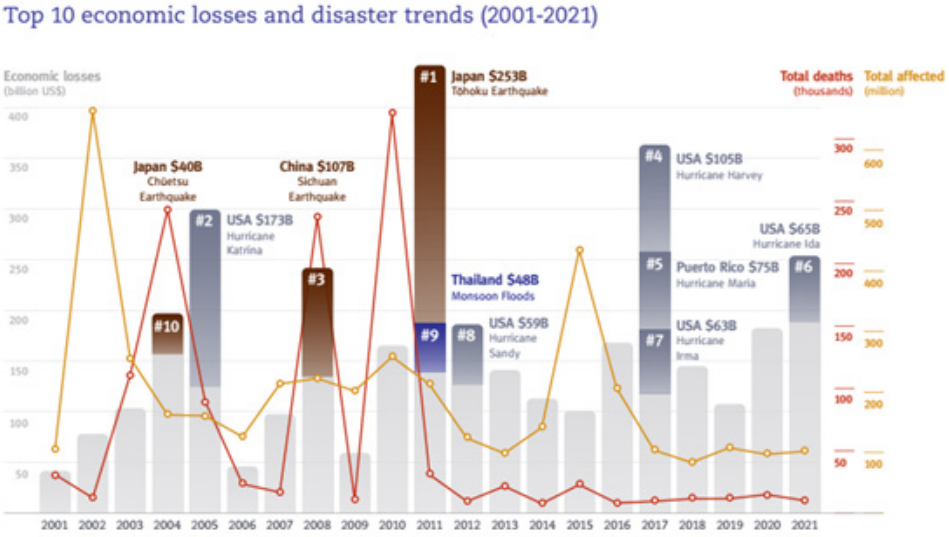
Ranking by overall losses

Date	Country/Region	Event	Fatalities (approx.)	Overall losses US$ bn	Insured losses US$ bn
6.2.2023	Turkey, Syria[2]	Earthquake	58,000	40	5.0
12–23.5.2023	Italy, Croatia, Austria, Bosnia and Herzegovina	Flood, severe storm	15	10	1.1
10–17.6.2023	United States	Severe storm, tornado series	4	8.4	7.0
1–4.3.2023	United States	Severe storm	13	6.0	4.0
30.3–1.4.2023	United States	Severe storm, tornado series	33	5.4	3.9

	The first half of 2023	The first half of 2022 (adjusted to inflation)	5-year average of the first half-years 2018–2022 (adjusted to inflation)	10-year average of the first half-years 2013–2022 (adjusted to inflation)
Overall losses, in US$ bn	110	120	110	98
Insured losses, in US$ bn	43	47	37	34
Fatalities (approx.)[1]	62,000	7,000	4,100	6,400

[1] Droughts and heatwaves not included

19. NatCatSERVICE de Múnich Re, es desde 1980 una de las bases de datos más completas para analizar y evaluar las pérdidas por desastres naturales. Registra sistemáticamente y en detalle los datos de siniestros de todo el mundo. Emite informes anuales como el mencionado en estas tablas. Para más información ver: https://www.munichre.com/en/solutions/for-industry-clients/natcatservice.html



Se incluye la figura II.2.3, obtenida del informe de 2022 de una de las mayores compañías de seguros especializadas en daños por desastres, Múnich RE, para ilustrar las pérdidas y tipos de desastres a nivel mundial.

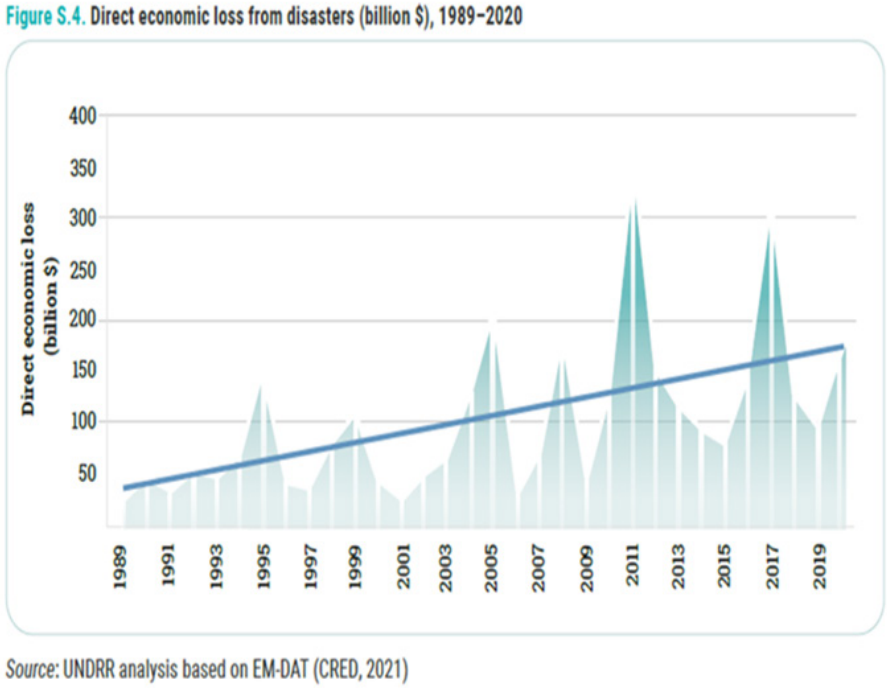


Figura II.2.3 Pérdidas económicas por Desastres entre 1989 y 2020. Fuente: Múnich RE 2023.

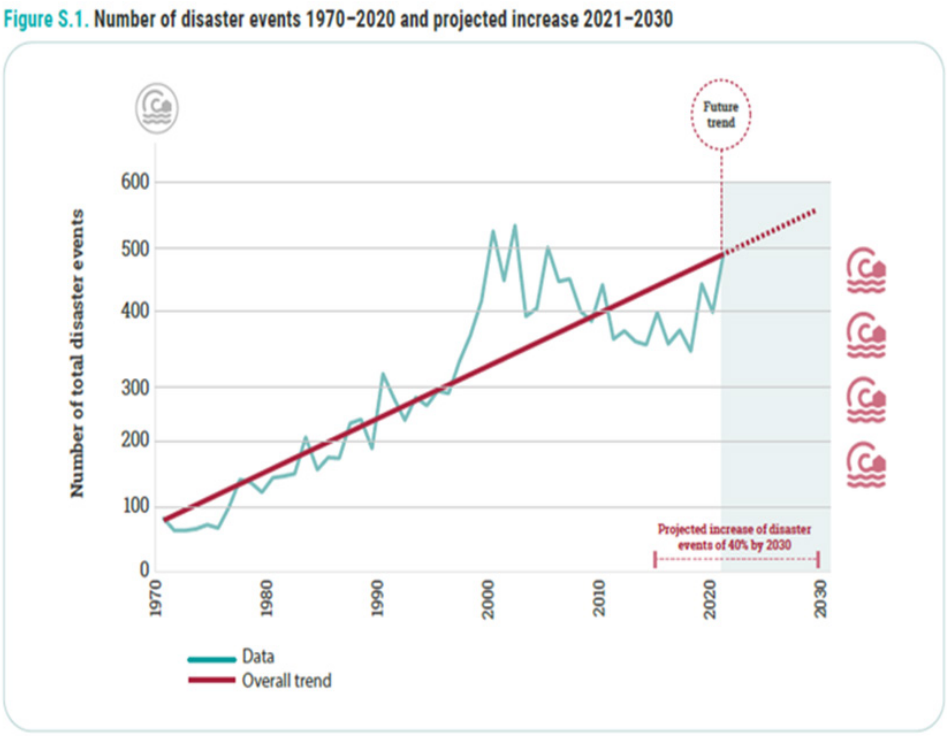


Figura II.2.3 Datos de número de eventos de desastres entre 1970 y 2020 y la tendencia a 2030.

Para terminar, dado que las cifras de la Pandemia COVID 19 no están incluidas en estos datos del CRED, se incluyen aquí las procedentes de la OMS, en concreto del *Panel de control de la OMS sobre el coronavirus (COVID-19)*[20]

Puede observarse, que se presentan datos de consultas del panel de control de la OMS con aproximadamente año y medio de diferencia y aunque apenas el COVID 19 esté presente a día de hoy, en el día a día, los contagios y las muertes han seguido produciéndose. Ha habido más de 700.000 muertes en el último año y medio a nivel mundial. Tal vez empezamos a experimentar algo común en las situaciones catastróficas y es la necesidad de olvidar para seguir adelante, aunque esto no favorece la resiliencia si no recordamos las lecciones aprendidas.

20. Tablero de la OMS sobre el coronavirus (COVID-19) | Tablero de la OMS sobre el coronavirus (COVID-19) con datos de vacunación (who.int), el panel de control se actualiza, la última fecha de consulta es 10/12/2023 y se presentan datos referentes a 2022 y 2023.

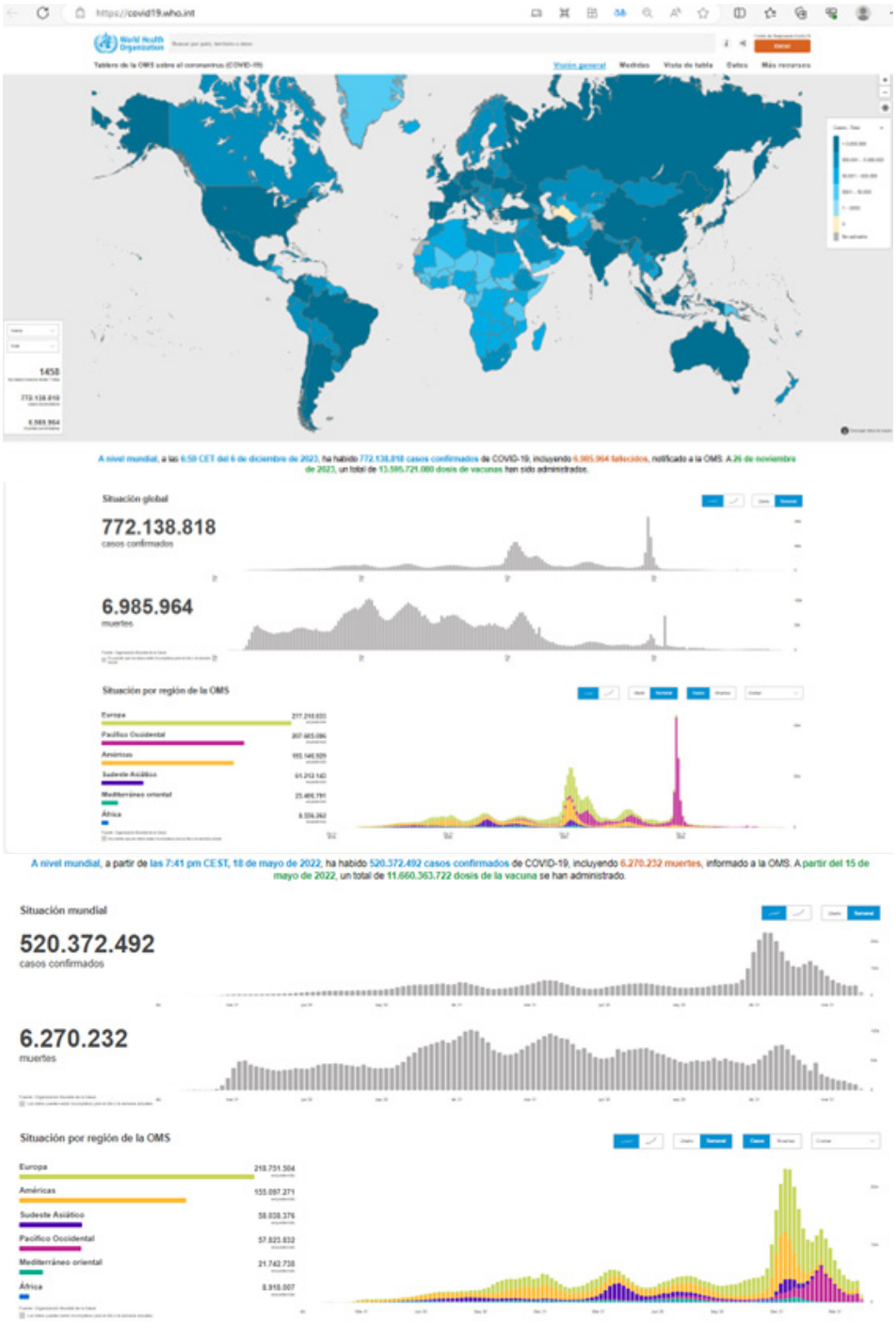


Fig. II.2.4. Datos de evolución de la pandemia COVID 19 hasta diciembre de 2023.

III. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Como ya se ha mencionado, el enfoque con que se atendían los desastres hasta la década de los años 70 del siglo pasado, era puramente correctivo, ahora el que impera es el prospectivo, anticipándonos o intentándolo, a como se manifestarán las amenazas que pueden dar lugar a riesgos que se conviertan en desastres. Como con cualquier tipo de amenaza sea natural, ambiental, intencionada o no, que afecte a cuestiones de seguridad que entendemos como más habituales, por ejemplo delincuencia o terrorismo, el conocimiento es esencial y es la base de la prevención. La Resiliencia se ha convertido en otro eje primordial como recoge el *«Informe Especial GAR 2023»* (Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction) cuyo título en español es *Mapeo de la Resiliencia para los Objetivos de Desarrollo Sostenible*[21].

Al final de esta apartado se incluye una tabla resumen del GAR 2015 que incluye los hitos principales que han hecho avanzar la Gestión de la RRD hasta lo que hoy entendemos, pero previamente veamos la comparación entre el *«Marco de Acción de Sendai 2015-25»* que es el Instrumento Jurídico Internacional vigente, aunque no vinculado, pero sí ratificado por prácticamente todos los países de Naciones Unidas, para la Reducción de Riesgo de Desastre[22], pero es continuación del *«Marco de Acción de Hyogo 2005-15»*[23]. En el recuadro III.2 se hace una breve comparación de sus prioridades y en el siguiente apartado una breve referencia a las lecciones obtenidas de su aplicación tras la mitad de periodo y con la singularidad de haber pasado una pandemia y los conflictos recientes, sumados a las decenas activos desde hace décadas, que han agravado la situación de los DD. HH. en el mundo.

---

21. Los informes GAR se publican cada dos años desde 2009, por UNDRR y abarcan todo tipo de cuestiones sobre Gestión de la Reducción de Riesgo de Desastres, han ido evolucionando desde simples informes a contenidos interactivos en espacios webs específicos, como el Atlas en línea de 2017 o los informes especiales de 2019 sobre la sequía y el citado de 2023 «Gar Special Report 2023: Mapping resilience for the Sustainable Development Goals». Son producto de la contribución de las naciones, la investigación y la ciencia privada y pública y resto de actores implicados en la RRD. Para más información consultar su web: https://www.undrr.org/gar

22. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015. Este es el resultado de una serie de consultas entre las partes interesadas que se iniciaron en marzo de 2012 y de las negociaciones intergubernamentales que tuvieron lugar entre julio de 2014 y marzo de 2015, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

23. UNITED NATIONS (2005). *MAH. Marco de Acción de Hyogo 2005-2015. Conferencia mundial para la reducción de Desastres* (CMRD) Celebrada en Kobe, Hyogo Japón. 18 al 22 de enero de 2005. *Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres*.

MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO 2005-2015	MARCO DE RIESGO DE SENDAY 2015-2030
Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres Objetivo: reducir sustancialmente la perdida de vida y activos sociales, económicos y ambientales. Marco internacional voluntario que agrupa más de 170 países en 2015 incluido España. Prioridades: 1. Lograr que la reducción de desastres sea una prioridad 2. Conocer el riesgo y tomar medidas 3. Desarrollar una mayor comprensión y concientización 4. Reducir el riesgo 5. Esté preparado(a) y listo(a) para actuar	Prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes implementando medidas integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional que prevengan y reduzcan la exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación, y de ese modo refuercen la resiliencia Prioridades: 1. Comprender el riesgo de desastres 2. Fortalecer la gobernanza y las instituciones para gestionar el riesgo 3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia 4. Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz, y "reconstruir mejor"

Recuadro III.2 Comparación de prioridades entre los Marcos de Acción de Hyogo y Sendai (elaboración propia a partir de los documentos de UNDDR).

Hasta llegar aquí, durante décadas, cada desafío global se analizaba y gestionaba, en muchas ocasiones, desde diferentes organismos del Sistema de Naciones Unidas, se incluye como ejemplo, en dos anexos debido a su extensión, al final de este capítulo dos tablas, que forman parte de la investigación doctoral de la autora, en la que se analizan comparativamente entre 1948 y 2010, los principales Hitos en la creación del concepto de *Desarrollo Humano Sostenible y la Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastre*, así como en relación a la evolución de los *DD. HH.*, sólo en el *Sistema de Naciones Unidas* y los instrumentos internacionales sobre RRD.

El objetivo de estas tablas es valorar la extensa variedad de instrumentos existentes, algunos de ellos redactados, firmados y/o ratificados en momentos y contextos similares y con contenidos que en sentido amplio son coincidentes, pero generalmente se estudian y analizan por separado, incluso entre especialistas, cuando sería posible valorar las similitudes de objetivos y sensibilidades temporales de unos y otros. Esta tabla es un pequeño avance en este sentido al situarlos de manera conjunta.

Similares tablas respecto a incidencia reciproca de Objetivos de Desarrollo del Milenio y Derechos Humanos y RRD pueden consultarse completas en *Zango-Pascual M, 2011*[24].

DE LA RESPUESTA A DESASTRES A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		
1965	*Res. 2034*	*La Asamblea General de las Naciones Unidas (AG) solicita a los Estados Miembros, en su resolución 2034, Asistencias en casos de desastres naturales, que informen al Secretario General del tipo de asistencia que pueden ofrecer en caso de emergencias.*
1979	*Res. 34/55*	*La AG acoge "beneplácito la decisión tomada por el Consejo de Administración del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (...) de considerar la inclusión de actividades de cooperación técnica para la prevención de desastres y preparativos para hacerles frente en los programas nacionales y regionales".*
1994	*Res.49/22A*	*Se celebra la Conferencia Mundial en Yokohama (Japón, del 23 al 27 de mayo de 1994. La resolución 49/22ª hace suya la Estrategia de Yokohama y su Plan de Acción aprobados en la Conferencia Mundial.*
2001	*Res. 56/195*	*La AG solicita a las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que apoyen la aplicación de los objetivos de la Estrategia y que revisen la aplicación de la Estrategia de Yokohama para un Mundo Más Seguro.*
1971	*Res. 2816*	*Creación de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO)*
1989	*Res. 44/236*	*La AG proclama el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, que comienza el 1 de enero de 1990.*
1999	*Res. 54/219*	*La AG en su resolución 54/219, de 22 de diciembre de 1999, aprobó la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD) como mecanismo sucesor del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.*
2005	*Res. 60/195*	*LA AG hace suyos la Declaración de Hyogo y el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres, aprobados por la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, celebrada en Kobe, Hyogo (Japón, del 18 al 22 de enero de 2005, y recuerda la Declaración Común de la Reunión especial sobre el Desastre del Océano Índico: Reducción de los Riesgo para un Futuro más Seguro.*

Tabla III.1 Adaptado de la biblioteca virtual de la UNDDR. GAR 15 (Modificado en formato)

24. ZANGO-PASCUAL, M. *La Gestión Integral…op. cit.*, Parte I, Cap. 1, Pág. 33-38 impacto de los Desastres en la consecución de los ODM y en el capítulo 4, pág 115-121 y en las páginas 122 a 130 se incluyen otras tablas para contextualizar esa evolución en concreto en relación con los principales hitos con respecto a los DD. HH.

III.1. La RRD en el contexto de los Desafíos Globales en el siglo XXI

Aún queda mucho por avanzar, incluso a nivel de la academia para abordar conjuntamente los ODS, la lucha contra el Cambio Climático y la RRD, pero al menos a nivel institucional y en el Sistema de Naciones Unidas es ya una realidad. El siguiente gráfico refleja de forma sintética la evolución, que como se ha comentado puede verse de forma más detallada en los ANEXOS I y II con resoluciones concretas y situadas en un contexto de Derechos Humanos.

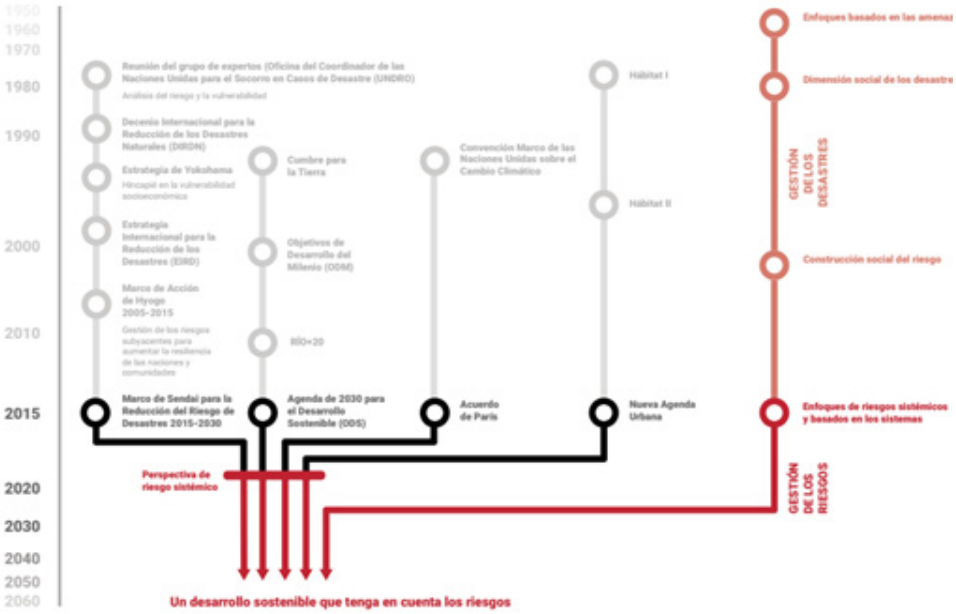


Figura III.1: Evolución de los instrumentos internacionales sobre desafíos globales. GAR 2019. UNDRR.

Considerando el horizonte global de 2030, ya se ha publicado el informe de evaluación del medio periodo del Marco de Sendai[25] que recoge las aportaciones de los Estados Miembros y entidades participantes, sobre la consecución de los objetivos y metas del Marco de Sendai[26].

25. A/77/640 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 31 de enero de 2023. *Principales conclusiones y recomendaciones del examen de mitad de período de la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.*

26. Todas las contribuciones de los Estados Miembros y de los interesados no estatales a l examen de mitad de período se pueden consultar en línea en https://sendaiframework-mtr.undrr.org/mtrsf-submissions-and-reports

En 2018 se creó un instrumento para la presentación de informes y un portal en línea[27] y en marzo de 2022 aportaron datos 155 países frente a los 88 de 2018. Se han recogido aquí en forma de tabla, textualmente, simplemente modificando en formato, los avances respecto a las metas. Entre las recomendaciones se señala la recogida en el párrafo 63 por su referencia concreta a la necesidad de vinculación entre varios desafíos globales y por quien la propone, como son países con diferente nivel de desarrollo, entidades no estatales y el grupo asesor de ciencia y tecnología de la UNDRR.

> Las actividades recomendadas abarcan todos los sectores de la sociedad y niveles de gobierno y vinculan esferas tan diversas como los sistemas alimentarios y energéticos, la seguridad hídrica, la pobreza, el cambio climático y los conflictos[28], dado que el Marco de Sendai se considera una oportunidad para promover la convergencia, impulsar la inclusión y generar resultados equitativos en todas las sociedades.

El informe completo sobre esta misma materia[29] en sus conclusiones hace referencia a que en la situación actual los impactos, la magnitud y la intensidad con que se propagan pueden llevar a consecuencias existenciales y al colapso del sistema. También menciona como la pandemia COVID-19 ha sido una oportunidad para ver lo que aún no percibimos sobre el Cambio Climático:

> El COVID-19 ha demostrado al mundo lo que el cambio climático aún no ha hecho: que la arquitectura, los mecanismos y los enfoques actuales de gobernanza y gestión de riesgos son inadecuados para hacer frente a los factores de riesgo sistémicos e interconectados y a los impactos en cascada que pueden propagarse dentro de los sistemas humanos y naturales y a través de ellos.

Y acaba resaltando como el año 2023 es un punto de inflexión crítico para que todas las partes interesadas estatales y no estatales corrijan el rumbo, avancen en las inversiones y en los comportamientos en función de los riesgos hasta 2030 y más allá, que permitan llevar a cabo todos los acuerdos y marcos de trabajo propuestos desde 2015 y anteriormente. En la página siguiente se incluye la *Tabla III.1 Evaluación de las metas del MARCO DE SENDAI 2015-2030 a mitad de periodo. (Modificado en formato de la A/77/640 de 31 de enero de 2023)*.

---

27. A/77/640…*Ibidem* pág. 2/24.

28. Comunicaciones de Austria, Bosnia y Herzegovina, Burundi, el Canadá, Liberia, Marruecos, Zimbabwe; y comunicaciones de interesados no estatales, incluido el grupo principal de la comunidad científica y tecnológica.

29. UNDRR (2023). *The Report of the Midterm Review of the Implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. UNDRR: Geneva, Switzerland. 120 pp.

Meta A	**Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para 2030**
	La mortalidad media anual entre 2015 y 2021 fue de 42.833 personas. La mortalidad por cada 100.000 personas se redujo de 1,77 entre 2005 y 2014 a 0,84 entre 2012 y 2021, lo que representa una mejora en el número medio anual de muertes y desapariciones en situaciones de desastre. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 contrarrestó esa mejora, ya que provocó 599.239 muertes en 2020 y 237.518 muertes en 2021, según los datos facilitados por 37 países a través del mecanismo de seguimiento del Marco de Sendái. Es probable que esas cifras sean muy inferiores a las reales: la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que la pandemia causó 1,9 millones de muertes en 2020 y 3,5 millones en 2021[27]
Meta B	**Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial.**
	El número de personas afectadas por desastres por cada 100.000 habitantes aumentó de 1.147 entre 2005 y 2014 a 2.066 entre 2012 y 2021. El número medio anual de personas afectadas por desastres entre 2015 y 2021 fue de 150.214.597 personas.
Meta C	**Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial.**
	Las pérdidas económicas directas medias anuales entre 2015 y 2021 superaron los 330.000 millones de dólares, aproximadamente el 1 % del PIB total de los países que presentan informes, y se cree que están muy infravaloradas. Mientras que el impacto económico de los desastres geofísicos se ha mantenido estable en los últimos decenios, las pérdidas económicas anuales a causa de fenómenos climáticos y meteorológicos han aumentado de forma considerable en los últimos diez años.
Meta D	**Reducir los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos.**
	El promedio de infraestructuras vitales destruidas o dañadas por desastres fue de 142.852 al año entre 2015 y 2021. Los desastres, incluida la COVID-19, también interrumpieron más de 363.184 servicios básicos en 2020 y 2021 en 44 países que presentan informes, en particular servicios sanitarios y educativos.
Meta E	**Incrementar el número de estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local**[28]
	El número de países que cuentan con estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres aumentó de 55 en 2015 a 125 en 2021. El número de países que disponen de estrategias que promueven el cumplimiento y la coherencia de las políticas, sobre todo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, asciende ahora a 118, frente a solo 44 en 2015. Noventa y nueve países han declarado que sus gobiernos locales cuentan con estrategias para la reducción del riesgo de desastres.
Meta F	**Mejorar la cooperación internacional para la reducción del riesgo de desastres**[29]
	En el último decenio, 42 países en desarrollo comunicaron haber recibido asistencia oficial para el desarrollo procedente de otros países para actividades nacionales de reducción del riesgo de desastres, y 26 países comunicaron que habían proporcionado asistencia oficial para el desarrollo a otros países[30]*.. El 4,1 % de la asistencia oficial para el desarrollo relacionada con la reducción del riesgo de desastres facilitada entre 2010 y 2019 se destinó a la prevención de los desastres y la preparación para ellos. Hubo 1.113 casos de transferencia de tecnología y 2.203 ejemplos de desarrollo de capacidades entre 2005 y 2020.*
Meta G	**Incrementar la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana y de la información sobre el riesgo de desastres, y el acceso a ellos.**
	De los 120 países que informaron a través del mecanismo de seguimiento del Marco de Sendai, 95 contaban con sistemas de alerta temprana de peligros múltiples[31]

IV. ENFOQUE DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE COMO UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

IV.1. Evolución y estado de la cuestión

La evolución de la DUDH de 1948 ha pasado por diferentes etapas (véase tabla del ANEXO II para mayor detalle) y es en la década de los años 70 del siglo XX cuando se empieza a acuñar el concepto de *Derechos Humanos de Tercera Generación* y se traspasa la frontera habitual de los DD. HH. centrada en el individuo. Se entienden referidos a cuestiones que afectan a la colectividad y en algunos contextos se los conoce también como derechos de la solidaridad o de los pueblos, entre ellos se encuentran el derecho al desarrollo, el derecho a la paz y el derecho al medio ambiente sano. En este último se incluyen conceptos como el disfrute por todos los individuos de los beneficios del Patrimonio Natural o poder acceder a la asistencia humanitaria o el acceso al agua, que finalmente fue reconocido, tras muchos y complejos debates en 2010[30].

> Ninguno de los 30 derechos recogidos en la DUDH puede entenderse como global mientras el avance y el progreso científico no repercuta en situaciones de mejora de las condiciones de vida de las poblaciones y por tanto sean asequibles a todos los individuos, desde el acceso al agua a la protección de la vida[31].

Esta visión más global de la seguridad en relación con la protección de las personas en todos los ámbitos, es la que va instalándose en las últimas décadas. Véase, por ejemplo, el gráfico de la página siguiente, recogido por Zango-Pascual, M y Romero Álé[32] del informe del *CoU* 2016[33] sobre las políticas de investigación en torno a la seguridad en la Unión Europea.

En el anterior programa marco de investigación de la UE *Horizonte 20-20* ya se contemplaba la Reducción de Riesgo de Desastres, en el subprograma *Sociedades Seguras y Resilientes*, pero previamente en otros programas MARCO de la UE tenía un carácter más centrado en la ciencia y la tecnología

30. A/RES/64/292, de 28 de Julio de 2010: *The Human Right to Water and Sanitation*, (entre otras web puede localizarse el debate y la evolución del tema en): www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Resolutions.aspx

31. zango-Pascual, M. *La Gestión Integral…op. cit.*, en la Parte I, Cap. 4 se desarrolla esta cuestión.

32. Zango-Pascual, M. y Romero Alé, G. «Reflexiones sobre el riesgo catastrófico…» *CONAMA* 2016. Pág 10.

33. CoU. A Community of Users on Secure, Safe and Resilient Societies. *Mapping EU policies and FP7 research for enhancing partnerships in H2020.* Draft working paper. 14 June 2016.

y no tanto en la seguridad. Informes de Naciones Unidas ya desde 1990 relacionan el progreso de los DD. HH. con la ciencia y la tecnología, uno de los más completos es en concreto, el que publicó la Universidad de Naciones Unidas (UNU) *«Human rights and scientific and technological development»*[34]. Anteriormente la investigación sobre Desastres Naturales y RRD se incluía en los Programas Marco de la UE en materias relativas a Medio Ambiente, pero actualmente y siguiendo esta línea, como puede verse en el actual programa *Horizonte Europa 2021-27* [35] se enmarca en la investigación en *Seguridad Civil para de la Sociedad*.

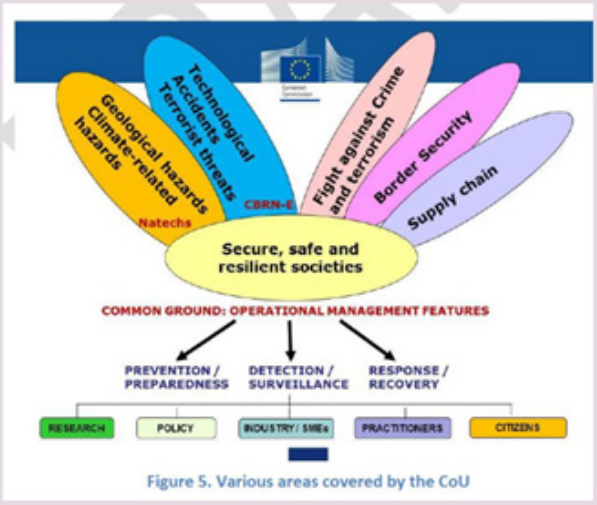


Fig. 4. Cartografía de las políticas de la UE frente a la investigación en seguridad, a la luz de los desafíos sociales, de seguridad y la resiliencia. Las varias áreas cubiertas por la CoU. Comunidad de Usuarios en Seguridad y Sociedades Seguras y Resilientes. Programa de investigación H2020 de la UE – Reto 7. Sociedades Seguras.

34. La publicación fue coordinada por C.G. Weeramantry y se realizó por invitación de la Comisión de Derechos Humanos a la Universidad de Naciones Unidas en 1986, con el fin de estudiar los impactos positivos y negativos del desarrollo científico y tecnológico en materia de derechos humanos y las libertades fundamentales. En los apéndices recoge además de la *Declaración de Naciones Unidas sobre el uso de la ciencia, de 1975, la Resolución 1986/9 de la comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas*, sobre el «Uso de la ciencia y el progreso tecnológico para la promoción y protección de los Derechos Humanos y Las libertades Fundamentales».

35. https://www.horizonteeuropa.es/pilar-2; *Pilar II. Desafíos mundiales y competitividad industrial Europea (Desafíos mundiales)* se organiza en 6 clústeres. El clúster 3 es Seguridad Civil para la Sociedad. Está dotado con 1576 millones de Euros y dos de sus 5 pilares están muy relacionados con Desastres y seguridad, como son *Disaster Risk Reduction y Infraestructure Protection*.

IV.2. El deber de los Estados de proteger a sus ciudadanos ante los desastres

Si a esto le añadimos el deber de los Estados a la protección y seguridad de sus ciudadanos, concepto intuitivo de entender pero no resuelto por igual en distintos países y contextos, tendremos que entender como ya manifestó *Kofi Annan* en informe del grupo de Alto Nivel[36], *«Un mundo más seguro nuestra responsabilidad compartida»*, que contiene 302 recomendaciones distribuidas según 20 apartados, y en la contenida en el párrafo 201 hace referencia a que *«Existe un reconocimiento cada vez mayor de que el problema no es el "derecho de intervenir" de un Estado sino la "obligación de proteger"* que tienen todos los Estados cuando se trata de seres humanos que sufren una catástrofe que se puede evitar». Se utilizan ejemplos de desastres humanitarios por conflictos, pero debería ser igualmente aplicable a situaciones de catástrofe por amenazas naturales, cuando además las incluye entre los 6 grupos de amenazas para un mundo seguro.

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil de España, reconoce en su preámbulo las catástrofes como un problema que puede afectar a la Seguridad Nacional y así está recogido en las Estrategias de Seguridad Nacional aprobadas hasta ese momento y en las posteriores. Así mismo en el Título I, artículo 5, desarrolla el *Derecho a la protección en caso de catástrofe*.

V. ESTUDIO DE CASOS DE DESASTRES EN VARIOS PAÍSES QUE HAN SUPUESTO HITOS

En el apartado I se mencionaron ejemplos de casos para contextualizar los tipos de desastres, se van a escoger algunos que han quedado grabados en la conciencia colectiva por diferentes razones o que han supuesto hitos que han hecho evolucionar políticas públicas, incluso a nivel internacional. Los informes GAR de Naciones Unidas y las Plataformas Globales de Reducción de Riesgo de Desastres han ido incorporando perspectivas, que en muchas ocasiones son consecuencia de eventos individuales de gran trascendencia, pero incluso antes del fin del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, se produjeron desastres de alcance que es importante recordar, algunos en España y sobre los que hay sentencias judiciales y otros en otros países.

36. A/59/565. *A more secure world: our shared responsibility Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change*. Fifty-ninth session Agenda item 55 Follow-up to the outcome of the Millennium Summit. 2 December 2004. United Nations. General Assembly. 110 pp.

Uno de los primeros que abordaremos es del ***desbordamiento de la presa de Vaillont en 1963 en Italia,*** por la caída de un inmenso paleodeslizamiento en el vaso de la presa mientras se producía el primer llenado. Al igual que los dos que mencionaremos después, podrían encuadrarse como de evolución lenta. Ello es debido a qué desde el inicio de las obras se detectó la presencia de un paleodeslizamiento en una de las laderas del vaso de la presa, pero se optó por terminar de construirla y ponerla en servicio.

Este caso ha sido recientemente recordado con una exposición específica en el *6th World Landslide Forum*[37], celebrado en noviembre de 2023 en Florencia, Italia, a partir de las fotografías y estudios de *Eduardo Semenza* [38] La catástrofe de Vaillont supuso la paralización de construcción de presas en Italia hasta los años 90 y una gran reflexión en el mundo de la Ingeniería Civil, el medio ambiente y la geología en los años 60 y siguientes, así como un significativo avance en los estudios para la construcción de presas e infraestructuras hidráulicas. (Semenza E., y Ghirotti, M., 1994)[39]. Se trata de un caso ampliamente estudiado en todo el mundo que ha supuesto avances en geotecnia, estabilidad de laderas y otros campos de la ingeniería civil, hidráulica y geológica. Incluso fue uno de los casos tratados en 1985 el *Simposio Internacional sobre rotura de presas en la Universidad de Purdue en EE. UU.* convocado por *G.A. Leonards.* De este simposio se generó un número especial de la revista *Engineering Geology* en diciembre de 1987.

La presa sigue en pie, pues los daños fueron mínimos, pero las decisiones de gestión tomadas fueron cuestionables. El paleodeslizamiento estaba instrumentado y vigilado durante toda la construcción, se realizaron multitud de ensayos y se procedió a su llenado hasta una cota que se consideró segura y ocurrió la catástrofe. Murieron del orden de 2000 personas de las poblaciones cercanas (véase la figura de la página siguiente) y dos ingenieros que estaban siendo juzgados y se encontraban en prisión, en un caso por un infarto y en el otro por suicido. Hoy día se conserva un monumento a las víctimas en la presa que sigue abandonada.

37. https://wlf6.org/organizers/: Auspiciado entre otros por: *International Consortium on Landslides (ICL), UNESCO, UNDRR, WMO, FAO y varias Asociaciones Científicas Mundiales de Geología, Geodesía, Ingeniería…como la IUGS,WFEO, ISC y la Universidad de Naciones Unidas*.

38. El geólogo E. Semenza es hijo del Ingeniero Carlo Semenza que diseñó la presa en los años 50. La presa terminó de construirse a finales de los 60 y la catástrofe se produjo en 1963 con el primer llenado superior a la cota 700, la elección del sitio de la cerrada databa de 1920. Se tuvo el placer de conversar en 2001 en la ubicación de la Presa, aún en pie, con E. Semenza, quien ya participó en los estudios geológicos y del deslizamiento, sobre los aspectos más técnicos de la catástrofe casi 40 años después. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a estudiar la catástrofe. Era profesor en el Dipartaminto di Scienze Geologiche e Paleontologiche dell Úniversitá Corso Ercole. Ferrara.

39. Semenza E., y Ghirotti, M., 1994. *Vaiont-Longarone 34 anni dopo la catastrofe*. Dipartaminto di Scienze Geologiche e Paleontologiche dell Úniversitá di Ferrara. 91 pp.

Los daños en la presa fueron la desaparición del aliviadero de coronación y del puente y pasarela aguas abajo, en el vaso la erosión intensa de la roca en la zona del plano de deslizamiento y la creación de un pequeño lago ya que el vaso quedo invadido por la masa deslizada, con una entidad de 300 millones de m3 y qué alcanzó una velocidad de 20-30 m/sg, (Alonso Pérez de Agreda, E., 2005)[40], aproximadamente 100 km/h.

Este desastre se ha utilizado en España en uno de los pocos casos que han llegado a juicio por riesgo catastrófico, aunque fue sobreseído en relación a la construcción de la presa de Itoiz en Navarra y ha dado lugar a diversos informes y referencias de los promotores de la presa, organismos como el CEDEX o el Colegio Oficial de Geólogos y asociaciones vecinales de la zona. Precisamente la figura que se incluye aquí es una de las referenciadas por las asociaciones que se oponían a la presa de Itoiz. Pueden localizarse los municipios que quedaron destruidos, incluido Langarone justo frente a la salida del valle en el que se localiza la presa. Restos de los pueblos destruidos llegaron a Venecia a través del cauce del río Piave[41]. En 2001 se rodó una interesante película en Italia sobre esta tragedia, titulada *«Vajont, presa mortal»* de *Renzo Martinelli* y se constituyó una asociación de supervivientes para mantener viva la memoria de las víctimas.

Fig. I.5.3. *Esquema de la zona del deslizamiento en 1963 en el Valle del Vajont (ó Vaillont) con la situación de las poblaciones afectadas y los límites de la ola producida en el vaso de la presa por el impacto del deslizamiento. En línea.* http://www.vesano.com/vajont.htm

40. Alonso Pérez de Agreda, E., 2005. *Las catástrofes y el progreso de la Geotecnia*. Lección inaugural del año académico 2005, Real Academia de Ingeniería. Madrid. España. ISBN: 84-95662-34-5. 80 páginas.

41. Comunicación personal de E. Semenza en septiembre de 2001 en la visita a la presa y la zona del deslizamiento en el curso de una visita técnica a grandes obras de infraestructura italiana organizada por el profesorado del VI Máster en Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de Madrid 2000-2002.

En la década de los años 80 del pasado siglo se produjeron dos desastres, que también podríamos considerar de evolución lenta y en los que intervinieron organismos internacionales como la UNESCO y la OMS (Organización Mundial de la Salud). ***La catástrofe del Nevado del Ruíz en Colombia en 1985 y el SAT (Síndrome del Aceite Tóxico) en España en 1981***. Una de sus particularidades es que representan posturas opuestas de percepción del riesgo, como quedó reflejado en la una de las sentencias del SAT[42], se creó un riesgo para la población en un momento determinado, cuantificable, que previamente no existía sin que por parte de las autoridades pertinentes se tuviese ninguna percepción de su posible gravedad. Incluso se tardó más de un mes desde el estallido de la crisis, cuando ya iba camino de convertirse en una catástrofe sanitaria, en relacionar causa y consecuencias.

Sin embargo en el caso del Nevado del Ruiz existía conocimiento del riesgo, ver la figura sobre las anteriores erupciones en la página siguiente y se produjo una cierta preparación e incluso se dio la alarma de evacuación, aunque de forma contradictoria, pero no pudo evitarse la tragedia. Ambos casos supusieron grandes avances en varias disciplinas en su momento y revisión de políticas públicas y hasta creación o reforma de organismos y entidades, como por ejemplo, la creación del primer Observatorio Vulcanológico de Colombia en Manizales[43] y en España la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria o de las unidades de atención social en ambulatorios y los centros de referencia para enfermedades concretas. A nivel científico en España el desarrollo de la Toxicología, genética y varias disciplinas más.

Respecto a la intervención de la OMS, mientras en el Nevado del Ruiz la intervención internacional en cooperación científica y de investigación tenía intención de evitar o al menos minimizar la catástrofe, en el caso del SAT se dio cuando ésta ya se había producido, con objeto de minimizar sus consecuencias. La OMS con respecto a la operación del Nevado del Ruíz, que incluyo un hospital de campaña en la atención a la post emergencia, concluyó de forma aplastante que *»la operación había sido costosísima, no había salvado ni siquiera una vida, había desequilibrado el sistema de salud local y*

42. Se citan las dos principales sentencias en relación al SAT: EDJ 1997/8668. **TRIBUNAL SUPREMO Sala 2.ª, S 26-9-1997**, n.º 895/1997, rec. 2569/1996. Pte: García Ancos, Gregorio. *(Sentencia conocida como «de altos cargos» y que establece las indemnizaciones a las víctimas del conocido como «caso de la Colza» el envenenamiento se produjo en mayo de 1981).*

    SENTENCIA **AUDIENCIA NACIONAL** 20 de mayo de **1989**, SUMARIO 129/81, ROLLO SALA 208/81. Recurrida en casación, por medio de la Sentencia T. Supremo (casación) 27/04/92 *(Sentencia del macro-juicio del conocido como «caso de la Colza», el envenenamiento se produjo en mayo de 1981).*

43. Fuente: web oficial de INGEOMINAS, Instituto Colombiano de Geología y Minería.

había creado una cantidad de problemas mayor de los que existían anteriormente» (CARRINO, L. 2006)[44].

DESASTRES OCURRIDOS EN EL NEVADO DEL RUÍZ. ARMERO /COLOMBIA				
Contrastado y completado con varias fuentes:				
		Petit-Breuilh, Sepúlveda, Maria Eugenia..2004. Desastres Naturales y ocupación del Territorio en Hispanoamérica. Ed. Universidad de Huelva. ISBN: 84-96373-31-2. 344pp.	• Scarth, A., 2002. • Acosta, J. 1846.	Otras fuentes: incluida Taller "Ecología de un Desastre. Nevado del Ruiz". Grupo ecológico Tolima. 1986.
Fecha	**Tipo de fenómeno**	**Daños registrados**		
12 de marzo de 1595	Sismos volcánicos. Erupción del Nevado del Ruiz.	Primer desastre volcánico del Ruiz en tiempos históricos. Se generó un lahar que tuvo consecuencias similares al de 1845 y al de 1985.	Similares	Similares
19 de febrero de 1845	Erupción del Nevado del Ruiz.	1.000 personas muertas, número indeterminado de heridos. Entre 20.000 y 30.000 km² quedaron cubiertos por los materiales volcanoclásticos. Las muertes se produjeron por la formación de un lahar.	Similares	Similares
11 de septiembre al 13 de noviembre de 1985	Erupción del Nevado del Ruiz.	23.000 muertos y numerosos heridos. Un lahar caliente generado por la fusión de parte del glaciar del volcán destruyó la ciudad de Armero.	Similares	Incluye además otros aspectos de pérdidas en ganado, tierras de cultivo...

***Tabla I.6.1.** Desastres ocurridos en el Nevado del Ruiz. Armero / Colombia desde el siglo XVI hasta la erupción de 1985. Elaboración propia a partir de diversas fuentes.*

Es de destacar que en el Nevado del Ruíz, la UNESCO se ofreció el 26 de junio de 1985 al gobierno colombiano mediante carta enviada por el delegado de la UNESCO en Colombia[45], pues en los primeros momentos se llegó a hablar de *«terrorismo geológico»* para minusvalorar la amenaza. El 11 de septiembre ocurrió un flujo de barro que discurrió aguas debajo de un valle al noreste 27 km, pero los geofísicos colombianos no declararon que El Ruíz se viera afectado. La tragedia ocurrió el 13 de Noviembre de 1986 y es una de las 4 catástrofes volcánicas que más víctimas mortales ha producido desde 1783, cifran desde este año 220.000 víctimas mortales en tan sólo 4 desastres, uno de ellos el de El Ruiz (TANGUEY *et al*. 1998[46]).

44. CARRINO L., 2006. *Perlas y Piratas. Cooperación para el desarrollo y nuevo multilateralismo.* Editado por el PNUD 2007. 299 pp.

45. Documento localizado en el libro *AVALANCHA SOBRE ARMERO, crónicas, reportajes y documentos de una imprevisión trágica*, El Áncora Ediciones, Bogotá 1986, de Javier Darío Restrepo, colección Periodismo de Hoy. ISBN 84-89209-68-5. (Libro localizado en la Biblioteca de Estudios Hispánicos de Sevilla, CSIC, España).

46. TANGUY, J.C., RIBIÈRE, C., SCARTH, A., and TJETJEP, W.S. 1998. *Victims form volcanic eruptions: a revised database.* Bulleting of Volcanology 60: 137-144.

En el caso del SAT a fecha de hoy no se ha podido concluir cual fue exactamente la sustancia que provocó el envenenamiento masivo, ni siquiera la OMS en su momento llegó a una conclusión. Lo que quedó recoge incluso la sentencia es la incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad provocada, que a día de hoy se ha confirmado está siendo de gravedad para muchas personas que sobrevivieron y más de 40 años después están desarrollando graves complicaciones médicas. Hay que recordar que hay más de 20.000 personas afectadas reconocidas en sentencia, con una población en riesgo de 300.000, de las que murieron casi 600 en 5 meses y a día de hoy han fallecido más de 5000. Se recoge a continuación de la sentencia conocida como de «Altos Cargos».

SENTENCIA A. NACIONAL, 24/05/96, ALTOS CARGOS, Diligencia Previsión 162/89 y Rª Ejecución 5/95. Y Sentencia Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997, de esta última se extrae literal el siguiente párrafo:

2º.- Dentro de los hechos probados de esa resolución, también se recoge como:

"En 1980 y desde hacia varios años, las autoridades administrativas españolas venían autorizando importaciones de aceite de colza , pero para proteger la producción nacional de aceites y grasas comestibles, se exigía que el de colza importado no fuera destinado a la alimentación humana, sino a otras actividades industriales, que resultaban ser, casi exclusivamente las siderúrgicas".-"Con el fin de garantizar el no desvío al destino humano se ordenó administrativamente que la mercancía cuando ingresara en territorio español tuviera desnaturalizados sus caracteres organolépticos, para lo que fueron autorizados, en 1970, el aceite de ricino, y en 1974 el aceite náftico, el Azul de Ceres y la anilina, ésta al 2 por ciento".-"Resultaba, sin embargo, que la anilina, líquido oleoso que, de ser incoloro recién destilado, pasa con la oxidación a tener tonalidad rojiza progresivamente más oscura, no siempre modificaba, agregada el 2 por ciento, aspecto, color, sabor y olor del aceite de colza de manera perceptible sin instrumental y técnicas "ad hoc". Recursos éstos de que, por lo general, no se servían los aceiteros hasta pasado mayo de 1.981".-"Pese a ello, el carácter venenoso de la anilina, de conocimiento general entre los empresarios y técnicos introducidos en la rama de los aceites , se trasmitía al de colza y a los que con él se integraban; y, llegados al consumo de boca, se originaba, en las condiciones habituales de la dieta española, un peligro común y efectivo para la salud de la población".-"Pero es más, a partir de la anilina en el aceite de colza desnaturalizado y en los que lo contenían, se formaban, bien espontáneamente durante el almacenamiento y el transporte, bien a consecuencia de las manipulaciones y tratamientos a que eran sometidos, anilidas de los ácidos grasos, marcadoras de la presencia del agente productor del Síndrome Tóxico; de tal manera que, sin el añadido de la anilina al aceite de colza , no hubiera surgido el agente tóxico, aún desconocido, de la enfermedad. Si bien el nuevo síndrome no corresponde a los de intoxicación por anilina en sí, como tampoco a los de las debidas a órgano-fosforados o al Paraquat".-"Antes del 10 de junio de 1.981 no era administrativamente obligatorio el determinar la presencia en aceites comestibles, de anilinas o de anilidas en los ácidos grasos; siendo por entonces aquella modalidad de las anilidas poco conocida en los ambientes científicos. Y tampoco había establecido método oficial para hacer aquella determinación. Pero, caso de que se hubiera tratado de hallar, y aún de cuantificar en los aceites aquellas sustancias, había centros españoles con recursos suficientes para llevarlo a cabo".-

***Recuadro I.6.3.** SENTENCIA A. NACIONAL, 24/05/96, ALTOS CARGOS, Diligencia Previsión 162/89 y Rª Ejecución 5/95. Y Sentencia Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997*

Hay otros casos recientes que implican reflexiones sobre como la corrupción y las prácticas constructivas, entre otros factores, pueden incrementar las víctimas y pérdidas y esto ocurre en muy diversos países, y en relación a diferentes amenazas. Estos días ha vuelto a haber alertas de Sanidad e investigaciones sobre aceites adulterados, peligrosos para el consumo humano.

Otros casos de corrupción y/o mala praxis, tienen que ver con normativas sismorresistentes pero que no se han tenido adecuadamente en cuenta. ***El terremoto de Lorca en España en 2011***, supuso además de 9 víctimas mortales, el posterior derribo de más de 300 edificios por sus graves daños. Informes solicitados por el propio Estado, como el de INTEMAC-CCS de 2013, que financió la reconstrucción a través del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), principal instrumento para la *Transferencia del Riesgo* en España, indican que era habitual no seguir las recomendaciones de las normas sismorresistentes. En este momento sigue vigente la de 2002 aunque lleva más de 10 años actualizándose y aún no se ha publicado en el BOE.

En Italia, ***el Terremoto de L'Aquila el 6 de abril de 2009*** supuso 309 víctimas mortales, 1500 heridos y 67.500 personas perdieron sus viviendas además de gran parte de la destrucción del centro histórico. Se han sucedido los procesos judiciales, pero parece que no se han centrado en perseguir los efectos de los defectos constructivos y la corrupción en la construcción, sino en si era o no predecible el terremoto y en la forma en que se alertó. Los recientes terremotos en Turquía han vuelto a poner de manifiesto, que seguir las normas constructivas en zonas sísmicas, es fundamental para salvar las vidas.

En ***otros terremotos como el de Haití de 2010***, las políticas de Cooperación al Desarrollo no tuvieron suficientemente en cuenta en muchos casos, que Haití tenía riesgo sísmico y edificaciones sanitarias, educativas, viviendas y multitud de infraestructuras financiadas con fondos de desarrollo quedaron destruidas[47]. Posteriormente esto se revisó en convocatorias cercanas en el tiempo, pero como ya se ha explicado en apartados anteriores el desconocimiento del Marco de Sendai y su integración en las políticas públicas no esta tan desarrollado con otros temas y con el tiempo se vuelven a olvidar las amenazas existentes.

El ***caso del desastre de Aznalcollar*** ocurrió en 1998 en el río Guadiamar, en el entorno del Parque Nacional de Doñana y provocó un enorme impacto ambiental, destruyendo 3.600 hectáreas de tierras de cultivo, 12 toneladas de peces muertes, suelos y aguas contaminadas, entre otros efectos. Sus repercusiones son bien conocidas, incluido que el sobreseimiento del caso en el ámbito penal[48] y los procesos judiciales han continuado hasta este año.

---

47. Zango Pascual, M.; Marin Hidalgo, I. y Asensio Barragan, C. «*Specific vulnerability as a result of science and technology not being integrated into International Cooperation Development policies. Here in the case of the earthquake in Haiti on 12th January 2010*» Proceeddings 5th International Disaster and Risk Conference IDRC Davos 2014 póster y resumen extendido 4pp. Edita: 5th IDRC Davos. https://idrc.info/archive/idrc-davos-2014/outcomes/conference-proceedings

48. **Auto juzgado de Instrucción n.° 2** de Sanlúcar la Mayor, (Sevilla), de 22 de diciembre de 2000. Jurisdiccional Penal. Diligencias Previas n.° 39/1998. Auto por el se acuerda el

Lo que es más desconocido es que uno de los casos que dio lugar en Europa a la legislación sobre *Responsabilidad Medioambiental,* precisamente para abordar desde la jurisdicción administrativa la problemática de los daños al medio ambiente, incluso durante el normal funcionamiento de las actividades potencialmente contaminantes. Sus puntos fuertes son el principio de *«quien contamina paga»* y el carácter preventivo de la ley, mediante la realización de análisis y evaluación de riesgos que permitan mitigar y establecer garantías financieras o avales que en caso de producirse un daño a las aguas, suelo, riberas de ríos, lagos y mares y fauna o flora, pueda servir para reparar el daño causado. Es posible que esta legislación, que podría ser un interesante instrumento para proteger el medio ambiente y en la que los desastres no pueden utilizarse de excusa para justificar el daño, pues debe cumplirse con la normativa sectorial de referencia, para que pudiera considerarse un caso de *fuerza mayor,* se esté infrautilizando[49]. Se han ido progresivamente rebajando requisitos de implantación y tipos de actividades que deben acogerse, además de no ser muy conocida.

Por último se comentarán algunos aspectos, también por lo general desconocidos entre la ciudadanía en general, sobre otro de los casos que más ha impactado en España y sobre el que también hay sentencias, tras un largo recorrido judicial, que responsabilizan a varias administraciones públicas, en este caso, por omisión de su deber. ***La inundación del camping de Biescas*** en Huesca, el 7 de agosto de 1996 produjo 87 víctimas. Se situaba en un cono de deyección, en una zona de fuerte torrencialidad, que ya había sufrido otras inundaciones previamente y contaba con 40 pequeñas presas, la mayoría de ellas construidas entre 1931 y 1950 (Alcoverro *et al.*, 1999) y que suelen estar rellenas de sedimentos[50].

Hasta diciembre de 2005 no se produjo una sentencia sobre el «caso Biescas» en que se reconociese la responsabilidad indemnizatoria del Estado y de la Diputación General de Aragón y exime de responsabilidad a los otros dos imputados, el Ayuntamiento de Biescas y el propietario del camping de Las Nieves[51]. Se condena a una indemnización total de 11.265.987 euros

archivo de las Diligencias Previas con reserva de las acciones civiles que pudieran corresponder. JUR 2001/129392.

49. Zango-Pascual, M. «Opportunities and weaknesses in the application of science and technology in DRR with a view to improving Governance. A case study. European legislation on Environmental Liability». Proceedings 5th International Disaster and Risk Conference IDRC Davos 2014. 4 pp. Disponible on-line https://idrc.info/archive/idrc-davos-2014/outcomes/conference-proceedings

50. Alcoverro, J., Corominas, J., Gómez, M., 1999. *The Barranco de Arás flood of 7 August 1996 (Biescas, Central Pyrenees, Spain).* Engineering Geology 51 (1999) 237-255.

51. Zango-Pascual, M. (2012). *Revisión del desastre del camping de Biescas desde la perspectiva de la Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres y sus consecuencias jurídicas.* GEO-TEMAS 13. ISSN 1576-5172.

(1.864 millones de pesetas) a las familias de 62 de las 87 víctimas mortales, las que presentaron reclamación[52]. El caso fue sobreseído en el ámbito penal al considerar solo la imprevisibilidad del fenómeno meteorológico ocurrido y no entrar a valorar la ubicación del camping. También lo fue en el ámbito civil y finalmente se ganó el juicio en el ámbito contencioso administrativo. El argumento clave es la obligación que toda organización administrativa tiene de *«servir al interés general»*, entendiendo como tal *«la salvaguarda de la vida y la integridad física de los administrados»* y de sus bienes. En la sentencia se menciona que se han encontrado *«pocos casos en los que previamente al suceso dañoso hubiera un informe por escrito advirtiendo de su posible acaecimiento».* Se refería al informe de un funcionario de la Diputación Provincial de Aragón, con carácter previo a su instalación y en el curso del correspondiente expediente administrativo previo a la autorización que no llegó a darse ni a negarse, de ahí la inacción. La sentencia recoge su existencia y el uso que se le dio en los trámites que condujeron a la autorización del camping en los *«hechos probados»*[53].

52. SENTENCIA DE LA **SECCIÓN PRIMERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL** (20 de diciembre de 2005) en relación a la responsabilidad patrimonial derivada de los hechos acaecidos el 7 de agosto de 1996 en el camping «Las Nieves», de Biescas, (Huesca) sobre los autos acumulados del recurso contencioso-administrativo núm. 1.976/2001, (al que se han acumulado tanto el recurso número 1.301/98 y acumulados (1.310/98, 1.315/98, 1.316/98, 1.394/98, 1.399/99, 362/99 y 589/99) de la sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) como también los recursos de dicho tribunal, números 173/02, 174/02, 175/02, 181/02 y 313/02). Ponente: Magistrado Sección, Fernández García, J.A.

53. Se cita textualmente de la sentencia: «…con fecha 5 de agosto de 1985, solicitó ante el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la DGA autorización para ocupación de terrenos en el monte público núm. 227 "Mondarrey", perteneciente al término municipal de Biescas, con la finalidad de instalar el citado camping, obteniendo tal autorización por Orden de 1 de abril de 1987, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la DGA, levantándose, con fecha 28 de abril de 1987, acta de entrega de esos terrenos al citado …… En el procedimiento que dio lugar a esa Orden, consta que el 3-I-1986, el Jefe de la Sección de las Comunidades Vegetales, D. ….. informó, en resumen, que se deberían buscar, para la ubicación del citado camping, otros terrenos distintos a los solicitados por ese particular, que incidieran menos desfavorablemente sobre el referido monte de utilidad pública. El expediente fue devuelto por el Servicio Provincial en Huesca, informando que dichos terrenos eran los únicos existentes para la ocupación del campamento; con fecha 4-7-1986, el referido Sr. Jefe de la referida Sección de las Comunidades Vegetales emitió un nuevo informe, ratificándose en el anterior (de fecha 3-I-86), añadiendo que no debía accederse a la ocupación, entre otros motivos, porque:

1.º El área a ocupar, por ser un cono de deyección de un barranco de fuerte torrencialidad, si bien está corregido, no es un lugar indicado para llevar a cabo las construcciones que se pretenden.

2.º Por su localización existe un riesgo para las instalaciones y un peligro para las personas que van a utilizarlas (f.2.312). No obstante la existencia del referido informe, el 4-2-87 la Dirección General de Ordenación Rural remite propuesta de resolución a la Secretaría General del Departamento en el sentido favorable a la autorización solicitada, en la que se hace constar los informes emitidos hasta la fecha en el expediente, incluidos los dos

VI. CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas se ha intentado hacer un recorrido por los Instrumentos Jurídicos Internacionales en que se soporta la Reducción del Riesgo de Desastre y por qué debería entenderse como una cuestión de Derechos Humanos y vinculada a los grandes desafíos que afrontamos como planeta y humanidad. Se han referido, mediante ejemplos, vulnerabilidades que no contribuyen a minimizar los riesgos ni crear resiliencia, a pesar del enorme contenido teórico existente, los esfuerzos internacionales y los avances científicos y técnicos de estos últimos siglos.

Ya parece percibirse con la pandemia COVID-19, un cierto olvido, que puede ser necesario, para recuperarse y seguir adelante tras una catástrofe, que es que trastoca y desborda nuestra capacidad de afrontamiento, como individuos y sociedades, pero en exceso no contribuye a crear resiliencia, sino todo lo contrario. Se han mencionado ejemplos dónde ha ocurrido esto, junto al desconocimiento de los aspectos concretos, que han rodeado los casos mencionados, por parte de la ciudadanía. Tras décadas investigando sobre estos y otros casos y compartiendo en diferentes foros los detalles de sentencias, circunstancias, lecciones aprendidas o errores repetidos, es bastante habitual encontrar ideas preconcebidas sobre la imposibilidad de rendir cuentas, asumir la corrupción como algo inevitable y reconvertir estos pensamientos en impotencia, que conduce a pensar en la inevitabilidad de los desastres, cuestión que desde el inicio se ha intentado rebatir.

efectuados por el Sr. Jefe de la Sección de Comunidades Vegetales, si bien el segundo de ellos se recoge sólo parcialmente (f. 2.315). El 27-3-1987, se remite otra propuesta de resolución, también de la Dirección General de Ordenación Rural a la Secretaría General del Departamento, esta vez de fecha 3 de febrero de 1987 e igualmente en sentido favorable a la autorización solicitada, pero en la que no se hace mención expresa al segundo informe del Sr. Jefe de la Sección de comunidades Vegetales (fs. 2.326 a 2.333). Con base a ésta última propuesta se dicta la referida Orden de 1 de abril de 1987…».

ANEXO I

TABLA COMPARATIVA ENTRE LOS «PRINCIPALES HITOS EN LA CREACIÓN DEL CONCEPTO DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE» Y «PRINCIPALES HITOS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES» DESDE 1948 A 2010. Elaboración propia.	
Principales Hitos en la creación del concepto de Desarrollo Humano Sostenible	**Principales Hitos en la Gestión del Riesgo de Desastres**
1948 Creación de la Internacional Union for the Conservation of Nature (IUCN), en España,(UICN)	
1955 Simposio sobre Man´s role in changing the face of The Earth, Princeton (USA). Conferencia de los países no alineados, Bandung.	
1960-70 Publicación de libros de impacto como los de: R.Carson, *Silent Spring* (1963), K. Boulding, The *Economics of the Coming Spaceship Earth* (1966), o P. Erlich, *The Population Bomb* (1968)	
1971 Publicación del I Informe Meadows, «The limits of Growth» (Los límites del Crecimiento), Club de Roma y MIT.	
1971 Creación del Programa Man and Biosphere (MaB) de la UNESCO.	
1972 Conferencia de Naciones Unidas sobre El Medio Humano, Estocolmo (Suecia). (Resolución 2398-XXIII.) Presencia de 113 países.	
1972 Creación del Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA), con sede en Girigi, Kenia. (Resolución 2997-XXVI.)	1972 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano (Estocolmo), se establece el PNUMA.

1973 Primera «crisis energética»	
1974. Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, 3345 (XXIX), Investigación de las interrelaciones entre población, recursos, medio ambiente y desarrollo.	1974. Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, 3345 (XXIX), Investigación de las interrelaciones entre población, recursos, medio ambiente y desarrollo.
1976 Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Habitat-I) Vancouver. (Canadá)	
1979 Segunda «crisis energética»	
1980 Creación del Programa Ecoville de la Federación Internacional de Institutos de Estudios Avanzados (IFUAS).	
1970-80 Publicación de numerosos libros de impacto como: H.T. Odum, *Enviroment, Power and Society* (1971), B. Commoner, *The Closing circle* (1972), E.F. Schumacher, *Small is Beatiful* (1973), H.T. y E.C. Odum, *Energy Basis for Man and Nature* (1976), A.Lovins, *Soft Energy Paths,* (1977), B.Commoner, *The Poverty of Power* (1979), G.E. Barney (dir) The Global 2000. *Report to the president* (1981).	
1982. Primer Programa de la ONU sobre el ambiente. Carta mundial de la naturaleza. (Resolución 37/7, proclamada el 28 de octubre)	1982 Primera reunión de alto nivel del PNUMA.
	1983 Se establece la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Bruntland)
1987 Publicación del Informe Brundtland de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo: Our Common Future (Nuestro Futuro Común).	1987 Lanzamiento Informe Brundtland
1988 Se establece el Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPPC)	
	1989 Lanzamiento del DIRDN Decenio Internacional de Reducción de Desastres Naturales

1980-99 Abaratamiento del petróleo y de las materias primas en general. Decaen las publicaciones sobre el manejo de la energía y los materiales en la civilización industrial y aumenta la literatura sobre instrumentos económicos para la gestión de residuos y valoración de externalidades a fin de incluir temas ambientales en el razonamiento económico estándar.	1990-1999 DIRDN
1988 Fin de la «Guerra Fria»	
1990 Cumbre Mundial a favor de la Infancia (Nueva York).	
1992 Se firma en la Cumbre de la Tierra la Convención Marco sobre Cambio Climático (Viena)	
1992 Se firma en la Cumbre de la Tierra la Convención sobre la Biodiversidad (Viena).	
1991 Publicación del *Libro verde sobre el medio ambiente urbano* de la Comisión Europea.	
1992 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, Cumbre para la Tierra (Río de Janeiro). Se generaron los siguientes acuerdos: – Declaración de Río – Declaración de principios de florestas – Convenio marco sobre cambio climático (UNFCCC) – Convenio sobre biodiversidad – Agenda 21 Da lugar a la Declaración de Río con la presencia de 178 países.	
1992 Publicación del II Informe Meadows del Club de Roma, Beyond the Limits (Más allá de los límites).	
1992 I Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED), Río de Janeiro (Brasil).	

1992 Tratado de Maastrich y V Programa sobre Medio Ambiente de la Unión Europea (1993-2000).	
1993 Publicación del *Libro Blanco Crecimiento, productividad y empleo, de la UE.* Creación de la Campaña Europea sobre Ciudades y Villas Sostenibles (1993-2004).	
	1993 Cumbre sobre los Derechos Humanos.
	1994 Primera Conferencia Mundial sobre la Reducción de desastres de origen natural para un mundo más seguro (Yokohama).
1994 Aparecen las Agendas de Desarrollo Local	1994 Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Barbados). Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.
1994 I Conferencia Europea sobre Ciudades y villas sostenibles, Aalborg (Dinamarca). Emana la «Carta de Aalborg»	1994 Convenio de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y la sequía. Conferencias de las partes del convenio marco sobre desertificación y sequía de Naciones Unidas (COPs).
1995 Cumbre Mundial sobre la Mujer (Pekín).	
1995 Cumbre Social en Copenhague.	
1995 Se establece la Organización Mundial del Trabajo (OMT).	
1996 Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Habitat-II), Estambul. (Turquía)	1996 Asentamientos Humanos (Estambul).
1996 Cumbre sobre la Alimentación (Roma).	
1997 Decenio Internacional para la Erradicación de la pobreza. Resolución 51/178, de 16 de diciembre de 1996.	
1997 UNESCO. 29 reunión en París, adoptó la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras	

1997 Se adopta el Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático.	
1997 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible conocida como RIO+5. (Se consideró un fracaso por la no asistencia de países en vías de desarrollo).	
1998 Se adopta la Convención sobre el Consentimiento Previo e Informado.	
1998 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Kyoto (Japón).	
1998 El PNUMA y la OMM crean el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC).	1999 Foro del Programa del DIRDN (Ginebra).
	1999 Revisión de la Cumbre Río+5 (crítica, debido a una implementación muy lenta).
	1999 Fin del DIRDN
2000 Cumbre del Milenio (Nueva York).	2000 Lanzamiento de la EIRD. Estrategia Internacional de Reducción de Desastres. Naciones Unidas.
2000 Se adopta el Protocolo sobre bioseguridad (Cartagena).	
2000 Foro Mundial de la Juventud (Dakar).	
2000 Proceso de CMDS (Río+10). Se establece la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CSD) desde Río +5.	
2001 Plataforma de acción –Río de Janeiro. Elaborada por la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe preparatoria de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo 2002). Definición de las modalidades del proceso a través de reuniones preparatorias nacionales, subregionales y regionales.	
2001 Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Desarrollados (Bruselas).	

2001 Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce en Bonn.	
2001 Negociaciones de la OMT, incluyendo GATS y agricultura.	
2002 Prep. Com. Mundial 2 (Nueva York): revisión concreta de implementación de la Agenda 21. – Prep. Com. 3 (Nueva York): revisión y finalización de los elementos para el programa de acción. – Prep. Com. 4 (Bali): identificación de asuntos prioritarios, programa de acción y elementos de la declaración política.	
2002 II Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río + 10), Johannesburgo (Sudáfrica). Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo): Adopción del plan de acción– que define los compromisos nacionales, regionales y mundiales.	
2002 VI Programa Europeo en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2002-2010)	
2002 Financiamiento para el Desarrollo (México).	
2002 Cumbre Mundial sobre Alimentación (Roma).	
	2003. Declaration of Madrid. Conclusiones y recomendaciones del Foro Euro mediterráneo sobre Reducción de Desastres. Conferencia Regional sobre Reducción de Desastres. Madrid, 6-8 de octubre de 2003.
2005. Declaración de París sobre la Eficiencia de la Ayuda.	2005. Conferencia de Kobe sobre Reducción de Riesgos de Desastres.
	2005-2015 MAH. Marco de Acción de Hyogo

	2005 Resolución 60/124 de la Asamblea General del 15 de diciembre de 2005, de creación del CERF (Fondo Central de Naciones Unidas para Emergencias).
2009 Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2008-2017). A/RES/63/230, de 17 de marzo de 2009,	
2008-2012 Primer período de compromiso: los países industrializados deben reducir el 5 % de los gases causantes del efecto invernadero que generaban en 1990.	
2009 Ejecución del Programa 21 y del Plan para su ulterior ejecución, y aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. A/RES/63/212 de 18 de febrero de 2009.	

ANEXO II

TABLA COMPARATIVA ENTRE LOS «PRINCIPALES INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES ESPECÍFICOS SOBRE GRD» Y «PRINCIPALES RELACIONADOS CON EL ÁMBITO DE LOS DD. HH. EN SU CONJUNTO» DESDE 1948 A 2009. Elaboración propia.		
Año	**Instrumento Jurídico Internacional Específico sobre GRD**	**Relacionados con el ámbito de los DD. HH. en su conjunto**
1948		**Declaración Universal de Derechos Humanos**. UN. 1948. (Adoptada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
1969		**Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social**, (adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la resolución 2542 (XXIV) de 11 Diciembre de 1969.
1971	**Resolución 2816 (XXVI),** de 14 de diciembre, que encomienda **a UNDRO las responsabilidades y funciones específicas en el campo de la prevención de los Desastres y la preparación frente a ellos.**	
1974	**1974. Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, 3345 (XXIX),** de 17 de Diciembre, **Investigación de las interrelaciones entre población, recursos, medio ambiente y desarrollo.**	

1973-1974		**Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición**, Adoptada por la Conferencia Mundial sobre Alimentación, el 16 de Noviembre de 1974 bajo las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, 3180 (XXVIII) de 17 de Diciembre de 1973 y Resolución 3348 (XXIX) de 17 de Diciembre de 1974.
1974	**Resolución 3243 (XXIX),** de 29 de Noviembre de 1974, Fortalecimiento de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas **para el Socorro en casos de Desastre**.	
1974		Resolución 3345 (XXIX), de 17 de diciembre de 1974, investigación de las Interrelaciones entre Población, Recursos, Medio Ambiente y Población.
1975		**Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad**. Proclamada por la Asamblea General en su resolución 3383(XXX), de 10 de Noviembre de 1975.
1976	**UNESCO 1976. Conferencia Intergubernamental sobre la evaluación y la disminución de los Riesgos sísmicos.** París, 10-19 de febrero de 1976.	
1976		**Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC),** Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.

1981		**Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. (Carta de Banjul).** (Aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya).
1982		**A/RES/37/189,** de 18 de Diciembre de 1982. **Human rights and scientific and technological developments.**
1984		**Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz**, adoptada por la Asamblea General en su resolución 39/11, de 12 de noviembre de 1984.
1987	**Resolución 42/169** de 11 de diciembre de la Asamblea General de Naciones Unidas que prepara la cooperación para la posterior proclamación del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN) en la década de 1990.	
1988	**Resolución 43/202** de 20 de diciembre, de preparación del **Decenio Internacional para la Prevención de los Desastres Naturales**	
1989	**Declaración de Tokio**, de 11 de abril de 1989, que supone el Informe de Tokio **sobre los objetivos de la Década** solicitado por el Secretario General de Naciones Unidas a 25 expertos ad-hoc.	

1989	**Resolución 44/236** de 22 de diciembre de la **Asamblea General de Naciones Unidas que proclama a partir del 1 de Enero de 1990 el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN) en la década de 1990.** Marco Internacional de Acción del Decenio Internacional para la reducción de los Desastres Naturales	
1989	**Resolución 1989/99 del Consejo Económico y Social** que recomendaba a la Asamblea General de Naciones Unidas **un marco adecuado para alcanzar los objetivos y metas del Decenio.**	
1989	**Resolución 44/236** de 22 de diciembre de la Asamblea General designó el segundo miércoles de octubre como **Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, fecha que fue observada anualmente desde 1990 hasta 1999.**	
1989		A/RES/44/54, de 8 de Diciembre de 1989. Social welfare, development and science and technology.
1993		**Declaración y Programa de Acción de Viena**. Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Viena, 14 a 25 de junio de 1993. A/CONF.157/23 de 12 de julio de 1993.
1994		**A/RES/48/134**, de 4 de marzo de 1994, **Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos.**

		A/RES/58/217. Decenio Internacional para la Acción, «El agua, fuente de vida», 2005-2015, de 9 de febrero de 2004
1994	**Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World.** Guidelines for Natural Disaster Prevention, ***Preparedness and Mitigation World Conference on Natural Disaster Reduction*** Yokohama, Japan, 23-27 May 1994.	
1994-1996		**A/RES/51/104. Resolución de la Asamblea General, de diciembre de 1996,** Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos y las actividades de información pública en materia de derechos humanos 1995-2004. Y **A/RES/49/184 de 23 de diciembre de 1994 Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos** **Y A/RES/50/173** de 22 de diciembre de 1995 **Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos: hacia una cultura de paz**
1999		**A/RES/53/144,** 8 de marzo de 1999, **Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.**
1999	**A SAFER WORLD IN THE 21st CENTURY:Disaster and Risk Reduction.** IDNDR Programme Forum, Geneva, July 1999	

1999	**Declaration of Intent The Geneva Mandate On Disaster Reduction**. International Decade for Natural Disaster Reduction **IDNDR International Programme Forum. 5-9 July 1999.**	
1999		**Declaration on science and the use of scientific Knowlegde. Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico**. *La ciencia para el siglo XXI: Una nueva visión y un marco para la acción*. (Texto adoptado por la Conferencia Mundial sobre la ciencia. Budapest. Hungría, 26 de junio al 1 de julio de 1999).
1999	**A/54/497,** de 1 de noviembre de 1999, **Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales: nuevas disposiciones. Informe del Secretario General.** Quincuagésimo cuarto período de sesiones. Tema 100 b) del programa. Medio ambiente y desarrollo sostenible: Decenio Internacional. para la Reducción de los Desastres Naturales.	
1999	A/54/136-E/1999/89 conclusión del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.	
1999	**Mandato de Ginebra sobre reducción de los desastres.** Foro del Programa Internacional del DIRDN. (5 al 9 de julio de 1999)	
2000		**A/RES/55/2,** 13 september 2000. **Declaración del Milenio. (United Nations Millennium Declaration).** Resolución aprobada por la Asamblea General.

2000	**A/RES/54/219,** de 3 de febrero de 2000. **Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales: nuevas disposiciones.**	
		2000/C 364/01. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Proclamada en Niza, por El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, el 7 de diciembre de 2000.
2001	**A/56/68–E/2001/63,** 8 de mayo de 2001, **Aplicación de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres Informe del Secretario General.** Asamblea General Consejo Económico y Social. Quincuagésimo sexto período de sesiones. Tema 111 b) de la lista preliminar, Medio ambiente y desarrollo sostenible: Estrategia, Internacional de Reducción de Desastres, Período de sesiones sustantivo de 2001. Ginebra, 2 a 27 de julio de 2001, Tema 13 h) del programa provisional, Cuestiones económicas y ambientales: Estrategia Internacional de Reducción de Desastres.	
2001	**A/56/195,** de 21 de diciembre de 2001, **la Asamblea General decidió seguir observando el segundo miércoles de octubre de cada año, el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales** como medio de promover una cultura mundial de reducción de los desastres naturales, que comprenda prevenirlos, mitigarlos y estar preparados para ellos.	
2001		**A/56/326,** 6 september 2001, **Road map towards the implementation of the United Nations Millennium Declaration.** Report of the Secretary-General.

2002	**A/RES/56/195,** de 21 de enero de 2002**. Estrategia Internacional de Reducción de Desastres.**	
2002	**A/57/190,** de 11 de julio de 2002, **Aplicación de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales Informe del Secretario General.** Quincuagésimo séptimo período de sesiones. Tema 89 b) de la lista preliminar. Medio ambiente y desarrollo sostenible: Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.	
2002		**A/RES/57/254,** de 20 de diciembre de 2002, **Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, 2005-2014**
2003	**A/RES/57/256**, de 6 de febrero de 2003. **Estrategia Internacional para la reducción de los desastres.**	
2003	**A/58/277,** 12 de agosto de 2003, **Aplicación de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres Informe del Secretario General.** Quincuagésimo octavo período de sesiones. Tema 96 e) del programa provisional. Medio ambiente y desarrollo sostenible: Estrategia. Internacional de Reducción de Desastres.	
2003	**A/C.2/61/CRP.1** de 3 de octubre de 2003**, Global Survey of Early Warning** SystemsSixty-first session. Second Committee. Agenda item 53 (c) Sustainable development: International Strategy for Disaster Reduction.	
2003	Declaration de Madrid. Conclusions and Recommendations of the Euro-mediterranean forum on Disaster Reduction. (Madrid 6-8 octubre de 2.003)	

2004	**A/RES/58/214**, de 27 de febrero de 2004. **Estrategia Internacional de Reducción de Desastres.**	
2004	**A/RES/58/215,** de 27 de febrero de 2004. **Desastres naturales y vulnerabilidad**	
2004	**A/59/228,** de 11 de agosto de 2004, **Aplicación de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres Informe del Secretario General.** Quincuagésimo noveno período de sesiones Tema 87 c) del programa provisional * Desarrollo sostenible: Estrategia Internacional de Reducción de Desastres.	
2004	**Declaración de Manizales. Conferencia Interamericana sobre Reducción del Riesgo de los Desastes.** Reflexiones y propuestas para mejorar la efectividad de la gestión. Noviembre 17,18 y 19, de 2004. Manizales, Colombia.	
2005	**A/RES/59/279,** de 28 de enero de 2005. **Fortalecimiento del socorro de emergencia y las actividades de rehabilitación, reconstrucción y prevención tras el desastre provocado por el tsunami del Océano Índico**	
2005	**A/RES/59/231,** de 22 de febrero de 2005. **Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres.**	
2005	**A/CONF.206/6 Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres. Informe de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, Kobe, Hyogo (Japón),** 18 a 22 de enero de 2005	
2005	**A/RES/59/232,** de 22 de febrero de 2005. **Cooperación internacional para reducir los efectos del fenómeno de El Niño**	

2005	**A/RES/59/233,** de 22 de febrero de 2005, **Desastres naturales y vulnerabilidad.**	
2005	**A/RES/59/212,** de 3 de marzo de 2005, **Cooperación internacional para la asistencia humanitaria en los casos de desastre natural: desde el socorro hasta el desarrollo.**	
2005	**A/60/180,** de 1 de agosto de 2005, **Aplicación de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres. Informe del Secretario General.** Sexagésimo período de sesiones Tema 54 c) del programa provisional* Desarrollo sostenible: Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres.	
2005	**A/60/227,** de 12 de agosto de 2005, **Cooperación internacional para la asistencia humanitaria en casos de desastres naturales: del socorro al desarrollo. Informe del Secretario General**. Sexagésimo período de sesiones Tema 74 a) del programa provisional* Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria y de socorro en casos de desastre que prestan las Naciones Unidas, incluida la asistencia económica especial: fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia que prestan las Naciones Unidas.	
2005	**Resolución 60/124 de la Asamblea General** del 15 de diciembre de 2005, **de creación del CERF (Fondo Central de Naciones Unidas para Emergencias).**	**E/CN.4/2005/24**, de 5 de enero de 2005. **El derecho al Desarrollo**, Informe de la alta Comisionada para los Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos. 61.° periodo de sesiones. Consejo Económico y Social. Naciones Unidas.

2006	**A/RES/60/196,** de 2 de marzo de 2006. **Desastres naturales y vulnerabilidad.**	**A/RES/60/251,** de 15 de marzo de 2006, **Consejo de Derecho Humanos,** por la que se crea el Consejo de Derechos Humanos.
2006	**A/RES/60/195,** de 2 de marzo de 2006, **Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres**	
2006	**A/61/229,** de 8 agosto de 2006, **Aplicación de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres** Informe del Secretario General. Sexagésimo primer período de sesiones, Tema 52 c) del programa provisional*, Desarrollo sostenible: Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres.	
2007	**A/RES/61/199,** de 16 de febrero de 2007. **Cooperación internacional para reducir los efectos del fenómeno de El Niño.**	
2007	**A/RES/61/198,** de 16 de febrero de 2007, **Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres.**	
2007	**A/RES/61/200,** de 16 de febrero de 2007**, Desastres naturales y vulnerabilidad.**	
2007		**Resolución: A/RES/62/195** de 19 de julio de 2007 que **proclama el Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación (2010-2020).**
2007	**A/62/320,** de 5 de septiembre de 2007**, Aplicación de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres. Informe del Secretario General.** Sexagésimo segundo período de sesiones. Tema 56 c) del programa provisional. Desarrollo sostenible: Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres.	

2007	**A/62/419 (Part I),** de 4 de diciembre de 2007, Desarrollo Sostenible. Informe de la Segunda Comisión*.	
2007	**A/62/419/Add.3,** de 11 de diciembre de 2007, Desarrollo sostenible: Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres Informe de la Segunda Comisión*.	
2008		**Resolución A/62/423/Add.1, 2008-2017 Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza.** La Asamblea General proclama el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza, con el propósito de promover, de manera eficiente y coordinada, los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio.
2008	**A/RES/62/192,** de 11 de febrero de 2008. **Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres.**	**A/63/418,** de 1 de diciembre de 2008, Erradicación de la pobreza y otras cuestiones de desarrollo.
2009	**A/RES/63/215,** de 18 de febrero de 2009. **Cooperación internacional para reducir los efectos del fenómeno de El Niño**	
2009	**A/RES/63/216,** de 25 de febrero de 2009. **Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres.**	**A/RES/63/230,** de 17 de marzo de 2009, **Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2008-2017).**
2009	**A/RES/63/217,** de 18 de febrero de 2009. **Desastres Naturales y Vulnerabilidad**	**A/HRC/11/NGO/30,** de 2 de junio de 2009, **Promotion and protection of all Human Rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development.**

2009	COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Estrategia de la UE en apoyo de la reducción del riesgo de catástrofes en los países en desarrollo. Bruselas, 23.2.2009. COM(2009) 84 final.	
2009		Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de ONU de seguimiento de la **Cumbre de los Objetivos del Milenio**. 20-22 de septiembre de 2010. (Cumbre del Milenio + 10).
2010		**A/ 64/L.63/Rev.1.** Resolución aprobada el 26 de Julio de 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas**. El derecho humano al acceso al agua y el saneamiento.**

COLECCIÓN

DERECHO PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL

COLEX

TÍTULOS PUBLICADOS

1. Macrocriminalidad y desastres

DESCUBRA MÁS OBRAS EN:

www.colex.es

Editorial Colex SL Tel.: 910 600 164 info@colex.es

MACROCRIMINALIDAD Y DESASTRES

La presente obra colectiva abre una línea de investigación interdisciplinaria sobre la *macrocriminalidad* en sentido amplio, a la que han contribuido estudiosos de España e Italia, y que se concreta en este caso en el estudio de los desastres naturales desde las perspectivas jurídica y criminológica. Los distintos capítulos analizan temas concretos que se sitúan en la intersección entre «macrocriminalidad» y «desastres», tales como el modelo de tipificación de los delitos medioambientales en España; la Directiva europea para la protección del medio ambiente a través del Derecho penal desde una perspectiva Victimológica; el nexo de riesgo y el ámbito de tutela en la imputación del resultado de desastre en el Derecho penal italiano; la multidireccionalidad del riesgo en los delitos de desastre medioambiental en el Derecho penal italiano; la victimización medioambiental estudiada a través de la metodología de los «soliloquios itinerantes»; y la gestión de los riesgos naturales como una cuestión de derechos humanos.

DIRECTORES

Pastora García Álvarez, Víctor Manuel Macías Caro.

COORDINADORA

Carmen Fernández Nicasio.

AUTORES/AS

Donato Castronuovo, Francesco Contri, Pastora García Álvarez,
Manuel José García Rodríguez, Lorenzo Natali, Marga Zango-Pascual.

ISBN: 978-84-1194-243-0

9 788411 942430